



60 AÑOS
1948 - 2008



Instituto para la Pedagogía, la Paz
y el Conflicto Urbano, IPAZUD

Rector

Carlos Ossa Escobar

Vicerrector

Orlando Santamaría Vergara

Director IPAZUD

Adrián Serna Dimas

Consejo editorial

Adrián Serna Dimas
Diana Gómez Navas
Luis Francisco Guerra
Jorge David Sánchez
Rubén Sánchez

Coordinación editorial
IPAZUD

Fotografías

Archivo IPAZUD

Caricatura

Gonser

Diseño Gráfico

Rocío Paola Neme Neiva

Impresión

Fondo de Publicaciones
Universidad Distrital

Publicación semestral
Vol. 2, núm. 1.
Segundo semestre de 2009
ISSN: 2011-5253

Instituto para la Pedagogía, la Paz
y el Conflicto Urbano, IPAZUD
Cra. 7 No. 40-53 Piso 3
Teléfax 3239300 extensión 2112
ipazud@udistrital.edu.co

Bogotá, Colombia

Las opiniones emitidas
en los artículos son responsabilidad
de los autores y no comprometen
a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

Ciudad Paz-ando



c o n t e n i d o

Editorial

Un lastre de décadas 3

ANÁLISIS DE COYUNTURA

Mafia: una herencia de tres décadas

DETRÁS DE UN EPISODIO

• Veinticinco años del
magnicidio de Rodrigo Lara
Bonilla 9

HISTORIA DE TRES CIUDADES

• Una radiografía de la violencia
en Bogotá en los años
ochenta y noventa 37
• Medellín: años ochenta 49
• Perfiles históricos
de la violencia en Cali 56

DE BANDAS, CARTELES Y MAFIAS

• Narcotráfico: historia
social y su influencia en la
conformación delincuencia.
*De delincuentes, organizaciones
y carteles en Colombia* 75

ASALTO MAFIOSO A LA INSTITUCIONALIDAD

• Democracia y narcotráfico en
Colombia 89
• ¿Son reales las
narcolimosnas? 113

CULTURA, ESTÉTICA Y MAFIA

• Magio, narco y traqueto
*Estructuras existenciales
de la vida mafiosa* 121
• Autores materiales y materia
del delito. *Una lectura de Cartas
Cruzadas y otras narrativas
del narcotráfico* 151
• El narcotráfico en área
de penal. *Reflexiones sobre
goles y carteles de la droga en
Colombia* 165

APORTES A LA CÁTEDRA

Los daños y las
pérdidas asociadas al
desplazamiento forzado
en las ciudades

189

AVANCES EN INVESTIGACIÓN

Memoria oficial
y otras memorias:
la disputa por los
sentidos del pasado

203

REFLEXIONES EN EXTENSIÓN

Así van los DESC:
*Notas sobre la construcción
del III informe alterno de
las organizaciones sociales
al comité del PIDESC*

219

Un lastre de décadas



Los años setenta agonizaron en un país que no pudo redimir la provincia sometida a un siglo de atraso ni avizorar la ciudad que anticipaba un siglo de convulsiones. La sociedad colombiana era entonces un marasmo de melancolías, abandonada de cualquier certeza. De la certeza en los descollantes políticos de plaza pública que no lograron cerrar la brecha; de la certeza en unos planes de desarrollo que sólo nos aliaron al subdesarrollo; de la certeza en unos curas y unas monjas divididos por el fantasma de un concilio que la iglesia

no dejaba recorrer; de la certeza en unos artistas e intelectuales cada vez más díscolos, incomprensibles y desencantados; de la certeza en una milicia y una policía siempre inciertas, obnubiladas en detectar comunistas y en caso contrario en parirlos con la tortura; de la certeza en unos periodistas que no trascendían aún el corrillo de directorio ni la crónica roja; de la certeza en unos actores y actrices que resoplados de los transistores o de las tablas empezaron a circular masivamente por la televisión creando una minúscula farándula de parroquia. Los años ochen-



ta trajeron un país ausente de un futuro promisorio, desbordado en un pasado de certezas fracasadas.

Las generaciones colombianas que surgieron al mundo entre los años setenta y ochenta nacieron desguarecidas: sin la euforia nacionalista de la celebración del centenario que acompañara a tantos en los años diez y veinte; sin el optimismo en la revolución liberal que iluminara los espíritus en los años treinta y cuarenta; sin la esperanza en las virtudes del cambio democrático o revolucionario que tanto solaz hiciera en aquellos que supieron del mundo a finales de los años cincuenta y comienzos de los años sesenta. Por el contrario, las generaciones de los años setenta y ochenta tuvieron que sobrellevar la desazón de una soberanía minusválida, de un estamentalismo bipartidista y de una democracia sometida a estado de sitio. Sin duda, unas generaciones que no tuvieron para sí sino los fracasos de un siglo. Con excepciones, obviamente, con algunos espacios de promisión, que no obstante fueron progresivamente eclipsados, ya no por la estulticia nacional, sino por los vientos que trajeron una revolución conservadora de matices planetarios que enalteció el desenfreno del capitalismo, que pudo enterrar a un esclerótico socialismo real y que definió un horizonte existencial donde todas las empresas debían conducir sólo al frenesí desbocado del sí mismo.

En este país de melancolías enfermizas, donde se creía que todo pasado fue mejor aunque al final nunca pasó nada, se hicieron visibles unos personajes que

se convirtieron en los hijos prósperos de nuestros fracasos: en unos años blandieron la bandera nacionalista con ardor parroquial en protesta por la extradición, por la presencia de fuerzas extranjeras en nuestro territorio y por el peso ignominioso de la deuda externa; en unos años proclamaron sus filiaciones partidistas, reclamándose la sangre nueva de la política nacional que aún sin cargos o nombramientos podía resarcir barriadas infelices o atender a los desvalidos de una catástrofe; en unos años montaron sus propias cuadrillas de sicarios que al amparo de un tenebroso estado de sitio emprendieron el ajusticiamiento arbitrario de todo aquel que amenazara al Estado que pretendían sólo para ellos; en unos años estos personajes pudieron proclamarse hijos convencidos, marginales es cierto, pero al fin y al cabo hijos y al fin y al cabo convencidos, de unos tiempos donde todo lo que reproducía eficientemente el capital era válido, donde el consumo ostentoso abría todas las puertas, donde todo era vendible o adquirible. Pocos como estos personajes pudieron aprovechar un mundo rural atrasado al que devoraron sin vacilación; pocos como ellos pudieron afincarse en un mundo urbano al que habrían de estremecer hasta los cimientos. Los narcotraficantes, también conocidos como barones de la droga, mafiosos o simplemente magios o traquetos, no son los hijos descarriados de un país de certezas, sino los hijos más juiciosos de un país de incertidumbres. Los narcotraficantes, con su secuela al parecer inmarcesible de socios, ayudantes, intermediarios, testaferros, colabora-



dores o simples acompañantes, son los hijos predilectos del fracaso nacional que hemos sido.

Aunque los narcos aparecieron a finales de los años sesenta, sólo se hicieron plenamente visibles a finales de los años setenta. Los narcos de poca monta, habitualmente delincuentes de vieja data, se hicieron visibles en pueblos recónditos o en barriadas populares o de clase media. Los narcos de marca mayor, de diversas extracciones, se hicieron visibles en comarcas extensas y en los mejores barrios de las ciudades, donde sus estilos de vida ostentosos pudieron en principio aparecer como formas risibles de un ruralismo pudiente o como modos pretensivos de unas ignotas clases emergentes. Fue en aquellos tiempos donde las historias mafiosas se revistieron como simples anécdotas de salón, percibidas con ingenuidad apacible, como manifestaciones que ratificaban esa pujanza tan colombiana o como expresiones adicionales de una criminalidad que no dejaba de ser celebrada por su picaresca, por su audacia y por su efectividad. Aunque el país estaba lejano de cualquier edad de la inocencia, perdida casi desde su nacimiento, pocos avizoraron que detrás de esas anécdotas de salón estaban los prolegómenos de una afrenta estructural contra el Estado y la sociedad que en una década escalaría a asesinatos selectivos, a atentados indiscriminados, a penetraciones perniciosas a toda la institucionalidad y, finalmente, a la constitución de unos terroríficos ejércitos que coparon regiones enteras del territorio nacional.

Precisamente, hace veinticinco años, la sociedad colombiana tuvo una primera advertencia de la magnitud que presagiaba el fenómeno del narcotráfico. Esta advertencia quedó plasmada en el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien hiciera las primeras denuncias vehementes sobre el accionar mafioso en el país. Desde abril de 1984 la sombra macabra del narcotráfico emprendió el ajusticiamiento a representantes de los más diversos sectores del país, en una escalada de víctimas aún sin cuantificar, básicamente porque ellas continúan día a día. Un país marginal fue llevado de las orejas por los narcotraficantes hacia la modernidad, pero por entre las cloacas, de donde no ha salido: impusieron un proceso de acumulación donde la violencia no es prerequisite sino factor constante y creciente; jalonaron una racionalización económica donde el lucro depende de arriesgar a los otros; convirtieron la democracia participativa en fuente de un corporativismo mafioso; impulsaron el consumo como repatriación de viejas formas estamentales; desistieron de la caridad religiosa en beneficio de una filantropía extorsiva; auspiciaron unos credos ultraconservadores que por su propio carácter recalcitrante avalan las formas más infames de discriminación y eliminación; impusieron unos estilos de vida sostenidos en la exageración de las apariencias, de la adquisición y del uso de la fuerza. Todo esto con el uso sistemático del terror.

No obstante esta arremetida cuenta del narcotráfico, que mandó al país hacia el futuro por entre los caños de la moder-



nidad, es evidente que ella no supuso una condena masiva de la sociedad, de lo que implicaba para su presente inmediato, de lo que acarreaba para las generaciones posteriores. Es cierto que este país ha sido víctima del narcotráfico, que ha eliminado a decenas de políticos, de periodistas, de intelectuales y de servidores públicos que lo han denunciado valerosamente, que ha eliminado a miles de personas que han quedado en medio de sus guerras maníáticas. Sí, cada episodio trajo y trae condenas y críticas a los mafiosos. ¡Pero ay de nuestras históricas hipocresías! En medio de la sociedad dolida con cada episodio afrentoso, muchas veces como plañideros piadosos, han estado aquellos que simplemente han permitido consumir el fin último del narco, que no es precisamente enviar cargamentos, sino acceder, tener y acu-

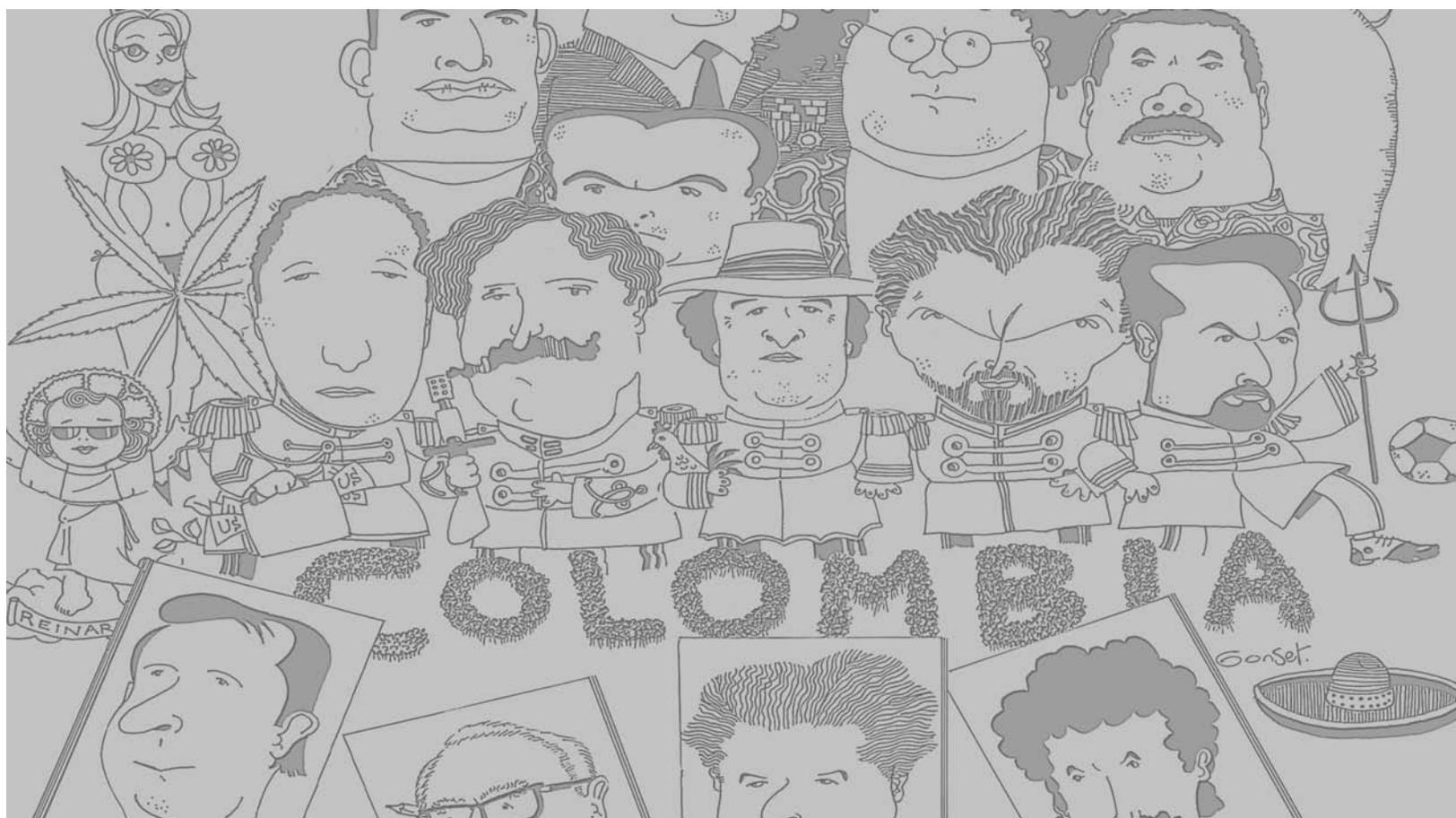
mular, sean instituciones, bienes, personas o cosas. El narcotráfico supo aprovechar todas nuestras miserias, convirtiéndonos en una sociedad convencida del voluntarismo económico, del simplismo político y de la frivolidad cultural, en últimas, una sociedad superficial donde amplios sectores están consumidos en el trato mañoso y la pirámide, subyugados por los mesianismos de todas las pelambres, obcecados en unas telenovelas que les muestran lo que nunca fueron y en unos horóscopos que les dicen lo que nunca serán, decididos en el vil racismo de las apariencias. Este efecto estructural es quizás el impacto más profundo de este lastre de décadas, tan propicio para unas generaciones que parecen haber nacido envejecidas por las decepciones, cuando no agonizantes por los fracasos.

Bogotá, D.C.
abril de 2009.

✖



Mafia: una herencia de tres décadas





DETRÁS DE UN EPISODIO

Veinticinco años del magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla

Gabriel Bustamante Peña¹

Rodrigo Lara Bonilla condensó en su pensamiento, vida y obra, la lucha histórica contra las mafias que pretendieron apoderarse del Estado colombiano, alienar y someter a la sociedad y mancillar la dignidad de la nación. Su asesinato, contrario a lo que pensó el crimen organizado, no constituyó el triunfo de aquella sórdida unión de bestiales narcotraficantes, sicarios paramilitares, empresarios sin escrúpulos y políticos corruptos –que aún hoy, bajo otras formas, actúan y se enriquecen impunemente sobre los cadáveres y sufrimiento de millones de colombia-

nos– sino que, por el contrario, su valiente sacrificio abrió los ojos de un país aletargado por el dinero fácil y congregó conciencias para oponerse al aberrante proyecto de convertir a Colombia en un Estado paria, en un país dominado por el crimen organizado.

Hoy, veinticinco años después de su magnicidio, la lucha continúa. Las mafias han mutado sus estructuras organizacio-

¹ Asesor jurídico-político de la Corporación Viva la Ciudadanía y columnista de diversos medios escritos y electrónicos.



nales y siguen manoseando al país bajo la complicidad de algunos militares, funcionarios y jueces; se han reestructurado con ciertos políticos y empresarios hasta llegar a confundirse; continúan utilizando la violencia como medio de apropiación de no sólo extensas zonas del territorio nacional, vinculadas a las principales fuentes de riqueza lícitas e ilícitas, sino también del poder político que les garantice impunidad y enormes beneficios legales. La mezcla de masacres, desplazados, narcotráfico, violaciones y corrupción con la búsqueda de representación política a nivel regional como nacional, y la captación de las instituciones del Estado, que hoy conocemos como parapolítica, o mejor dicho, narcoparapolítica, fue lo que combatió Rodrigo Lara Bonilla desde el Nuevo Liberalismo, el Senado de la República y el Ministerio de Justicia.

“Soy un Ministro peligroso para sectores que están al margen de la ley”, afirmó Lara unos meses antes de su muerte, en agosto de 1983². De igual manera, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que su memoria y su legado lo siguen haciendo peligroso para el hampa política, empresarial y militar que está en la actualidad entregando el país a las mafias. Las mismas estructuras criminales que en los ochenta lo asesinaron –al igual que a centenares de políticos, jueces, periodistas, policías y colombianos honestos que siguieron su ejemplo– continúan delinquiendo tranquilas, con los magnicidios y crímenes que hasta hoy siguen impunes.

Recordemos tan solo lo que sentenció el entonces Senador Rodrigo Lara, em-

pezando 1981, en una intervención en el Congreso de la República: “¿Se logrará la paz en Colombia mientras la política dependa de una manera tan sensible del dinero? (...) Dinero de los grupos económicos, de las mafias, de la corrupción pública; dineros que, de no ser controlados drásticamente, terminarán por acabar nuestra democracia³”. Hoy, más de dos décadas después, la infiltración de lo peor del crimen organizado en el Congreso y su captación del Estado, sumado a la falta de voluntad política para adelantar una verdadera reforma electoral, le están dando dramáticamente la razón. Por esto, el olvido de lo que representa Rodrigo Lara Bonilla para Colombia y la renuncia a la verdad histórica sobre las causas y los responsables de su desaparición, representan una muerte más contundente que las implacables ráfagas de los sicarios que intentaron callarlo infructuosamente, aquel 30 de abril de 1984.

El presente texto intenta a través de la vida de Rodrigo Lara Bonilla acceder no sólo una radiografía de la convulsionada Colombia de principios de los ochenta –donde Lara fue un antagonista indiscutible del crimen y la corrupción contemporánea– sino también a los antecedentes y sucesos políticos y sociales que marcaron su personalidad y su posterior vocación política: indagar en las circunstancias du-

2 Diario El Tiempo, 1 de mayo de 1984.

3 Acta de las sesiones ordinarias. Comisión I del Senado de la República, 5 de febrero de 1981.



rante las cuales desarrolló su niñez y su juventud, la “violencia”, el Frente Nacional y el posterior conflicto social colombiano, enmarcados políticamente por el desarrollo y evolución del liberalismo social (del cual él y Luis Carlos Galán fueron sus últimos dolientes) y el ambiente internacional signado por la guerra fría, con su antesala actual de lucha mundial contra el narcoterrorismo. Y todo esto, para rescatar el carácter iconoclasta de Rodrigo Lara Bonilla y su visionaria mirada del acontecer nacional, en la cual hay muchas claves para entender nuestro inmediato presente, pero sobre todo, muchas advertencias de lo que lo que nos puede deparar el futuro.

La Colombia en que nació Rodrigo Lara Bonilla

“Yo soy yo y mis circunstancias”

José Ortega y Gasset

En la primera mitad del siglo XX, hechos como los levantamientos obreros, la Revolución Bolchevique y la aparición del Estado Soviético (1917), la Revolución Mexicana (1910-1917), la gran depresión económica y social de 1929, la implantación del “Nuevo Trato” Keynesiano en Estados Unidos y la incubación de los Estados Bienestar europeos transformarían las concepciones clásicas del liberalismo y las teorías del Estado moderno. Un nuevo modelo de contrato social políticamente incluyente, económicamente distributivo y progresivamente garantista de derechos y libertades fundamentales, se imponía bajo la fuerza de la historia sobre

los Estados gendarmes de los liberales clásicos.

Fue también está la época en que el problema de la droga se comenzó a asumir como un campo de combate global. En 1922, el Congreso de los Estados Unidos definió oficialmente el tráfico de cocaína como narcotráfico, prohibiendo su importación y consumo. Las Convenciones firmadas en Ginebra en 1925 y 1931, a las cuales se adhirió Colombia por medio de las leyes 68 de 1930 y 18 de 1933, se suscribieron para vigilar la producción, fabricación, distribución y venta de drogas estupefacientes. Posteriormente, en 1938, los Estados Unidos regularon y restringieron la venta de la coca, producto que constituyó en años anteriores uno de los principales insumos de importación en Norte América, tanto para industrias como la farmacéutica, como para la producción de la que sería la bebida más popular del mundo y símbolo innegable de la globalización: la Coca Cola⁴.

La Colombia de la época también se desenvolvía bajo enormes contradicciones y conflictos violentamente apaciguados por las élites políticas y económicas que manejaban el poder en aquel enton-

4 En el libro “De la coca a la cocaína: una historia por contar” (Juan Carlos García Hoyos, Universidad del Rosario, 2007) se expone una cronología del proceso de criminalización de las drogas y se desnudan las manipulaciones históricas que los países consumidores han ejercido sobre los productores. Manipulaciones que terminaron siendo definitivas en las etapas actuales del conflicto armado y la violencia social en Colombia, a través de las que se impuso desde los ochenta como narco-terrorismo.



ces. Protestas como la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company, a finales de 1928, donde miles de jornaleros, pequeños propietarios y comerciantes de la zona bananera del Magdalena se levantaron contra la multinacional y contra el régimen conservador ante sus dramáticas condiciones sociales y su humillante situación laboral, son un ejemplo de ello. Lejos de recibir atención de un gobierno formalmente democrático, lo que consiguieron fue la expedición de un decreto de estado de sitio. Orden, al igual que la hoy dictada por los poderes económicos predominantes, que se constituyó en el marco desde el cual el Ejército, al servicio de una transnacional y no de la República, acribilló al pueblo reunido en asamblea. Después de la masacre, la tragedia no terminaría, comenzarían meses de detenciones masivas, desapariciones, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y toda clase de atropellos aplaudidos y apoyados por la empresa bananera⁵.

El hecho indignó al país. Los estudiantes, convertidos en actores sociales por primera vez, se levantaban contra el autoritarismo gubernamental del conservador Miguel Abadía Méndez. Y en medio

de esta crisis, surgiría la voz que estremería a todo un pueblo, la figura de un joven abogado, un representante a la Cámara que a través de sus denuncias y debates desde el Congreso le daría una nueva concepción a la discusión del papel del Estado en Colombia. Surgiría Jorge Eliecer Gaitán y con él, el liberalismo social como proyecto político. La tragedia de las bananeras terminó por derrumbar la hegemonía conservadora y traería al poder a el partido liberal, de la mano de Enrique Olaya Herrera, el 9 de febrero de 1930, tras derrotar en las urnas a Guillermo Valencia.

Con Olaya en el poder, el liberalismo social empezó a colocar sobre la agenda los problemas estructurales de la sociedad colombiana: la precaria situación de los trabajadores, el abandono de los campesinos, el papel del Estado frente a los sectores vulnerables y la desigualdad social. En medio de la crisis económica mundial, se comenzaron a establecer medidas de protección para la industria nacional, se fortaleció el mercado interno, se suprimieron gran parte de las importaciones, se comenzó la construcción de grandes carreteras y ferrocarriles, inversiones en los puertos, estímulos a la educación pública y fortalecimiento del magisterio. Pero muchos sectores del liberalismo, especialmente jóvenes de tendencias socialistas, se sintieron defraudados con las tímidas reformas de Olaya Herrera.

Luego vendría, en 1934, Alfonso López Pumarejo, quien llegó dispuesto a profundizar y consolidar los postulados del liberalismo social, a través de su Revolución

⁵ La United Fruit Company, recientemente volvería a ser protagonista de la historia violenta de Colombia, está vez vinculada a la financiación de grupos paramilitares y a su complicidad en el asesinato y la masacre de sindicalistas y comunidades de la región del Urabá. Por estos hechos, Chiquita Brands, como hoy se llama la transnacional bananera, afronta procesos judiciales en Colombia y EEUU.





en Marcha. Este programa de gobierno representó una apuesta más radical de transformaciones y desmonte de las viejas instituciones retardatarias, y se convirtió en política de Estado a través de la reforma constitucional de 1936.

López Pumarejo asumió con mayor contundencia los grandes cambios políticos, económicos y sociales que la Colombia de la época exigía. De esta manera, aparecieron los impuestos progresivos sobre la renta, los grandes patrimonios y las plusvalías. Por otro lado, se fortaleció el derecho al trabajo y las garantías de asociación por medio de la consagración del derecho a la huelga, la libertad sindical, el horario laboral de ocho horas y el salario mínimo. Dentro de una visión social demócrata del Estado, se le asignó a la propiedad una función social y se facilitó la expedición de la primera ley de tierras. Se estableció la educación obligatoria y gratuita en la primaria e importantes programas de asistencia social a los sectores menos favorecidos. También se rescataron los principios laicos al establecerse la

libertad de cultos y separar la educación del dogmatismo religioso.

López fue un liberal nacionalista, que llegó a desafiar los intereses extranjeros en el país, a los grupos privilegiados (especialmente a los terratenientes) y a la iglesia, sectores que vieron en él al peor enemigo de sus intereses. La continuación del proyecto político de la Revolución en Marcha sería, desde finales de los setenta, una de las grandes obsesiones de Rodrigo Lara Bonilla. Obsesión que lo llevaría a plantear un significativo debate al interior del partido liberal, en una disputa que se agudizaría con la renuncia de la mayor parte de la dirigencia del partido al liberalismo social y la entrega de la colectividad a las imposiciones de las doctrinas de la seguridad nacional y del neoliberalismo económico en el gobierno de Julio Cesar Turbay (1978-1982).

De 1938 a 1942 gobernó el también liberal Eduardo Santos, quien, en lo esencial, dio continuidad a las reformas fundamentales de la Revolución en Marcha. Pero en su gobierno de conciliación partidista, los conservadores y la derecha del partido liberal conspirarían para comenzar el desmantelamiento de los avances del liberalismo social. López sería reelecto en 1942, pero encontraría instalada una pugnantísima oposición que le impediría terminar su segundo período y un descontento al interior de su propio partido que le restaría apoyo político para mantenerse en el cargo.

La violenta conspiración de sus antagonistas estaba decidida a desestabilizar al país antes de seguir permitiendo que



López Pumarejo continuara el desmonte de sus privilegios. Por esta vía, llegaron a cooptar a altos mandos del ejército y fue así como en 1944 y al mando del Coronel Diógenes Gil, unos oficiales secuestraron al presidente López en la ciudad de Pasto. Afrenta que sólo duró un par de horas y terminó con la condena de los golpistas.

Por último, y aprovechando la ambición de su negociante hijo, Alfonso López Michelsen, los opositores destaparon los casos de influencias injustificadas en que incurrió el delfín, que pasaron a la historia como “los escándalos de Handel y la trilladora Tolima”. Escándalos que a la postre darían por terminado prematuramente el segundo gobierno de la Revolución en Marcha. El propio Gaitán estuvo en desacuerdo con la reelección de López y, ante la inmoralidad familiar expuesta, fue implacable crítico de su gobierno. López Pumarejo presentó su renuncia definitiva e irrevocable el 31 de julio de 1945 y el 7 de agosto tomó posesión del primer cargo de la nación Alberto Lleras Camargo, quien por un año ejercería un gobierno de transición hasta las elecciones de 1946.

Fue en estos años de crisis que a Colombia se le impuso la política de criminalización mundial de la droga y el país expidió su primer estatuto antinarcoóticos, la ley 45 de 1946 y su decreto 896. La legislación prohibía el cultivo y distribución de la coca, en un tiempo en que la cocaína era prácticamente desconocida en el país, y mucho menos, se imaginaba su exportación.

En este convulsionado ambiente político y social, don Jorge Lara Trujillo y doña

Raquel Bonilla González traerían al mundo a Rodrigo Lara Bonilla, en la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila. Un niño que desde su primer llanto dejó claro que llegaba al mundo para ser escuchado. Los primeros meses de vida del pequeño Rodrigo Lara coincidirían trágicamente con los últimos de Jorge Eliecer Gaitán. El líder liberal sería uno de los principales referentes políticos de Lara Bonilla, e inspirador de sus múltiples debates respecto al papel del liberalismo y del Estado en Colombia.

Para entonces, Jorge Eliecer Gaitán aglutinaba cada día a más y más seguidores, que lo convirtieron en el candidato ideal para llevar a la presidencia a un liberalismo social mucho más radical que el de la Revolución en Marcha. Pero la oposición conservadora al liberalismo había desatado desde los inicios de 1946 un enfrentamiento tan radical como violento, en el cual, los conservadores, decidieron anticiparse a la disputa electoral y eliminar físicamente a quienes podrían llevar el liberalismo social al poder nuevamente. Campesinos, obreros y clases populares fueron masacrados por millares desde entonces.

La valentía de Gaitán, al enfrentar desde la plaza pública al pusilánime gobierno de Ospina Pérez, en 1947, y solicitarle responsabilidad política por los asesinatos de miles de compatriotas, sería motivo de emulación por Lara Bonilla muchos años después, cuando la violencia disfrazada de seguridad nacional, volvería a bañar de sangre al pueblo colombiano.



La infancia de Lara en el marco de la violencia en Colombia

En 1948 Jorge Eliécer Gaitán es el jefe del liberalismo y se ha convertido también en un candidato presidencial invencible; y precisamente por eso es asesinado ese fatídico 9 de abril. Su magnicidio terminó de incendiar la etapa de odios partidistas exacerbados, coyuntura sangrienta conocida como “La violencia”. La máxima expresión de uno de estos polos estuvo representada en la derecha política encabezada por Laureano Gómez, quien llegó a la presidencia como candidato único ante la renuncia del aspirante liberal Darío Echandía en protesta por los múltiples asesinatos contra su partido que tocarían hasta su propia familia, con el homicidio de su hermano, Vicente Echandía.

Gómez se posesionó el 7 de agosto de 1950 y fiel a sus convicciones suspendió las Cortes, restringió las libertades y garantías civiles, pretendió acabar con el sindicalismo, la libertad de prensa y la libre expresión. Alimentó la violencia con sus medidas de represión y persecución de la oposición, período en el cual comenzó con fuerza el desplazamiento forzado, ante la arremetida de los terratenientes y su voracidad en la acumulación de tierras. Gómez sepultó la educación laica y le devolvió los poderes a la iglesia, mientras pretendía implantar un régimen a imagen y semejanza del modelo vigente en España en los comienzos de la dictadura franquista.

Fue en medio de este ambiente de intolerancia política, que se vivió con es-

pecial crueldad entre los liberales y conservadores de su natal Huila, que Rodrigo Lara Bonilla daba los primeros pasos de su infancia. La violencia rápidamente pobló de desplazados procedentes de las zonas rurales a su querida Neiva, ciudad que además albergó refugiados de los departamentos del Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Caldas.

Siendo muy niño Rodrigo Lara debió presenciar en las etapas iniciales del entendimiento las acaloradas discusiones que siguieron ante los sombríos acontecimientos del 6 de septiembre de 1952, cuando el periódico liberal El Espectador fue asaltado e incinerado por orden de los conservadores. Reconstruyendo de las cenizas el diario de su familia, comenzó a destacarse el joven periodista Guillermo Cano, quien tres décadas más tarde, y ya como director del periódico, se cruzaría en la vida de Lara para secundarlo en su quijotesca y valiente lucha contra las mafias de la política y del narcotráfico. Cano y Lara sellarían una marcial amistad y compartirían heroicamente una causa, que finalmente los llevaría a la muerte. En estos años cincuenta ya eran tristemente famosos los pájaros y chulavitas, precursores de nuestros actuales paramilitares; y como respuesta, se organizaron las primeras guerrillas, de filiación liberal, pero paradójicamente denominadas autodefensas. La violencia se degradó rápidamente y comenzaron las mutilaciones, las decapitaciones, las violaciones de mujeres, las masacres de niños y toda clase de atrocidades inimaginables.





Rodrigo Lara debió haber escuchado por aquella época las historias de aquel líder campesino, que organizaba autodefensas liberales y se convertía ya en símbolo de resistencia frente a la sanguinaria dictadura conservadora. Campesino que se hacía llamar “Manuel Marulanda Vélez”, en homenaje a un líder sindical que fue brutalmente asesinado por los pájaros conservadores.

En la inocencia de su infancia, el pequeño Lara no pudo imaginar que muchos años después, aquel líder de las autodefensas campesinas mutaría con los cambios del país y de la guerra y se convertiría en el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Feroz y vengativa organización rural, adoptada por la izquierda y con la cual él, como ministro de Justicia de un Gobierno conservador, por esos disparates de la historia, tendría que sentarse a buscar la paz de Colombia, mientras se enfrentaba solitario a los narcotraficantes

que ya habían comenzado a delinear su brazo armado: los paramilitares.

Lara Bonilla asistía por entonces al colegio La Presentación, en Neiva, donde se comenzó a destacar tanto por su hiperactividad, como por su buen humor que lo acompañaría el resto de la vida. Por esos días, el país no acababa de asombrarse con un hecho cuando acaecía otro. En medio de la guerra entre los dos partidos tradicionales, asumió el poder el Comandante de las Fuerzas Armadas, el General Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953. Golpe de facto al que llamarían “de opinión”, ya que en él estuvieron de acuerdo, o mejor dicho, se confabularon las elites de ambos partidos.

Rojas Pinilla fue un presidente paradójico. Por un lado, fue el impulsor de un gran proceso de modernización del país en el que se construyeron grandes vías de comunicación, terminó hidroeléctricas, edificó 19 aeropuertos, entre ellos El Dorado de Bogotá, finalizó el Ferrocarril del Atlántico, concedió el voto femenino, creó el SENA, abrió bancos públicos y trajo la televisión a Colombia. Pero por otro lado, se le recordará como un dictador que reprimió y persiguió a la oposición y al movimiento social, como un gobierno en el se llevaron a cabo imperdonables masacres por la fuerza pública, y como un régimen intolerante que llegó a clausurar los diarios El Tiempo y El Espectador.

En este escenario, y cuando el General se perfilaba como un líder carismático dentro de los sectores populares y como un tirano en la clase media y alta de la sociedad colombiana, no pasaría mucho



tiempo para que las mismas élites partidistas que lo habían llevado al poder le dieran la espalda. El 24 de julio de 1956, en la pequeña ciudad de Benidorm, España, Alberto Lleras y Laureano Gómez pactarían el derrocamiento del General y el establecimiento de un régimen bipartidista que vería el camino despejado cuando, el 10 de mayo de 1957, caía el gobierno de Rojas Pinilla, éste huía hacia el exilio y Colombia entraba a la vergonzosa época precursora de la corrupción clientelista, del fin de las ideologías partidarias y detonante de la violencia moderna, que se denominó el Frente Nacional.

Una juventud en medio de la revolución mundial y la represión nacional

Ya en el colegio Bolívar de Neiva, Rodrigo Lara, convertido en todo un bachiller, abría los ojos en un mundo contradictorio que se debatía entre las revoluciones nacionalistas y de izquierda, latinoamericanas y mundiales, la guerra fría internacional y la represión propia que generó el Frente Nacional en Colombia. Represión y corrupción que desde su primera juventud Lara rechazó y repudió, actitud que fue definitiva en su posterior militancia política, tanto desde el Movimiento Revolucionario Liberal, como en las organizaciones que él mismo ayudaría a construir: Dignidad Liberal y el Nuevo Liberalismo. Disidencias políticas destinadas a desmontar todas las funestas consecuencias del pacto bipartidista y en especial empeñadas en devolverle la dignidad, la ideología

y el compromiso social al partido Liberal, características que el frente-nacionalismo le había arrebatado.

Entrados los años sesenta, Lara Bonilla ya era un destacado líder juvenil en todo el Huila, departamento que se encontraba plagado de guerrillas y aun de bandas conservadoras. Muy rápidamente Lara consiguió perfilarse como un futuro dirigente nacional de la mano del MRL en su región, mientras incitaba manifestaciones y avivaba las nacientes huelgas que crecieron paulatinamente se fue agravando la situación económica nacional. Por aquel entonces, ya era famoso el programa radial “Impacto” informativo afecto al MRL y desde el cual se lanzaban sendas denuncias y se propiciaba un ambiente de rebeldía. Luego, también tuvo un fuerte activismo como estudiante de derecho en la Universidad Externado de Colombia, pero siempre mantuvo contacto con los acontecimientos políticos de su departamento y su ciudad, a la cual regresaría para ser alcalde, a los 22 años, en 1968.

El pacto de paz que supuso el Frente Nacional sellaría las rivalidades entre las élites partidarias, más no en sus bases campesinas, que siguieron siendo relegadas y violentamente perseguidas, al igual que el movimiento sindical, social, universitario y las minorías políticas. Políticamente, en 1958 Alfonso López Michelsen reacciona y estructura el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, como una disidencia de un partido entregado al frente-nacionalismo. El MRL se rebela contra el acto legislativo del pacto bipartidista y postula a López a la presidencia en 1962,



donde es derrotado por el conservador Guillermo León Valencia, quien a órdenes del Frente Nacional fue apoyado por los dos partidos tradicionales. Pero además, por la prohibición constitucional de participar en las elecciones por fuera de los partidos frente-nacionalistas, sus votos fueron anulados por la Corte Electoral⁶.

A principios de los sesenta, el padre Camilo Torres comienza su trabajo político-social y en 1965 organiza el Frente Unido Popular, el cual dejaría para integrarse a la lucha armada donde moriría temprana y absurdamente. Por otro lado, el General Rojas Pinilla generaría otro foco de oposición al pacto bipartidista, La Alianza Nacional Popular, Anapo, que después de la disolución del MRL, se convertiría en la principal oposición al Frente Nacional; tanto, que en 1970, el General Rojas Pinilla disputó las elecciones presidenciales con quien sería el último presidente del Frente, Misael Pastrana Borrero. Elecciones que estuvieron duramente señaladas de fraude y de las cuales emergió un sector radical de la Anapo que conformó el movimiento alzado en armas, 19 de abril (día en que se llevaron a cabo las elecciones). Durante la presidencia del liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) nace el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR, otra oposición política y social al Frente Nacional, organizada por estudiantes universitarios y obreros afectos a la izquierda.

También en los sesenta, la ilegalización y hostigamiento de todo movimiento social o político, por fuera del bipartidismo, acabó de propiciar el tránsito de las

autodefensas liberales a guerrillas revolucionarias con la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1964. Por el mismo tiempo surgiría el Ejército de Liberación Nacional, ELN, inspirado especialmente por la revolución cubana de 1959 y donde un sector de la iglesia (inspirado en La Teología de la Liberación), cuyo mayor exponente fue el padre Camilo Torres, ayudaría a conformar y fortalecer; proyecto revolucionario donde además confluyeron estudiantes universitarios, miembros del partido comunista impulsados a la clandestinidad y líderes sindicales de corte nacionalista. En diciembre de 1967 nacería el Ejército Popular de Liberación, EPL, inicialmente de corte Maoísta y posteriormente integrado a la línea marxista-leninista. Y en 1974, fruto del fraude electoral de 1970 contra el General Rojas Pinilla, nace el M-19, guerrilla conformada principalmente por jóvenes del ala socialista de la Anapo e hijos de militares, movimiento urbano de gran aceptación popular, y famoso por sus espectaculares operativos.

6 Acto legislativo N°1 de 1959. Artículo 1. En los tres períodos constitucionales comprendidos entre el 7 de agosto de 1962 y 1974, el cargo de Presidente de la República será desempeñado alternativamente por ciudadanos que pertenezcan a los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal; de tal manera que el presidente que se elija para uno cualquiera de dichos períodos, pertenezca al partido distinto de su inmediato antecesor. Por consiguiente, para iniciar la alternación a que se refiere este artículo, el cargo de Presidente de la República en el período constitucional comprendido entre el 7 de agosto de 1962 y 7 de agosto de 1966, será desempeñado por un ciudadano que pertenezca al partido conservador.





Cuando López Michelsen abandona el MRL y regresa al partido Liberal, llevando al límite la frustración que se había originado desde que, en el gobierno frente-nacionalista de Guillermo Valencia, López aceptara participar con un ministerio (Juan José Turbay) y un cargo diplomático (Felipe Salazar Santos) a nombre del MRL. El acabose del Movimiento Revolucionario causó que gran cantidad de jóvenes, entre ellos muchos contemporáneos de Lara Bonilla, ingresaran, bajo el auge de la revolución mundial y la decepción nacional, a las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL. Lara, desde entonces, entendería el fenómeno guerrillero más allá de la miope concepción del bandolerismo y atribuiría su existencia, sin justificar la violencia, al cierre de espacios políticos y a la asfixia democrática que generó el Frente Nacional y su herencia; y a la renuncia, por las élites de su partido, a un proyecto político interesado por el bienestar social de la inmensa mayoría de colombianos, que sin oportunidades se habían hundido históricamente en la miseria.

Para 1974, López Michelsen, ya como candidato triunfante del partido Liberal,

se proclamaba como el primer presidente post frente-nacionalista, aunque terminara manteniendo la estructura básica de gobierno bipartidista heredada del Frente Nacional, que tanto criticó y combatió desde el MRL. Además, produjo en su gobierno una preocupante concentración del poder económico, benefició a los conglomerados financieros, permitió la especulación en la finca raíz y su elasticidad moral llegó al punto de crear la “ventanilla siniestra” en el Banco de la República, por donde entraron, confundidos con los dineros de la bonanza cafetera, todos los millones de dólares de los carteles de la marihuana, entre ellos los del cartel de los “Dávila”, familiares políticos del presidente López y del hombre más rico de Colombia, Julio Mario Santodomingo.

Rodrigo Lara Bonilla se sintió defraudado, y pensó que “Satanás”, como solía llamar con cálido humor a Alfonso López Michelsen, había dejado de ser un simple apodo para convertirse en una pesadilla real, la pesadilla de un partido al que se lo llevaba el diablo. Y a pesar de que como alcalde de Neiva y a su corta edad ya tenía todo un futuro político dentro del partido oficialista, comenzó a pensar la forma de forjar otro camino, así fuera en solitario. Un camino para recuperar los principios e ideales en los que había crecido y por los que se sentía un liberal. La confusión pobló su mente, y no era para menos, su partido y los líderes en que tanto había cifrado sus esperanzas y puesto sus energías para la contienda política, no estaban a la altura de lo que exigía el país. Además, se sumaba a la agonía del MRL la



Pero, a pesar del dolor y la decepción con la vida y con el país, el camino de la lucha armada no entraba en su imaginario de demócrata civilista, convencido como era, que ninguna causa vale la vida de un hombre.

de su padre, don Jorge Lara Trujillo, quien moriría en 1972. En medio de la desesperanza absoluta fue contactado, a través de personas muy cercanas a sus afectos, por los líderes del ELN y luego por los del M-19, que veían en él a un importante líder y personaje clave para el futuro político de sus organizaciones. Pero, a pesar del dolor y la decepción con la vida y con el país, el camino de la lucha armada no entraba en su imaginario de demócrata civilista, convencido como era, que ninguna causa vale la vida de un hombre.

Posteriormente, Lara Bonilla viajaría a Europa a especializarse en la Universidad de París, en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Estaría que coincidió con una época en que Francia tenía todavía expuesta toda la agitación revolucionaria del mayo del 68 y, aún en sus paredes, Lara pudo leer los graffiti que tanto le hicieron reír como acentuar sus convicciones. En un muro de su prestigiosa universidad se encontraría con el famoso: "Défense d'interdir" (Prohibido prohibir). Cerca a su residencia encontró el audaz "Soyons réalistes, demandons l'impossible" (Seamos realistas pidamos lo imposible). Y, en un viejo barrio del centro de la Ciudad

Luz, con una mezcla de nostalgia y alegría, encontró aquel graffiti que lo llevó a visualizar a su país y a entender que, a su regreso, las cosas para él no volverían a ser fáciles: "Pas de replâtre, la structure est pourrie" (No le pongas parches, la estructura está podrida).

En este ambiente de cambio y revolución que le brindó Europa, su partido se le acabó de volver incómodo. Sentía vergüenza de ver como las diferencias entre un godo y un liberal se hacían cada día más cortas, y como la corrupción y las conveniencias políticas habían logrado dejar atrás las ideologías e incluso las rencillas políticas creadas durante todo el bélico siglo XIX. Después de meses de divagar, volvió a Colombia con la mente más clara, sabía que ya no era tiempo para más dudas y en un acto de arrojo y dispuesto a todo, se lanzó a darle vida a "Dignidad Liberal" en el Huila; y luego, a ingresar al Nuevo Liberalismo, donde con Luis Carlos Galán pactaron reescribir la historia del partido y del país. Pacto que sabían los iba a enfrentar a sus viejos amigos y antiguos ídolos políticos. Compromiso que asumieron conscientes de que terminarían entregándole sus propias vidas si era necesario, como efectivamente ocurriría años después.

Los inicios del narco-paramilitarismo

En el ámbito internacional la guerra fría se agudizaba. Los Estados Unidos, que se habían involucrado fuertemente desde los sesenta en la guerra de Vietnam, para apoyar al gobierno de Vietnam del sur de



“Défense d’interdire”
(Prohibido prohibir).

“Soyons réalistes, demandons l’impossible”
(Seamos realistas pidamos lo imposible).

“Pas de replâtrage, la structure est pourrie”
(No le pongas parches, la estructura está podrida).

la arremetida de las guerrillas comunistas del Vietcong y de Vietnam del norte (respaldados por la URSS y China), regresaban en los setenta con una humillante y dolorosa derrota. A pesar de sus centenas de miles de soldados, de sus nefastos bombardeos y de la utilización de criminales armas químicas y biológicas, las guerrillas comunistas los habían doblegado. Además, pese a su ilegalidad, gran parte de los combatientes norteamericanos usaban drogas como la marihuana y la cocaína, con el fin de falsear las inclemencias y el terror de la guerra. Luego de su vergonzosa retirada de Vietnam, muchos veteranos se convirtieron en un problema para el gobierno norteamericano dada su acentuada drogadicción, en una época donde, por la vía del hipismo, el consumo de estupefacientes se había disparado en los Estados Unidos.

En Latinoamérica, la guerra fría se intensificó gracias a la paranoia estadounidense causada por la Revolución Cubana y al miedo de un brote continental de guerrillas comunistas. Ante esto, los Estados Unidos impusieron la doctrina de la Seguridad Nacional y apoyaron a sanguinarias dictaduras militares, ayudaron a derrocar gobiernos democráticos y comenzaron a

intervenir e influir en los conflictos armados internos, especialmente en países como Colombia, que había incubado guerrillas pro cubanas, soviéticas y chinas. Con la intervención militar norteamericana y su plan de cooperación para el desarrollo, se configurarían dos fenómenos que luego acentuarían descomunadamente el devenir de la violencia en el país: los carteles del narcotráfico y el paramilitarismo.

En lo militar, la estrategia –en medio del fracaso de Vietnam– estaba estructurada sobre el involucramiento de la población civil en el conflicto. Las bases del paramilitarismo llegarían con los manuales de guerra norteamericanos⁷ y la implantación de grupos armados paraestatales amparados bajo decretos que estimulaban las autodefensas armadas en

⁷ Desde el año de 1962, en informes como el de la Escuela de Guerra de Fort Bragg (Carolina del Norte), dirigida por el General Yarborough, se anunciaba: “Desarrollar una estructura cívico militar que se use si el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriora más” (...) “se usará para presionar los cambios que sabemos, que se van a necesitar para poner en marcha funciones de contra-agentes, contra-propaganda, y en la medida que sea necesario, para impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo” (Javier Giraldo, 2003).



las zonas rurales⁸ y el despliegue de la guerra sucia en las ciudades con comandos terroristas urbanos que operaban en la clandestinidad. Por otro lado, la cooperación para el desarrollo trajo consigo a muchos veteranos de Vietnam, entre ellos algunos pilotos, que generosamente promovieron la siembra de la marihuana entre los campesinos e iniciaron con sus avionetas el negocio del narcotráfico, involucrando a sus nuevos socios colombianos en organizaciones de tráfico de marihuana y posteriormente de cocaína.

Desde 1974, Benjamín Herrera Zuleta, que sería llamado “El Papa Negro de la Cocaína” ya había incursionado en el negocio, sus herederos serían la banda de los hermanos Rodríguez Orejuela y José Santacruz Londoño, hasta entonces dedicados al secuestro. En noviembre de 1975, Gilberto Rodríguez fue capturado con 180 kilos de pasta de coca en el Perú. A principios de los setenta, Carlos Lehder ya transportaba marihuana hacia los Estados Unidos por lo cual estuvo preso; luego, a mediados de la misma década, y en sociedad con el norteamericano George Jung se dedicaron al tráfico de cocaína. Pablo Escobar, al igual que Lehder, también estuvo detenido en Medellín, cuando en 1976 fue procesado por el tráfico de 19 kilos de cocaína. Por aquel tiempo Pablo Escobar, Lehder, Jung y los Ochoa se conocerían, se harían socios y conformarían la base del futuro cartel de Medellín. Casualmente, por aquella época, otro personaje que se convertiría en enemigo acérrimo de Lara y de Galán, también estaría unos días en el penal por falsificación de

documentos públicos y peculado, se trataba del parlamentario, Alberto Santofimio Botero.

Durante estos años, aparecería un héroe anónimo, un incorruptible miembro de la policía que marco un hito en la lucha contra las mafias del narcotráfico, el joven oficial Jaime Ramírez Gómez. En 1975, este oficial puso al descubierto una poderosa organización de traficantes de cocaína en Bogotá y dio captura a Iván Darío Carvalho; además, completaría sus indagaciones con el allanamiento de una finca de la “Reina de la Coca”, Verónica Rivera de Vargas, a quien le encontró un moderno laboratorio para el refinamiento del alcaloide. Unos años después, y ya como Coronel de la Policía, este oficial se convertiría en la mano derecha de Lara Bonilla, cuando desde el Ministerio de justicia y la Unidad Antinarcóticos, darían los golpes más contundentes propinados a mafia alguna en el mundo.

Al tiempo, Los Estados Unidos declaraban la guerra a las drogas y, en un periodo de tan sólo cinco años, el presupuesto para la lucha antinarcóticos pasó de 43 a 321 millones de dólares, iniciando una nueva forma de intervención y control imperialista que, con el tiempo, sobreviviría a la desaparición de la guerra fría.

A finales de los setenta, ya el batallón de inteligencia y contra inteligencia de la

8 La ley 48 de 1968, convertiría en legislación permanente un decreto que permitía al ejército organizar y proveer armas a grupos de civiles llamados autodefensas, que podrán luchar contra delincuentes organizados y contra otros grupos armados que operan en regiones campesinas.



XX Brigada del ejército, era acusado de patrocinar el grupo paramilitar “La Triple A (Alianza Anticomunista Americana). Organización terrorista, que colocó bombas en medios de comunicación, efectuó secuestros y desapariciones, amenazas a abogados, magistrados y jueces, e infringió inhumanas torturas sobre todo sospechoso de pertenecer a la subversión.

Había empezado una nueva etapa de violencia degradada para Colombia, se estrenaba el estatuto de seguridad de Turbay, que acabó de prostituir el accionar de las fuerzas armadas que regresaban a las deshonrosas épocas de la masacre de las bananeras. Paralelamente, comenzaba también la degeneración política y social que trajeron los carteles de la droga, que encontraron un país conducido por dirigentes sin principios éticos y pertenecientes a partidos sin ideologías, que deambulaban alrededor de componendas clientelistas.

Un país que sumido en la pobreza, hacinaba en los suburbios a miles de jóvenes sin esperanza ni futuro, un país con una gran crisis económica, pero con una enorme tragedia humana, que el gobierno pretendía enfrentar con el desmonte de las pocas garantías sociales, iniciando los ajustes estructurales del neoliberalismo, impuestos por el Fondo Monetario Internacional y desarrollados con fuerza a partir de la llegada al poder en Estados Unidos del neoconservador Ronald Reagan, en 1981.

Paramilitarismo, narcotráfico, miseria y corrupción política y empresarial conformarían una bomba de tiempo que esta-

llaría sin misericordia durante los ochenta, un big bang destructivo que sigue arrasando, aun hoy, al pueblo colombiano. Y en medio de este dantesco panorama, solo unas incorruptibles voces se levantaron contra la ignominia de lo que estaba sucediendo y denunciaron el oprobio de lo que estaba por acontecer, eran los reclamos de los jóvenes senadores, Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara Bonilla, que hacían estremecer al gobierno cada vez que desde la tribuna parlamentaria hacían uso de la palabra.

El turbayismo y la narco-parapolítica

A principios de 1978, y como candidato al Senado de la República, Rodrigo Lara creía que ya lo había visto todo en materia de decepciones políticas y que el partido liberal ya no podía caer más bajo, después de la vergüenza frente-nacionalista. Pero qué equivocado estaba, aun faltaba lo peor, la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala.

Por aquella época, Diego Ascencio, embajador de Estado Unidos en Colombia, declaró públicamente: “los narcotraficantes (colombianos) son tan fuertes, en términos de poder financiero, que podrían tener su propio partido y pueden ya haber comprado y pagado diez miembros del cuerpo legislativo”⁹. Posteriormente, en 1980, el Washington Post ampliaría la

9 Fabio Castillo. Los Jinetes de la Cocaína, 1987. (www.derechos.org).





denuncia afirmando que posiblemente el 10% del Congreso colombiano habría sido elegido con dineros del narcotráfico.

Los indicios de esta nueva degradación política también apuntaban al ejecutivo. Un informe del asesor presidencial de Jimmy Carter, Peter Bourne, acusaba al presidente Turbay, a familiares y a personas cercanas a él de tener vínculos estrechos con el narcotráfico. El informe, llamado “El memorando Bourne”, fue revelado por el programa 60 minutos, de la cadena CBS, y desató un escándalo de enormes proporciones. El resultado: Turbay, en medio de una crisis de ilegitimidad, arremetió contra los cultivos de marihuana, criminalizó y reprimió violentamente al campesinado, inició las fumigaciones con glifosato y experimentó el uso del paraquat, firmó el tratado de extradición y convenios de cooperación militar con Estados Unidos e intensificó la guerra a la subversión bajo su nefasto Estatuto de Seguridad, con el cual comenzó una etapa de degradación del Estado colombiano, y especialmente de sus fuerzas armadas, por medio de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, configuración del paramilitarismo, negación de libertades civiles y políticas, violación sistemática y progresiva de los derechos

humanos, y persecución a la oposición y a los intelectuales que, como Gabriel García Márquez, tuvieron que asilarse en el exterior para salvar sus vidas.

Siendo ya Senador, Rodrigo Lara condenaría por este hecho al gobierno de Turbay. Recordando que, en el mismo escenario, Jorge Eliecer Gaitán, como Representante a la Cámara, había denunciado la masacre de las bananeras en 1930.

“La democracia no se defiende violando los derechos humanos¹⁰” gritó Lara indignado ante sus colegas, ante los ministros de Justicia y de Gobierno, y ante los medios que cubrían la noticia en el Congreso; entre ellos, el Espectador, el diario de don Guillermo Cano, quien desde ese día se convertiría en su compañero de lucha contra la corrupción de militares, políticos, empresarios y narcotraficantes. Luego continuó diciendo: “Ese argumento de la guerra sucia, señores ministros, que surgió en el cono sur para justificar oprobiosas dictaduras, es algo que no se

10 Esta cita, y las siguientes que se integran al presente texto, corresponden a fragmentos de intervenciones que desde 1979 y hasta 1984, realizó en el Congreso de la República Rodrigo Lara Bonilla. Su utilización pretende acercarnos al pensamiento de Lara Bonilla y no ha una aproximación cronológica exacta en que fueron pronunciadas.



puede argumentar en el país, donde decimos tener una democracia". "La guerra sucia que la aplique Pinochet, que la aplique el señor Videla, pero no un gobierno liberal en Colombia".

Por aquel tiempo, Turbay, enfurecido, acusaba a la Corte Suprema de Justicia de subversiva y bandolera, y a Lara lo sindicaba de ser cómplice del terrorismo, por sus denuncias contra la fuerza pública y el gobierno ante los asesinatos y agresiones contra integrantes del partido comunista, estudiantes y campesinos. Por eso, sus áulicos en el Congreso tildaron a Lara de falaz bandolero y lo retaron a presentar pruebas. Lara les contestó: "Este no es un debate contra las fuerzas armadas, es un debate en defensa de la Constitución y de las leyes, es un debate para defender los principios más claros del liberalismo, es un debate para prevenir sobre lo que puede sobrevenirle a Colombia". Luego, muy agitado, sacó de su portafolio fotografías y documentos y denunció los homicidios, masacres y demás violaciones cometidas por el ejército y los paramilitares en regiones como el Caquetá, Cauca y el Huila, donde además, acusó a la fuerza pública de asesinar a personas inocentes para luego hacerlas pasar como miembros de grupos guerrilleros. Con las pruebas en la mano y sin dejar de ver a la cara a los ministros continuo: "Joaquín Herrera, miembro del partido comunista, mutilado y asesinado por el ejército. Reinerio Gutiérrez, presidente de una Junta de Acción Comunal, asesinado por el ejército. Jorge Artunduaga, capturado y torturado en el puesto militar acusado de ser auxiliador

de la guerrilla. José Rubén Ortiz, de 16 años, torturado y asesinado en el batallón Juanambú. Gilberto Duque, de 70 años, capturado, golpeado y degollado por el ejército, y luego presentado como un subversivo muerto en combate. Ramón Cardona, el ejército lo golpeó brutalmente y luego le sacó los intestinos. Héctor Arboleda, un niño de 11 años que fue amarrado a un árbol, torturado y asesinado por el ejército, su hermano mayor se encuentra desaparecido." Así continuó durante horas exponiendo terribles masacres y miserables asesinatos, ante un escenario autista de la terrible realidad nacional.

Por último, Lara dirigió su mirada hacia los senadores liberales oficialistas y les dijo: "Si hay quienes creen que no es liberal la postura de quienes reclamamos el respeto por los derechos humanos, es porque mi partido desafortunadamente está viviendo un difícil momento de caos ideológico, de flaquezas morales que le han hecho perder el rumbo histórico".

Para Lara, ya era más que evidente que en el gobierno de Turbay, además de promoverse el paramilitarismo, se estaba favoreciendo a los emergentes capos y carteles de la cocaína. Ya él, desde el control político, y Guillermo Cano, como periodista, tenían en la mira a los dueños de inmensas y sospechosas fortunas, que emergían en sociedad como ilustres empresarios, generadores de empleo y bienestar social: Pablo Escobar, Carlos Lehder, los Ochoa, los Rodríguez Orejuela, entre otros. Desde entonces, el viejo Cano encargó a su agudo periodista, Fabio Castillo, para que se encargara de



“La democracia no se defiende violando los derechos humanos”

investigar cuanto pudiera de la vida de estos nuevos ricos, y en especial al dueño de la Hacienda Nápoles, el que la prensa llamaba el Robín Hood colombiano.

Horrorizados, fueron descubriendo que la clase política colombiana andaba de la mano en cocteles y reuniones, con su ordinario pero rico amante, el cual lo que le faltaba de honestidad y escrúpulos le sobraba en narco-dólares. Los narcotraficantes ya no sólo querían invertir su dinero financiando campañas; ahora, querían ser los protagonistas de la política, siendo elegidos como los nuevos padres de la patria. Para esto, comenzaron la infiltración directa del Estado colombiano por medio de dos estrategias: su acceso a representación política en el Congreso de la República, para garantizar una legislación favorable a sus intereses, y la captación de instituciones públicas claves para impulsar su negocio, por medio de un tenebroso clientelismo, al que tenían acceso gracias a sus financiamientos electorales y a sus representantes en el Parlamento.

La política se fue convirtiendo en el negocio perfecto. Lavaban el dinero sucio patrocinando campañas electorales, y luego recibían el doble o triple de lo invertido en contratos estatales, que no tenían problema de ingresar al sistema financiero. Además, bancos y empresas se pusieron a sus pies con tal de poder recibir

parte de las ganancias, que bien sabían, tenían un origen oscuro y peligroso. El fútbol, la televisión, los modelos, las obras de caridad, en fin, en todo querían meter sus sucias uñas con tal de tener al país aletargado con los lujos que da el dinero fácil. Lara Bonilla por eso advertía: “Mientras no se controle el lavado de activos, la lucha contra el narcotráfico no va a ir a parar a ningún lado” a la vez que, con papeles en mano, arremetía con sus denuncias que implicaban a partidos políticos, a grupos financieros, y a los clubes deportivos como el América, el Millonarios, el Santa Fe, el Nacional, entre otros.

Para esta época, los mafiosos ya habían comprado a buena parte de los miembros de la justicia, y a los pocos jueces que se atrevían a investigarlos, los habían comenzado a asesinar; habían infiltrado al ejército, a los organismos de seguridad y a la policía; y por esta vía, empezaron a controlar a los grupos paramilitares por medio de la financiación y posterior organización de unas poderosas estructuras que trabajaban como el ala armada de su proyecto político.

Fue así como, en 1981, y en una guerra a muerte declarada al M-19 por el secuestro de Nieves Ochoa, dieron a conocer a la opinión pública el MAS (Muerte a Secuestradores). Organización paramilitar, financiada por los grandes capos del narcotráfico, y que, en poco tiempo, reclutó muchísimos admiradores y nuevos financiadores entre ricos hacendados, empresarios y transnacionales. El MAS, al unísono con el gobierno, vendía su proyecto de terror y muerte con la excusa de



la política de seguridad: “Colombia necesita seguridad para atraer nuevamente la inversión privada y devolverle la confianza al país” dijeron entre aplausos llegados de diversas partes de Colombia, mientras su ejército de mercenarios crecía vertiginosamente y realizaba peligrosas alianzas con otros grupos de sicarios, para cometer masacres, usurpar tierras y asesinar a todo aquel que oliera a izquierda y comunismo.

En 1980, los 6 hermanos Castaño y tres primos organizaron una banda paramilitar para vengar la muerte de su padre, en manos de las Farc. Meses después, y bajo el amparo que les daba la legislación vigente, se volvieron informantes del ejército en el Batallón Bomboná, de Puerto Berrío, desde donde preparaban operativos conjuntos.

En 1982, Carlos Castaño tenía 16 años, edad en la que cometió su primer homicidio de los miles que seguirían en su sangrienta historia. Por el mismo año, se conformaría la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, ACDEGAM, quienes promoverían el desarrollo de más grupos de autodefensas amparados en la ley. Rápidamente, estos ejércitos privados crecieron como la espuma y no tardarían en aparecer los narcos. En 1984 comenzaron los acercamientos de los Castaño con Pablo Escobar, pero sería Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, quien captara el aparato militar creado en el Magdalena Medio y lograra colocarlo a su servicio para, en conjunto con el Ejército y miembros de organismos de seguridad

del Estado, iniciar su cruzada anticomunista perpetuando la masacre de miles de integrantes de la Unión Patriótica.

Por entonces, el Mexicano, en convenio con altos mandos del Ejército, organizó un curso con el asesino profesional israelí, Yair Klein, quien iniciaba sus clases con su frase: “No temas que te llamen mercenario, si eres mercenario de un Estado”. Sin embargo, tras narcos y paramilitares siempre estuvieron poderosos políticos e influyentes empresarios colombianos como “El Grupo de los Seis”, que Carlos Castaño describía, en el libro “Mi Confesión”, como “los que ordenaron grandes magnicidios y masacres en Colombia y pertenecían a la más alta sociedad colombiana, la crema y nata”. Por esto, su hermano Fidel le dijo en alguna ocasión: “Yo no quiero ser más un idiota útil del sistema, de la clase política y económica corrupta del país”¹¹.

De otro lado, los narcos se aprovecharon de la miseria y el abandono estatal histórico, acentuado con el naciente neoliberalismo, para crear una base social afectada a sus propósitos tanto políticos como criminales. Por una parte, pretendieron reemplazar al Estado que abandonaba sus funciones sociales y montaron comedores comunitarios, construyeron polideportivos, edificaron viviendas con programas como “Medellín sin tugurios” -donde la meta de Pablo Escobar era financiar diez

11 Mauricio Aranguren Molina. *Mi Confesión*. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 2001, pág. 160.



mil casas para los sectores más pobres de la ciudad-, entregaban mercados y se hicieron famosas las apariciones de Carlos Lehder repartiendo millones de pesos en los barrios pobres de diversas partes del país.

Paralelamente, su brazo armado empezaba a prestar servicios de seguridad en las zonas rurales y barrios periféricos, imponía las leyes, construía carreteras y comenzaba a desarrollar una contra-reforma agraria por medio del desplazamiento forzado que causó su máquina de terror y muerte entre los campesinos, y la consecuente concentración de tierras y de riquezas entre los narcos, los hacendados y los empresarios que los financiaban.

Fue por entonces cuando un joven primo de Escobar, José Obdulio Gaviria¹², inquieto por la política, acompañaba a Pablo a sus diversas obras sociales. Y visionario y agudo consejero como era, y es en la actualidad, le sugirió al capo: “Ve, Pablo, vos por qué no te metés en la política, si te quiere tanto la gente”¹³. Pablo se sintió feliz con las adulaciones de su ambicioso y acomodado primo, y ese día comenzó a planificarlo todo. Se proyectó en el Congreso y hasta en la Presidencia de la República; y mientras esbozaba su gorrina sonrisa, imaginaba un gran salón donde su foto luciría para la posteridad al lado de la de Bolívar.

La miseria también fue aprovechada por la mafia para alimentar sus bandas irregulares urbanas. De esta forma, aquellos niños y jóvenes ignorados y ajenos a cualquier política pública, serían su carne de cañón para la guerra sucia que habían

declarado clandestinamente desde entonces. La educación que no les brindó el Estado se la darían los narcos, y para esto, trajeron al maestro israelí, Isaac Guttman Esternberggef, quien a falta de pupitres, tizas y tablero, les traía algo más emocionante: motocicletas y ametralladoras.

Nacía la terrible escuela de sicarios de la motocicleta, donde este judío entrenó a niños pobres de Medellín, por más de siete años, en el arte de asesinar al prójimo, con el conocimiento y absoluta complicidad de las autoridades. El examen final, consistía en un trabajo de campo donde el alumno debería asesinar a un blanco al azar; la muerte segura y la rápida huida garantizaban su entrada al mundo del sicariato. Niños graduados de esta escuela serían los autores materiales de los asesinatos de candidatos presidenciales, periodistas, jueces, policías e inclusive, del mismo Isaac Guttman, quien se volvió un

12 En diciembre de 2007 el diario El Espectador publicó un artículo denominado: “Lazos familiares” donde denunció la relación entre Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, y el pago del sicario que asesinó a don Guillermo Cano. Esta publicación motivó la renuncia del entonces embajador en Reino Unido, Carlos Medellín, casado con una hija del asesinado periodista. Por la misma época, el diario estadounidense, El Nuevo Herald, publicó un reportaje donde relacionan al presidente Uribe con la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, hecho que motivó la renuncia del hijo de Lara, Rodrigo Lara Restrepo, por entonces zar anticorrupción. Además, se sabe que otros dos hermanos de José Obdulio, Luis Mario y Jorge, fueron procesados por narcotráfico en los Estados Unidos y ahora trabajan en el gobierno.

13 Roberto Escobar Gaviria. Mi Hermano Pablo. Bogotá: Quintero Editores, 2000, pág. 155.



testigo incómodo para políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública que habían solicitado sus servicios.

Lara Bonilla había advertido en múltiples ocasiones, sobre lo peligrosa que se torna una sociedad donde no hay igualdad de oportunidades para la gran mayoría de los ciudadanos, y más una sociedad con débiles instituciones y asediada por las mafias del narcotráfico. Por eso, su férrea oposición a la imposición del neoliberalismo en Colombia, desde que a finales de los setenta se empezó a hablar del tema ante la crisis económica. En todos los escenarios repetía hasta el cansancio: “no se acabará la delincuencia mientras subsistan las oprobiosas condiciones sociales y económicas en que se encuentran millones de compatriotas (...) niños que desde el propio vientre de madres desnutridas, antes de nacer ya están condenados a la miseria”.

Un ministro de justicia peligroso

Corría el año de 1982 y el conservador Belisario Betancur era elegido como presidente de los colombianos, después de derrotar al ex presidente Alfonso López Michelsen, candidato del partido liberal, ahora turbayista. En esta misma contienda electoral, Luis Carlos Galán se presentaría como candidato presidencial del Nuevo Liberalismo y dividiría el voto liberal; hecho que, sumado al desprestigio de la administración de Turbay, allanaría el camino para la llegada del progresista gobierno de Betancur.

Rodrigo Lara, que se había consagrado como congresista estrella en la pasada legislatura, ese mismo año sería reelegido, por la lista que encabezaría a nombre del Nuevo Liberalismo. Y de inmediato comenzó la tarea de conjurar con la acción política los oscuros hechos acontecidos durante el desastroso cuatrienio de Turbay.

Pronto empezó a promover una amnistía para que las guerrillas dejaran el camino de las armas, por el de la política. Guerrillas, a quienes mandaba el mensaje: “su lucha es un gasto inútil de vidas, sangre que Colombia debe procurar evitar (...) Si quieren derrotar a los partidos tradicionales, ahí están las reglas de la democracia”.

También empezó a coincidir con el Presidente Betancur en la necesidad de un proceso de paz profundo y que atacara las causas estructurales del conflicto. Habló en sus debates de reestructurar la justicia, ahogada en una rampante impunidad y de realizar un gran programa de Estado para revertir las paupérrimas condiciones de vida en que el sistema político y económico había sumido a la población colombiana. También fue quien planteó que sin salir de la asfixia política que heredamos del Frente Nacional, no habría posibilidad de un proceso serio de negociación con las guerrillas y por esto, había que abrirles espacios electorales. “Yo no le tengo miedo a que la democracia colombiana se abra, a que nos enseñemos a que existan fuerzas distintas a los partidos tradicionales en el juego político. Tengámosle temor si, a la subversión”.





Por otro lado, continuó sus corajudos debates contra los que ya lo consideraban un enemigo a muerte: funcionarios públicos corruptos, miembros corrompidos del ejército, criminales agentes de organismos de seguridad del Estado, brutales narcotraficantes, empresarios deshonestos y asesinos jefes paramilitares. Debates que asumió con la conciencia de que, esta vez, el crimen que tanto criticaba se había instalado en el Congreso, y en estos años había ganado poder económico, político y militar. Junto a Luis Carlos Galán denunciaron al finalizado gobierno de Turbay de haber promovido la legalización de los dineros de las mafias, con medidas como su amnistía tributaria; además, también señalaron al turbayismo de haber permitido la entrada de dineros y personajes del narcotráfico en sus pasadas campañas políticas.

En este escenario se produce el escándalo del Hotel Intercontinental, donde se recrimina al ex presidente López, como candidato presidencial, y a su jefe de campaña, Ernesto Samper, de haber recibido de los Ochoa, de Escobar, de Ledher y de Rodríguez Gacha, la suma de 25 millones de pesos. Escándalo del cual, un tribunal de ética del partido Liberal los eximiría; porque, a pesar de que el dinero entró a las arcas del partido, esto sucedió a espaldas de los acusados.

Pero lo que más indignó a Lara como Senador y a Galán como jefe del Nuevo Liberalismo, fue que en las mismas elecciones la lista en que figuraba Pablo Escobar ganó un cupo por Antioquia en el Congreso de la República. Lista avalada por el sector del partido Liberal de Santofimio, con turbayistas entre los que figuraban Jairo Ortega, Ernesto Lucena y William Vélez. Este último alababa ante los medios de comunicación a Pablo Escobar, tildándolo de “noble y brillante figura del Partido Liberal”¹⁴.

El capo llega al Congreso supliendo al titular de la lista, Jairo Ortega, e inmediatamente se hace beneficiario de la inmunidad parlamentaria. Como lo explica Fabio Castillo: “es decir que no podía ser detenido sino en caso de flagrancia en la comisión de un delito, o 20 días antes y 40 después de las sesiones del congreso, que se prolongan por medio año”. Por esta vía, Escobar obtuvo una visa privilegiada que le permitía entrar a los Estados Unidos, visa solicitada directamente por la cancillería colombiana. Y por esta misma época, Carlos Ledher formó su Movimiento Latino Nacional, inspirado en ideologías fascistas y declarado antiimperialista, con

14 Revista Semana, columna de Daniel Coronel, 22 de mayo de 2005.



el que pretendió llegar a ocupar un escaño en el Senado.

El Senador Lara Bonilla no aguantó más, y citó a un debate para aclararle al país a que clase de personajes se estaba instalando en el Congreso con pactos como los hechos por Santofimio, Ortega y Lucena. Un debate sobre el origen de las fortunas de sujetos como Pablo Escobar Gaviria, que ahora fungía como honorable congresista de la República.

En medio de investigaciones para la controversial sesión parlamentaria, El Presidente de la República sorprendería a Galán y a Lara, con el ofrecimiento del Ministerio de Justicia para el Nuevo Liberalismo. Ofrecimiento que extendía condicionado a que su candidato fuera el senador que había estado promoviendo en sus intervenciones los temas neurálgicos de esa cartera: Rodrigo Lara Bonilla. El Nuevo Liberalismo, con Lara ahora a la cabeza, aceptaría el reto.

No habían pasado muchos días al frente del ministerio, cuando Lara Bonilla tuvo que asistir al Congreso para adelantar el debate de los dineros calientes, que él, como senador, había propuesto. Pero lo que no esperaba era que la mafia le tenía guardada una desagradable sorpresa. En medio de la sesión, el honorable congresista Jairo Ortega acusó al Ministro de tener relaciones con el narcotráfico y mostró, con una sonrisa tartufa, un cheque por un millón de pesos suscrito por Evaristo Porras, conocido narcotraficante, a favor de Rodrigo Lara. Y también anunció, a grito herido, tener en su poder un escandaloso vídeo del Ministro con el capo.

Lara no podía creer que a él, que había sido el único capaz de luchar contra el narcotráfico, se le montara un burdo artificio, precisamente por quienes le vendieron un pedazo de la democracia a la mafia. Y descompuesto por la ira, increpó a su infame acusador: “Explíqueme señor Ortega, cómo es que su suplente, Pablo Escobar, posee misteriosamente 11 aviones, 2 helicópteros, 3 hangares en el aeropuerto de Medellín, ha creado un grupo de miles de sicarios llamado el MAS y realiza millonarias donaciones en obras benéficas, cuando su único sustento legal para justificar su fortuna es un almacén de bicicletas”. Ortega, mirando de reojo a Escobar y a Santofimio que se hallaban juntos en aquel recinto, contrató diciendo: “No vinimos aquí a hablar del honorable empresario Escobar, miembro ilustre de nuestro grupo político; sino a que, Usted explique, señor Ministro, la procedencia de este cheque”.

Lara, confundido e indignado, sólo atinó a responder: “Ustedes no me perdonan, y ni me vayan a perdonar, las denuncias que con tanta altivez y claridad he planteado durante toda mi vida pública (...) Pero, esto si es inaudito, es inadmisibles que terminen los pájaros tirándole a las escopetas”. La estrategia de la mafia había dado sus frutos, todo el país hablaba del escándalo de un Ministro hipócrita que acusaba a diestra y siniestra mientras recibía favores del narcotráfico; y hasta Galán, su compañero y amigo, anunció públicamente una investigación rigurosa al interior del Nuevo Liberalismo sobre los hechos.





A pesar de las presiones, el presidente Betancur lo mantuvo en el cargo. Y Lara, ofendido en lo más profundo de su dignidad, se prometió a sí mismo no descansar hasta acabar con toda la maldita organización del narcotráfico.

Por su parte, don Guillermo Cano, no sólo no lo abandonó en ese momento, sino que, siguiendo una corazonada, buscó compulsivamente en los archivos de las páginas judiciales del Espectador alguna información sobre Escobar. Hasta que, unos días después, halló una reseña de 1976, donde se informaba de la captura de dos narcotraficantes en Ipiales, Nariño: Pablo Escobar Gaviria y su primo, Gustavo Gaviria. Captura realizada cuando regresaban del Ecuador, en un vehículo cuya llanta de repuesto se encontraba repleta de cocaína. La foto de Pablo Escobar, reseñado por la justicia en 1976, sería ampliada y publicada al otro día en primera página, y con una editorial en respaldo al Ministro.

Guillermo Cano, en uno de sus escritos, posteriormente advertiría al país: “El narcotráfico nos ha corrompido, el contrabando nos ha corrompido, la compra y venta de las influencias nos han corrompido, la mordida nos ha corrompido, el afán del dinero fácil nos ha corrompido, el alquiler del voto nos ha corrompido”. Y también señalaría el inicio de lo que sería la guerra del Estado colombiano contra la infiltración del hampa en las instituciones: “Estamos presenciando el crecimiento de una generación sin fronteras morales, sin valores ni principios éticos. Esto es lo que combate el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla”.

A partir de entonces las cosas serían a otro precio. El Capo es llamado a juicio por la muerte de los detectives del DAS que en 1976 habían efectuado su captura; sin embargo, burló la justicia invocando la inmunidad parlamentaria. El gobierno norteamericano le retiró la visa. Santofimio agachó la cabeza, dijo haber sido engañado en su buena fe y lo expulsó de su movimiento. Los hipopótamos, cocodrilos, rinocerontes y demás animales exóticos que tenía en la Hacienda Nápoles, le fueron decomisados por haber entrado de contrabando; pero pronto, los recuperaría a través de testaferros. Y, en un duro debate en el Congreso de la República, el Ministro de Justicia logró que se le levantara la inmunidad parlamentaria, cuando con toda la firmeza afirmó: “¿Por qué, siendo delito traficar con estupefacientes, los más conocidos capos del país hacen alarde de su dinero e influencias, sin que nadie los arreste?(...) Esto es inadmisibile, más cuando miles



de millones reciben los narcos mensualmente y lo usan para sobornar, asesinar y dañar a la sociedad”.

Lara se convierte en el Ministro más notable y a la vez, en la persona más amenazada del país. Y aún así, continuó dándole golpes a las mafias. Desempolvó cientos de procesos contra narcotraficantes, empresarios y políticos. Ante su arremetida, varios narcos, como Carlos Lehder, huyeron del país. Y Escobar renunció iracundo a la política y se fue a la clandestinidad a planear su sangrienta venganza.

En esos momentos, Lara, Cano y el entonces director de antinarcóticos de la policía, el Coronel Ramírez, se preguntaban cómo podía tener Escobar 11 aviones y 3 helicópteros, con sus respectivas matrículas; pistas de aviación privadas en sus haciendas, con los permisos en regla; y transportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos, y hasta animales enormes como elefantes e hipopótamos desde el África, sin ser detectado por ningún operativo.

Y la respuesta era evidente, esto sería imposible sin el incondicional servicio de una entidad que debía ser cómplice de la mafia: la Dirección de la Aeronáutica Civil. Y efectivamente encontraron que entre 1980 y 1982 esta institución expidió cientos de licencias de vuelo, matrículas de avionetas y helicópteros y permisos para la construcción de aeropuertos privados en las fincas de los narcotraficantes. Y esto sucedió en tiempo record, es más, en este sólo período se triplicaron los permisos, matrículas y licencias concedidos en toda la historia de la entidad.

De inmediato, el Ministro revocó parte de los trámites otorgados a la mafia, con base en un informe del Coronel Ramírez, que reseñaba a 30 grandes capos del narcotráfico. Al respecto, la Revista Semana, señalaría: “La investigación del coronel Ramírez Gómez, dio base para que el ministro de Justicia Lara Bonilla, por primera vez en la historia de esa cartera, pese a que las herramientas legales estaban consagradas desde 1978, paralizara 150 avionetas y helicópteros que eran destinados al contrabando de cocaína; negara permisos para el funcionamiento a empresas aéreas que figuraban como de fumigación y señalara públicamente la presencia de dineros calientes en el fútbol, los toros y diversos grupos políticos en todo el país.¹⁵”

Lara continuó decidido a exterminar hasta el último rastro del narcotráfico en Colombia. Ya, para esa época, empezó a sospechar que la Aeronáutica más que infiltrada, parecía ser una cuota del clientelismo que Turbay había cedido a la mafia. Su antiguo director, Alvaro Uribe Vélez¹⁶

15 Revista Semana, “Quién mató al Coronel Ramírez” lunes 13 de abril de 1987.

16 En su libro *Amando a Pablo, Odiando a Escobar*, Virginia Vallejo asegura que Pablo llamaba a Uribe “ese muchacho bendito”. Vallejo afirma que el jefe del Cártel de Medellín, adoraba a Álvaro Uribe porque éste, en su etapa de director de Aeronáutica Civil (1980-1982) “concedió docenas de licencias para pistas de aterrizaje y centenares para los aviones y helicópteros sobre los que se construyó toda la infraestructura del narcotráfico”. Agrega Virginia Vallejo: “Pablo solía decir: ‘Si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a los gringos?...’”



había salido en medio de escándalos, para ser nombrado alcalde de Medellín. Y como primer mandatario de la capital de Antioquia, acompañaba a Escobar y a José Obdulio a la entrega de las casas del programa “Medellín sin Tugurios”. En su lugar, había dejado a su mano derecha, César Villegas, alias el “Bandi”, quien años después, sería judicializado por narcotráfico.

Pero sus sospechas las terminaría corroborando cuando se realizó el mayor golpe efectuado al narcotráfico en toda la historia de Colombia y del mundo: el allanamiento del mega-complejo de narcóticos, que la mafia, sarcásticamente había denominado: Tranquilandia.

Faltándole días para salir del gobierno, Turbay declaró de libre importación y eximió de impuestos controvertidos insumos como el éter, uno de los precursores en el refinamiento de la cocaína. Cuando en diciembre de 1983 los hermanos Ochoa Vásquez, Pablo Escobar y Carlos Lehder embarcaban desde Chicago 73 barriles de éter con destino a Colombia, no llegaron a imaginar que encaletados entre estos insumos, agentes de la DEA habían implantado, en coordinación con la Unidad Antinarcóticos colombiana, unos sofisticados aparatos de rastreo. Fue así como el 8 de marzo de 1984, el Coronel Ramírez, al mando de la Unidad Antinarcóticos y el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, después de una operación realizada en la más absoluta discreción -para evitar que se filtrara por los funcionarios que la mafia tenía trabajando en la policía y en el alto gobierno- allanaron en

los llanos del Yarí el complejo de narcóticos denominado Tranquilandia.

Este mega-centro de producción de cocaína contaba con 8 pistas de aterrizaje, todas ellas camufladas por enormes árboles plantados sobre recipientes con ruedas, para poderlas descubrir fácilmente, y equipadas de modernos equipos de aeronavegación nocturna. 14 laboratorios de la más alta tecnología e intercomunicados entre sí, de los cuales salían 20 toneladas de cocaína a la semana. Un enorme casino para los pilotos y profesionales vinculados a los laboratorios, con toda clase de lujos y comodidades. Un arsenal que incluía ametralladoras Mini-uzi, R-15, fusiles Galil y todo tipo de pistolas automáticas. Además, en Tranquilandia se decomisaron numerosas aeronaves, entre ellas un helicóptero¹⁷ perteneciente al padre de Álvaro Uribe Vélez, el ex director de la Aeronáutica que había beneficiado tanto a los narcos.

La venganza de la mafia

Lara llegó con sentimientos encontrados después del operativo de Tranquilandia. Por un lado, lo embargaba una sensación de victoria ante semejante golpe asestado al narcotráfico; pero por otra

17 El helicóptero decomisado fue el Hughes 500, modelo 369D, de matrícula HK 2704-X. Este aparato llegó a Colombia el 27 de octubre de 1981, importando por Alberto Uribe Sierra, quien demoró tan sólo cuatro horas en obtener su licencia de operación y su matrícula, gracias a la intervención del director de la Aeronáutica, su hijo.



parte, el operativo había descubierto ante sus ojos el enorme poder que tenía la mafia. Mafia de la cual Escobar era tan sólo una ficha más, ya que detrás de su estrambótica imagen se camuflaban otros poderosos intereses.

El Ministro por primera vez sintió un miedo paralizante. De lo hallado en Tranquilandia, los enormes laboratorios, las modernas pistas y la cocaína destruida eran lo de menos; y la ira de Escobar, Leher, los Ochoa o el Mexicano pasó a un segundo plano. Y esto, porque él sabía que la mafia o la subversión nunca podrían acabar con un Estado. Su entrada en pánico estaba infundada en un cuaderno, encontrado en el complejo de narcóticos, una libreta que daba cuenta de contactos, colaboradores y de toda la red política, militar y empresarial que estaba detrás de los carteles. Lara entendió que contrario a lo que él había pensado hasta el momento, la mafia no quería acabar con el Estado, la mafia quería ser el Estado.

Desde ahí, el ministro no volvió a ser el mismo. Perdió su buen humor, desconfiaba de todos y de todo, y fue cuando no pudo más y confeso por primera vez que tenía miedo. A su hermana Cecilia¹⁸, le contó detalles de la operación del Yará, pero no quiso profundizar para no comprometerla, con la bomba que, él sabía, podía hacer estallar al país. Sin embargo, si le advirtió que si algo le llegaba a pasar, los culpables serían los que más tenían que perder con el allanamiento, la clase política que había captado la mafia. Entre ellos, los dueños del helicóptero que se decomisó en Tranquilandia, advertencia que igualmente le

Lara entendió que contrario a lo que él había pensado hasta el momento, la mafia no quería acabar con el Estado, la mafia quería ser el Estado.

hizo al coordinador de la operación, el Coronel Jaime Ramírez Gómez.

Y, como si adivinara que sus días estaban contados, se apresuró a adelantar su estocada final a las mafias: un banco de datos sobre los dineros calientes en la política, en las empresas y en el sistema financiero. Un sistema de información para controlar el narcotráfico, que como el anunció ante el Congreso: “va a permitir saber con claridad a los colombianos, quién es quién en el país. Descifrar, muchas cosas confusas (...) e impedir que los narcos sometan a la sociedad a sus tenebrosos designios”

Sin embargo, el Presidente Betancur le pidió la renuncia, diciéndole que por su seguridad era mejor que se fuera del país; y le ofreció la embajada de Alemania, a la cual debería partir el 20 de mayo.

Pero tanto la embajada en Alemania como la base de datos de los dineros calientes se frustrarían el 30 de abril de

18 En declaraciones publicadas por el Nuevo Herald (9 de diciembre de 2007), la hermana de Rodrigo Lara Bonilla, Gloria Lara, afirma que su hermano, días antes de su asesinato, le comentó que el narcotráfico había infiltrado todos los sectores de la sociedad, y como muestra de esa infiltración le mencionó a Alvaro Uribe Vélez y a su padre Alberto Uribe Sierra.



1984. Ese día, a la altura de la calle 127, una motocicleta roja apareció de la nada y dos muchachos de la escuela de sicarios de Isaac Guttman alcanzaron el Mercedes blanco de Rodrigo Lara, y le descargaron las 25 balas calibre 45 de la subametralladora Ingram, que terminaron con la vida del Ministro. Rodrigo Lara Bonilla muy seguramente el día de su asesinato debió ver con terror y angustia, que aquel niño que se acercaba a su ventana para acribillarlo, escasamente superaba los catorce años. Y era, antes que un sicario, una víctima más de aquel infame país que el tanto quiso cambiar.

A partir del asesinato de Lara, el presidente Betancur aplicó la extradición y desató la ira de los narcos y la época del narco-terrorismo. A lo largo de la segunda mitad de los ochenta, los narcos plagaron de bombas las calles de las principales

ciudades; volaron centros comerciales; hicieron explotar un avión de Avianca en pleno vuelo; dinamitaron sedes de medios de comunicación; destruyeron el edificio del Das; asesinaron a centenares de jueces, policías y periodistas honestos; mataron a Don Guillermo Cano, al procurador Mauro Hoyos y al Coronel Ramírez.

Y por último, y ya fusionados con el brazo armado que ellos mismos habían ayudado a conformar, asesinaron a los mejores hombres de la política colombiana. Ya que, sin importar que fueran de izquierda como Pizarro, de derecha como Álvaro Gómez o de centro como Galán, su ética pública era obstáculo que había que eliminar, para la instalación de un Estado mafioso que controlara las instituciones del gobierno, infiltrara el Congreso de la República, intimidara y captara a jueces y magistrados y silenciara a la prensa¹⁹.

 ✕


19 Carlos Castaño, en una carta publicada por la revista *Semana*, dijo que: “fue el coronel González quien asesinó a Álvaro Gómez. Coronel que compartía el proyecto de las mafias y sectores políticos de convertir a Colombia en un “narco Estado” y un refugio internacional para criminales”. Menciona el jefe paramilitar que “Este coronel encabeza un demencial proyecto desde hace varios años: lo denominan ‘Plan Birmania’”. Pretenden involucrar la mayor cantidad posible de personas y miembros de instituciones del Estado en el narcotráfico (...) y se implantaría un régimen narco en Colombia”.

HISTORIA DE TRES CIUDADES

Una radiografía de la violencia en Bogotá en los años ochenta y noventa

Absalón Jiménez Becerra¹

El presente artículo busca reconstruir, en términos académicos, y desde la perspectiva que como investigador social bogotano me concierne, una radiografía de la violencia en los ochenta y noventa, en momentos en los que “el joven”, como sujeto social, entra de nuevo al escenario de lo público y de la realidad nacional, ya no como parte del “movimiento estudiantil colombiano”,² que tuvo su época dorada durante la coyuntura política del Frente Nacional (1958-1974), sino como víctima y victimario de esta violencia que a finales del siglo XX condujo al país a una de las más profundas crisis institucionales que conllevaron

1 Profesor Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

2 En las últimas décadas del siglo XX y primera del XXI, el joven ha hecho presencia en el escenario de lo público en tres ocasiones y por medio de tres puertas de entrada. La primera, a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, por la puerta de lo político, particularmente, durante el periodo del Frente Nacional (1958-1974), coyuntura en la que se inscribe la época dorada del movimiento estudiantil colombiano. La segunda, se da en los años ochenta, por la puerta de la violencia, cuando el joven es visto como principal víctima y victimario de la violencia urbana en Colombia. Y la tercera, se da en la segunda mitad de los años noventa y primera década del siglo XXI, por la puerta de lo cultural, momento en que el joven se redimensiona políticamente desde su cuerpo y desde la intimidad y privacidad de su hogar, expresándose esta re-dimensión en las culturas juveniles y las subculturas urbanas.



una situación caótica, todo esto producto de la irrupción del narcotráfico, los carteles de la droga, la conformación de grupos armados financiados por ganaderos en el Magdalena Medio en contra del asedio de la guerrilla, y la consolidación final de las autodefensas y, sumado a ello, la manera como la economía coquera había permeado la lucha de la izquierda armada y la economía del gramaje de las Farc.

Sin lugar a dudas, Bogotá se ha consolidado a la vez como testigo y como uno de los principales escenarios de lucha contra el narcotráfico. Por lo demás, en la ciudad capital se han tomado las principales decisiones de tipo político, económico y social, que afectan al resto del país, así como también las decisiones de estrategia militar, seguridad institucional del Estado y de lucha contra el narcotráfico.

En mis recuerdos de infancia, aún se encuentran presentes las imágenes del noticiero en torno al asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984; luego, el asesinato de Guillermo Cano, director del diario El Espectador, el 17 de septiembre de 1986, como también la noche en la que, por medio de una declaración televisada de guerra, el presidente Virgilio Barco, declaró enemigo público del Estado al narcotráfico, el 23 de agosto de 1989, después de la muerte de tres candidatos presidenciales. En mis recuerdos de infancia y juventud, la memoria individual se entremezcla con la memoria social y colectiva y, también, con la memoria histórica del país. La crisis suscitada por la intensidad de la violencia de los años ochenta tuvo como uno de

sus principales puntos de salida la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, en 1990, y la elaboración final de la Constitución de 1991, la cual se nos presentó a los jóvenes de la época como un acuerdo de paz entre el Estado y los actores armados.

Luego, como estudiante universitario, recuerdo que, sobre los anteriores temas, brotó mucha tinta, se publicaron excelentes artículos de prensa, en revistas especializadas y libros, además de que muchos académicos, al dominar estas temáticas, estas bibliografías y un grupo importante de autores, se consolidaron como intelectuales nacionales. En mi caso particular, como un joven que vivió esta coyuntura en el sur de la ciudad de Bogotá, me impactó cómo la crisis institucional y de guerra contra los actores armados afectaba al joven, el cual fue visto como un sujeto funcional para la violencia ya fuese como sicario, como miembro de las milicias urbanas de la guerrilla o como miembro de base de las autodefensas. Los jóvenes de las zonas marginales de las grandes ciudades fuimos vistos, además, como delincuentes en potencia, como fortín del sicariato de los carteles de la droga, como posibles miembros de bandas delincuenciales o, a lo sumo, como una expresión de los denominados “parches” de los barrios periféricos de las grandes ciudades.

Así, el presente artículo recoge elementos importantes de la memoria individual y colectiva de quienes pasamos de la infancia a la juventud en esa coyuntura histórica y, en el caso particular, recoge tal vez mi primera experiencia investigativa, la cual rea-





licé a mediados de los años noventa bajo la tutoría de mi maestro, Darío Betancourt Echeverry, uno de los especialistas del tema de la violencia en Colombia (q.e.p.d.). Sea esta la ocasión para recordar al maestro Betancourt justo diez años después de su desaparición y muerte.³

De tal manera, mediante el presente texto, quiero abordar el tema de la violencia urbana en Bogotá, en los años ochenta y noventa, en momentos en que, producto de esta crisis institucional, el joven de nuestra ciudad entra al escenario público por la puerta poco grata de la violencia y, también, mostrar cómo nuestra ciudad, por encima de Medellín y Cali, a mediados de los años noventa, es catalogada como una de las más violentas del país y una de las más peligrosas del mundo. Sin duda, la lucha contra el narcotráfico, al desarrollarse en la ciudad, fragmentó y debilitó, en términos institucionales, la presencia del Estado en las zonas periféricas, siendo el joven el principal afectado. Aunque no existen estudios de caso específicos o cifras que lo comprueben, podemos decir que, en determinados barrios de las zonas marginales, la violencia urbana de los años ochenta y primera mitad de los no-

venta se llevó a la mitad de la generación de jóvenes de algunos barrios populares de sur de Bogotá.

El discurso de la violencia urbana

La violencia urbana, como categoría de análisis y como discurso disciplinario de investigación, tomó cuerpo en la Comisión de Estudio para la Violencia de la Presidencia de Virgilio Barco (1986-1990)⁴, cuyo principal especialista fue Gonzalo Sánchez Gómez, en ese entonces profesor de la Universidad Nacional de Colombia y uno de los padres sobre los estudios de la violencia en Colombia, quien, a la vez, se convirtió en uno de los principales gestores del tema de la violencia urbana en la segunda mitad de los años ochenta. A la luz o a la sombra de este estudio, en las tres principales ciudades colombianas surgió una serie de destacados intelectuales que trabajaron este tema desde una perspectiva local. De tal manera, tomaron relevancia académicos de la talla de Alonso Salazar, en Medellín; de Adolfo

3 El presente artículo es una síntesis de esta primera experiencia investigativa, desarrollada bajo la tutoría de Darío Betancourt. Este trabajo, que se presentó en su momento para optar el título de licenciatura en Ciencias Sociales, se encuentra en el Centro de Documentación del Departamento de Ciencias Sociales de la UPN. Consultar: Absalón Jiménez Becerra. La violencia urbana en Colombia. Ciudad Bolívar, marginalidad y violencia, 1990-1994. Bogotá: Departamento de Ciencias Sociales, UPN, julio de 1995.

4 Comisión de Estudios sobre la Violencia (Gonzalo Sánchez G., coordinador de la Comisión). Colombia: violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1987.



León Atehortúa, en Cali y, para el caso de Bogotá, Guillermo Segovia Mora. También en Bogotá, desde una perspectiva demasiado academicista, para mi gusto, se pueden ubicar las reflexiones del IEPRI de la Universidad Nacional, de Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán⁵.

El fenómeno de la violencia, propio de las ciudades colombianas, en el cual el índice de muertes violentas se desbordó de manera incontrolable para los aparatos estatales, fue visto por este grupo de intelectuales en la segunda mitad de la década de los años ochenta desde un punto de vista crítico. Las problemáticas propias del urbanismo, entre ellas, la de la violencia urbana, no sólo representaban el producto del devenir de la historia política y social del país, sino que también eran el resultado de los cambios de tipo espacial que iban tomados de la mano del modelo de desarrollo capitalista en el que se había embarcado Colombia a lo largo del siglo XX.

La década del setenta en Colombia fue de vital importancia en el desarrollo de lo que es la historia de la vida urbana en el país. En este periodo, el peso de la población urbana terminó siendo hegemónico en relación con el modelo de desarrollo rural que nos caracterizó en la primera mitad del siglo XX. Y la situación y problemática social de los nuevos habitantes urbanos se convirtió en sueño y frustración para muchos, pero también en amor y perversión, desigualdad y oportunidad. La ciudad, en los años setenta, evidenciaba un crecimiento acelerado, sin ningún tipo de planificación estatal, acompañado de un nuevo tipo de población que inmi-

gró a las grandes ciudades. La cultura de lo urbano se impuso de una vez por todas en el marco del desarrollo social, situación en la que el Estado enfrentaría una compleja problemática debido a su falta de planeación en las ciudades, en la que el inmigrante llegaba lleno de expectativas en búsqueda de oportunidades y mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida, sufriendo, por último, un choque en la misma construcción de este nuevo proyecto, en el que imperó la desconfianza, la falta de solidaridad y el individualismo entre los habitantes de la ciudad. En este proceso de “hibridación cultural”, entre lo tradicional y lo moderno, los nuevos pobladores de las urbes tuvieron que adaptarse, originándose con el tiempo un nuevo tipo de cultura urbana, que tomó cuerpo en la generación de jóvenes de los años ochenta y noventa. Esta generación sería la principal afectada por el fenómeno de la violencia y la criminalidad, situaciones que comenzarían a caracterizar parte de la cotidianidad de las grandes ciudades colombianas, desde ese periodo, y que se expresaría en la tendencia en el aumento de homicidios.

Para esta coyuntura, al observar las estadísticas de muertes violentas dadas

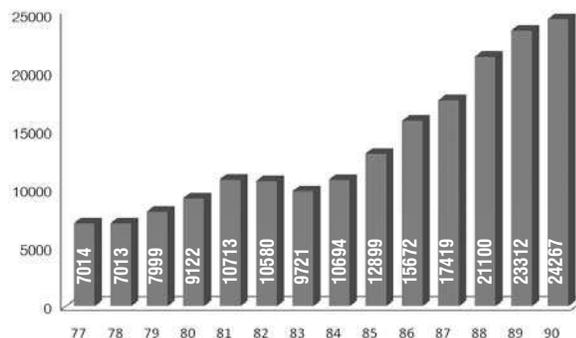
5 Entre los intelectuales y sus obras que se destacaron en esta coyuntura se encuentran, desde luego y en primer lugar: Gonzalo Sánchez, op. cit.; Alonso Salazar J. No nacimos pa' semilla. Bogotá: Cinep, 1990; Guillermo Segovia Mora, La violencia en Santafé de Bogotá. Bogotá: Eco, 1994; Adolfo León Atehortúa. La violencia juvenil en Cali. Cali: Secretaría de Gobierno Municipal de Cali, 1992, y Álvaro Camacho y otros, Nuevas visiones sobre la violencia en Colombia. Bogotá: Iepri, Fescol, 1997.



a conocer por la Policía Nacional, entre 1977 y 1990, comprobamos cómo, para 1977, el número de necropsias fue de 7014, manteniéndose una tendencia, por lo general ascendente, hasta inicios de la década de los años noventa. Así, evidenciamos cómo el número de necropsias por muertes violentas en Colombia, en 1980, fue de 9122; en 1985 de 12899, mientras en 1990 se duplicó a 24267 necropsias.

NECROPSIAS EN COLOMBIA, 1977-1990.

Frente al índice de muertes violentas que aumentaba día a día, durante los años ochenta el gobierno central seguía sosteniendo que la violencia de las ciudades era de control eminentemente policial, sin reconocer sus responsabilidades y compromisos políticos de carácter estructural. La nueva violencia vivida en las ciudades podría observarse como una extensión más del conflicto social, político y económico que vivía el país, ya en otro escenario y con otros actores. Para la Comisión de Estudios sobre la Violencia, la violencia urbana en Colombia era multifacética y de doble vía. Abarcaba sectores de la vida económica y cultural: la cultura de la violencia urbana es una síntesis de facetas y ello hacía simplista reducirla a cualquiera de ellas. Al mismo tiempo que provenía tanto de los extremos de pobreza, como también de las formas de obtener y proteger la riqueza, de la rebeldía como de la dominación, de la intolerancia como de la búsqueda de reconocimiento.⁶



Fuente: Revista de la Policía Nacional.
Subdirección de Policía Judicial

Para la Comisión de Estudios sobre la Violencia, el replanteamiento de la problemática social colombiana debía desarrollarse de manera objetiva, en la que se tuvieran en cuenta los cambios espaciales, políticos, económicos y culturales, a los cuales el proceso de modernización nos había llevado en las últimas décadas del siglo XX. Por lo demás, a la presidencia de Virgilio Barco se le reconoce el interés sobre el replanteamiento de la problemática social colombiana, al integrar en 1987 la Comisión, conformada por un grupo de especialistas y académicos. La Comisión concluyó que la violencia que más afectaba a Colombia en los años ochenta era la violencia que se vivía en las calles. A pesar de que el enfrentamiento armado entre el Estado y los alzados en armas era de gran relevancia para la opinión pública, los índices de esa violencia representaban apenas el 10% del total de muerte

⁶ Gonzalo Sánchez, op. cit., p. 9 y ss.



violentas en el país, el 90% restante de las necropsias pertenecían a diversas expresiones de violencia urbana.

La violencia urbana es entendida como todas aquellas actuaciones de individuos o grupos, ubicados en la ciudad, que ocasionan la muerte de otros o lesionan su integridad física o moral. En sentido muy general, la violencia se puede ver como algo que impide la realización de los derechos humanos, comenzado por el derecho fundamental a la vida. Sin embargo, la violencia urbana se relaciona con aspectos como la falta de planeación social del Estado, la marginalidad espacial, la falta de oportunidades, el desempleo, el analfabetismo y la concentración de la riqueza, entre otros, situaciones que se relacionan con la violencia común, violencia intrafamiliar y violencia social. La violencia urbana, con relación a la violencia ejercida por los actores armados, se diferenciaba en que no era negociable; de ahí la despreocupación inicial del Estado, pues ésta no amenaza de manera directa la estabilidad institucional. Esta violencia, desde el ángulo estatal, en un primer momento fue vista desde una perspectiva de lo reprimible y no de prevención en cuanto a medidas de carácter social.

Las principales ciudades del país, en su orden, Bogotá, Medellín y Cali, se convirtieron en los principales escenarios de la violencia urbana. Para el año de 1991, del total de 27.300 muerte violentas dadas en toda Colombia, la ciudad de mayor participación fue la capital antioqueña, con un número de 8.292 muertes, segui-

da por Bogotá con 5.416 y Cali con 3.110, sumando así entre las tres el 66.5 % del total de muerte violentas en dicho año en todo el país. Luego, para el año 1992, el total de muertes violentas fue de 25.025. En este año, es de anotar, donde más fallecían personas por causas de arma de fuego era la ciudad de Medellín, con un 78.7 % del total. En Bogotá, el porcentaje de muertes a causa de arma de fuego ascendió al 52.8% y, por último, para el caso de la ciudad de Cali, fue de 53.9 % de su total. Para Alonso Salazar, en esta coyuntura se comprobó que el Estado y, “especialmente, el sistema judicial, no estaba preparado para asumir los fenómenos de delincuencia propios del urbanismo. Por su novedad, por su variedad y por su volumen, la violencia urbana, que se presentó en los años ochenta y comienzos de los noventa desbordó al sistema judicial y penitenciario colombiano”.⁷

NUMERO DE NECROPSIAS EN COLOMBIA, PROMEDIOS MENSUAL Y DIARIO 1990 - 1994

Año	Total anual	Promedio mensual	Promedio diario
1990	24.564	204.7	67
1991	27.300	227.5	74
1992	25.058	203.3	68
1993	26.870	223.9	73
1994	40.046	333.7	111

Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal

⁷ Alonso Salazar, “La criminalidad urbana: actores visibles e invisibles”. En Revista Foro, No 22, 1993.



Hacia 1993, el total de muertes violentas en el país nuevamente ascendió, esta vez a un número de 26.870, donde el 64.6 % del total ocurrieron en los principales centros urbanos, pero con una gran diferencia respecto a los anteriores años. Para 1993, la ciudad de Bogotá repuntó como la ciudad más violenta del país, con 7.154 necropsias, seguida de Medellín, con 7.074 y Cali, con 3.138. Para 1994, la interpretación de los datos se complicó, debido a que, según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, se cambió en este año la forma de recolección de la información, aumentando el número de localidades consideradas como municipios, razón por la cual en este año el número de muertes violentas, a nivel nacional, aparentemente se disparó de forma desproporcionada. Sin embargo, los datos de las tres principales ciudades mostraron a Bogotá como la ciudad más violenta del país, con 6.822 muertes, seguida de Medellín, con 6.371 y Cali, con 3.571.

PRINCIPALES CIUDADES Y SU PARTICIPACIÓN EN HOMICIDIOS, 1990 - 1994

Ciudad	1991	1992	1993	1994
Medellín	7.475	7.191	7.040	6.371
Bogotá	5.416	6.066	7.154	6.822
Cali	2.209	2.799	3.138	3.571

Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal.

PRINCIPALES CIUDADES Y SU PARTICIPACIÓN EN HOMICIDIOS VIOLENTOS, PROMEDIOS MENSUAL Y DIARIO, 1990-1994

Promedio	1991		1992		1993		1994	
	Mensual	Día	Mensual	Día	Mensual	Día	Mensual	Día
Medellín	623	21	600	20	590	20	530	18
Bogotá	452	15	505	17	596	20	568	19
Cali	169	6	232	8	261	9	297	10

Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal.

Violencia y exclusión en Bogotá

La violencia urbana que se toma a la capital del país en los años ochenta y noventa, para ciertos analistas políticos, podía ser observada como la extensión del conflicto económico, político y social de los colombianos, que en esta coyuntura tomó un nuevo escenario, la ciudad, y unos nuevos actores, particularmente los jóvenes. Pero también en la ciudad, han hecho presencia los grupos de limpieza social, en complicidad con la policía, las milicias urbanas y el narcotráfico. En Bogotá, la violencia tomó múltiples formas y causas, asociadas a las condiciones comunes de las grandes ciudades del mundo como, en algunos sectores, la concentración de la riqueza. Esta realidad facilitó condiciones para la organización criminal, como el anonimato, la corrupción, el auge



de la economía informal, que posibilitó, a su vez, el delito, la proliferación de armas, aspecto que no sólo se convertía en un factor delincencial, sino causa de mortalidad, sumado a la oferta y consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas, coadyuvantes de conductas delincuenciales, entre otros.

No obstante, la violencia urbana en Bogotá, para el periodo en mención, tenía que ver íntimamente con aspectos relacionados con la exclusión y la marginación social, en amplio sentido de la palabra. En las zonas marginales, “los nuevos pobladores con distintas tradiciones y perspectivas, fundaron otras ciudades en las márgenes de las viejas. Aunque se interceptaron y surgieron múltiples conexiones, predominó una barrera social y política que los mantuvo separados. Las ciudades fueron planificadas desde la lógica donde sólo hay lugar para los pobres en la periferia, allí se hacinaron en las geografía más precarias, sin espacio colectivo ni público que centraran su vida social”.⁸

En el caso de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, hacia 1993, adelantó un importante estudio de sociología judicial, en el que se definieron las diferencias entre lo que era una gallada, una pandilla juvenil y una banda delincuencia. El informe, que lleva por título *Delincuencia juvenil en Santafé de Bogotá. Teoría y propuesta*, reconoció que el problema de la delincuencia juvenil hacía parte de la problemática de la estructura social. Para la Fiscalía, “el número de agremiaciones juveniles había permanecido estable en sectores tradicionales y en los sectores de miseria que se

han transformado en banda. Obviamente el fenómeno no es exclusivo de nuestra sociedad, otros países son también atacados por este problema, pero el fenómeno solamente tiene trascendencia en cuanto afecta a lo establecido y limita el desarrollo social. En nuestro país la pandilla hace parte de lo establecido y crece a la par del desarrollo social”.⁹ En el informe se puso en evidencia el alto número de pandillas juveniles que operaban en

8 Alonso Salazar. “Los procesos de reacomodo de las instituciones socializadoras”. En: *Revista Consenso*, Bogotá, PNR, 1994.

9 Fiscalía General de la Nación. *Delincuencia Juvenil en Santafé de Bogotá. Teoría y propuesta*. Bogotá: Fiscalía General, 1994. Este informe, en términos de análisis sociológico, en su momento fue de gran importancia teórica, debido a que marcó las diferencias entre los términos gallada, pandilla y banda. En primer lugar, la gallada se puede entender como las comunidades de personas que habitan las calles, organizados como agrupación primaria de supervivencia, de características paupérrimas, clasificándose aquí el fenómeno ñero, que se presenta en el centro de la ciudad. Un grupo de “habitantes de la calle”, de ñeros, conforma la gallada. En segundo lugar, “la pandilla” o parche, es una asociación de personas y la finalidad que persiguen es de su exclusivo conocimiento, algunas de ellas pueden presentar tendencias delictivas circunstanciales. Sin embargo, dentro de los parches, también se pueden presentar situaciones en las que tienen como objetivo la expresión de manifestaciones culturales o la dedicación al ocio productivo, al vandalismo esporádico o al consumo ocasional de alcohol o de drogas. En tercer lugar, “la banda”, es una agremiación de individuos con un fin delincencial claro; la banda es la que se da a conocer con mayores repercusiones sociales, debido a que es una organización armada, con fines criminales y delictivos propiamente dichos, cuyo objetivo es la búsqueda indiscriminada de lucro, existiendo un nivel de autoridad en cabeza de un jefe o cerebro, quien delega funciones. Algunos parches, en los años noventa, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, hicieron un tránsito completo, de parche a banda delincencial.



Bogotá, particularmente en determinados barrios, creando un ambiente de crisis y fragmentación institucional en las zonas marginales de la ciudad, en la que el joven era el principal victimario, pero, al mismo tiempo, la principal víctima del nuevo tipo de violencia que emergía en la ciudad.

Para finales de 1994, la ciudad contaba con 11400 agentes de Policía, distribuidos en tres turnos, de los cuales el 30 % se dedicaba a la custodia de grandes personalidades y sus bienes. Es decir, apenas 7980 protegían al ciudadano común. La tasa de uniformados en la capital era de apenas un agente por cada 5.189 ciudadanos, siendo ésta una de las razones por las cuales el número de homicidios y delitos comunes crecía en forma incontrolable. El Population Crissis Comite (instituto con sede en Washington que adelantaba estudios sobre delincuencia en las cien ciudades más grandes del mundo), reveló que Bogotá, para el año de 1994, figuraba entre las diez ciudades más violenta del planeta. “La misma fuente revelaba que entre 1987 y 1990, la capital del país registró en promedio 46500 delitos anuales. Pero desde 1991 esta cifra se dispara a un promedio de 70000 anuales, como consecuencia del incremento de atentados contra el patrimonio económico, la vida y la integridad de las personas”.¹⁰

Así mismo, esta fuente internacional dio a conocer que de los aproximadamente cincuenta mil bandidos que operaban en Bogotá, para el año de 1994, “estos asesinaban anualmente a 5840 personas con arma de fuego y corto punzante, matan a

1.460 niños, violan a 1825 adultos y menores de edad, perpetran 10440 atracos callejeros, causaron 5000 lesiones personales graves, asaltaron a 252 bancos, hurtaron 6.744 vehículos, saquearon 732 residencias, incurrieron en 833 estafas y cometieron 1047 delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Ejecutaron 91 actos de terrorismo, realizaron 194 falsificaciones de papel moneda, ejecutaron 37 atracos extorsivos, raptaron a 121 ciudadanos, torturaron a 1385 seres humanos y calumniaron en 1.323 oportunidades, e imponen la ley en cerca de 200 barrios”.¹¹

En este marco de violencia en Bogotá, a mediados de los años noventa, la realidad cotidiana se presentaba como preocupante, más si se tenía en cuenta que, según el Dane, el 82 % de los ilícitos no se denunciaban a las autoridades, razón por la cual el fenómeno era mucho más grande de lo que estimaban las estadísticas. Por otro lado, la violencia de ciudades como Bogotá, comenzó a ser relacionada con la problemática situación de los grandes tugurios, como focos de inseguridad social casi incontrolables por el Estado. La violencia típica de las ciudades tenía un carácter múltiple y multicausal, en el que la población juvenil de las zonas marginales se encontraba en el centro del problema.

Mediante la violencia, como representación colectiva de lo urbano, los jóvenes

10 “Las pandillas se toman Bogotá”. En: Revista Cromos, 6 -12 de marzo de 1995.

11 Ibid.



entraban de nuevo al escenario de lo público, ya fuese como víctimas o victimarios. Para Alonso Salazar, a comienzos de los años noventa, “los jóvenes de las zonas marginales, los de ciudad Bolívar en Bogotá o las comunas de Medellín no figuraban en el mapa de las representaciones colectivas hasta que no figuraron en el mapa de la violencia”.¹² Por lo demás, la anterior lectura coincidía, en cierta manera, con la mirada de Adolfo León Atehortúa, en la ciudad de Cali, para quien, “el adolescente era particularmente sensible a la anomía y en muchos casos la pandilla le proporciona un escape, un consuelo. La pandilla le concede la opción de liderazgo, de valor, le representa por lo menos un sentimiento de integración social que ha perdido en otras esferas y un conjunto de valores nuevos, de símbolos, imágenes y lenguajes que no encuentra en otra parte”.¹³

Para el caso bogotano, en los años noventa, la agrupación de los jóvenes en los denominados “parches”,¹⁴ representó un elemento importante en el proceso de fragmentación generacional. Los parches, en cierta medida, expresaron la crisis de la familia conservadora y patriarcal que se había instalado en las laderas bogotanas en los años sesenta. El parche reveló a la vez la expresión de un nuevo tipo de identidad juvenil conquistada por fuera de la esfera familiar. Los parches terminaron de consolidarse como una sub-expresión de la cultura urbana, ya fuese para el esparcimiento y el ocio, como expresión deportiva, cultural o musical mediante los representativos grupos de *rap* que se

constituyeron en los barrios populares en esta época.

En general, los fines perseguidos por los integrantes de los parches no fueron necesariamente de carácter delictivo. Sin embargo, debemos reconocer que algunos hicieron el tránsito de parche a banda propiamente delincuencial. Por lo demás, su tendencia delictiva, desde entonces, es circunstancial; es decir, depende de varios elementos presentes en un suceso espaciotemporal determinado.

El caso de Ciudad Bolívar en los años noventa

En la primera mitad de los años noventa, la localidad de Ciudad Bolívar o localidad 19 de Bogotá, vivió una situación insostenible, en términos de seguridad y tranquilidad ciudadana. La cotidianidad de los barrios se vio profundamente afectada en las horas de la noche cuando los grupos de *limpieza social*, en ocasiones, en complicidad con las autoridades locales, desarrollaron campañas de exterminio en

12 Alonso Salazar, “La criminalidad urbana...”, op. cit.

13 Adolfo León Atehortúa. La violencia juvenil en Cali. Cali: Secretaría Municipal, 1992.

14 En la zona de Ciudad Bolívar, a finales de los años ochenta y en el transcurso de los noventa, tomó fuerza la palabra “parche” como expresión semántica y como expresión en la construcción de la identidad colectiva de los jóvenes. La palabra “parche” quiere simplemente decir que se pega, que se agarra, se adhiere. El joven del sector al “parchar” en cualquiera de las esquinas del barrio, realiza esta actividad, se suma a un grupo determinado de amigos, constituyéndose el parche como referente inmediato de identidad local de muchos jóvenes del sector.



este populoso sector, particularmente en la coyuntura histórica comprendida entre 1990 y 1993. En estos cuatro años, aconteció la muerte violenta de 520 jóvenes, a los cuales no se les encontraba una respuesta judicial clara por parte del Estado. Sin embargo, la gota que rebasó el vaso fue la masacre de 12 personas, con revólver y armas automáticas, ocurrida el 25 de julio de 1992, en el barrio Juan Pablo II. El “delito” que estaban cometiendo era el de estar sentados en una esquina del barrio cercana a sus respectivas casas. Todo por el único delito de encontrarse con el parche, todo por el único delito de “parchar”.

Para los más de 700000 habitantes del sector, a mediados de los años noventa, la pobreza y la marginalidad espacial habían traído como repercusión directa su señalamiento y satanización como potenciales delincuentes. La pobreza se convertía en sinónimo de no integración social y de anormalidad, inclusive para cierto tipo de análisis e investigaciones académicas.¹⁵ Para la ONG, Conades, del total de la población, “el 29.8 % se encontraba en situación de miseria, esto quería decir que uno de cada tres habitantes carecía de las condiciones esenciales de vida. El 56.2 % de la población era pobre, es decir, no satisfacía los requerimientos básicos de la subsidencia con todos los servicios y garantías. Y sólo el 43.8 % accedía a los servicios básicos, aunque prevalezcan en condiciones de subempleo y alto costo de transporte, vivienda y servicios públicos. Ciudad Bolívar es por excelencia, el lugar de recepción de desplazados de la violencia política y migrantes económicos



provenientes de las más diversas regiones del país, quienes buscan refugio para sus vidas y una oportunidad para construir techo propio. Es decir, aquí se sintetiza la marginalidad estructural, los resultados del conflicto bélico y una amplia amalgama sociocultural, en medio de un cúmulo de necesidades básicas insatisfechas”.¹⁶

Con este tipo de intervenciones por parte de las organizaciones cívicas, juveniles, comunitarias y ONGs, se inauguró el Primer Foro por la Defensa de los Derechos Humanos en Ciudad Bolívar, el cual se realizó el día 12 de septiembre de

15 Para los investigadores del IEPRI de la Universidad Nacional, Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, en el año 1997, al desarrollar una nueva investigación sobre este tema, a los nuevos sectores sociales de las zonas pobres, sus comportamientos, la manera como se adhieren a la nueva normatividad urbana, sumado a los altos grados de pobreza, exclusión social y analfabetismo, dieron a conocer que, “la situación se traduce en que en las ciudades hay habitantes, pero no hay ciudadanos, y sobre todo, hay sectores sociales urbanos que pueden ser muy amplios, y, que por lo general, se identifican con los migrantes pobres y desempleados que tienen bajos niveles de integración con la ciudad e incluso muchas veces se identifican como marginados”. Todos estos sectores, por su falta de integración a la ciudad serían proclives a la violencia urbana.

16 CONADES. “Ponencia presentada al Primer Foro de Derechos Humanos en Ciudad Bolívar”, 12 de septiembre de 1993.



1993, en el Colegio Guillermo Cano, de la localidad. En este evento y de acuerdo a las diversas intervenciones, se señalaron cuatro actores responsables de la violencia en el sector: la Policía Nacional, ya fuera por acción u omisión; la guerrilla o milicias populares, que hacían presencia en la zona; los grupos de limpieza social, y los jóvenes, particularmente algunos parches violentos y bandas delincuenciales que operaban en el sector. A pesar del informe presentado por la Fiscalía General de la Nación, en el marco del evento en torno a las investigaciones por los homicidios más relevantes cometidos entre 1989 y 1992, en Ciudad Bolívar, el ambiente de preocupación invadió a los asistentes y participantes. La razón de la preocupación, se fundaba en que, en nuestro sistema judicial, particularmente el de los años noventa, el 97% de los homicidios quedaban impunes, sin peritaje judicial ni investigación clara, y mucho menos un responsable. Para los expertos, la tasa de homicidios tendía a incrementarse en áreas de mayor pobreza, mayor heterogeneidad cultural, mayor disolución de la familia, mayor participación femenina en la fuerza laboral y mayor exposición a la represión policiva.

Después del primer Foro en Defensa de los Derechos Humanos, ocurrieron algunos cambios rescatables en la localidad. El Estado fijó la mirada en Ciudad Bolívar, ya fuese como un “polvorín” social o una localidad de la ciudad que deman-

daba inversión económica y mayor presencia institucional. Se desarrolló, así, una serie de obras de infraestructura social, en vías de acceso y, en general, planes de “des-marginalización” de la ciudad, los cuales tuvieron un interesante repunte a finales de los años noventa. La construcción de colegios y parques, bibliotecas cercanas a la localidad, además del hospital del barrio Meissen, demostraron una nueva actitud del Estado hacia esta población, sin que ello sugiera el cese de la estigmatización.

Hoy día, como investigadores sociales, nos preguntamos, cuántas vidas, particularmente de jóvenes, tuvieron que dilapidarse para que el Estado hiciera presencia en esta localidad, en momentos en que el discurso académico de “la violencia urbana” señalaba a Bogotá como la ciudad más violenta del país, mientras las investigaciones de carácter internacional la señalaban a su vez como una de las diez ciudades más violentas del mundo. Programas de campaña, convertidos luego en políticas de gobierno, que en este momento se nos viene a la cabeza, como, “La cultura ciudadana”, “Bogotá sin tugurios”, “Bogotá sin indiferencia”, etc., nos hacen pensar que algunas de ellas tienen un antecedente directo en la Bogotá violenta de los ochenta y en la cuota de sangre de carácter múltiple y multicausal que colocó el joven en la localidad de Ciudad Bolívar y en las zonas marginales de las principales ciudades del país.



Medellín: años ochenta

Freddy Guerrero Rodríguez¹

Un breve antecedente

Desde las décadas finales del siglo XIX la ciudad de Medellín se erigió como la manifestación más excelsa de una cultura paisa que conciliaba las fuerzas de las tradiciones con los desafíos de la modernidad. El villorrio fundado en el siglo XVII permaneció casi por dos siglos eclipsado por la soberbia Santa Fe de Antioquia, de raigambre más antigua y especialmente beneficiada por las economías coloniales soportadas en la minería. No obstante, desde mediados del siglo XIX, los procesos de apertura de la frontera agrícola antioqueña, el desborde de la montaña secular hacia el occidente, redundaron en la imposición de un nuevo circuito económico que progresivamente favoreció la centralización de la acumulación en ese enclave parro-

quial del valle del Aburrá que, en pocas décadas, fue adquiriendo dimensiones de ciudad auténtica.

Esta dinámica no sacrificó rancias tradiciones defendidas por unas élites que desde los orígenes republicanos enaltecieron la bondad de las tierras antioqueñas, que decidieron dignificarlas con el trabajo más que con la mera posesión, que insistieron en la ascendencia de las razas y la imperturbabilidad de los estamentos, que pese a todo celebraron el esfuerzo y la persistencia de cualquier vecino, que eran prolifas en creencias pero, sobre todo, que eran defensoras a ultranza de la fe católica. Toda esta cosmovi-

¹ Investigador independiente.



sión de la montaña, de la parroquia y de la ciudad naciente fue puesta en tránsito en multiplicidad de expresiones, en prosa y poesía, a la que siempre mostraron especiales apegos las gentes de la región².

La ciudad en expansión supuso de cualquier manera desafíos a estas tradiciones regionales, lo que la convirtió en objeto de recurrentes discursos moralizadores que conectaron con eficacia las más fervientes consideraciones religiosas con los más modernos dispositivos de intervención social. Las burguesías, especialmente las concentradas en torno a las industrias, cuales más las textiles, se dieron a la tarea de ejercer una filantropía netamente católica, decidida a beneficiar una clase obrera para que se mantuviera o erigiera como una clase ante todo cristiana. En este sentido, una tradición conservadora pudo reinstalarse en unos mecanismos modernos de organización de la existencia social, al punto que alcanzaron a crear fuertes lazos solidarios entre clases diferentes, entre empresarios y obreros³.

Sin embargo, al mismo tiempo, la sociedad urbana fue sensible a tendencias más seculares y abierta a alcances de cuño marcadamente liberal. Por ejemplo, a la par con las industrias, la ciudad de Medellín auspició el desarrollo de los primeros medios masivos de comunicación que con el tiempo alcanzaron carácter nacional, entre ellos, el diario *El Espectador* y la emisora *La Voz de Antioquia* de la cual surgirá posteriormente la Cadena Radial Colombiana CARACOL. Precisamente, la radio fue el medio que se encargó de di-

fundir en 1935 el accidente trágico que le costaría la vida a Carlos Gardel, todo un hito en la historia medellinense⁴.

Hacia la crisis de medio siglo

Al tiempo que la ciudad de Medellín se modernizaba tenía que soportar las consecuencias de la violencia rural que desde los años treinta empezó a azotar con especial crudeza a la región antioqueña. Algunas de las masacres más terribles de la violencia partidista tendrán nombre paisa, entre otras, las de Fredonia o Cañasgordas. La violencia rural y el atractivo mismo de la industrialización empujaron hacia la ciudad a miles de campesinos que, criados en el amor a la tierra, tuvieron que enfrentarse sin embargo a sortear los desajustes de la urbanización. Pero la propia ciudad de Medellín no fue ajena a la persecución partidista, toda vez que algunas barriadas, especialmente las más pobres, sintieron el acoso de cuadros intimidantes, como el de los Matías en el barrio Antioquia. Precisamente los recién venidos sin lugar fijo o los desarraigados

2 Adrián Serna Dimas. *Ciudadanos de la geografía tropical. Ficciones históricas de lo ciudadano*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2006.

3 Cfr. Mauricio Archila. *Cultura e identidad obrera, Colombia 1910 – 1945*. Bogotá: CINEP, 1991, pág. 60-62. Alejandro Álvarez et al. *La ciudad como espacio educativo. Bogotá y Medellín en la primera mitad del siglo XX*. Bogotá: SOCOLPE y Arango Editores, 2002.

4 Carlos Uribe Celis. *La mentalidad del colombiano. Cultura y sociedad en el siglo XX*. Bogotá: Nueva América, 1992, pág. 68.





sin posibilidades de ocupación se convirtieron en gente de la barriada, embebida en una vida bohemia y desajustada en vuelta en aires de tango⁵.

En estos ambientes marginados, que conciliaron al “viejo arriero calavera” con la emulación del “mundo lunfardo”, surgieron las primeras expresiones sociales y culturales que articularon la necesidad y la carencia evidentes con la creencia persistente en la tradición, el emprendimiento y la innovación. Entre los años cuarenta y cincuenta estas barriadas empobrecidas, cada vez más visibles y afrentosas para una sociedad moralista, fueron revestidas como territorios de dudosa reputación y en algunos casos convertidas en zonas de tolerancia, lo que ciertamente las hizo más sensibles a la presencia de estructuras delincuenciales y criminales. En este sentido, sólo la fuerza de un estamentalismo cerrado, decidido a blindar a la ciudad desde adentro, puede explicar el modo como se fueron incorporando unos nichos sometidos a todas las necesidades y carencias pero surtidos con todo el imaginario regional antioqueño que alentaba la decisión por sobresalir⁶.

Los comienzos del narcotráfico

Los años cincuenta y sesenta trajeron el incremento de la urbanización, el aumento del desempleo y la profundización de la pobreza urbana, que se hicieron especialmente manifiestas en las barriadas pobres tanto de las zonas céntricas como del norte de la ciudad. En este sentido, la perseverancia de las creencias en la ciudad pujante considerada el polo industrial de la nación coincidió con un descreimiento en los valores sustanciales de la sociedad antioqueña, con una afirmación de nuevos valores o simplemente con el reacomodo de los valores tradicionales en beneficio de la ilegalidad. Lo primero se expresó, por ejemplo, en un movimiento ciertamente reducido pero de alta repercusión nacional, el nadaísmo, una apuesta surgida en los años cincuenta que algunos califican de contracultural, opuesta a los valores consuetudinarios de la sociedad colombiana y, por sobre todo, de la sociedad antioqueña. Lo segundo se expresó en una cierta sensibilidad hacia la militancia de izquierda, que en los años setenta tendrá el impulso de la teología de la liberación y más abiertamente de la ideología subversiva. Lo tercero se expresó en una delincuencia cada vez más organizada que será, precisamente,

5 Pilar Riaño Alcalá. Jóvenes, memoria y violencia en Medellín. Una antropología del recuerdo y el olvido. Editorial Universidad de Antioquia e Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, 2006.

6 Riaño Alcalá, Op. Cit.



la puerta para el negocio del narcotráfico, que tenía un antecedente marginal en el grupo denominado *Medellín- Habana Connection* en el año 1958 que para la época tenía un laboratorio de droga en el sector de El Poblado⁷; pero este apenas sería un lánguido episodio que, marginal a la agenda política y de seguridad de la época, no revelaba la trascendencia del negocio del narcotráfico más allá de las delincuencias.

En los años setenta la situación social se hizo más turbia básicamente por la crisis industrial que afectó especialmente a las textileras antioqueñas. La regulación de los conflictos sociales y el tema de la seguridad se venían posicionando a través de la justicia con mano propia que justificaría en parte este proceder en la lógica de la autodefensa propiciada por la legislación del gobierno de Guillermo León Valencia en 1967 y articulándose en los barrios populares en dinámicas de seguridad y justicia practicada en las zonas rurales y aplicadas en el nuevo entorno⁸, dinámicas que no intenciones, para la década de los ochenta se adaptarían en el ámbito del narcotráfico a través de las milicias y el sicariato. En este panorama, que agudizó la crisis tanto de la ciudad como de la provincia próxima, se fueron consolidando barriadas cada vez más sometidas a la informalidad y, al mismo tiempo, cada vez más expuestas a la incidencia de formas organizadas de crimen y delincuencia incorporadas en el tráfico de marihuana y de cocaína hacia los Estados Unidos, siendo especialmente representativos Los Mejía y la reconocida

“reina de la coca”, Griselda Blanco⁹. Así, en medio de la cada vez más creciente migración de nacionales hacia el país del norte, en procura del rebusque necesario para subsistir, salieron también hombres y mujeres de la barriada que, como “mulas”, empezaron a conocer el negocio en las calles mismas de Miami y Nueva York. Algunos de ellos adquirieron ascendencia, especialmente involucrados en las guerras por la distribución que se suscitaban en estas ciudades desde mediados de los años setenta.

Para finales de la década estos hombres aventureros fueron regresando definitivamente al terruño lavando sus capitales por medio de diferentes inversiones, especialmente en la compra de tierras rurales, en la finca raíz urbana y en la ganadería. Sus fortunas, cada vez más ampulosas, ciertamente les abrieron las puertas a diferentes instancias económicas, sociales y políticas de la ciudad y el departamento. Los narcotraficantes empezaron a edificar unos modos de vida que fueron recibidos con cierta connivencia por las élites y, en general, por una sociedad

7 Cardona, Patricia. “Los narcotraficantes y su búsqueda de aceptación en la sociedad colombiana: la vía económica, la vía política, la vía violenta y la vía social.”. En revista Digital SINCRONIA, No 2. Universidad de Guadalajara. 2007.

8 Jaramillo Arbeláez, Ana María; Ceballos Melguizo, Ramiro; Villa Martínez, Marta Ines. En la Encrucijada. Conflicto y Cultura Política en el Medellín de los noventa. Corporación Región, Programa para la Reinserción, Alcaldía de Medellín. Medellín, 1998.

9 Riaño Alcalá, op. cit.



urbana que no dimensionaba aún la complejidad del accionar mafioso. El sector del Poblado de Medellín, otrora lugar para el veraniego de las elites de Medellín, pronto se convirtió en los ochentas en un lugar con alto crecimiento urbano y centro de residencia de algunos narcotraficantes que encontrarían allí satisfecha su inclusión espacial y simbólica en un mundo utópico y anhelado desde el arrabal. No obstante, los narcotraficantes empezaron a sentir la presión de las autoridades norteamericanas que estaban a decididas a combatir un negocio que, consideraban, tenía claros apoyos entre diferentes estamentos o sectores colombianos. En este contexto, los Estados Unidos conminaron al gobierno de Turbay Ayala a emprender o intensificar la guerra contra los narcóticos, lo que incluyó la firma de un tratado de extradición de nacionales.

La aparición del Cartel

A comienzos de los años ochenta empezaron a suceder situaciones que transformarían radicalmente el ambiente del narcotráfico en la ciudad. Por un lado, el confuso ambiente social favoreció la ampliación de milicias insurgentes que, cada vez con mayor capacidad bélica, empezaron a amenazar la acumulación mafiosa en la urbe. Por otro lado, el efecto de la creciente presión norteamericana fue incidiendo en medidas policivas y judiciales contra el negocio y sus patrones, lo que llevó a los narcotraficantes a robustecer estructuras sicariales decididas no sólo a los servicios habituales de la

Fue entonces cuando los narcotraficantes empezaron a cultivar un especial reconocimiento entre las clases populares, que no sólo los veían como hombres surgidos de la nada con mucho esfuerzo, sino sensibles a resolver problemas sociales...

mafia sino ante todo dispuestas a atentar contra las instituciones del Estado. Finalmente, los narcotraficantes, concientes de la incertidumbre social y de la presión de las autoridades, empezaron a escalar posiciones políticas con claras pretensiones de injerir en la política regional y nacional.

Precisamente, a comienzos de los años ochenta, los narcotraficantes de Medellín empezaron a mostrar su faceta de filántropos y de convencidos políticos emprendiendo obras sociales de gran magnitud, como el programa "Medellín sin Tugurios", e incursionando en movimientos políticos, especialmente dentro del liberalismo. Fue entonces cuando los narcotraficantes empezaron a cultivar un especial reconocimiento entre las clases populares, que no sólo los veían como hombres surgidos de la nada con mucho esfuerzo, sino sensibles a resolver problemas sociales que parecían ajenos para los políticos y administraciones de lo público. Esto sin contar que aún entre las gentes pudientes los narcotraficantes no dejaron de suscitar alabanzas, en especial por la declarada lucha contra el secuestro suscitada tras el plagio de Martha Nieves Ochoa por parte



del M-19. Paradójicamente las garantías de representación a través de un populismo de alcance regional y la garantías de seguridad que respondían a diferentes sectores sociales serían aportados por el narcotráfico que, prontamente, invertirían la relación para convertir sus vínculos sociales en retaguardia de la persecución y los actos de terror y la cooptación de partidos y organismos institucionales en una constante amenaza a la seguridad del Estado y de su estabilidad política, así como la vulneración de los derechos ciudadanos tanto por uno como por otro actor enfrentado.

Los esfuerzos de los narcotraficantes paisas por lavar su imagen, pronto empezaron a soportar la presión de un enemigo particular: las denuncias de diferentes estamentos, particularmente del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y de algunos periodistas, quienes los acusaron de sostener un negocio que estaba infiltrando con delito el conjunto de las instituciones colombianas. Las denuncias de Lara Bonilla pronto acabaron con las expectativas políticas de los narcotraficantes, particularmente de Pablo Escobar Gaviria. Adicionalmente, la presión norteamericana y el esfuerzo de algunas cuantas autoridades nacionales, empezaron a golpear de manera contundente las estructuras de procesamiento cada vez más instaladas en el territorio colombiano.

En este panorama, los narcotraficantes asesinaron al Ministro de Justicia, lo que inmediatamente supuso una declaratoria de guerra abierta del Estado contra la mafia. Obviamente, todas las miradas



apuntaron directamente a Medellín: por un lado, porque las acusaciones del Ministro estuvieron dirigidas concretamente sobre Pablo Escobar Gaviria; por otro lado, porque los sicarios que cometieron el magnicidio, uno de ellos sobreviviente, era prácticamente un adolescente sacado de las barriadas pobres de la capital paisa, hecho que causó especial conmoción entre la opinión pública.

Los años venideros serán los más traumáticos para la capital antioqueña en toda su historia. Por un lado, una guerra del Estado contra una banda narcotraficante convertida en cartel. Por otro lado, una guerra interna entre carteles, el de Cali y Medellín. Finalmente, una guerra entre el cartel de Medellín y sus viejos aliados, los paramilitares del Magdalena Medio montados desde comienzos de los años ochenta por Gonzalo Rodríguez Gacha. Tres guerras en una sola ciudad, trajo consigo terrorismo indiscriminado, sicariato amplificado y combates cotidianos. “Metrallín” o “Metrallo” se le llamaría entonces a la otrora capital de la eterna pri-



mavera, convertida por esta guerra en la ciudad más peligrosa del mundo. Según el Departamento de Estudios Criminológicos e identificación, el número de muertes violentas en el año de 1981 fue de 1.627, cifra que siguió un incremento en los años siguientes hasta alcanzar su pico más alto en el año 1991, 10 años después, con un número de 7.376 muertes violentas¹⁰.

En el curso de estas guerras, que tuvo su momento más álgido entre los años 1987 y 1993, se fue haciendo visible la magnitud del fenómeno narcotraficante: la inmensidad de las fortunas amasadas por los dueños del negocio en los barrios altos de la ciudad pero, también, la impresionante miseria que habían aprovechado para convertir las barriadas pobres en

territorios sometidos a bandas sicariales. Precisamente esta barriada trágica fue la que salió a la luz a través del cine (*Rodrigo D. No futuro*), de la investigación testimonial (*No nacimos pa' semilla*) o de la literatura (*La virgen de los sicarios*). Estos documentos efectivamente mostraron al Medellín profundo de los años ochenta, una Medellín que dejó no sólo una experiencia trágica como lección orientada para no repetirse, sino por el contrario, experiencia que ha refinado el actuar de los herederos de la Medellín violenta de los ochenta y cuyo modelo será replicado, con sus variantes, en otras ciudades del país, sin que las condiciones que le hicieron posible tengan una resolución satisfactoria en los dos décadas precedentes.

✕

10 Jaramillo et al. Op cit. Pp 105.



Perfiles históricos de la violencia en Cali¹

*Adolfo León Atehortúa Cruz*²

Preámbulo

El rostro de la violencia no se presentó siempre con su fruncido ceño, sus dientes de vampiro y su versátil látigo. Cali fue bucólica y relativamente tranquila. Con los sobresaltos idílicos de la independencia y la cosecha de guerras fratricidas en el siglo diecinueve; con los conflictos de clase en las haciendas, los esclavos oprimidos y la desigual distribución de la riqueza en torno a los ingenios en el siglo veinte; con sus tierras irrigadas y fértiles para unos pocos y las ariscas de ladera, sembradas de carbón en sus entrañas o selváticas como los Farallones para los otros muchos. Pero, al fin y al cabo, Cali fue también sensible para sugestionar al romántico constructor de la Torre Mudéjar,

enamorada para inspirar a Isaacs, rumbera para atraer a los obreros e ingenieros cubanos del azúcar que dieron alegre

1 Por solicitud de la Revista Ciudad Paz-ando, del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPAZUD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se ha elaborado el siguiente texto que, en breves renglones, intenta retratar una semblanza de la ciudad de Cali y las violencias que la aquejaban en la década de los ochentas. A través de un esquema histórico, que detiene la mirada en los antecedentes, es decir, en la Violencia de los años cincuenta, se muestran las aristas del progreso y se examinan los actores de la violencia en su constitución y devenir, para resaltar como epílogo la enorme deuda que la violencia impulsada “desde arriba” y por los narcos, tiene con la situación presentada en Cali.

2 Profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional.



cuna a la salsa, y poética para engendrar al costumbrista Alférez de Eustaquio Palacios o, más tarde, a la suicida pero inmortal letra de Andrés Caicedo.

No se trata de alabar, una vez más, aquella manida frase según la cual “todo tiempo pasado fue mejor”. Pero tiempos hubo en que la muerte fue un extraño visitante: cuando apareció por primera vez un cadáver en una calle cualquiera de la ciudad de Cali, la curiosa romería que fue a verlo hizo célebre “la calle del muerto”. Una calle histórica, conocida y renombrada, como el “Parque del perro” o el “Cerro de las tres cruces”, hasta que su rutinaria repetición extravió en la geografía a las nuevas generaciones confundidas y atiborradas por las asiduas visitas de la muerte y sus testimonios arrojados por doquier como si se tratara de multiplicar las morgues.

La Violencia

Dicen los viejos que todo comenzó con la Violencia. Aquella con mayúscula porque se convirtió en nombre propio y partió la vida del país en dos. Para los caleños se inició el 9 de abril de 1948 tras el asesinato de Gaitán. En ese momento, la organización del gobierno revolucionario, si así puede llamársele, no pudo colocarse al frente de las movilizaciones populares. La gente obró desorientada y a veces por su propio instinto, movida por la furia. Algunos actos expresaron anarquía y en otros se buscó el enfrentamiento armado con los conservadores o con el Ejército que, solícito, salió a patrullar las calles y a

defender la propiedad privada. Los revoltosos tan solo tuvieron aliento para arremeter contra estancos y ferreterías; para destruir las instalaciones del “Diario del Pacífico” y “La Voz del Valle”, baluartes de la expresión conservadora, o para tomar por horas el control de la Estación Central del Ferrocarril y las oficinas de la Gobernación Departamental en pleno centro.

Sin embargo, la acción del comandante de la Tercera Brigada, Gustavo Rojas Pinilla, liquidó finalmente al movimiento. Al mando de 90 soldados antiguos y 450 concriptos recientemente acuartelados, movilizó a su tropa y advirtió a los novatos que como no sabían apuntar, “dirigieran el tiro al estómago” y que “cuando vieran una manifestación asaltando una ferretería u otro negocio se acercaran por lo menos a cincuenta metros para no perder la munición”³. Un millar de detenidos en su jurisdicción fue enviado de inmediato a la lejana ciudad de Pasto sin la existencia de procesos judiciales y sin acusaciones concretas. De esta manera alivió el entonces Coronel Rojas la presión sobre su escasa tropa y aisló a los prisioneros de su comunidad y de sus familias. Sin noticia de ellos, el temor se sembró en los gaitanistas bajo la amenaza adicional de masivas detenciones arbitrarias. Un escritor, Arturo Alape, narró con lujo de detalles esa “noche de los pájaros”⁴.

3 Silvia Galvis y Alberto Donadio. El jefe supremo. Bogotá: Planeta, 1988. p. 115.

4 Arturo Alape. Noche de pájaros. Ibagué: Caza de libros, Pijao Editores, 2008.



No fue suficiente. El día en que Rojas celebraba su ascenso a General en el casino de oficiales del Batallón Pichincha, desconocidos atacaron la Casa Liberal en Cali y perpetraron una masacre inaudita contra quienes allí se encontraban el 22 de octubre de 1949.

Fue el cierre sangriento de toda una campaña iniciada al norte del Valle bajo la inspiración tácita de Nicolás Borrero Olano, el nuevo gobernador laureanista del Valle, y que contó con la iniciativa intelectual del directorio departamental conservador encabezado por Hernando Navia Varón y de personajes como Gustavo Salazar García. La campaña tuvo la participación decidida de José Ignacio Giraldo –jefe conservador del municipio de Versailles–, de León María Lozano, “El Cóndor”, –convertido en héroe de los azules el 9 de abril en Tuluá–, de José Ríos –caudillo de Trujillo–, y la autoría directa de bandidos como “Lamparilla”, Manuel Gordillo, Jaime Naranjo “El vampiro” y “Pájaro Verde”, quienes prometieron “conservatizar toda la cordillera occidental” con el apoyo de jefes locales del conservatismo en los municipios de El Dovio, El Águila, Roldanillo y Bolívar.

Huyendo de todos los pueblos del norte del Valle, decenas de familias buscaron refugio en la casa del directorio liberal de Cali, con la esperanza de que la dirección del partido remediara la tragedia. No obstante, hasta allí llegaron el 18 de octubre cincuenta agentes de policía decomisando cédulas, dinero y hasta algunas aves que los labriegos tenían consigo. Cuatro días más tarde, un grueso grupo salido de

las oficinas del detectivismo se apostó en la puerta de la sede liberal y disparó sin piedad contra la indefensa muchedumbre. El Ejército, en lugar de perseguir a los agresores, llegó a detener y a torturar a los sobrevivientes. El saldo de veintidos muertos y cincuenta heridos fue explicado públicamente por el gobernador Borrero Olano como “producto del ataque de una banda de liberales al cuartel de la policía”.

Avalados por el gobierno y el Estado, los “pájaros” tomaron la decisión de “volar” a la otra cordillera y manchar de rojo al río Cauca. Entre el 10 y el 20 de octubre de 1949 las masacres se extendieron a Toro, El Cairo, La Unión, Ulloa y El Águila. De allí se regresó a San Rafael, se pasó a Ceilán, el 27 de octubre, y se remató el 29 con una masacre en Huasanó, corregimiento de Trujillo. En todos los pueblos decomisaron cédulas, hicieron firmar protestas contra el liberalismo y obligaron a los liberales a colocarse en el pecho pequeñas estampas de la virgen con cintas azules. Al terminar el mes, las cartas de los “recalzados” o “volteados”, (como llamaban a los liberales convertidos en conservadores) sobrepasaban dos millares de firmas. El “Diario del Pacífico” publicó varias de ellas, incluso de localidades que no fueron asaltadas pero sí aterrorizadas por los “pájaros”: Bugalagrande (300 firmas), Yotoco (140), Ansermanuevo (155), Versailles (350). Allí se publicó también el llamado del gobernador para crear un cuerpo de policía presidido por él y una junta integrada por ganaderos y agricultores del departamento “el cual tendría todo el respaldo de la autoridad y



podría actuar en nombre de ella”⁵. Fue el sello oficial para institucionalizar las bandas de “pájaros”, a la manera reciente de las “Convivir” con respecto a los grupos paramilitares.

Al iniciar la década de los cincuenta, la Violencia se hallaba generalizada bajo el imperio de la dialéctica amigo-enemigo. Al entrecejo híspido de Borrero Olano y de “El Cóndor”, se agregaron los colmillos de “El vampiro”, así llamado porque bebía la sangre de aquellos a quienes asesinaba, mientras “Tabaco”, un oscuro lugarteniente de “Lamparilla”, se sentaba a fumar sobre los cadáveres que acumulaba. “Chulavitas” y “pájaros” se convirtieron en agentes de la muerte sin freno ni control. Pero, de manera similar, jóvenes campesinos se mudaron en crueles y asesinos bandoleros motivados por la autodefensa y la venganza: “Aguililla”, “Tijeras”, “Arbolito” y “Zarpazo”, entre otros, merodearon por el Valle.

Finalmente, la violencia no tardó en mostrarse como efectivo canal de movilidad social para astutos y oportunistas ejecutores. Leonardo Espinosa, enriquecido en Trujillo y convertido en gamonal omnipresente y todopoderoso, gracias a la Violencia, fue el mejor ejemplo y resultado. Algunos “señores” de la capital del Valle usufructuaron aún más la coyuntura, pero supieron camuflarse en el Congreso de la República, en el asfalto de la calle quinta, o en las grandes casas de tradicionales barrios como San Fernando.

Las caras del progreso

Durante la Violencia, el pillaje, el despojo, la violación de mujeres, las horribles masacres, el incendio de propiedades, fueron el pan de cada día. No pocos desplazados se convirtieron en nómadas desempleados; no pocas mujeres desamparadas tejieron las hiladas de la prostitución o del empleo doméstico mal remunerado. Miles de campesinos abandonaron sus tierras en el Valle, en el departamento del Cauca y en el sur del país, y viajaron a Cali en busca de futuro. Llegaron igualmente del Tolima, del Huila, de los Santanderes e incluso de Antioquia, pasando por el norte del Valle hasta asentarse en los nacientes barrios de ladera. Negros perseguidos por la violencia, descendientes de esclavos y cimarrones, siempre pobres, abandonaron sus pueblos raizales en el norte del Cauca para buscar el sustento de sus familias en Cali. Les siguieron muchos otros del Pacífico, que se hicieron corteros de caña, jornaleros y braceros, y pintaron de color y para siempre el semblante de la capital azucarera. Otros más, mestizos y de todas las razas, golpeados por la violencia e instruidos por ella, engrosaron las filas de los “malandros” en la baja delincuencia ciudadana, como producto de la descomposición de las comunidades rurales estimulada por la expansión económica, el impulso de la caña, el florecimiento del comercio y la industria en desarrollo.

Cali empezó a tejerse como ciudad moderna. Se extendió la calle quinta, se construyeron los primeros pasos elevados para

5 “Diario del Pacífico”, octubre 29 de 1949.





vehículos, se remodeló el Puente Ortiz y el Paseo Bolívar, se levantaron paraderos para buses y se instalaron semáforos en algunos cruces, se ampliaron la carrera décima y la quince, la calle trece y la calle quince; la Avenida Colombia y la Avenida del Río; se proyectó la autopista sur y se abrió la zona rosa en la avenida sexta. Los Juegos Panamericanos de 1971, con flamantes escenarios deportivos y una ciudadela olímpica que albergaría después a la Universidad del Valle, descubrieron como sede a una ciudad nueva que incluso escondió a sus mendigos para que no los vieran. Sin embargo, Cali no pudo ocultar las luces de pesebre que asomaron en Siloé y Terrón Colorado, ni los cambuches humildes que empezaron a poblar la margen izquierda del río Cauca en el profundo suroriente de la urbe. En un abrir y cerrar de ojos, la ciudad multiplicó entre sus ha-

bitantes a los menesterosos herederos de la Violencia y a los nuevos pobres que el pujante capitalismo expulsaba hacia los cinturones de miseria.

Por fuera y en contra del Estado, agitando consignas contra el naciente “Frente Nacional”, la política se metió en muchos sectores marginales de Cali. La actividad contestataria de Alfonso Barberena, de Julio Rincón y de Bolney Naranjo en el desarrollo de invasiones urbanas y en la construcción de humildes barrios que fueron configurando el populoso sector de Aguablanca, está por estudiar todavía. Lo cierto es que en estos sectores la influencia de la oposición al régimen, así como la abstención por desconfianza frente a los políticos, desde los años sesenta, se hizo insoslayable. Una y otra fueron medidas por las primeras encuestas y estudios electorales que se realizaron desde la Universidad del Valle: la insatisfacción frente a los partidos, los políticos y las condiciones económicas, se subrayaron en un análisis de 1968⁶. Así mismo, en una encuesta postelectoral realizada en 1970, no hubo en las franjas altas quien afirmara haber votado por Rojas Pinilla, mientras en las franjas bajas de la población el 63 por ciento lo reconocía con orgullo⁷. Desde entonces, en Aguablanca se fortaleció una tendencia que no quiso nunca con-

6 P. Morcillo et. al. “Estudio de la abstención electoral en las elecciones de marzo de 1968 en Cali”, en Boletín Mensual de Estadística, Cali, diciembre de 1969, No. 221.

7 J. McCamant y J. de Campos. “Colombia Política 1971”, en Colombia Política, Bogotá, Dane, 1972.



ciliar con los Lloreda, los Caicedo o, en general, con la aristocracia caleña.

El terreno fue aprovechado por el Movimiento Cívico de José Pardo Llada en 1978 y por Henry Holguín diez años más tarde. Con alta dosis de populismo radial, uno y otro se acercaron a los estratos populares para reivindicar el descontento. Catalogado como un “voto protesta contra los partidos tradicionales en Cali”, el 47 por ciento de quienes sufragaron por Rojas en 1970, brindaron su voto al Movimiento Cívico en 1978⁸. La tradición siguió con el apoyo a Carlos Holmes Trujillo, “solo contra todos” y continuó expresándose hasta tiempos próximos con el apoyo a candidatos alternativos o radiales como John Maro Rodríguez, Apolinar Salcedo, o incluso Iván Ospina. El delfín Rodrigo Lloreda fue derrotado una y otra vez en sus aspiraciones para la alcaldía de Cali, gracias a los votos de Aguablanca.

La movilidad social por otras vías

En los años sesenta, Estados Unidos fue sacudido por la notoria profundización de un viejo fenómeno. Introducida por inmigrantes mexicanos hasta Nueva Orleans y surtida desde principios del siglo veinte por un reducido grupo de antillanos y negros amantes del blues y del jazz, la marihuana empezó a inundar los mercados de las grandes ciudades como consecuencia de la Guerra de Vietnam y de los movimientos juveniles pacifistas.

Aunque la gran exportación hacia el país del norte corrió inicialmente por

cuenta de los productores mexicanos, muy pronto el cannabis colombiano “Punto Rojo” y la “Santa Marta Gold” se ganaron el aprecio de los consumidores. Con ellas llegó también a las calles de Miami y Nueva York una variedad cultivada en Corinto (Cauca) y negociada en Cali por los pioneros del narcotráfico en el Valle.

Para algunos autores, voluntarios de los “Cuerpos de Paz”, enviados por la “Alianza para el Progreso” al inicio de los sesenta, se convirtieron en los mejores propagandistas y socios para el impulso del producto y la configuración del vasto tejido traficante⁹. Otros autores nos ofrecen interesantes testimonios acerca de esta primera etapa del tráfico de drogas entre Colombia y Estados Unidos. Un contrito traficante cubano, Luis García “Kojak”, narró su participación en el negocio y mostró por dentro las incipientes organizaciones colombianas¹⁰. Sin embargo, el tráfico ilegal de marihuana no tuvo extensión en el tiempo. Según algunas fuentes, el consumo de marihuana en Estados Unidos comenzó a descender a partir de 1977, sustituido por la cocaína. Al mismo tiempo, el consumidor empezó a preferir las variedades “sin semilla”, producidas en Jamaica o en el propio Estados Unidos.

8 J. Martín y J. de Campos. El comportamiento electoral en Cali. 1978. Cali: CIDSE-Fundación Friedrich Naumann, 1980.

9 Mario Arango y Jorge Child. Narcotráfico, imperio de la cocaína. Medellín, Vieco, 1984. pp. 208 y ss.

10 Luis García. Marimba. Barcelona, Ediciones B, 1989.



La incursión de la cocaína en el mercado fue bastante rauda. Sus efectos parecían más acordes con la agitación de la época y los ejecutivos “yuppies” reforzaron la demanda. Para entonces, colombianos inmigrantes formaban parte de primitivas redes de distribución con cubanos y latinos que buscaban extender su influencia a todo el territorio norteamericano. Sin embargo, no la fabricaban todavía. La adquirían en Chile, en Bolivia o en Perú.

Jaime Caicedo, “El Grillo”, figura entre los primeros narcotraficantes colombianos que empezó a fabricar y exportar cocaína. Formado en el Barrio Obrero de Cali y ladrón de bicicletas en su juventud, se involucró en el tráfico de esa droga en forma artesanal y con pequeños envíos en vuelos comerciales bajo la mirada aún inocente de las aduanas locales y gringas. La prosperidad del negocio lo condujo a nexos con productores de Perú y Bolivia y a mejorar el camuflaje de sus remesas, cada vez mayores, con la participación de distribuidores norteamericanos. Su historia inspiró la película “El Rey”, bajo la dirección de Antonio Dorado. Su muerte violenta simbolizó también el inicio de las confrontaciones entre narcotraficantes.

A Caicedo le siguieron los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes conformaron lo que después sería conocido como el “Cartel de Cali”. De Gilberto se dijo siempre que inició sus actividades ilícitas con una banda que, dirigida por José Santacruz Londoño y apodada “Los chemas”, realizó el secuestro de dos ciudadanos suizos: Hermann Buff,

secretario de la embajada y José Stresale, hijo del cónsul de Suiza en Cali. No obstante, Fernando Rodríguez Mondragón advierte que antes de ello su padre Gilberto fue contrabandista de tela y whisky, se vinculó a la piratería terrestre e invirtió en pequeños negocios legales de droguería y fabricación casera de jarabes¹¹.

Junto a Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y José Santacruz Londoño, Gilberto Rodríguez Orejuela captó en el propio Estados Unidos lo que podría ser la profesión más lucrativa del mundo y de la época. Testigos de las actividades adelantadas por Griselda Blanco, la primera dama del tráfico ilegal de marihuana y drogas en Estados Unidos a principios de los años setenta, comprendieron que la cocaína sería el producto del futuro. La diferencia del precio de venta de la droga en Estados Unidos con el precio de su compra en Colombia y Sur América, era abismal. Todo era asunto de llevarla de un país a otro, y a ello podrían dedicarse con esmero.

Lo cierto es que, hacia 1975, Gilberto Rodríguez exportaba considerables cantidades de droga escondida en gruesos tablones de madera despachados en camuflada forma legal desde el puerto de Buenaventura hasta diversas bodegas y empresas ficticias en Estados Unidos. Poco después, los primeros embarques hacia Europa se enviaron ocultos en pie-

11 Fernando Rodríguez, Antonio Sánchez. El hijo del “ajedrecista”. Bogotá, Oveja Negra – Quintero editores, 2007, pp. 73 a 76.



dras huecas de carbón mineral. Miguel Rodríguez Orejuela, supervisor de vuelos en la aerolínea Avianca, dependiente de una droguería y estudiante principiante de derecho, abandonó sus ocupaciones para seguir el ejemplo de su hermano Gilberto¹².

Las operaciones de traslado de la droga e inversión financiera de los Rodríguez Orejuela tuvieron variables diferentes. No sólo privilegiaron las empresas de fachada y los envíos embozados en mercancías legales, sino también una rápida inserción en el mundo abierto del dinero. A través de importantes cadenas de firmas como “Laboratorios Kressfor”, “Drogas La Rebaja”, “Grupo Radial Colombiano” y “Corporación Financiera de Boyacá”, los hermanos Rodríguez intentaron penetrar al mundo legal del capital como acaudalados inversionistas.

A mediados de los años setenta, Gilberto Rodríguez se convirtió en principal propietario y miembro de la Junta Directiva del “Banco de los Trabajadores”, una institución creada con donaciones iniciales de la Fundación Interamericana para la Unión de Trabajadores de Colombia, la

agremiación sindical obrera más importante del país en ese entonces. Con este aval, en 1978 inició la compra de acciones del “First Interamericas Bank” de Panamá, que culminó en 1984 con más del 75 % del banco en su poder. A través de un pacto de participación con el muy reconocido Banco Cafetero de Panamá, el “First Interamericas Bank” utilizó las cuentas que el primero poseía en las sucursales del Irving Trust de Nueva York, para confundir el lavado de dólares con los enormes movimientos de capital que las exportaciones de miles de sacos de café producían legalmente a Colombia. Dos décadas más tarde, el Departamento del Tesoro Americano publicó la lista de un centenar de empresas cuya propiedad se adjudicaba a los Rodríguez Orejuela. Entre ellas figuraba la adquisición de la franquicia de Chrysler que, con el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, hicieron en 1978 para más de 40 almacenes de repuestos en todo el país.

En política, los métodos de los Rodríguez fueron diferentes a los de otros capos; más discretos y eficaces. Sin participar directamente en la actividad proselitista, prefirieron comprar el apoyo parlamentario y gubernamental con la financiación de las campañas electorales y el pago de todo tipo de servicios. Tal como se demostró mucho después, los Rodríguez no bromeaban totalmente cuando se jactaban del poder suficiente para “citar una convención liberal” o “reunir quorum del Congreso”. El “Cartel de Cali” optó, además, por establecer alianzas con las elites regionales a través de sus inversio-

12 Importantes datos acerca de los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios del llamado ‘*Cartel de Cali*’ pueden encontrarse en: Edgar Torres y Armando Sarmiento. *Rehenes de la Mafia*. Bogotá, Intermedio editores, 1998. Fabio Castillo. *Los nuevos jinetes de la Cocaína*. Bogotá, Oveja Negra, 1996. Camilo Chaparro. *Historia del cartel de Cali: el ajedrecista mueve sus fichas*. Bogotá, Intermedio, 2005. José Gregorio Pérez. *La caída de los Rodríguez: persecución, captura y extradición*. Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2005, y *Operación Cali pachanguero: de la captura a la extradición de los Rodríguez Orejuela*. Bogotá, Intermedio, 2005.



nes en la economía legal y la figuración en los principales eventos sociales de la ciudad. Los Rodríguez Orejuela tuvieron cierto hálito ejecutivo. Se les consideró hombres de negocios y se movieron con mayor libertad por los ámbitos ciudadanos. Hinchas del deportivo Cali pero socios del Club América, sacaron campeón nacional al equipo por primera vez en 1979 y disputaron sin éxito varias Copas Libertadores de América.

La primera gran guerra en su carrera delictiva la libraron contra Pablo Escobar, apoyado por Gonzalo Rodríguez Gacha, a partir de 1988. Las crónicas revelan como origen de la disputa el secuestro de un narcotraficante del Valle aliado de Pacho Herrera, un experto lavador de dólares vinculado a José Santacruz Londoño, en quien los Rodríguez depositaron toda su confianza. A pesar de pagarse la cantidad exigida por la 'oficina' de Escobar, en dólares y droga, el hombre fue asesinado por supuestos 'líos de faldas'. Escobar solicitó inmediatamente a los Rodríguez la entrega de Herrera, que fue totalmente negada y abrió paso a una cruenta guerra de masacres y dinamita entre los *carteles*.

En efecto, a principios de 1988, el edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar en Medellín, fue destruido parcialmente por una potente carga de dinamita. La explosión mostró la riqueza y excentricidad de los narcos e hizo pública su guerra. Un comando de Escobar ingresó a la hacienda de Pacho Herrera, en su búsqueda, y asesinó a 19 personas. Por doquier empezaron a estallar petardos contra las sucursales de "Drogas la Rebaja" y las

emisoras del "Grupo Radial Colombiano". Sólo un acuerdo quedó claro: en la guerra no se tocarían las familias¹³.

La inclusión por las armas

A diferencia de Escobar, los capos de Cali no intentaron reclutar para su organización a los jóvenes de estrato bajo, ni jugaron al paternalismo con las comunas pobres. Como alternativa, sin embargo, unos y otras buscaron otra forma de inserción a través de la política insurgente.

De repente, en 1985, los rostros juveniles del desarraigo se asomaron a las ventanas de la ciudad con la palabra "compa". Jóvenes sin camisa ni zapatos, niños con lombrices que sólo recibieron leche cuando el M-19 les llevó un furgón secuestrado hasta sus casas, hombres y mujeres sin esperanza ni futuro, se encontraron con que aquellos que les visitaban antes con capucha llegaban ahora con el rostro al aire para hablarles de la necesidad de un nuevo pacto social y de un nuevo país. Tal como sucedió en Yumbo pocos años antes, florecieron en Cali los simpatizantes del cambio por la vía armada. Pero, aunque su realidad fue precaria y su fortaleza circunscrita a muy contados sectores, "pellizcaron" a una élite social que no esperó jamás, desde la óptica de sus clubes privados, presenciar tal espectáculo: en Siloé, por ejemplo, los vieron

13 Cf. Adolfo Atehortúa y Diana Rojas. "El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos", en *Historia y Espacio*. Cali, Universidad del Valle, No. 29, segundo semestre de 2008.



formar con armas y palos evocando al Libertador en Ayacucho; en Aguablanca los vieron, amenazantes, intentando sustituir la autoridad como en Corinto y expresando su felicidad con patrullajes que erradicaron los robos menores y el comercio del bazuco. El 1 de mayo de 1985, un millar de jóvenes, muchos de ellos sin camisa ni zapatos, se unió a la marcha de los trabajadores y realizó en ella una parada militar con bastones de madera.

En lugar de pensar en la dotación de los servicios públicos, en las escuelas, en la pavimentación de calles, en alternativas a la problemática social, el Estado llegó a través de oscuros actos y masacres: cayó el cura Daniel Guillard que alentaba a los pobres en la construcción de barrios, y decenas de estudiantes de la Universidad del Valle, como Gerardo Valdés e Iván Darío López, que los organizaban y los vinculaban al M-19.

Sin embargo, nada parecía suficiente para barnizar el rostro de esa Cali desafiante. Enfrentados a una situación que consideraban en extremo peligrosa, miembros prestantes de los cuerpos armados del Estado, motivados por el silencio o el consentimiento explícito de ciertos sectores de la élite y el apoyo financiero de los narcos, decidieron ensayar el exterminio. No sólo era la presencia del M-19 en los barrios marginales; la masacre del Dinners, ejecutada por jóvenes que aspiraban al ascenso social por la vía del atraco, fue utilizada como una prueba más de la urgencia de “limpiezas”. Al fin y al cabo, los miembros de los aparatos de seguridad aprendieron el camino con la retoma

sangrienta del Palacio de Justicia, seguida por la retoma igualmente sangrienta de Siloé: un espectáculo desolador, profundamente lesionador de los derechos humanos, que no se desplegó contra los guerrilleros en retirada sino contra la población indefensa y confundida.

La violencia “desde arriba”

Hasta el año de 1984, las causas de mortalidad más importantes en el departamento del Valle y en su capital Cali, fueron las “enfermedades cerebro-vasculares” o aquellas relacionadas con enfermedades del corazón y trastornos hipertensivos. A partir de 1985, gracias a la política de exterminio y a la iniciación de las “limpiezas” contra izquierdistas, simpatizantes del M-19, pobres y discriminados, los “ataques con armas de fuego”, así como las “lesiones ocasionadas por otras personas”, pasaron a ocupar el primer puesto entre las causas de muerte en la ciudad y la región¹⁴.

La herencia del M-19, abandonada por la organización, alcanzó a enseñar esquemas de violencia y dejó también las primeras armas en los barrios. No obstante, ante la historia, su influencia no fue tan definitiva en la generación de violencia como la respuesta ofrecida por ciertos sectores civiles y uniformados, nacionales y regionales, frente a su desafío. El sonoro aplauso por parte de las elites regionales frente a

14 Cf. Anuarios Estadísticos del Valle, 1980-1985. Consejo Departamental de Estadística, Gobernación del Valle.





las acciones violentas que arrebataban territorios barriales a la influencia guerrillera y los devolvían a la policía, por ejemplo, no permitió escuchar el coro de los ultrajados inocentes, despojados y miserables de estirpe, que de la humillación pasó al odio y del odio al desquiciamiento de la violencia o a cualquier tipo de venganza.

Al tiempo que en los muros de la ciudad se pedía una “Cali limpia, Cali linda”, escuadrones de la muerte asesinaron en los barrios a decenas de jóvenes, a quienes el desamparo de la sociedad sólo les había ofrecido la posibilidad de unirse a la guerrilla o de pasar al bazuco y al raponazo para sobrellevar y distraer en las esquinas del barrio el hacinamiento a que estaban obligados en las pocilgas de sus familias.

Un aprendizaje fue importante para los escuadrones de la muerte: la experiencia adquirida con la primera incursión directa y pública de los carteles de la mafia en materia de violencia. Ella se suscitó a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa Vásquez, hermana de Jorge Luis, por parte de la organización guerrillera M-19, en

1981. Los capos de la mafia coincidían en la defensa de sus intereses: si se pagaba un solo secuestro, los guerrilleros se apoderarían de todos sus ingresos a través de este medio. La decisión se dio a conocer con un nombre orgánico: el grupo “*Muerte A Secuestradores*” (MAS), cuyo boletín de fundación citó el encuentro de “223 jefes de la mafia para hacer frente al secuestro”: cada uno de ellos aportaba dos millones de pesos y diez de sus mejores hombres para ejecutar a los secuestradores¹⁵. La partida de bautizo se ofreció en un clásico de los equipos América-Nacional, jugado en la ciudad de Cali: avionetas arrojaron desde el cielo el panfleto que anunció la creación del MAS.

En sólo quince días, las acciones del MAS fueron contundentes: capturó más de 25 personas acusadas de pertenecer al M-19, y esclareció el hecho. Finalmente, logró la libertad de la secuestrada sin cancelar un centavo, y entregó algunos guerrilleros detenidos a las fuerzas de seguridad del Estado. A largo plazo, los resultados del MAS fueron de otro orden. Enfrentados a un enemigo común, narcotraficantes y miembros de las Fuerzas Armadas trazaron líneas de acercamiento insolubles. Con el MAS, por supuesto, importantes sectores de la Fuerza Pública descubrieron que era posible realizar un *trabajo sucio* mucho más efectivo contra el movimiento guerrillero, sin comprometer la imagen de sus instituciones. En una situación similar, pero posterior, José San-

15 Cf. Darío Villamizar. *Aquel 19*. Bogotá, Planeta, 1995.



tacruz Londoño respondió al secuestro de su hermana, por parte de las FARC, con el secuestro de miembros de la Unión Patriótica y familiares o allegados de comandantes insurgentes.

De esta manera, la acción insensible de los escuadrones de la muerte construyó un conflicto de mayores dimensiones cuyos frutos se recogieron poco tiempo después. Las autoridades regionales no se percataron: delante de ellas, o con ellas, los narcos tuvieron un motivo más para trazar alianzas con sectores militares. En el terreno urbano se expresó así el anticipo de la funesta alianza que dejaría centenares de víctimas en Trujillo, el Nilo y Riofrío, antes de los noventa. Surgió con “inocentes” sobresueldos y reconocimientos financieros a sus acciones de vigilancia y limpieza; creció como premio al cuidado y patrullaje de sus barrios y mansiones; se instauró como recompensa por el apoyo a su negocio, por los servicios prestados y la vinculación directa o indirecta a sus propias estructuras. Los narcos se fueron apoderando de la ciudad con el apoyo o el silencio de las fuerzas armadas que habían comprado bajo el pretexto de ayudarles a perseguir la subversión y el delito. Situaciones similares se presentaban en otras partes del país. Ocurrió la Masacre de Mejor Esquina en Córdoba y a ella siguieron las de El Tomate –ambas en 1988– y toda una serie de horribles acciones en Urabá. Los grupos paramilitares empezaron a coordinarse y la Masacre de Trujillo (1989-1990) no fue ajena a ese propósito.

Los nuevos narcos

Sin disputar inicialmente el reinado de los Rodríguez, de José Santacruz y Helmer Herrera, surgió al norte del Valle una gama de narcotraficantes menores que ganó cada vez más importancia y presencia a lo largo de los años ochenta. Entraron al negocio en pleno *boom* del consumo en Estados Unidos, y lo hicieron con rutas y mercados propios. Cuando estalló la guerra entre los *Carteles* de Cali y Medellín, los del norte del Valle se declararon neutrales. Entonces, ni Escobar ni los Rodríguez quisieron entrar en una disputa adicional. Luego, poco a poco, los hombres del norte del Valle se apoderaron de segmentos del mercado abandonados por la crisis de Escobar, y compartieron con los Rodríguez una ruta por el Océano Pacífico que se convirtió en la más importante puerta de ingreso de la droga hacia Estados Unidos al inicio de los noventa. En forma paralela, los narcos del norte del Valle construyeron un importante aparato de violencia que estableció tempranos vínculos con los grupos paramilitares de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, cada vez más fuertes.

La primera reseña que se hizo de esta organización fue la de Iván Urdinola Grajales. Según se dice, su relación con el negocio la inició al final de los años ochenta como distribuidor en la ciudad de New York, donde vivía. Su cumplimiento le permitió establecer contactos con Pablo Escobar y Helmer Herrera, razón primaria para su posterior neutralidad, pues sirvió a ambos en Newark, Houston, Detroit y



Chicago. Detectado en Estados Unidos regresó a Colombia, a su tierra, y creó su propia empresa exportadora hasta ganar, en medio de la guerra entre “carteles”, una fortaleza cada vez mayor.

Hasta 1990, ni la DEA, ni las autoridades colombianas, mencionaron con asiduidad otro capo del norte del Valle. Sin embargo, la investigación adelantada por una masacre continuada y atroz ocurrida en el municipio de Trujillo, arrojó dos nuevos nombres: Henry Loayza, más conocido como “El Alacrán”, y Diego León Montoya. Con el propósito definitivo de apoderarse de la región, grupos paramilitares al mando de los traficantes y apoyados por un destacamento del ejército, secuestraron, torturaron y asesinaron con sierra a más de cien personas simpatizantes de la guerrilla, o simplemente organizadas en cooperativas impulsadas por el párroco del pueblo, quien corrió la misma suerte. Un testigo de los hechos, informante del ejército, se presentó arrepentido a las autoridades e implicó a narcos y militares. La justicia penal militar, la justicia ordinaria y la procuraduría, los absolvieron. El testigo fue declarado “loco” y días después asesinado. El expediente judicial, sin embargo, está pendiente y existe aún la perspectiva de reiniciar su curso¹⁶.

Poco después empezó a escucharse un nuevo nombre: Víctor Patiño Fómeque.

Las autoridades norteamericanas levantaron cargos en su contra como responsable del envío masivo de cocaína hacia Estados Unidos. Ex-policía, Patiño tuvo a su cargo una importante ruta marítima que utilizaba con barcos pesqueros desde Buenaventura y que colocó a disposición de los Rodríguez y de Urdinola. La DEA lo apodó el “atún blanco”.

A partir de 1993, los nombres de su-puestos integrantes del llamado Cartel del Norte del Valle, empezaron a escucharse con mayor regularidad. No obstante, las versiones fueron contradictorias. A Urdinola, por ejemplo, se le señaló siempre como jefe. Pero en 1996, cuando en un centro comercial de Bogotá murió asesinado Efraín Hernández, se dijo que era éste el verdadero capo del norte del Valle. Sin embargo, estaba libre y dedicado a actividades legales. Poco antes, la DEA había señalado al mismo Urdinola como subordinado de su cuñado Arcángel Henao Montoya, y luego colocó como máximo jefe de la organización a Orlando Henao Montoya, a quien acusó de establecer vínculos con el mexicano Amado Carrillo, encargado de pasar la droga desde su país a Estados Unidos. Asesinado Orlando Henao como consecuencia del conflicto desatado entre los hermanos Rodríguez Orejuela y grupos del norte del Valle, la jefatura osciló entre Wilber Varela y Diego León Montoya.

En forma consecutiva, la DEA añadió otros nombres al llamado Cartel del Norte del Valle. Entre más de dos docenas de sindicatos, aparecieron Juan Carlos Ramírez, “Chupeta”, Juan Carlos Ortiz, “Cu-

16 Cf. Adolfo Atehortúa. El poder y la sangre. Las historias de Trujillo – Valle. Bogotá: Cinep, Universidad Javeriana Cali, 1995.



chilla”, Hernando Gómez, “Rasguño”, Jesús Amado Sarria, conocido en Colombia como esposo de “la monita retrechera”, y otros menos conocidos que incluso aparecieron negociando directamente con la oficina antidrogas de Estados Unidos. La claridad comenzó a ganarse con el tiempo y de ello dan cuenta producciones recientes como “El cartel de los sapos”¹⁷, escrito desde las entrañas de la mafia.



La degradación

El poder de los “señores”, sumado al comportamiento cómplice, condescendiente y/o impotente de las autoridades con ellos y su “negocio”, dio lugar a otra consecuencia: “traquetos” y “lavaperros”, esbirros armados de los narcos, se sintieron autorizados para vilipendiar y matar. Fue el latigazo versátil de la violencia, indiscriminado pero igualmente atroz y sanguinario.

La “subcultura del traqueto”, así como el papel jugado por ella en el incremento de la violencia en Cali, merecería un estudio aparte. Con un estilo de vida entre arrogante, derrochador y sórdido, los “traquetos” se hicieron notorios en barrios de estrato medio y popular. El contacto con la mafia les permitió un ascenso económico paulatino pero no les permitió un ascenso social. Frustrados por el reconocimiento que no alcanzaban en las altas esferas, dieron rienda suelta a sus delirios de grandeza con los instrumentos que su cultura y el “éxito caído del cielo” colocó en sus manos.

Los “traquetos” invadieron la ciudad con toda libertad y desparpajo. Es más, se convirtieron en prototipo social envidiable para muchos sectores que anhelaban el dinero fácil y la vida plástica. Sin embargo, lo más crítico y difundido de los “traquetos” fue su conducta de muerte. Miles de historias narran hoy que un sencillo accidente de tránsito, una mirada mal entendida, una relación sentimental rechazada, o el simple hecho de tener a la novia más bonita de la discoteca, por ejemplo, eran motivo suficiente para perder la vida a manos de un “traqueto”. Con ellos se popularizó, también, el surgimiento de las llamadas “prepagos”: modelos y actrices de diferentes estratos cuya presencia adornó las fiestas y bacanales de mafiosos y traquetos, al lado de orquestas y conjuntos que hicieron más célebres las ferias de la caña.

¹⁷ Andrés López. El cartel de los sapos. Bogotá: Planeta, 2008.





Epílogo

Al seguir los estudios acerca de la violencia en Cali durante los años ochenta e inicio de los noventa, se encuentra con claridad la existencia de un nuevo tipo de violencia política que, al responder a múltiples formas de dominación, decide el exterminio de todo aquel que ofrezca peligro, real o supuesto, al “nuevo orden social” “limpio y entre iguales”, que se sueña construir o se idealiza. Un “nuevo orden social” en el que no caben los jóvenes de “parches”, los comunistas, los opositores, los mendigos, los viciosos, los travestidos, los invasores, los “desechables”; todos ellos víctimas de una violencia política que pretendió ocultarse bajo el pretexto de “ajustes de cuentas entre delincuentes” y que abrió las puertas para el ingreso del narcotráfico hacia una duradera alianza con policías, militares, y personajes importantes de la política y la sociedad.

La fortaleza de los aparatos ejecutores se midió con sus hechos. Se presentaban motorizados en la esquina de un barrio y

disparaban contra decenas de jóvenes y niños. A diario aparecían cadáveres con aterradores signos de tortura y sevicia, clavados con carteles alusivos a la presunta razón de su muerte o al “emblema justiciero” con etiqueta de insecticida¹⁸. Uno de los hechos más estremecedores fue el ametrallamiento, a altas horas de la madrugada, de una docena de desvalidos mientras dormían cerca de la estación del tren, y de una decena de travestis que ofrecían sus servicios en las calles del norte de Cali.

Así, en un ambiente desinstitucionalizado, ausente de Estado, con lógicas y poderes diversos que fragmentaban a las comunidades sin esperanza, creció en forma vertiginosa el desespero y la resistencia a través de la violencia y del delito. No se pudo menos: al propio Henry Holguín, quien levantó su candidatura muy cerca de los miserables de Cali, denunciando “chanchullos” en las Empresas Municipales y llamando a “cobrar las cuentas atrasadas a las barrigas llenas de la oligarquía”, se le intentó quitar del paso con las armas.

La violencia creció con experiencias y necesidades arrojadas por la vida cotidiana. Los jóvenes, particularmente, encontraron en el “parche” la posibilidad más clara de construir los espacios sociales y

¹⁸ Aún en los barrios se recuerda, por ejemplo, la acción de “Kankil” y “Black Flag”, nombres con los cuales se identificaron escuadrones de la muerte dedicados al asesinato con sevicia de decenas de jóvenes acusados de ser “ladrones”, “jaladores” o “viciosos”.



los referentes de identidad que la sociedad tradicional les negaba. Nacieron las “pandillas”, organizaciones incipientes de los jóvenes de barrio que, dedicadas a diversos tipos de violencia, atracos, hurtos, expendio y consumo de estupefacientes, llegaron a sumar algunos centenares. Se destacaron, entre ellas, la “Playboy”, surgida en Siloé; “Los Blandones”, a partir de una familia en Terrón Colorado; “Los Chicos malos”, del barrio Simón Bolívar; la poderosa “Pink Floyd”, del sector Alfonso López; la “Muller”, de Floralia; “La Banca”, de Puerto Mallarino; “Los duros de Simón”, en la Comuna ocho; “Los Tetras”, del barrio Lleras Camargo; “El parche de Julio”, en la Comuna trece, y “La luminosa” en Nueva Floresta y El Rodeo, barrios de Aguablanca¹⁹. Con este tipo de agrupaciones buscaron, a través de la fuerza y la agresión, el reconocimiento, la dignidad y la justicia que la ausencia de una democracia real les arrebatada, e hicieron de la violencia el instrumento que los mostró ante la ciudad con sus angustias y representaciones.

En un círculo vicioso que reflejó aún más la debilidad del Estado, las instituciones públicas respondieron al incremento de la violencia con mayor violencia; los cuerpos de seguridad colocaron al orden del día el irrespeto a los derechos humanos y enterraron con ello retazos importantes de la legitimidad de que gozaban. El deterioro socioeconómico se combinó con el deterioro común de valores y principios, con la corrupción más aberrante y el desgüeño de lo administrativo. Entonces, tal como sucedió en los sesenta

A sí, en un ambiente desinstitutionalizado, ausente de Estado, con lógicas y poderes diversos que fragmentaban a las comunidades sin esperanza, creció en forma vertiginosa el desespero y la resistencia a través de la violencia y del delito.

como fruto de la violencia de los cincuenta, la sinrazón de la violencia se apoderó de muchos espacios de la vida cotidiana en los noventa, gracias a la violencia de los ochenta²⁰.

La corrupción e impunidad generalizadas, añadidas a un panorama nacional poco halagador en materia de seguridad y derechos humanos, propiciaron igualmente múltiples conflictos y guerras. Si el “bombardeo” contra Siloé fue punto de partida, no menos grave fue la horrenda masacre de Tacueyó perpetrada por el grupo “Ricardo Franco” y en la cual se involucró a más de un centenar de jóvenes caleños. La continuación de la guerra por parte del movimiento guerrillero, la

19 Cf. Adolfo Atehortúa. La violencia juvenil en Cali. Cali, Secretaría de Gobierno Municipal, 1992.

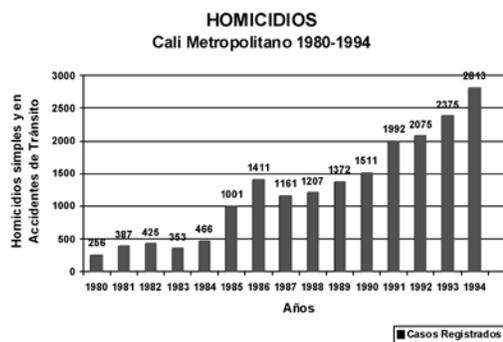
20 Sobre la violencia en Cali, durante la década de los ochentas, consúltese: Adolfo Atehortúa. “Aproximación histórica y actual al contexto general de las violencias en la ciudad de Cali”, en, Esbozo de una matriz estratégica para construir paz. Cali: Univalle, 1998. Así mismo, “Sueños de Inclusión. Bogotá: Universidad Javeriana Cali-Cinsep, 1998.



masacre del “Batallón América” del M-19 que, conformado por centenares de jóvenes caleños pretendió en vano asaltar la ciudad, la acción abierta de los grupos paramilitares y encubierta o descarada de sectores pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado, la sevicia de los escuadrones de la muerte, las atrocidades de las “limpiezas” y de los aparatos de sicarios, la insensibilidad de “justicieros” y “milicias”, el abuso de narcos y “traquetos”, el crimen organizado tras el imperio del más fuerte, las mil y una guerras sucias desatadas a lo largo y ancho del país, incluyendo el conflicto entre los carteles, fragmentaron una ciudad ya dividida por estigmas sociales, ausencias y debilidades del Estado. Los viejos modelos que sirvieron de cohesión en las barriadas, los referentes colectivos, los procesos tradicionales y primarios de socialización, de hecho cuestionados por la historia, se mostraron aún más deficientes, como lo fue la estructura familiar, la escuela, y hasta la misma iglesia.

En estas circunstancias, en menos de diez años, la ciudad de Cali pasó, de 23 homicidios por cada cien mil habitantes en 1983, a 104 y 124 en 1993 y 1994 respectivamente. A partir de 1987, la Tasa de Homicidios ocurridos en la capital del departamento inició un ritmo ascendente que sólo se detuvo en 1994, una vez quintuplicada. Cali dejó de ser la urbe “cívica”, “dulce”, “rumbera” y “deportiva”, para convertirse en la “ciudad caliente”²¹.

Claro está que, hasta cierto punto, la hipótesis hasta ahora presentada con base en el devenir histórico puede pare-



Fuente: DANE, Medicina Legal, SIJIN.

cer simple. Y lo sería si con ella pretendiera explicarse absolutamente todo lo sucedido. Pero no es así, la complejidad de las violencias presupone también una complejidad en sus causas. Sin embargo, es evidente la existencia de un hilo conductor, de un cauce mayor que atrae a sus orillas la gran mayoría de los actos de violencia. Cali no es el único ejemplo que puede citarse para comprobar el efecto “woomerang” de la violencia desatada desde arriba, de la llamada “limpieza social” y de los escuadrones de la muerte.

Por supuesto, el análisis prosigue con los sucesos ulteriores. El hallazgo de importantes documentos en diversos allanamientos realizados a empresas de propiedad de los Rodríguez y su contabilidad, dejó en claro la existencia de 6400 operaciones financieras realizadas en un solo banco para favorecer la campaña presi-

21 Así denominó a la ciudad la revista *Semana*: “Cali Caliente”, “Pistolandia” o “Traquetolandia”. *Semana*, noviembre 30 a diciembre 7 de 1993, pp. 38-45.



dencial de Ernesto Samper con una suma superior a tres mil millones de pesos; para patrocinar a considerables grupos de congresistas, oficiales y agentes de la Policía y otros cuerpos de seguridad, también al Procurador General de la Nación y al Contralor, así como para costear todo tipo de apoyos particulares. A nombre de empresas ficticias, creadas con el propósito de girar con libertad sus dineros, otras entidades bancarias registraron, según la investigación conocida como “Proceso 8000”, más de 40 mil transacciones.²²

Finalmente, los hermanos Rodríguez Orejuela y sus más cercanos aliados fueron detenidos, condenados en Colombia y luego extraditados a Estados Unidos, en donde negociaron con la justicia norteamericana para asegurar la tranquilidad de sus familias, sin evitar la entrega y detención del hijo mayor de Miguel. José Santacruz Londoño fue asesinado pocos días después de su evasión de una cárcel. Helmer Pacho Herrera fue asesinado por un sicario al interior de la penitenciaría, en guerra con los capos del norte del Valle. Después de ello, los capos sobrevivientes intentaron de diversas maneras una negociación directa con la DEA y las autoridades norteamericanas, o se enfrascaron en una terrible guerra interna que involucró

No cabe duda que los narcos de Cali y del norte del Valle alcanzaron el dominio del mercado interno e internacional y lograron una infiltración importante en sectores legales de la economía, en la política y en los aparatos coactivos del Estado.

incluso a los grupos paramilitares y que dejó como consecuencia una larga estela de delaciones, prisión y muerte.

No cabe duda que los narcos de Cali y del norte del Valle alcanzaron el dominio del mercado interno e internacional y lograron una infiltración importante en sectores legales de la economía, en la política y en los aparatos coactivos del Estado. De alguna manera, no sólo influyeron en la sociedad y en la cultura, también la transformaron.

Más allá del crimen y del aumento de sus estadísticas, la vida cotidiana en Cali, como en Medellín, presentó considerables cambios. Como se dijo arriba, a principios de los años noventa la presencia del narcotráfico era evidente a todas luces. Tras la persecución a los grandes capos, el ambiente se transformó de nuevo. La imagen de los pistoleros que se creían dueños de la ciudad disminuyó ostensiblemente. Y disminuyó también la inusitada marcha de la construcción, el precio de la tierra y de las propiedades urbanas, la cantidad de almacenes suntuosos y las joyerías, el mercado de las flores y

22 Las circunstancias del escándalo así como el llamado ‘proceso 8.000’ se encuentran ampliamente referenciados en: Francisco Leal Buitrago. *Tras las huellas de la crisis política*. Bogotá, Tercer Mundo Editores, IEPRI Universidad Nacional, 1996; Santiago Medina. *La verdad sobre las mentiras*. Bogotá, Editorial Planeta, 1997; Mauricio Vargas et.al. *El Presidente que se iba a caer*. Bogotá, Planeta, 1996.



el comercio entero, las empresas deportivas y el éxito de los equipos de fútbol. Se disparó, en cambio, el asalto contra el erario público; como si algunos políticos y funcionarios, huérfanos de los narcos, no tuvieran otro recurso. El departamento del Valle y su capital Cali se declararon en quiebra. La dirección política, en su mayoría, terminó en la cárcel.

No puede decirse, por completo, que la responsabilidad de todo ello recaiga sobre el narcotráfico. La realidad de Colombia es bastante compleja y son

muchos los actores y escenarios que se cruzan en su construcción. Los estudios, además, son todavía frágiles. El problema del narcotráfico no ha sido tratado en forma clara y suficiente. El peligro que se cierne sobre todos aquellos que intenten acercarse al tema es real. Pero también, hasta ahora, se dedicó más atención a sus consecuencias, la violencia por ejemplo, que a su estructura interna y sus contenidos sociales.

La academia tiene mucho, quizá demasiado, para decir sobre el tema.

✖



DE BANDAS, CARTELES Y MAFIAS

Narcotráfico: historia social y su influencia en la conformación delincuencia

De delincuentes, organizaciones y carteles en Colombia

Iván Cubillos¹

El llamado crimen organizado se ha constituido a través del tiempo ajustado al desarrollo de las sociedades y a la evolución de su devenir histórico. Cada acto del ser humano de manera individual o como asociado a un grupo de personas obedece a características propias del desarrollo de la sociedad a la que pertenecen. Desde lo individual, la implantación del capitalismo y su manera particular de inocular los valores, viene a generar la ambición del hombre sin unos mínimos éticos que lo restrinjan. Desde lo colectivo, las expresiones de asociaciones criminales se forjan bajo el

prestigio y el cumplimiento de un rol social. Primero se era bandolero, bandido, asaltante de caminos; después, asaltante de bancos, secuestrador; luego ladrón de cuello blanco, político corrupto o narcotraficante.

Es posible estudiar a una sociedad tomando como ejemplo las instituciones criminales que produce. Desde el robo provocado por el hambre o las organizaciones para comerciar sustancias químicas prohibidas, hasta la organización de

¹ Investigador independiente.



instituciones criminales como la corrupción política, sirven como ejemplo para analizarla. A través de una organización criminal se puede estudiar la forma de gobernarse, la atención que sus dirigentes prestan a sus miembros, sus expresiones culturales, sus creencias religiosas, su forma cotidiana de vivir y su forma de aplicar justicia. Platón se hacía la pregunta ¿Qué es la justicia? y para responderla observó la ciudad, sus personas, sus oficios y sus motivaciones haciéndose a través de ellos una idea de lo justo.

En todo caso, como dijo el desaparecido Presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, es imposible pensar en una sociedad sin delito, mínimamente posee desviaciones, ni siquiera en la ideal sociedad comunista; pues, si existiera, se estaría hablando de una sociedad de ángeles.² La sociedad colombiana se ha debatido entre guerras internas que han producido calamidades familiares como la pérdida de un ser querido, el desplazamiento forzoso o una quiebra económica. El magistrado Reyes Echandía dijo que la calamidad financiera familiar que surge a raíz de una guerra propicia el aumento de los delitos entre la población, como el robo o el mercado negro.³

Desde los tiempos de las guerras civiles existe una relación entre la violencia política y la delincuencia que ha servido además para enriquecer la literatura regional como en el caso de Jesús Antonio Osorio Lizarazo quien dedicó parte de su tiempo a escribir la crónica del departamento de Santander y quien dice que “los odios de las guerras civiles se prolonga-

ron en Santander por sobre los años de paz (...) en la provincia de Vélez, donde románticos bandidos ejercieron, una dominación implacable, eludieron la persecución de la Ley y rindieron su vida en una lucha que fue triunfal hasta para los cadáveres perforados por las balas innumerables que fueron necesarias para poner término a sus proezas estupendas. Todos comenzaron la gran trayectoria de sus vidas al margen de la Ley, por un hecho insignificante o por una infracción de policía. Pero como los rencores hallábanse vivos e intactos el anhelo de represalia contra los atropellos de la revolución, los vencedores aplicaban sobre los vencidos todo el peso de su poderío para inculparlos bajo la influencia de la flamígera pasión política”⁴.

Delincuentes de las tres primeras décadas del siglo XX fueron conocidos como bandidos y algunos se conocieron por su manera de actuar al estilo de Robin Hood, protegiendo a los desamparados de los poderosos y haciéndose querer por las gentes del común. El santandereano José del Carmen Tejeiro fue apoyado por muchos campesinos que veían en sus acciones un ánimo de justicia popular. Por ese entonces era perseguido por su supuesta participación en el incendio de la hacien-

2 Alfonso Reyes Echandía. *Criminología*. Bogotá: Editorial Temis, 1987, p. 151

3 *Ibid.*, p. 152

4 José Antonio Osorio Lizarazo. *Fuera de la Ley: Historias de Bandidos*. Bogotá: Talleres Gráficos Mundo al día, 1940, p. 5





da del Mayor Cuevas conocido tirano de la provincia de Vélez; su astucia lo llevó a invertir los papeles pasando de perseguido a perseguidor pues Tejeiro flagelaba sus enemigos y los castigaba con crueldad humorista, porque después les pedía recibos de los latigazos con que los había sancionado consiguiendo con estas acciones justicieras la protección de los campesinos.⁵

Otro de los estudiosos de esta parte de la historia es el escritor Pedro Claver Téllez quien describe a los bandidos en su libro "Crónicas de la Vida Bandolera". A mediados del siglo XX Roberto González alias "Pedro Brincos", se presenta como un líder, quien con un ideal de justicia e igualdad social, entrenaba cuadrillas en el Tolima y pertenecía al Movimiento Obrero Estudiantil Campesino MOEC. A pesar de que Tejeiro no operaba sólo, la organización de "Pedro Brincos" deja ver un nivel diferente de estructuración.⁶ El caso de Tejeiro es conocido como bandolerismo social mientras que el de "Pedro Brincos" como bandolerismo político.

Eric Hobsbawn, reconocido historiador, plantea que "(...), la historia del bandolerismo, incluido el bandolerismo social, no puede entenderse ni estudiarse bien excepto como parte de la historia del

poder político, el cual, en sus niveles más altos, es el poder de los imperios y los estados"⁷ y más adelante agrega: "(...), una epidemia de bandolerismo representa algo más que una simple multiplicación de hombres capaces, que toman por la fuerza de las armas lo que necesitan antes que morir de inanición. Pueden reflejar la distorsión de toda una sociedad, la aparición de estructuras y clases sociales nuevas, la resistencia de comunidades o pueblos enteros frente a la destrucción de su forma de vida"⁸.

Las personas aprendieron a tomar actitudes que les garantizaran la subsistencia de ellos y de sus familias en ocasiones desafiando la ley debido a las pocas opciones que les dejaban. La sociedad resuelve sus problemas utilizando las guerras y el hombre que pertenece a ella se adapta para enfrentar la crisis en ocasiones olvidando su obediencia a la ley, cuando su instinto de sobrevivencia así lo exige. "Aunque a través de la historia el Estado, las autoridades y las élites siempre han tratado de soslayar el agrado que entre la población despierta este tipo de personajes (recuérdense los casos de "chispas" y Efraín González en la violencia del cincuenta), es imposible perder de vista que numerosos individuos que

5 Ibid., p. 55

6 Pedro Claver Téllez. Crónicas de la Vida Bandolera. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1987

7 Eric Hobsbawn. Bandidos. Barcelona: Editorial Crítica, 2001, pp. 25,26

8 Ibid., p 39



se ponen al “margen de la ley”, quienes inclusive en muchos casos están comprometidos en crímenes horrendos, generan extraordinaria atracción en las gentes del “común” pues, pese a lo socialmente aceptado (y a su manera), ellos también construyen grandes “bases sociales de apoyo” y, quiérase aceptar o no, también “hacen historia” delinquiendo.”⁹ Ulf Hannerz, estudioso del comportamiento del hombre en las ciudades, dice que siempre se tiende a cruzar la línea que divide lo normal de lo que está prohibido y que se tiene la disponibilidad para hacerlo.¹⁰

El manejo de la tierra y su propiedad se convierte en elemento esencial para observar cómo se forma el personaje delincinencial en su transición del campo a la ciudad pues a los ejemplos de concentración de riqueza que observa en los terratenientes, adjuntará posteriormente los observados en la ciudad, pues su manera de ver el mundo es influenciada por lo que ve en ella. El hombre que llega a las ciudades, llega con la idea, la imagen o el imaginario de lo que pensaba acerca de su pedazo de tierra o de su lugar de origen. Al llegar a la ciudad choca su idea con la dificultad de encontrar fácilmente dónde vivir. Su idea sobre la tierra ha sido violentada, encontrando en la ciudad otra forma de pensar respecto del lugar donde se vive y comparte cotidianamente. Primero se le violenta y se le saca de su tierra y luego se le impone otra forma totalmente distinta de ver el mundo.

Es de esta manera como los desplazados en los años cincuenta y sesenta serán las personas que ayudarán en la

conformación de las ciudades modernas sobreviviendo en estos lugares con recurividad e ingenio, y de donde se formarán en parte las personas que bajo la presión de sus necesidades, quebrantarán la ley. Reyes Echandía dice que es comprensible el comportamiento delictivo de estas personas por cuanto están siendo sometidas a un cambio rápido de leyes y costumbres¹¹ sumando el cambio brusco de desarraigo de su tierra.

Crece la ciudad moderna ayudada por sus gentes, los aventureros en busca de fortuna y los obligados a migrar por causa de la guerra provocada por el bipartidismo en el campo. Todos llegan con la idea o el imaginario de encontrar un lugar de oportunidades donde poder convivir y trabajar como lo venían haciendo en su lugar de procedencia. Vienen con la ilusión de establecerse con sus familias o poder conformar una. A pesar de ello se estrellan con una realidad bastante diferente por cuanto no sólo tenían que luchar por conseguir un sitio donde dormir y vivir sino que además tenían que hacerlo contra las costumbres y comportamientos de las personas propias del lugar y de tantas otras que, también desplazadas como ellos, venían procedentes de diferentes partes de Colombia.

9 Darío Betancourt y Martha García. *Contrabandistas, Marimberos y Mafiosos. Historia Social de la Mafia Colombiana (1965-1992)*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, primera edición, agosto de 1994, p. 143

10 Ulf Hannerz. *Exploración de la Ciudad. Hacia una antropología Urbana*. México: Fondo de Cultura Económico, 1986, p. 248

11 Alfonso Reyes Echandía. *Op. Cit.*, p. 142



El hombre recién llegado tenía que luchar, muchas veces sin éxito, por acomodar sus valores, ideas o imaginarios, a los valores propios de la gente de la ciudad y a sus leyes, así su forma de ver la vida fuera en contravía de esas reglas. En muchas ocasiones y por falta de medios y de educación para aprovechar las pocas oportunidades de lo urbano, se convirtieron en seres marginales propiciando el paso al umbral delincencial.

En las ciudades se concentraban las industrias que ofrecían empleos que no cubrían a todas las personas y alrededor de las cuales se daba el desarrollo. Manuel Montero cuenta como se daba esa transición del campo a la ciudad: “Los muchachos de ahora (1973) trabajan en las ciudades o se dedican a robar (...) Por eso hay tanta corrupción, porque no hay trabajo, no hay comida. Porque antes eran los campesinos los que agricultaban y ahora son los señores los que tienen la tierra para sembrar arroz, algodón, soya, pero a nosotros nos toca comprar el arroz en las tiendas para comer.”¹²

Las personas que optaban por la vida delincencial en las décadas de los años cincuenta y sesenta serían los pioneros en la conformación del delincuente urbano moderno. Compartían algunas características con sus antecesores bandoleros, poseían la tenacidad del campesino heredada de la educación de padres y abuelos, y además la recursividad que exigía la falta de oportunidades en la ciudad. El fin del delincuente era el mismo: sobrevivir y lucrarse asimismo y a los suyos, la metodología variaba de acuerdo a las cir-

Por eso hay tanta corrupción, porque no hay trabajo, no hay comida. Porque antes eran los campesinos los que agricultaban y ahora son los señores los que tienen la tierra para sembrar arroz, algodón, soya, pero a nosotros nos toca comprar el arroz en las tiendas para comer.”

cunstances de la ciudad. Prueba de este cambio lo registra la crónica judicial de la revista *Semana* número 10 de 1982 cuando dice: “Y es que el gran periodismo anterior a los años sesenta estuvo siempre manchado de sangre. Esas ciudades pequeñas, provincianas aunque fueran capitales, se estremecían con las historias de los escasos crímenes que los periódicos aprovechaban muy bien”¹³.

El delincuente de ciudad tiene parecido al bandolero en sus objetivos y en ocasiones en sus ideales, pero se diferencia en las herramientas que usa. El de la ciudad debe usar los elementos que sean necesarios para sobrevivir y enriquecerse de acuerdo a las condiciones de la ciudad y su desarrollo tecnológico.

Hubo una famosa banda de asaltantes donde participaba el conocido “mono” Trejos que a través de sus asaltos a bancos y joyerías logró convertirse en producto de exportación hacia países como Ecua-

12 Libardo Saavedra Rivera. *Antropología de la Violencia, del Azadón al Gatillo*, Bogotá: Fundayudas, 1990, p. 15

13 “Crímenes de Otros Tiempos”. En: *Semana*, No. 10, Lunes 9 de agosto de 1982



dor y de Centroamérica asaltando bancos semanalmente hasta ser capturados en México y llevados a la cárcel de Lecumberri. Dentro de la cárcel esta banda de asaltantes cambiaría las normas internas después de ser sometidos a cruentas torturas y haber emprendido su desquite liderando a los presos en contra de la guardia.

Este es un ejemplo que sirve para ver cómo las personas se decidían, por necesidad o ambición, a tomar el camino de la delincuencia, se iban agrupando en las ciudades para planear y dirigir sus delitos a un terreno determinado. Se conforman grupos especializados en asalto a bancos, robo de carros, falsificación de moneda o robo de apartamentos. La necesidad de satisfacer el hambre o la ambición de riqueza llevó a que ciertos grupos comenzaran a secuestrar personas pues esto se había convertido además de un gran negocio, en una acción que dentro de la vida delictual otorgaba prestigio criminal.

Con el secuestro se da toda una especialización de la organización delictual pues a diferencia de otros delitos que son momentáneos y rápidos como el robo de bancos o joyerías, este necesita de personas que se especialicen por mantener al secuestrado 'a salvo' durante un tiempo incierto.

Hubo personas especialistas en seguimiento, otras en asalto, otros se preocuparon por la evasión a las autoridades, otros por establecer contactos con la familia, otras personas se encargaron del "bienestar" del secuestrado.

El delincuente que creció en las ciudades en las décadas del setenta compartió



sus experiencias con otros delincuentes y las adaptó y tecnicó de acuerdo al crecimiento de la ciudad. Esta persona junto con su necesidad y ambición veía como otros hombres que tenían medios materiales y oportunidades en la ciudad, se enriquecían muchas veces a costa del trabajo de los demás.

Las organizaciones delictuales de las ciudades operan con métodos parecidos a las organizaciones delictuales en el campo, pero sus objetivos están dirigidos en otros sentidos. La ciudad impulsa a esos hombres a poner sus ojos cada vez más alto y a organizarse para alcanzar sus metas mezcladas de hambre y ambición. Para lograrlas los delincuentes asumen una actitud sin escrúpulos conformando en la historia de la delincuencia colombiana grupos como las pandillas que se dan en el barrio o zona, con objetivos inmediatos de control territorial; los combos que se dan al interior de organizaciones de seguridad estatal como lo ilustra Montero hijo, quien después de prestar el servicio militar realiza cursos para ingresar a la policía hasta llegar a antinarcóticos: "Llegué al Grupo de Inteligencia. (...) a mí se me presentó un



problema, y era que yo no tenía una organización, mejor dicho, una rosca, o un combo como lo llaman allá”¹⁴.

Las llamadas bandas son grupos de personas que de manera local o regional se dedican a un tipo de delito: robo, falsificación, atraco, piratería terrestre, contrabando, piratería de libros, discos compactos, tráfico de fauna y flora y otras. También están los llamados ‘carteles’ reconocidos así por la aparente vinculación organizada para ejercer una actividad delincencial, están los llamados carteles de la droga, cartel de la gasolina, cartel de los medicamentos y otros. Sin embargo, la palabra cartel no parece corresponder exactamente a la actividad a la que más se le ha reconocido, pues en primer lugar es un término traído de afuera con el que se pretende reunir en una organización regional a personas que delinquen de una manera aparentemente organizada y adrede en el comercio de drogas prohibidas.

Algunos de estos llamados ‘carteles’ se expandieron tanto con el tiempo que lograron establecer vínculos en diferentes sectores sociales, como el deporte, la farándula, el periodismo y la política, convirtiéndose posteriormente en organizaciones fragmentadas pero especializadas, cuyo objetivo sobrepasaba lo económico pues su mayor aspiración era la adquisición de poder en varios niveles.

Estas expresiones de lo legal y lo ilícito se manifiestan contextualmente en el país en tiempos y espacio determinados. El delincuente obedece a necesidades también contextuales de orden individual pero bajo el ritmo del desarrollo de la so-

cialidad y de sus exigencias. La aparición en el escenario nacional de los diferentes tipos de delincuentes hace parte también de ese desarrollo capitalista en Colombia y Latinoamérica.

El comerciante ilegal de drogas prohibidas surge como producto de las continuas guerras y los desplazamientos que éstas conllevan hacia las ciudades en desarrollo en donde se encontraban alternativas de subsistencia, pero no suficientes para la cantidad de personas desplazadas por la guerra. “De hecho, la incapacidad de la industria para absorber productivamente la fuerza de trabajo desplazada del campo, se escondía tras la visión del problema agrario, (...)”¹⁵

Según el magistrado desaparecido durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía un 30% de la población se apropia del 60% del ingreso nacional¹⁶ y esto incentiva la aparición de personas que buscan ser partícipes de la riqueza a través de cualquier medio. Si para los estudiosos de la historia como Eric Hobsbawm, Gonzalo Sánchez y Donny Meertens es posible pensar en bandidos sociales como aquellos al mejor estilo de Robin Hood, y en bandidos políticos siguiendo ideales con el fin de llegar al poder, es posible pensar en los comerciantes

14 Libardo Saavedra Rivera. Op. Cit., pp. 60-67

15 Jesús Antonio Bejarano. “Industrialización y Política Económica” 1950-1976. En: Jorge Orlando Melo (coordinador) Colombia Hoy. Perspectivas hacia el siglo XXI, Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995, 15ª edición aumentada, p. 218

16 Alfonso Reyes Echandía. Op. Cit., p. 138



Este apoyo de sectores del pueblo ... sumidas en la miseria y la explotación, ven en quien es capaz de “sobresalir”, ... a un fiel exponente de su clase y condición, convirtiéndolo, por tanto, en objeto de admiración, respeto y protección, sin importarles o entender que se halle al margen de la ley.

de drogas ilícitas desde lo económico. Por un lado se acercan a lo social compartiendo el sentimiento de Robin Hood al distribuir entre los más pobres parte de la desorbitada riqueza adquirida ilegalmente con el fin de crear interesadamente base social de respaldo. Por otro lado, se aproximan a los bandidos políticos por su inquietud de acercarse al poder.

Algunas de estas acciones dirigidas a las clases menos favorecidas les garantizaba satisfacción al ayudar al necesitado, así como la ayuda de esa gente a la hora de necesitarla, como efectivamente sucedió en el caso de la persecución, fuga y clandestinidad de varios de estos comerciantes ilegales. Por encima de todo, estas acciones les hacían recordar el lugar común y marginal de donde provenían: la cultura popular; “estos proyectos de narcobienestar alcanzan a comunidades a donde el gobierno no llega”¹⁷ El profesor Darío Betancourt refiriéndose a Rodríguez Gacha dice que “al igual que otros mafiosos, logró consolidar una amplia base social de apoyo entre los habitantes de sus zonas de influencia. Este apoyo de sectores del pueblo se inscribe en las frus-

traciones de las amplias masas populares que, sumidas en la miseria y la explotación, ven en quien es capaz de “sobresalir”, de ponerse por encima de ellas, a un fiel exponente de su clase y condición, convirtiéndolo, por tanto, en objeto de admiración, respeto y protección, sin importarles o entender que se halle al margen de la ley.”¹⁸

Los actos delictivos pueden tener dos caras: la acción y la omisión. No sólo se delinque en una sociedad cuando se ejecutan acciones en contra de la ley, sino cuando por omisión no se llevan a cabo acciones que prevengan el delito. El delito no es únicamente un fenómeno individual, sino también un fenómeno social, por cuanto tiene causas y repercusiones sociales.¹⁹

Como se ve entonces son una serie de elementos los que conllevan a la creación del delincuente narcotraficante. Desde sus referentes en la historia, pasando por el deseo y la ambición, el desamparo estatal que genera miseria, desarraigo y falta de oportunidades, los conflictos armados que tienen como consecuencia el desplazamiento, hasta el encuentro oportuno con la mafia de la clase política corrupta.

Rodrigo Uprimny en el prólogo que hace al libro de Darío Betancourt y Martha García, *Contrabandistas, Marimberos y*

17 Lee III Rensselaer, W. El laberinto blanco. Cocaína y Poder Político. Bogotá: CEREC, 1992, p. 44

18 Darío Betancourt. Op. Cit., p. 74

19 Julio Romero Soto y Juan Carlos Salazar De La Torre. Antropología y Psicopatología Criminal. Bogotá: Ediciones librería del profesional, 1998, p. 12



Mafiosos, Historia social de la mafia colombiana, resalta la insistencia de los autores sobre cómo los contextos estructurales afectan los comportamientos de las organizaciones mafiosas y que es esencial modificar aquellos entornos sociopolíticos que favorecen su desarrollo y dinamizan violencias que les están asociadas.²⁰

Es posible entender que la organización delincinencial del tráfico de sustancias prohibidas responde a la realidad económica, política y social de la transición del país en las décadas del 50, 60 y 70 cuando se daba una transformación de un ambiente agrario a unas características que pretendían una industrialización en Colombia en medio de la acumulación de capital propia del sistema capitalista que además permitía la libre asociación lícita situada entre el individuo aislado y el Estado. Quienes eran excluidos de la 'libertad democrática' y pretendían ingresar al proceso de industrialización y de acumulación de capital creaban mecanismos que les permitieran realizar sus metas; en muchos de estos casos se cayó en lo ilícito. En esta transformación del país hacia la industrialización y el capitalismo las asociaciones debían servir para que el individuo viera reflejado medianamente el modo en que vive y se mantiene su sociedad así como debían de servirle para consolidarse como ciudadano pues es en esta época en que se comienza la consolidación de lo urbano²¹, es decir de las grandes ciudades. Como se daba la exclusión de ciertos individuos y se negaba o impedía el acceso a las asociaciones lícitas, muchos individuos ambiciosos fueron construyendo al margen de

la ley sus propias asociaciones espontáneas, poco o medianamente frecuentes que les permitieran satisfacer las necesidades que el capitalismo les generaba y exigía: "El mercado ilegal no es la cara opuesta de la racionalidad capitalista, es la forma más descarnada que pueden adquirir esos valores. Se podría decir que el mercado ilegal es una "radicalización" de esa lógica capitalista que no soporta contradictores u oposiciones para la realización de sus fines: se derriban los posibles obstáculos que dificulten la consecución de los fines."²²

El sistema capitalista nutre desde su estructura la conformación de sociedades tanto lícitas como ilícitas. Giddens afirma que "(...) las acciones delictivas son tan aprendidas como las que respetan la ley y que tienen como fin las mismas necesidades y valores. Los ladrones intentan ganar dinero igual que la gente que tiene trabajos convencionales, pero eligen una forma ilegal de hacerlo"²³

Rensselaer W. Lee III se refiere a lo que él denomina "mafia" de la cocaína, en términos que ayudan a entender por un lado la complejidad del comercio de sustancias y de otro la distancia que debe tomarse

20 Darío Betancourt. Op. Cit., p. xviii

21 Demarchi y Ellena. Diccionario de Sociología. Madrid: Ediciones Paulinas, 1976, pp. 130,132

22 Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento. Cocaína & Co. Un Mercado Ilegal por Dentro. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, 1993, p. 194

23 Anthony Giddens. Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 2000, p. 235





de este fenómeno cuando se quiere definir como “mafia” o “cartel”: “(...), estas organizaciones parecen ser más amorfas que las organizaciones criminales de los Estados Unidos y Europa. Sus fronteras son variables, los protagonistas cambian constantemente y los eslabones de la cadena están unidos por un complejo sistema de contratos y subcontratos”²⁴

Se puede entonces decir que aunque existieron personajes visibles en el narcotráfico en las décadas del 80 y del 90, no puede esto servir de argumento para estructurar organizaciones criminales con altos niveles de complejidad y grandes infraestructuras logísticas. Lo que sí se puede ver es la especialización fragmentada del trabajo, es decir la especialización de personajes en alguna o algunas fases del tráfico de sustancias prohibidas: en la producción, en el procesamiento, en el transporte, en la venta y distribución en los países consumidores, en el lavado del dinero, etc.

Mary McIntosh en su libro “La Organización del Crimen” plantea que la organización del negocio criminal permanente y continuado es mayor en escala, y tiene una división del trabajo más acentuada y

que sería tentador afirmar que al lograr la neutralización de la represión estatal consigue asimilarse en todos los sentidos a cualquier organización de negocios lícita,²⁵ lo que corrobora de un lado el hecho de la especialización en cada fase del narcotráfico y del otro la reflexión paralela que se hace de las asociaciones lícitas con ilícitas. Existe especialización en cada una de las fases del negocio ilícito del tráfico de sustancias controladas, pero no quiere esto decir que todas estas organizaciones sean dirigidas por una persona o un grupo determinado de individuos confabulados en una sociedad secreta o algo parecido.

Eugenio Zaffaroni dice que la categoría de ‘crimen organizado’ es producto de la tradición norteamericana y concluye que “El “mito mafioso” extendido a todas las actividades ilegales en el mercado, es una teoría conspirativa científicamente falsa, sostenida por los medios, la ficción, el clientelismo político y las policías, que la criminología se esforzó por elaborar pero que no pudo hacerlo, pese a que hubiese sido del agrado de muchos criminólogos.”²⁶

“Mafia” dice Rosa del Olmo, es un término equivocadamente utilizado tomado de la época de la prohibición en los Es-

24 Lee III Rensselaer. Op. Cit., p. 150

25 Mary McIntosh. La Organización del Crimen, México: Siglo Veintiuno Editores, 1981, Primera edición en español en 1977, primera edición británica en inglés 1975, p. 65,66

26 Eugenio Raúl Zaffaroni. El Crimen Organizado una categoría frustrada, Bogotá: Editorial Leyer, 1996, pp. 51,52



tados Unidos, a pesar de que las características de la organización son mucho más complejas y de que en el contexto latinoamericano participan toda una serie de actores que no corresponde a lo que era aquella.²⁷ La complejidad se presenta en la especialización del trabajo en cada una de las fases, en la independencia, autonomía y compartimentación que guardan entre ellas y por la baja y mediana frecuencia con que se relacionan.

Mary McIntosh dice que se cree que el “crimen organizado” es sinónimo de una sociedad secreta dedicada a actividades criminales, y que exige a sus integrantes fidelidad y obediencia tácita, agregando que ante todo, existe considerable controversia acerca de si semejante sociedad (“Mafia”, “Cosa nostra”, o lo que sea) existe en absoluto.²⁸

Dicen Krauthausen y Sarmiento que: “Si el mercado y sus empresas se encontrasen altamente formalizados, tal como con frecuencia se pretende hacer creer a la opinión pública, para el caso de los supuestamente jerarquizados “carteles”, la represión estatal se facilitaría y podría limitarse a dar unos cuantos “golpes” a empresas “claves” para paralizar todo el mercado. “Golpes claves” ha habido innumerables a lo largo de los ya prolongados años de lucha contra el narcotráfico. A mediano y largo plazos, sin embargo, nunca han podido frenar la exportación de cocaína hacia los países consumidores.”²⁹

La intervención extranjera actual no es para nada nueva. El hecho de encontrar ciudadanos extranjeros en la cadena de distribución de la bonanza marimbera

que tuvo el país evidencia el interés externo por el fenómeno. Dicha intervención es corroborada por el profesor Betancourt cuando dice que “los cuerpos de paz se adentraban en nuestro territorio con claras orientaciones ideológicas –desviar a nuestra juventud de los efectos de la revolución cubana- se encontraron con las delicias de la marihuana colombiana, (...) Al volverse adictos se fueron convirtiendo en traficantes al por menor, difundiéndola entre sus parientes y conocidos al regresar a Estados Unidos, iniciándose así las primeras redes de distribución manejadas por núcleos norteamericanos.”³⁰ Se encuentra que quienes dieron inicio a la primera bonanza fueron extranjeros que venían a Colombia a cosas diferentes y se convirtieron en pequeños emisarios de la marihuana. Después eran ya pequeños aviones los que venían de Estados Unidos a llevarse la marihuana que en principio era comercializada por contrabandistas que época anterior se dedicaban a comerciar con otro tipo de mercancías. Sin embargo la fuerza que toma el negocio del narcotráfico no viene sola sino auspiciada por el contexto que vive la sociedad colombiana en su conjunto. El profesor Betancourt dice que el surgimiento de lo que él llama “mafia” “se halla íntimamente

27 Rosa Del Olmo. *La Cara Oculta de la Droga*. Bogotá: Editorial Temis, S.A., 1988, p. 74

28 Mary McIntosh. Op. Cit., pp. 66,67

29 Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento. Op. Cit., p. 30

30 Darío Betancourt. Op. Cit., p. 47





ligado a la crisis económica y social de las élites regionales (...)” y agrega que “Los orígenes y la consolidación de la mafia no pueden verse al margen de los orígenes y evolución del Estado”³¹ A cada núcleo mafioso mencionado por estos académicos se le asigna una causa de crisis regional en productos o renglones productivos de cada región donde operaron. Se presentó crisis en los cultivos de algodón en la Costa Atlántica, crisis en la industria textil antioqueña por causa del uso de sintéticos, problemas en las cuotas internacionales del azúcar, lo que afectaría la industria azucarera del Valle del Cauca, crisis en la región esmeraldífera por la violencia generalizada en dicha zona, crisis en la región nororiental por la caída del bolívar y sus consecuencias; aparte de que en todas estas regiones se presentó crisis de élites, de violencias ancestrales, culturales y étnicas.³²

Las políticas internacionales afectan la economía del país, ahora más con el neoliberalismo y la apertura económica, hasta el punto en que el narcotráfico resultó globalizado con todo y su frustrada guerra antidrogas. El profesor Betancourt acierta cuando dice que “Sin lugar a dudas (...) la producción, comercialización y consumo

de “drogas” se hallan asociadas no sólo a la crisis de valores de la sociedad moderna y a los excedentes de capital legal invertido superproductivamente en estas sustancias sino también, en muchos casos, a las políticas neoliberales de “internacionalización de la economía” (que sumen a amplios sectores sociales en la desesperanza y la miseria), (...)”³³

Extranjeros, contrabandistas y llamados mafiosos hicieron parte de la cadena productiva del negocio desde los años sesenta. Luego la dinámica misma del país llevó a incorporar diversos sectores de la sociedad colombiana en el tráfico de sustancias ilícitas. La guerrilla y los paramilitares entraron a cobrar impuesto en las diferentes zonas donde tenían influencia haciendo notar nuevamente, la falta de atención del Estado en las regiones lo que hace que asociaciones ilícitas, grupos guerrilleros y paramilitares hagan presencia en estas zonas. El surgimiento de las “mafias” dice Betancourt, debe verse ligado a la crisis económica y social de las élites regionales y que la “debilidad del Estado” y su escasa presencia regional dejaron en manos de agentes particulares locales la solución y mediación de los conflictos, favoreciendo el surgimiento y posterior fortalecimiento del sicariato y el paramilitarismo.”³⁴ Así mismo, los gru-

31 Ibid., pp. XX, 3

32 Ibid., p. 45

33 Ibid., p. 227

34 Ibid., p. 140



pos armados ilegales se fortalecieron en las regiones por la falta de presencia del Estado. En una estructura como la colombiana en la que existe una inequitativa política fiscal, en la que en lo económico hay concentración del ingreso, en la que la participación política se ha mantenido restringida (...) y en la que son extremadamente difíciles las posibilidades de acceso de las nuevas fracciones de clase que buscan con afán expresarse social y políticamente, tanto la guerrilla, como los paramilitares, los sicarios, los mafiosos y aun la delincuencia común no pueden verse sino como una expresión de la lucha de clases y fracciones, como actores sociales, políticos y culturales que luchan por abrirse paso en tan restringido modelo de sociedad y de Estado.”³⁵

La internacionalización y globalización del contrabando o tráfico ilegal de sustancias controladas se proyecta en la medida en que la complejidad de su funcionamiento se ve en la necesidad de perfeccionar su accionar al ritmo de las políticas erradas de represión. En la medida en que estas políticas son implementadas en contra de cada una de las fases del llamado narcotráfico, contra los cultivadores, los comerciantes, los lavadores de dinero, los participantes de la cadena se ven forzados a tecnificar sus maneras de operar para poder continuar en sus actividades. “El mercado es extremadamente dinámico: las unidades que actúan en él continuamente tienen que transformarse y adaptarse a nuevas circunstancias.”³⁶ Lejos de que estas políticas represivas frenen el negocio lo que han fomentado

Lejos de que estas políticas represivas frenen el negocio lo que han fomentado es su especialización y su incremento.

es su especialización y su incremento. Prueba de ello es que cada día se siguen abasteciendo las altas demandas de países industrializados en donde las políticas frente al consumo siguen siendo poco efectivas y las políticas para controlar a quienes producen precursores para el procesamiento de cocaína lo son aun menos.

La presencia del delincuente narcotraficante no es fortuita ni aparece producida únicamente por mentes perversas y desequilibradas. Dicha presencia obedece entonces a las particulares características del desarrollo de la sociedad colombiana y su historia. Los grupos conformados para operar este negocio ilegal, se crearon con base en la desatención estatal, las continuas guerras y la falta de satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de esta sociedad. Hubo una transición tanto en el individuo como en la conformación de asociaciones para delinquir propiciada por la transición y conformación de las ciudades y la implantación del capitalismo sobre una sociedad que como la colombiana, no estaba preparada para ello. Es posible que con el incre-

35 Ibid., pp. 145, 146

36 Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento. Op. Cit., p. 30



mento del fenómeno y el fracaso de las políticas implementadas para acabarlo, sea necesario reflexionar en la creación de nuevas estrategias que de manera eficaz puedan contribuir en la solución del problema. Para esto es necesario reflexionar en torno a si la sociedad colombiana está preparada para optar por una posición propositiva orientada a la legalización, más cuando se generan aceptaciones de errores cometidos tal vez por una inadecuada conceptualización de las categorías que intervienen en el estudio del fenómeno.

Si se acepta que la categoría de “carteles” es y ha sido una categoría inadecuada o salida de intereses descontextualizados en la historia del fenómeno del narcotráfico, es posible decir que este tipo de categorizaciones tal y como se han presentado en los medios y desde políticas estatales equívocas, no ha sido la más acertada y que lo que hoy se considera o se ha dado en llamar ‘baby carteles’ han estado presentes siempre pues la fragmentación especializada en diferentes etapas del fenómeno y sus asociaciones de mediana frecuencia se han dado de manera permanente. En la historia criminal de la llamada organización del crimen se generó una escala que de manera contextual a la historia y desarrollo social del país, actuaba con objetivos de ambición por una parte, y de otra obedeciendo a las características del capitalismo en lo

que se refiere a la acumulación de capital, la posesión de la propiedad privada y las ansias de poder político. Las cabezas visibles del narcotráfico a quienes se les atribuía la gestación de ‘grandes organizaciones’ sufren un proceso de desgaste a través del tiempo que desemboca en su eliminación, encarcelación o extradición y esto no ha hecho mella en la disminución del fenómeno y por el contrario ha generado una sofisticada especialización del delito y una tecnificación y refinación del mismo. La dinámica económica propio del capitalismo, engendró un crimen con características también propias y enquistadas en este sistema de producción que por inercia histórica, desde el bandolerismo social y político, arrastró características de tiempos pasados creando una especie de mutación del crimen dentro del sistema capitalista.

Hoy los grandes capos han venido desapareciendo y el fenómeno continúa en ascenso. Los narcotraficantes se siguen ideando la forma de continuar exportando droga a los países con una demanda creciente de consumidores. Mercancía que de paso, se erige como producto de alta tecnificación y refinación desde lo industrial, y que se vende sin ningún tipo de estudio de mercado y sin ningún tipo de campaña publicitaria. Es decir un fenómeno globalizado y con características propias del neoliberalismo: mínima inversión, máxima ganancia.



ASALTO MAFIOSO A LA INSTITUCIONALIDAD

Democracia y narcotráfico en Colombia

Diana Gómez Navas¹

Colombia ha sido señalada en varias oportunidades como la democracia más antigua de América Latina pero a la vez como uno de los países más violentos del mundo. Estas afirmaciones provocan ciertos resquemores pero también muchos cuestionamientos sobre el tipo de régimen y cultura política que se ha construido desde los albores de la república. Una de las consecuencias de esta perversa convivencia entre democracia y violencia es el levantamiento de una economía del narcotráfico que finalmente hizo posible la creación de unas estructuras mafiosas con capacidad de imponerse en el mundo de la política,

la economía y la cultura colombianas para asaltar desde allí al Estado y a la sociedad. Hablar sobre cuáles fueron los caminos que el país labró para llegar a tan desalentador panorama necesariamente involucra la relación entre partidos y régimen político, las dinámicas que éstos tejieron como correas de comunicación entre el Estado y la sociedad y, en últimas, a su papel en la construcción de un proyecto de nación.

¹ Investigadora del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPAZUD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



Aunque al comienzo del artículo hago énfasis en la relación entre el sistema de partidos y el régimen político, al final la dejo un tanto al margen, no por descuido, sino porque la explosión de partidos y movimientos políticos que empezó en años posteriores al fin del Frente Nacional y que se reafirmó con la Constitución de 1991 sólo es el reflejo de las llamadas microempresas electorales: entidades surgidas de las mismas clases políticas tradicionales en reacción al descrédito del ejercicio de la representación política, revestidas con nuevos nombres y consignas, ausentes de derroteros programáticos, pero que finalmente les han permitido a unos grupúsculos mantenerse en el poder; en otras palabras, son los mismos y promueven las mismas prácticas. En últimas, estos “partidos de segunda”, que no nombro, son una de las evidencias patentes del asalto mafioso a la política y la democracia en Colombia.

De la Violencia al Frente Nacional: Licencias de azules y rojos que viciaron la democracia en Colombia

La configuración del territorio nacional, con base en la colonización constante, la separación entre regiones y la distancia entre las provincias y unas ciudades donde se concentraba la vida política, económica y social del país, creó un fuerte dualismo entre el centro y la periferia. Este dualismo propició la constitución de unas regiones no integradas al desarrollo

nacional pero con la presencia de poderes locales restringidos a castas o familias con la capacidad de arbitrar la vida de sus territorios y comunidades, al tiempo que erigió un poder central con limitaciones para imponer un proyecto nacional unificador y que, por lo mismo, se supeditó a la intermediación de esas élites locales donde predominaban los líderes liberales y conservadores. De esta manera se impuso un proyecto de integración nacional sometido a un poder sometido a unos cuadros regionales que operaron como partidos, sujetos a propósitos particularistas, que incapaces de resolver las necesidades regionales, permitieron la coexistencia de violencia y democracia, de exceso de informalidades y de pobreza institucionales. El copamiento precario del territorio nacional en medio de una modernización traumática condujo a que estos partidos se abalanzaran a una guerra interna, que inició el denominado periodo de La Violencia.

Precisamente, el periodo conocido como la Violencia mostró una contradicción entre dos partidos políticos tradicionales, cuyo choque estuvo lejos de representar doctrinas y propuestas claramente diferentes. La forma disgregada como se constituyó el Estado-nación, a partir de disputas regionales y locales entre unas fuerzas dispuestas a preservar sus dominios y otras con el interés de conquistar los propios, hizo de los partidos los canales de transmisión de rencillas particulares que adquirieron acentos diferentes de acuerdo al territorio en el que se desarrollaban, pero que de cualquier manera se



parecían en la forma como los directorios de los partidos liberal y conservador mediaban para sus beneficios electorales y burocráticos con los líderes locales y regionales, mediación que estuvo determinada por la ilegalidad y la ilegitimidad: la violencia y la clientela.

Estas dinámicas que caracterizaron la forma como se erigió nuestro sistema de partidos y, la manera como éstos han hecho y hacen política, muestra cómo la vida nacional se desarrolló a partir de prácticas como la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad que permearon las instituciones y viciaron la democracia. En este panorama, no fue evidente la apuesta programática de cada uno de los partidos, ni la existencia de unas bases sociales adheridas por la identificación y la disciplina partidista; más bien lo que prosperó fueron unas estructuras verticales, cuyos directivos se caracterizaron por pertenecer a determinadas castas familiares —obviamente con posesiones de alto capital socioeconómico y educativo—, cuyo papel al interior de los partidos buscaba marcar algunas tendencias ideológicamente no muy claras, pero sí bastante vehementes en el discurso. Este exceso de interés inmediato y de escasa separación ideológica favoreció que al interior de los partidos se fraguaran permanentes divisiones, que sin duda fueron tanto más evidentes en el ámbito regional y local, pues allí la adhesión a un partido u otro o a alguna facción de un mismo partido no se daba por las tendencias que alguno de sus directivos nacionales pudiera representar en el espectro democrático, sino por el tipo de

Este exceso de interés inmediato y de escasa separación ideológica favoreció que al interior de los partidos se fraguaran permanentes divisiones

intermediación que éstos entablaran con los líderes locales y regionales, quienes poseían alta capacidad de maniobra para manejar a sus poblaciones y, en esta medida para garantizar votos.

Esta precariedad en la formación y en la forma de hacer política de los partidos tradicionales se acentuó con el pacto del Frente Nacional². Al Frente no sólo llegaron partidos divididos (al interior) y sin propuestas programáticas e ideológicas cohesionadas que logran la inserción del país en un sistema democrático, integrador, modernizador y desarrollista, sino que el reparto paritario de todos los puestos burocráticos del Congreso y de los cuerpos colegiados subnacionales terminó por anular la necesaria contradicción y el ejercicio de la oposición propios de un sistema democrático moderno, lo cual anquilosó aún más a los partidos y banalizó la política, pues las divisiones al interior de cada uno de ellos se incrementaron en perspectiva de personalismos nacionales y regionales.

2 Con el Pacto del Frente Nacional, liberales y conservadores no sólo buscaron concertar la fórmula que les devolviera el poder perdido ante la dictadura, sino mantenerse en él a través de un sistema que les permitiría compartirlo, alejando el uso abierto de la violencia que antes utilizaron uno en contra del otro.



Si bien es cierto que el uso abierto de la violencia como mecanismo para saldar las disputas partidistas y electorales se anuló con el pacto, el carácter cerrado y excluyente del mismo no sólo le negó la posibilidad a corrientes políticas alternativas al liberalismo o al conservatismo –lo cual desencadenaría otro tipo de violencias políticas-, sino que terminó por erosionar las leves tendencias ideológicas que entre ambos partidos podían vislumbrarse, lo que produce unos partidos sin diferencias ni apuestas programáticas claras, que le permitieran a los electores al menos tener dos opciones entre las cuales escoger. Esto además de trivializar la democracia como procedimiento, banalizó la política, porque por un lado, en la medida en que trascurrieron los procesos electorales aumentó la abstención y, por otro, las disputas electorales se trasladaron al interior de los propios partidos³, cuyos dirigentes necesitaban captar electores que, ante el descrédito del sistema y la falta de propuestas, se mostraban reacios para ir a las urnas, los cuales fueron cautivos por la tan conocida clientela, a través de transacciones donde se intercambiaban votos por la satisfacción de necesidades básicas que el Estado nunca suplió, como servicios públicos, educación, vivienda, alimentación. Una herramienta que posibilitó la expansión y el arraigo de tal fenómeno en la cultura política del país fueron los llamados auxilios parlamentarios, dineros del erario otorgado a los miembros del Congreso, quienes podían utilizarlo para “invertir en el desarrollo de sus regiones”; sin embargo, estos recur-

sos administrados de manera personal, sólo sirvieron para que los políticos regionales tuvieran el margen para garantizarse su reelección como parlamentarios y, con ello, acceder al conjunto de la burocracia central y de provincia.

Como puede observarse, el panorama político nacional para los años setenta puso de manifiesto un sistema de partidos débil⁴, una democracia excluyente y un Estado ausente frente a la regulación de los conflictos y a la creación de un modelo de desarrollo nacional que permitiera la satisfacción de las necesidades de la población, cuyo resultado será una cultura política creada y amparada en el uso de recursos como la clientela, la corrupción y la exclusión. De esta manera, la ilegalidad se fue adhiriendo a más y más prácticas que la sociedad legitimó e incorporó a sus percepciones sobre el régimen político colombiano.

3 Es larga la lista de facciones y subfacciones que se crearon por las disputas internas en cada uno de los partidos, sobre todo en los periodos electorales.

4 Cuando utilizo el adjetivo débil como una de las características de nuestro sistema de partidos, lo hago no para negar la existencia de partidos políticos, ni de la baja capacidad de maniobra en el espectro político de estos, sino para señalar que sus dinámicas y, sobre todo, las que produjo el periodo del Frente Nacional, terminaron borrando las frágiles fronteras ideológicas y programáticas que habían entre liberales y conservadores, hasta el punto de que pueda llegar a hablarse de que el Frente fue un régimen de partido único, lo cual debilita el sistema, puesto que este necesita de la contradicción, la oposición y el control para forjar un régimen democrático propiamente moderno.





Del ocaso del bipartidismo al auge de las microempresas electorales

El fin del Frente Nacional no sólo irrumpió con los vastos problemas nacionales contemporáneos: la debilidad del Estado, el conflicto armado, la exclusión económica, política y social, el atraso económico regional, la cultura de la ilegalidad, el narcotráfico, sino, en especial, con la ilegitimidad del bipartidismo. No obstante, esta ilegitimidad fue utilizada hábilmente por las nuevas élites regionales, quienes fueron las más favorecidas por la fragmentación interna de los partidos al obtener poderíos al margen de jefaturas centrales y emerger así al plano nacional acuñándose a través de movimientos y organizaciones políticas autoproclamadas como independientes o alternativas, no obstante, sus prácticas siguieron siendo las mismas del legado tradicionalista. Por otra parte, también se forjaron movimientos y organizaciones que intentaban recoger y expresar tendencias políticas excluidas por completo en los años anteriores, pero una opción armada extendida y cimentada en las regiones, terminó presentándolas como opciones débiles en el ámbito democrático, lo que las puso en la

mira de los ataques de diferentes frentes de confrontación.

Este ocaso del bipartidismo⁵ a través de la atomización de pequeños movimientos y organizaciones políticas, por lo general creadas para vísperas electorales, no supuso la ampliación de la democracia sino la consolidación de prácticas como la clientela, la corrupción y la exclusión, a través del levantamiento de fuertes poderes locales que se tomaron el poder central, lo cual, se vuelve aún más problemático porque en la región se concentra la mezcla entre conflicto armado, pobreza, corrupción y narcotráfico.

Este panorama se avizó con más fuerza con la descentralización y la elección popular de alcaldes y gobernadores (1988), medidas que paradójicamente buscaban cerrarle el paso a la clientela política y ampliar las posibilidades de desarrollo e inversión regional⁶. De hecho, las nuevas medidas lo que finalmente consiguieron fue consolidar microempresas electorales y clientelas locales, incluida la pavorosa clientela armada y criminal, pues la administración directa de los recursos se convirtió en el caldo de cultivo para la presión de grupos armados ilegales.

5 Aunque esta atomización de movimientos, organizaciones y “partiditos” fue evidente en la política regional y, la Constitución del 91 ayudo a consolidarla, es importante señalar que la fuerza del bipartidismo para ganar elecciones de orden nacional se mantuvo hasta las presidenciales de 2002, cuando por primera vez, gana la Presidencia de la República un candidato que se presentaba como representante de estos nuevos “partiditos”.

6 Antes de ser aprobada la medida de elección popular, estas autoridades locales eran nombradas por el Ejecutivo.



les, la expansión de la corrupción y del narcotráfico.

De esta manera, las nuevas clases políticas regionales separadas de los antiguos caciques políticos nacionales se mantienen en el poder a través de movimientos, organizaciones o pequeños partidos que se creaban de manera circunstancial (en periodos electorales) accediendo a él por la vía de la clientela y, en algunos casos, de la asociación con grupos armados ilegales cuyos principales propósitos estuvieron dirigidos a controlar los recursos públicos con fines de corrupción. Esto se convertiría en un arma de doble filo para nuestro régimen político pues, por un lado, estos poderes locales se fortalecen económicamente en desmedro de los derechos de sus poblaciones y obtienen mayor capacidad de acción para incidir en la política nacional y, por otro, la fragilidad de la acción del Estado le cede lenta y eficazmente su campo a organizaciones armadas ilegales y al narcotráfico, quienes se fortalecen y expanden apelando a vacíos y vicios institucionales. Es así como el uso de la violencia emerge trascendentalmente en este espectro político y económico regional, donde el clientelismo armado y criminal suplanta al político, fenómeno de captación por medio de la presión armada de los recursos públicos, las administraciones locales y regionales, los cuadros políticos y las bases sociales en beneficio de proyectos armados o de “capitalistas parias”⁷.

Si el Frente Nacional había logrado detener la lógica de la confrontación armada y violenta que utilizaron los partidos tradi-

cionales para saldar sus contradicciones en el ámbito político y económico desde los tiempos de la Violencia, el nuevo régimen postbipartidista favorece su nuevo auge, primero con la aparición de múltiples guerrillas y luego con la aparición de la mano corruptora de la economía del narcotráfico, que erige a su alrededor diversos tipos de organizaciones armadas delincuenciales, dispuestas a enfrentarse a los poderes económico y político nacionales desde el dominio que lograron establecer en las regiones de una manera muy eficaz y eficiente, puesto que a través de dinero y armas, ganaron todo tipo de lealtades y respaldos a su favor.

Violencia, clientela y corrupción: un escenario para narcodemocracia

La precariedad de nuestro régimen político le impidió al país dirigirse al escenario donde el Estado se constituye en el actor que arbitra los conflictos, cuya promoción del desarrollo descansa en la erección de un mundo público caracterizado por la realización de los derechos de sus ciudadanos y cuyas relaciones sociales están atravesadas por principios como la igualdad y la inclusión. Esta precariedad también fue el resultado de un lento y pobre desarrollo económico nacional y de esas

⁷ El término “capitalistas parias” es tomado de Marco Palacios, quien lo acuña para referirse al proyecto económico del narcotráfico y su nefasta influencia en la vida económica y política del país.



relaciones asimétricas que entre el centro y la periferia hicieron de las regiones lugares aislados y olvidados.

La ausencia de políticas de desarrollo nacional que lograran establecer un modelo económico sostenible y elevara los niveles de vida de la población hacia la satisfacción de sus derechos económicos y sociales no sólo se manifiesta en la imposibilidad de forjar una industria moderna conectada con el capital internacional sino en la relación de las urbes con las regiones, la cual puso a éstas en desmedro de las primeras, contribuyendo al continuo sometimiento que la región en Colombia ha tenido que enfrentar por el atraso, la pobreza y la violencia. La política tradicional encontró en la periferia el terreno apropiado para obtener prebendas electorales a cambio de “los beneficios del desarrollo”; de esta manera, los dirigentes políticos liberales y conservadores utilizaron los recursos públicos como mecanismo para garantizar la lealtad electoral de los políticos regionales.

El gran eje económico sobre el que gira el país por lo menos hasta la década de los ochenta es el café, el cual se constituye en su principal fuente de ingresos, en el medio para la modernización de diferentes regiones especialmente sobre la cordillera Central y, en el medio para fortalecer determinados sectores comerciales y de servicios. No obstante, la primacía del café también promovió la monodependencia, favoreció el rezago de otros sectores productivos, entre ellos, los de otros renglones agrícolas y los de recursos minerales y energéticos.



No obstante, pese a que desde los años sesenta se implantó un modelo decidido en la sustitución de importaciones, con el cual se pretendía proteger y fomentar la industria nacional, el país no pudo desvirtuar su condición histórica de exportador de materias primas e importador de bienes manufacturados y de tecnologías. Las medidas aperturistas de mediados de los años setenta apuntaron a reinventar el modelo económico, pero éste prácticamente se vino al fracaso en menos de un quinquenio, en buena medida por una penetración masiva de capitales legales e ilegales que empezaron a inflar la economía nacional.

Las nuevas dinámicas económicas –ya no netamente agrarias– así como la creciente corrupción del régimen político sobreviviente al Frente Nacional, construyeron una burocracia propicia para el delito, tanto más en cuanto el sistema de alianza y reparto perseverante impidió el control mismo de la administración. La población nunca tuvo acceso real a los beneficios de este precario desarrollo y, cuando lo arañó, fue a cuenta gotas y casi siempre sin acceder a él por las vías de la redistribución –acción propia de los Estados–,



es decir, no asociándolo a la conquista de derechos, sino al recibo de favores. Con esto, se abrió el espectro para que al lado de la clientela prosperaran rápidamente el contrabando y la economía informal, pues por un lado, existían unas precarias condiciones económicas de la población en general para acceder a bienes y servicios y, por el otro, la corrupción administrativa amplió su radio de acción hacia los nuevos sectores de la economía nacional, incluso hasta extenderse a las actividades ilícitas.

La confluencia entre el ascenso del contrabando y el ensanchamiento de la corrupción le abrió la puerta al tráfico de alucinógenos, en primera instancia de marihuana y casi al mismo tiempo de la cocaína, tráfico que inicialmente estaría soportado en redes organizadas de la ilegalidad con presencia, articulaciones o vínculos en los distintos órdenes de la vida social, política y económica del país, hasta convertirse en grandes carteles y, hoy estar consolidadas como verdaderas mafias.

De esta manera, vemos que el auge de la economía del narcotráfico no sólo fue posible por los vínculos que desde el principio tejieron miembros del establecimiento con la delincuencia y la corrupción, sino que su consolidación también estuvo acompañada y soportada por éstos, hasta el punto de perder toda su capacidad de dominio ante una nueva clase o elite delincencial que se forjaría en el ámbito regional, cuyo poderío, soportado en el tráfico ilícito de drogas y en el uso de la violencia lograría influir en los designios de la nación.

La confluencia entre el ascenso del contrabando y el ensanchamiento de la corrupción le abrió la puerta al tráfico de alucinógenos

En otras palabras, las dinámicas de la aquí descrita política tradicional, configuraron un sistema económico, un régimen político y una sociedad propensos al asocio y al uso de la ilegalidad, una casa de puertas abiertas para el desarrollo de una economía del narcotráfico y para la penetración de este en la política y la cultura colombianas, por varias razones: 1. Por la imposibilidad de forjar un modelo económico garantista de derechos que lograra integrar a las regiones en torno al ideal de desarrollo nacional. 2. Por el deterioro que el régimen del Frente Nacional generó sobre el sistema de partidos, aumentando sus divisiones internas en torno a personalismos y desdibujando en el ámbito nacional la posibilidad de que emergieran propuestas políticas alternativas con oportunidad de entrar, con las mismas condiciones, en el juego político. 3. Por el dualismo centro-región forjado desde la política y la economía, que erigió unas élites regionales que, inclinadas al uso de la violencia y de la clientela, tuvieron cada vez mayor autonomía frente al poder central. 4. Finalmente, porque esta erección de una democracia limitada y banalizada se soporta con la cultura del favor, el rebusque y la tajada (ciudadanía desdibujada).



Del negocio del narcotráfico a la empresa política mafiosa

Como ya se ha señalado, contrabando, corrupción y delincuencia organizada son los antecedentes – a veces no presentados de manera evidente- del desarrollo del narcotráfico como un negocio a gran escala. No obstante, “[...] suele atribuirse a los marimberos, traficantes de marihuana de la Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, el protagonismo como los pioneros de las drogas en Colombia. Ciertamente sus excesos y ostentación en los barrios de clase alta de las ciudades caribeñas hicieron imposible que no llamaran la atención del resto de la sociedad, que presenciaba, más con curiosidad y oportunismo que con preocupación, el nacimiento de una clase emergente. Sin embargo, la extravagancia de los marimberos ha opacado el papel superior que desempeñaron los contrabandistas y delincuentes de Antioquia y Valle del Cauca y los patrones de las esmeraldas en la construcción de los grandes carteles de la cocaína”⁸.

En un principio, el negocio de la cocaína comenzó por la consecución de la materia prima en otros países para ser procesada al interior de Colombia y ser enviada al mercado ilícito de los Estados Unidos –para lo cual se necesitó el respaldo o la connivencia de autoridades de aduanas y de control fronterizo-, hasta que los altos recursos provenientes del negocio le permitió a los traficantes ampliar su espacio en la cadena productiva a través del control territorial para la siem-



bra de la hoja de coca, la construcción de grandes laboratorios y de pistas para la comercialización.

No obstante, para entender cómo la economía del narcotráfico logró constituir toda una clase delincuencial emergente en las regiones, con la capacidad de cooptar, penetrar y confrontar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales del país, es necesario, no perder de vista las dinámicas que dieron base a las causas estructurales del mismo: 1. La erección de un Estado precario, ausente en vastos lugares del territorio nacional y con grandes fallas frente a su papel de árbitro de los conflictos y regulador de las dinámicas sociales y económicas 2. La cimentación de una cultura del patronazgo y la clientela, la cual establece unas relaciones caracterizadas por la lealtad, el favor y la intermediación y; 3. La constante reinención del uso de la violencia como mecanismo para la tramitación de los conflictos, la expansión de poderíos territoriales y el control de las poblaciones. Estas

⁸ Gustavo Duncan. Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Bogotá: Editorial Planeta, 2007, p. 213.



causas cultivarían el terreno fértil para que una sociedad con grandes problemas y crisis económicas y políticas, lograra inclinarse fuertemente hacia la cultura de la ilegalidad, que aún hoy, lamentablemente se reinventa para mantenerse como fuerza movilizadora de los designios del país.

Grupos, redes, carteles

Como se ha indicado, el negocio del tráfico de drogas ilícitas empezó con pequeños y disgregados grupos que importaban la pasta de coca de países andinos como Perú y Bolivia; sin embargo, el acceso al mercado estadounidense, el manejo de rutas y de contactos para la comercialización de la cocaína dentro de las ciudades del norte, sólo la tenían un número reducido de organizaciones, lo cual les otorga una posición superior en la cadena delictiva, no sólo frente al poder de organizar redes delictivas, sino de captar el grueso de dinero que el negocio dejaba. Esta dinámica logra establecer prontamente supremacías de unos grupos frente a otros; asimismo, la conquista de autoridad conduce a los grupos dominantes a constituir organizaciones armadas de distintos niveles⁹, con las cuales hacer respetar sus decisiones y la regulación del negocio.

Es así como a finales de los años setenta se pueden encontrar los principales grupos de traficantes en la geografía nacional: algunos en Medellín –entre los que se encuentra el que finalmente se impondría: el de Pablo Escobar-, algunos en Cali –de los cuales el de los Rodríguez

Orejuela y Santacruz emergerían sobre los demás, en el Eje Cafetero, con la organización de Carlos Ledher; en el centro del país, con Gonzalo Rodríguez Gacha a la cabeza; en otras latitudes, como los grupos del norte del Valle, en la costa Caribe, los llanos orientales y el sur del país.

Pese al incremento de la violencia que las organizaciones armadas de estos grupos desencadenaron y a los altos recursos económicos que lograban obtener, parecía que su criminalidad y ostentación pasaban de agache frente a los gobiernos de turno; incluso la administración de López Michelsen (1974-1978) establece mecanismos cambiarios con los que los empresarios de la droga pueden acceder a reintegros anónimos de dólares a través del Banco de la República, lo cual se convierte en una herramienta favorable para el lavado de activos de muchos narcos.

De esta manera, se empiezan a configurar los grandes carteles de la droga: a

9 Como lo han señalado Krauthausen y Sarmiento, la cadena productiva del narcotráfico contiene unas etapas en las que participan actores de muy diversos tipos, desde el campesino “raspachin” hasta el capo que comercia y tiene dominio sobre rutas y redes de distribución. Esto indica que es un negocio en el que las ganancias pueden generar arduas disputas, dado que la regulación de las transacciones es impuesta por quien tenga el más alto poder en la cadena y, este se obtiene garantizando la comercialización del producto y el lavado de los dineros ilícitos. Por ello, al lado del levantamiento de esta empresa, se forjaron aparatos armados también de distintos niveles, la idea era contar con un mecanismo que sirviera para la protección y la expansión del negocio, así como para el sometimiento de otros grupos. Ver: Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento. *Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro*. Bogotá: Tercer Mundo Editores y Universidad Nacional de Colombia, 1991.





través del control cada vez más avasallante de pequeños grupos, de las rutas y los corredores para la exportación de la cocaína, lo que les otorga la autoridad para someter a procesadores y pequeños exportadores, pues la fase más complicada y riesgosa del negocio es, precisamente, la fase final de envío y comercialización en el mercado de Estados Unidos y a menor escala de Europa, así como la del “blanqueamiento” de los dineros obtenidos; quien controlara esta fase, tenía la capacidad de imponerse sobre los demás.

Así terminaron por sobresalir los grupos de Pablo Escobar y los Ochoa Vásquez en Medellín, de Rodríguez Orejuela en Cali, de Rodríguez Gacha en Bogotá y de Carlos Ledher en ciudades intermedias como el Quindío y Pereira, dando origen a lo que conocemos como los carteles de la droga, puesto que estos grupos no sólo llegaron a controlar todas las fases de la producción, la comercialización y lavado de activos, sino que cimentaron organizaciones armadas con mandos claramente

identificados que soportaron su expansión y el mantenimiento de sus dominios.

Como puede observarse, el anclaje de los principales mandos de los carteles de la droga se ubica en los principales centros urbanos del país y en ciudades intermedias más no en las regiones; buena parte de la explicación radica en que dado que el éxito del negocio se encuentra en la exportación de la cocaína, eran las dinámicas urbanas las propicias para desarrollar maniobras de comercialización internacional del producto, esto es, contactos para la creación de todo un corredor internacional, contactos con fines de corrupción de autoridades policiales, fiscales, de aduanas y de control fronterizo, creación de economías que permitieran el lavado de activos y el testaferrato y, soporte tecnológico de telecomunicaciones, por su parte en las regiones se cimentaban contactos, organizaciones armadas al servicio del narcotráfico, regulación de las fases de producción.

Así, ya a comienzos de los años ochenta las bandas narcotraficantes disfrutaron de las bonanzas de la cocaína y, lograron alcanzar altísimas sumas de dinero que les permitieron influir en la vida económica y luego política del país. No obstante, el nacimiento de estas nuevas élites de gustos ostentosos y pocos escrúpulos para someter, comprar o quitar del camino a quienes se interpusieran en sus actividades ilícitas, condujo a una confrontación entre estos y algunas élites del poder central. Cuando el poder de los narcos empezó a estrecharle el camino a algunos sectores del establecimiento, reacios a ceder o dejarse deslum-



brar por las vastas fortunas, le declararon la guerra al narcotráfico y se decidieron a perseguir a los principales capos así como a todos sus negocios y redes de corrupción y delincuencia¹⁰.

Pese a ello, el narcotráfico no sólo contaba con grandes tentáculos (económicos y armados), sino con toda una cultura proclive a la ilegalidad, al patrocinio y al favor, es decir, con reales posibilidades para entrar y establecerse con plena facilidad en las instituciones colombianas y, así lo hicieron: cada uno marcó tendencias diferentes frente a la forma de insertarse en la vida económica, política y social del país, pero su objetivo siempre fue el mismo: incidir en las decisiones políticas que les permitieran proteger a toda costa su actividad ilícita.

Confrontación y cooptación

El punto determinante que dio inicio al conflicto entre el gobierno y los carteles de la droga fue la extradición. Al interior del país, los narcos ya habían configurado toda una “cadena de aseguramiento” de sus actividades ilícitas, la cual iba desde el soborno, la infiltración y el asesinato hasta el lavado de activos. Sin embargo, para los narcos la idea de ser extraditados y juzgados en Estados Unidos se convirtió en un elemento que realmente los perturbó, por ello sus estrategias estuvieron dirigidas a detener esta apuesta de algunos miembros del establecimiento que, para ellos representaba una fuerte amenaza.

En 1979 Colombia firmó junto con Estados Unidos un tratado de extradición

que sería ratificado años después. Sin embargo, los gobiernos de Turbay Ayala y de Betancur, en un comienzo, fueron reacios o tímidos para hacer efectivas las solicitudes de extradición hechas por el gobierno estadounidense. Mientras tanto, las principales organizaciones de la droga, atentas a las amenazas de persecución, entablaron toda una serie de estrategias para limitar e impedir decisiones que desde el Estado se pudieran tomar en su contra – entre ellas, principalmente la extradición que estaba vigente.

Algunos capos optaron por insertarse directamente en la política, otros por su parte, prefirieron hacerlo a través de la infiltración y la cooptación, estas dos grandes tendencias marcarían la guerra abierta y los escándalos que le mostrarían al país, hasta donde la debilidad de nuestro régimen político se había forjado en torno a bases demasiado propensas a cohabitar con la ilegalidad, las cuales dejarían el legado de violencia que hasta hoy sigue sufriendo el país.

La primera gran tendencia la encabezan capos como Pablo Escobar Gaviria y Carlos Ledher Rivas, quienes optaron por vincularse directamente a la política; la segunda, estará liderada por los principales líderes del Cartel de Cali, quienes prefirieron el manejo de la política

10 No hay que dejar de señalar que esta actitud de algunos miembros del establecimiento en contra del narcotráfico, también se debió –y en gran medida-, a la presión ejercida por los Estados Unidos y sus políticas antidrogas para Colombia.



desde “afuera”, a través de la compra de políticos, jueces y toda clase de funcionarios.

“Hacer política por nuestra propia mano”

Cuando los capos del narcotráfico decidieron incursionar en política tenían una ventaja comparativa frente a los grandes partidos liberal y conservador y, frente a los nuevos movimientos y organizaciones políticas: poseían grandes fortunas con las cuales cautivaron fácilmente a sus electores. En otras palabras, la cultura política forjada desde el bipartidismo había dejado como referentes de la esfera política, prácticas ya descritas como la clientela, la corrupción y la violencia, lo cual determinaba que el éxito electoral no se cimentaba en las ideas sino en el dinero y, era precisamente esto último, lo que el narcotráfico lograba imponer frente a otras élites en el país. Con este referente claro sobre la forma como históricamente se había hecho y se hacía política, los capos logran insertarse en movimientos políticos o crear unos propios, a través de los cuales captarían bases sociales para sus beneficios electorales optando por varios objetivos: lograr consolidar respaldos populares, obtener y ampliar el dominio de regiones copadas por viejas castas políticas o sensibles a movimientos sociales y armados de izquierda, conseguir espacios políticos que les permitieran incidir en las agendas gubernamentales, entre ellas, en las políticas de lucha antinarcóticos que incluían el tema de la extradición.



De esta manera, Pablo Escobar creó propuestas como *Civismo en Marcha* y *Medellín Sin Tugurios*, movimientos por medio de los cuales empieza su incursión en la política a través de la construcción de obras sociales, entrega de dinero y de mercados en los barrios marginados de Medellín. Escobar logra vincularse a una facción disidente del Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo, del cual fue expulsado por mandato directo de la joven promesa Luis Carlos Galán Sarmiento. De allí, pasa a ser parte del movimiento dirigido por Alberto Santofimio Botero, Renovación Liberal, por medio del cual es elegido representante suplente a la Cámara de Representantes en 1982. Con esta elección Escobar consigue obtener una visa para el ingreso a los Estados Unidos, así como la inmunidad parlamentaria, figura que le garantizaba beneficios en caso de llegar a ser detenido por la comisión de un delito (la figura contemplaba que un parlamentario si no era encontrado en flagrancia sólo podía ser capturado 20 días antes y





40 después de las sesiones del Congreso, y estas se prolongan por medio año). Escobar para entonces contaba con pocos pero perseverantes opositores, entre ellos el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien emprendió una fuerte persecución judicial contra el capo, que lo llevaría a perder su investidura como parlamentario y le daría uno de los más fuertes golpes que el establecimiento propiciaría sobre los carteles en la década de los ochenta: la incautación y destrucción de *Tranquilandia*, uno de los laboratorios más grandes del capo, ubicado en la sabanas del Yarí.

Mientras Escobar se vinculaba directamente en la política, su antiguo lugarteniente y ahora socio, Gonzalo Rodríguez Gacha, plantearía una vía alterna: la penetración en movimientos provinciales y locales que, por medio de asociaciones cívicas o gremiales, estaba decidido a imponer hegemonías parroquiales con capacidad de acabar con la cada vez más intensa presión de la guerrilla. Fue así como Gonzalo Rodríguez Gacha le ofreció a estas asociaciones cívicas o gremiales el apoyo logístico y militar suficiente para exterminar no sólo a la guerrilla, sino para

acabar con cualquier representación de la izquierda liberal, del antiguo MRL, de la ANAPO, del MOIR y del PCC. Aunque Rodríguez Gacha defendió su postura como anticomunista, ella distaba de cualquier ideología y estaba más afectada por la oposición que le hicieran las FARC, particularmente Jacobo Arenas, a su pretensión de extender cultivos y laboratorios en zonas de influencia del grupo guerrillero. Gacha habría de extender su práctica de eliminación sistemática a mediados de los años ochenta a la naciente Unión Patriótica, partido que surgirá de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno Betancur y las FARC.

Mientras estas eran las aventuras de Escobar y de Gacha, en el eje cafetero hacía de las suyas Carlos Ledher, quien había creado el Movimiento Latino Nacional (MLN), cuyas bases sociales eran atraídas a través de la entrega de dinero y mercados en jornadas que se denominaban “sábados patrióticos”, donde el capo elevaba consignas de corte racista, regionalista y nacionalista en aparente defensa de los intereses parroquiales, pero sobre todo en contra de la extradición. A diferencia de la apuesta política de Pablo



Escobar, quien estuvo cercano a las huestes liberales, adhiriéndose primero a una facción muy reconocida y luego forjando una propia, la de Ledher se dirigió hacia la creación de su propio movimiento político, desde el cual rechazó los vicios de la política tradicional en su región e intentó fabricar unos principios ideológicos. No obstante, la idiosincrasia de un capo del narcotráfico que se aventuraba a hacer política por su propia mano, sólo podía traer como resultado una organización que, pese a criticar la corrupción y la clientela, apeló a ellas desde el principio para captar electores y seguidores y, de igual forma, sus idearios políticos e ideológicos eran más una amalgama de distintas tendencias y posturas que le servían para oponerse abiertamente a la extradición, que una verdadera propuesta política y programática. Es así como en torno al MLN podía encontrarse una inclinación abierta hacia el nazismo, se enarbolaban las banderas del anticomunismo, pero a la vez, las del antiimperialismo y hasta las del proyecto bolivariano.

Las propuestas de Ledher no sólo eran difundidas por el trabajo de los “sábados patrióticos”, sino que él mismo se encargó de crear una fuente de masiva difusión: el periódico *Quindío Libre*, por medio del cual proponía y justificaba prácticas como la limpieza social, criticaba la extradición, el clientelismo y la corrupción de la política tradicional, desdeñaba del comunismo, pero a la vez, paradójicamente, manifestaba solidaridad con los grupos guerrilleros y se proclamaba gaitanista. Con todo esto, el MLN logró conseguir en la

elecciones departamentales de 1984 dos diputados a la asamblea y más de diez concejales en el Quindío. El dinero del narcotráfico sirvió para conseguir electores, los cuales fueron cautivados a través del reparto de dinero y regalos, incluso los principales líderes que se adherían al Movimiento devengaban un sueldo.

No obstante, estas iniciativas terminaron por volverse en contra de los capos, pues sus pretensiones de insertarse directamente en la política con el ánimo de conseguir márgenes de maniobra en el establecimiento, los puso en la mira del mismo, haciéndolos vulnerables a la persecución del Estado. Esto no sólo generó que los narcos salieran por la puerta de atrás de sus movimientos políticos, sino que se internaran en la clandestinidad y usaran otro tipo de herramientas, ya no únicamente para infiltrarse en las instituciones –lo cual venían y siguieron haciéndolo– a partir del soborno y compra de funcionarios de distinto rango, sino a través de una guerra abierta contra el Estado, liderada por Escobar, para quien el detonante lo había marcado la fuerte oposición y persecución ejercida por el entonces Ministro Lara Bonilla, quien desmascararía los orígenes delictivos del capo y le asestaría un fuerte golpe a sus estructuras delincuenciales, tal como lo fue la “Operación Tranquilandia” al mando del Coronel Jaime Ramírez Gómez, guerra que empezaría, precisamente con sus asesinatos en el año de 1984.

A partir de ese momento, la violencia iría en aumento. La guerra declarada entre el Estado y capos del narcotráfico





—principalmente Escobar y Gacha—, estuvo caracterizada por la activación del uso de la extradición por parte del Estado y, del uso sistemático de la violencia y el terror por parte de los narcos, cuyo fin era intentar someter al establecimiento a sus condiciones. De esta manera, el país vive toda una oleada de secuestros, asesinatos, bombas y magnicidios, en una estrategia trazada por los principales barones de la droga que lograría soportarse y ejecutarse, gracias a los grupos armados, que desde sus inicios tejieron y, que serían los inicios de las hoy conocidas bandas paramilitares.

“Poner la política a nuestro servicio”

Por su parte, los líderes del otro gran cartel de la droga (el de Cali), conscientes también de que la persecución judicial, policial y fiscal que el Estado colombiano había emprendido en contra del narcotráfico los vinculaba igualmente a ellos, idearon

un plan de acción que les permitiera hacerle zancadilla a las pretensiones del gobierno y les permitiera conservar cierta capacidad de maniobra para que el negocio no se viniera abajo. Esta fue una decisión que contaba con las mismas intenciones que fundamentaron la tomada por Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y Carlos Ledher, pero con una radical diferencia: el tipo de estrategia a utilizar.

Para los Rodríguez Orejuela, José Santacruz y Helmer *Pacho* Herrera, el punto estaba no en vincularse a la política de manera directa, sino en utilizar las estructuras políticas vigentes y con fuerza en el establecimiento para su beneficio. Por ello, decidieron acercarse a las huestes del Partido Liberal y lo consiguieron de manera vertiginosa a través de la compra de toda clase de políticos, comprometiéndolos de esta forma con el narcotráfico para así, terminar sometiéndolos a sus propósitos. Para los capos del cartel de Cali el uso de la violencia y el terror fue una herramienta poco factible para el buen desarrollo de su estrategia, esto se debió en parte a que la forma como se cimentó dicha organización, distó de otras como la de Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero. Su carácter era mucho más empresarial, soportándose en la vinculación a negocios y empresas legales como los deportes, la banca y la construcción y con la creación de las propias (entre las que se destaca Drogas La Rebaja), por medio de las cuales, lograron insertarse en las dinámicas de la vida económica, obtener contactos y reconocimiento, así como blanquear sus activos ilícitos.



Incluso los alejados caminos que las dos organizaciones más grandes de la droga habían tomado para librar una misma batalla, terminó por enfrentarlos a muy altos costos. Desde un comienzo, cuando se empiezan a configurar los carteles de la droga, se inicia una pugna de unos líderes sobre otros, cuyo propósito era que sólo un gran eje se impusiera y controlara la totalidad del negocio. Es así como Pablo Escobar comienza su avanzada, apropiándose de rutas y gravando impuestos a otros capos, señalándoles que los cabecillas del cartel de Medellín serían los únicos jefes, ante lo cual terminan accediendo Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Ledher, mientras que, por su parte, los cabecillas del cartel de Cali optan por distanciarse y conservar su autonomía, lo que termina constituyéndose en el primer paso de un enfrentamiento a muerte¹¹.

Esta pugna no sólo desemboca en una guerra interna del narcotráfico que produce atentados entre unos y otros, sino en el rechazo explícito del cartel de Cali a la oleada terrorista de Pablo Escobar, que lo lleva incluso a aliarse con el establecimiento para lograr vencerlo. Durante una indagatoria que rindió años después Miguel Rodríguez en la Fiscalía, a mediados de abril de 1999, cuenta que ellos colaboraron en los operativos de búsqueda de Pablo Escobar y sus lugartenientes, y que de esa participación siempre estuvieron enterados los presidentes Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo: “[...] Las autoridades calculan que en la última fase de la persecución contra Pablo Escobar, el cartel de Cali invirtió cerca de 120 millo-



nes de dólares en compra de tecnología, pago de informantes y sobornos a miembros del DAS, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y el Ejército”¹².

El distanciamiento del uso de la violencia como mecanismo para aplacar la extradición, obtener inmunidad judicial y proteger los dineros obtenidos, no radicaba únicamente en el diseño de una estrategia que les permitiera penetrar a fondo y sin mayores ruidos a todo tipo de instituciones para ponerlas al servicio de los intereses de los capos; también era una decisión calculada que les permitía no tener otro tipo de cargos como homicidio o secuestro, así como mantener a sus familias protegidas de todo tipo de persecuciones. Con ella, lograron mantenerse por más tiempo en el negocio, obviar la justicia colombiana y las solicitudes expresas de extradición; también les sirvió

11 Chaparro, Camilo. La historia del cartel de Cali. El Ajedrecista mueve sus fichas. Intermedio Editores, Bogotá, 2005, pp. 212-213.

12 Ibid, pp. 202-203.





para derrotar a sus enemigos del cartel de Medellín, pero, finalmente, nunca ganaron la guerra. Pese a que tenían serias pruebas que habían conservado para garantizar que los políticos no los traicionaran, terminaron siendo sometidos por la justicia.

Tal vez la evidencia más explosiva de la estrategia seguida por el cartel de Cali fue el *Proceso 8000*. No obstante, existen serias pruebas de los vínculos que la mafia logró establecer con distintas instituciones políticas, militares, judiciales, económicas y sociales, entre ellas, las que llevaron hacia la declinación de solicitudes de extradición (incluso la claudicación misma de la extradición en la Asamblea Constituyente de 1991, que de entrada les advertía a los capos que habían ganado la guerra). En el año de 1984, Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa fueron detenidos y enviados a prisión en España, allí estuvieron por cerca de trece meses, tiempo durante el cual el gobierno de los Estados Unidos, solicitó su extradición por cargos de tráfico de cocaína hacia ese país. No obstante, pese a que tras el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el gobierno de Belisario

Betancur reaccionó ante el hecho con la reactivación de los tratados de extradición con los Estados Unidos, no atendió la solicitud expresa por ese gobierno sobre el caso de Rodríguez y Ochoa, sino que solicitó a España su extradición hacia Colombia, sobre la base de supuestos procesos judiciales que los capos tenían pendientes en Colombia. “Aparentemente el expediente fue fabricado para evitar que las autoridades españolas lo enviaran a los Estados Unidos. El cartel de Cali habría pagado un millón de dólares a varios funcionarios del ministerio de Justicia para que aceleraran y presionaran los trámites de extradición”.¹³

Frente a la presunción sobre su incidencia en la caída constitucional de la extradición en la Constituyente de 1991, el camino recorrido había sido bastante largo. Por un lado, es obvio que los capos se dedicaron a “apoyar” a distintos políticos regionales para su carrera política en el Congreso, y que de esta manera, adquirirían serios compromisos con los barones de la droga, de lo cual se puede establecer que entre ellos, se encontraba obstaculizar la extradición, por otro, cuando se aprueba la Constituyente, es inevitable pensar -pese a análisis que señalan que la prohibición de la extradición de nacionales consignada en la Carta del 91 es resultado de la presión de la guerra forjada por el narcotráfico contra el Estado y la sociedad, que hizo finalmente que

¹³ *Ibíd.*, p. 187



el problema se asumiera como un asunto interno y, que así meritaba ser solucionado- que los tentáculos del narcotráfico no se hubieran dirigido a la compra de dirigentes políticos para que lograran su participación en la Asamblea a cambio de tumbar dicha figura.

Finalmente todos perdieron la guerra

Las intenciones de Pablo Escobar y otros miembros del cartel de Medellín por participar directamente en la política, se convirtieron no sólo en su principal error, sino en su principal motor para declarar una guerra a muerte al Estado colombiano, así como con el cartel de Cali, que finalmente lo llevaría a su propia destrucción, pues erróneamente, lo que consigue es reunir en su contra todas las fuerzas posibles.

Con la propuesta de sometimiento a la justicia que el gobierno de César Gaviria Trujillo le hizo a los capos del narcotráfico y la nueva Carta Política que le puso fin a la extradición, la guerra que el cartel de Medellín fraguó con tanta brutalidad, logró detenerse. Con la primera se conseguiría la entrega de Pablo Escobar y de algunos miembros del clan Ochoa Vásquez, se vislumbraba así un periodo de transición que intentaba poner fin al conflicto del narcotráfico –por lo menos sometiendo a uno de los grandes carteles de manera pacífica y negociada-, sin embargo, la ambivalencia con que se aplicó la ley de sometimiento y la fuga de Escobar de la cárcel La Catedral luego de un año de su

permanencia allí, revelaron que la capacidad de compra del narcotráfico a miembros de las instituciones del Estado era altísima, pues el capo no sólo seguía contando con los lujos y las extravagancias propias de su estilo, sino que tenía toda su infraestructura delictiva intacta operando desde la cárcel, lo que denotaba una derrota inminente para el Estado.

Tampoco, la posterior persecución y asesinato del capo, puede leerse como una victoria del establecimiento en la guerra que libraba contra el narcotráfico, primero, porque su principal legado es el paramilitarismo, pues como se ha señalado, su muerte se consigue a través de una alianza perversa con el cartel de Cali y los *Pepes* (Perseguidos por Pablo Escobar), lo que le permite, a estos últimos, consolidarse como verdaderos emporios militares con fuerte ascenso de dominación territorial en las regiones y en ciudades como Medellín, quienes, finalmente, se apropian del negocio de la droga y, segundo, porque el cartel de Cali pudo afianzar su estrategia de infiltración de la política colombiana, revelando con una acción determinante: el soborno de todo un gobierno, empezando por el Presidente de la República Ernesto Samper Pizano, que la mafia realmente había asaltado la institucionalidad colombiana.

Con esto, los Rodríguez Orejuela, creían haber llegado a un punto cumbre en el negocio de la droga, pues habían logrado quitar del camino a su principal enemigo, así como alcanzado la más alta infiltración de la política colombiana: tenían un gobierno, con lo que esperaban





obtener un trato más favorable hacia ellos y su inmunidad judicial y fiscal.

Pero tampoco su estrategia de infiltración y alianza con las instituciones les garantizó la victoria. La política antidrogas de los Estados Unidos para el momento ya generaba tal presión sobre Colombia que, termina revelando cómo los tentáculos del cartel de Cali se habían expandido hacia la política y las autoridades colombianas y, de esta manera, explota el conocido proceso de ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña electoral del Presidente Samper, conocido como *Proceso 8000*.

Aunque algunos de los sindicatos fueron juzgados y, en sus procesos judiciales revelaron que el Presidente tenía pleno conocimiento y avalaba la alianza, el poder de compra del cartel de Cali sobre otros miembros del establecimiento, como Senadores y Representantes a la Cámara, puede revelarse en intentos de aprobar leyes favorables para los narcos y sus testaferros¹⁴ –pese al desprestigio del gobierno por el tema- y, en la absolución final del jefe de Estado.¹⁵

Para los principales capos del cartel de Cali era fundamental que el gobierno

de Samper no se cayera y, de esta manera, siempre negaron los vínculos. No obstante, paradójicamente, es en el marco de este gobierno, cuando empieza su derrota. Por aquellos años, el Bloque de Búsqueda de la Policía, agudizaba la persecución contra los principales cabecillas de la organización, fue así como en el mes de junio de 1995 capturaron en Cali a Gilberto Rodríguez Orejuela y, pocos meses después a Miguel Rodríguez Orejuela, era el resultado, de la presión que los Estados Unidos ejercía con tanta vehemencia sobre un gobierno absolutamente desprestigiado.

Aunque las condiciones de los capos en la cárcel fueron bastante cuestionadas

14 “El 13 de diciembre de 1995 el Senado aprobó, por 56 votos -10 de ellos de congresistas vinculados al 8000- y 32 en contra, un artículo que convertía los delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato en dependientes o subordinados al ilícito del narcotráfico. Es decir, los fiscales y los jueces sólo podrían procesar por estos delitos a los narcotraficantes[...] Gracias a la presión de los medios y la opinión pública, la Cámara de Representantes hundió este misil contra el 8000”. Chaparro, 2005, op cit., p. 108.

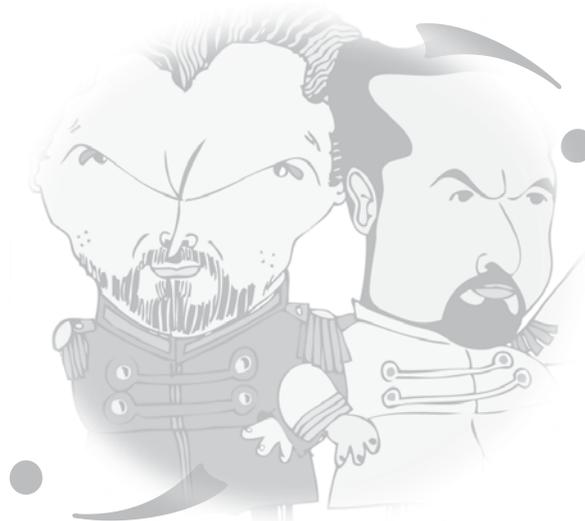
15 La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, primero, en diciembre de 1995, casi unánimemente (sólo hubo un voto en contra), decidió no abrir investigación contra el Presidente Samper por supuestos nexos con el narcotráfico y, luego de que la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Alfonso Valdívieso, radicara ante ese organismo un expediente que buscaba demostrar la infiltración de “dineros calientes” a la campaña del Presidente y así abrir una investigación formal, la Comisión terminó fallando a favor del jefe de Estado. Ver: El Tiempo, 14 de diciembre de 1995. Política. “Samper no será investigado”, El Tiempo, 15 de febrero de 1996. Política. “Samper está comprometido: Fiscalía 1”, El Tiempo, 13 de junio de 1996. Información General. “Cámara certifica a Samper”.



por los privilegios y la continuación del delito que desde allí fraguaron, es evidente que allí también empieza la caída del gran cartel. Con el transcurrir del tiempo, los capos empiezan a perder margen de maniobra sobre el negocio y, de esta manera, en las regiones se abren múltiples redes que, antaño estuvieron subordinadas al cartel, pero que empiezan a independizarse, precisamente, uno de los más beneficios de esta dinámica es el cartel del Norte del Valle.

Mientras tanto, los cabecillas contemplaban el inicio de su ocaso. Pese a que estaban seguros de maniobrar para pagar condenas cortas (y sobre todo nunca ser extraditados), estas se iban incrementando con nuevos procesos judiciales. Sin embargo, la debacle llegó nuevamente con la amenaza de la extradición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aunque el país ya había revivido en 1997 la figura de la extradición, los capos se encargaron de que esta no los afectara a ellos¹⁶, fue sólo en el año 2003 cuando la justicia de los Estados Unidos afirma dos procesos de extradición en contra de los hermanos Rodríguez Orejuela, que los capos se sienten expresamente amenazados.

A partir de ese momento, se proponen sacar los ases que tanto tiempo guardaron bajo sus mangas. Si bien el *Proceso 8000* les había propiciado varios golpes que menguaron la capacidad de acción del cartel, su maniobra de infiltración, cooptación y compra de todo tipo de instituciones, en especial, de las políticas, les dejaba una larga lista de nexos, vínculos y alianzas que ningún dirigente de la clase



política querría que salieran a la luz. De esta manera, empieza la amenaza y el chantaje a altos funcionarios del gobierno, políticos, miembros de las Fuerzas Armadas y de la rama judicial para que de algún modo le pusieran límites a la extradición. Pese a ello, incluso a la supuesta intermediación del ex presidente Samper, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron extraditados a los Estados Unidos en diciembre de 2004 y marzo de 2005 respectivamente.

Con esto, puede leerse el fin de la guerra contra el narcotráfico a favor del Estado, pero de lejos ha sido así, una nueva generación de narcotráfico y violencia, mucho más anclada a las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales, ya se venía gestando desde tiempo atrás, tan arraigada a nuestra cultura proclive a la

¹⁶ Para este momento la extradición no era retroactiva, es decir, no se aplicaría a delitos cometidos antes de la expedición de la norma.



ilegalidad y la violencia, que pasó desapercibida ante la opinión pública del país.

De manera paralela a la irrupción de los grandes carteles de la droga, el fraccionamiento regional y la imposibilidad de forjar un régimen político y económico capaz de irrumpir democráticamente en la construcción de un Estado moderno, llevaron a que elites regionales, con fuertes legados del clientelismo, la colonización y la violencia, se asociaran y armaran para defender sus proyectos económicos y políticos de la amenaza guerrillera. Con ausencia total o parcial e incluso con el respaldo del poder del Estado, se cimentaron así las bases del proyecto paramilitar, que en principio, se caracterizó por estar afirmado a lo local, erigiéndose como un instrumento de fuerza para proteger los intereses de las castas locales, incluso sometiendo para su beneficio a pequeños campesinos, en la lógica ya bastante arraigada del patronazgo.

Prontamente, las fraccionadas bandas de paramilitares empiezan a ser permeadas por el narcotráfico. El dinero de los carteles, hace del paramilitarismo un instrumento militar ya no sólo para la protección de los intereses particulares de las élites locales, sino de los intereses expansionistas del narcotráfico, el cual le imprime tal cantidad de recursos, que además de convertir bandas en verdaderos ejércitos, es capaz de despojarle a las élites tradicionales de las regiones el control ejercido sobre estos. “En éste proceso entran en crisis los fines de la organización y ésta comienza a transformarse en un sentido en el cual ya no son

los fines los que determinan la organización, sino la organización la que determina sus fines”.¹⁷

La guerra contra los carteles de la droga nunca gira su mirada hacia este instrumento militar que consolidaba el narcotráfico y que, de manera paralela –mientras los grandes capos observaban su eclipse-, se fortalecía y arraigaba en las regiones, recogiendo el legado de criminalización de la vida social, económica y política que había enseñado el narcotráfico. De esta manera, ya convertido en una fuerte estructura militar, el paramilitarismo dirige su campo de acción hacia la conquista del poder político y económico, para lo cual, se convierte en una organización con un claro objetivo: el sometimiento a su favor de toda la institucionalidad.

De esta manera, desaparecían del panorama nacional los grandes carteles de la droga, es decir, grandes estructuras organizativas con mandos muy establecidos, pero se gestaban múltiples organizaciones que heredan o se apropian de pequeñas fracciones del negocio y, que por su tamaño logran pasar desapercibidas, elemento fundamental, dado que la fuerte persecución que contra los antiguos carteles se libró, puso en evidencia los canales de penetración que el narcotráfico había generado sobre el establecimiento, y hacia de esta estrategia una herramienta

17 Medina Gallego, Carlos. El narco-paramilitarismo. Lógicas y procesos en el desarrollo de un capitalismo criminal. En: Estrada Álvarez, Jairo (ed). Capitalismo criminal. Ensayos críticos. Bogotá, 2008, pp. 110-111.





poco viable para asegurar la continuidad del negocio. Por ello, a los narcos no les queda otra opción que apelar a las estructuras militares que el mismo narcotráfico había financiado y estimulado y, que se habían instalado en las regiones como verdaderas fuerzas para, de esta forma, obtener la protección necesaria y las posibilidades de expansión. Se configura así el paso del predominio urbano al rural de toda la cadena productiva de la droga.

Desde esta perspectiva, buena parte del control de la empresa criminal queda a expensas de quien tiene el dominio territorial y militar para garantizar su mantenimiento, es decir, queda en manos de los ejércitos y grupos armados que operaban en las regiones de manera autónoma.

Por ello, el narcotráfico termina convirtiéndose en un subordinado de las bandas paramilitares, que en su proceso de consolidación, no se interesan sólo por tener cierto control sobre el negocio para recoger dividendos, sino en apropiárselos completamente para revertirlos en la ampliación de ejércitos que les permitirían ejercer un control real y efectivo sobre los territorios, para lo cual, también debían afianzar y ampliar su estrategia de sometimiento de las autoridades locales y, erigirse como poder regulador de las relaciones sociales, políticas y económi-

cas regionales. Es así como el creciente fenómeno paramilitar, “Establece alianzas internas y externas con distintos actores y sectores de la sociedad que van perfilando la complejidad de sus fines. Los narcos se vuelven “paracos” para abrirse camino hacia la legalización, y los “paracos” se vuelven narcos para constituirse en élite económica. Se vuelven socios, y en sociedad y fusión, establecen y fortalecen las relaciones con las élites tradicionales y la clase política en el camino para generar su propio advenimiento en el poder”¹⁸.

Una breve conclusión

En últimas, el narcotráfico como proyecto ilícito sí logra asaltar por completo a la institucionalidad colombiana. En manos del paramilitarismo -que cuenta con la connivencia o el silencio del Estado-, es capaz de erigir un verdadero proyecto mafioso, único triunfador de esta guerra.

El paramilitarismo como apuesta mafiosa en conquista de la institucionalidad, logra imponerse como poder político, sometiendo o comprando a las élites tradicionales; como poder económico, ex-

¹⁸ Ibid, p. 111.



pandiendo con el uso de la violencia su dominio territorial, penetrando y controlando las estructuras económicas tanto legales como ilegales y, como verdadero poder mafioso, capaz de imponerse en el mundo de lo público, pues el uso sistemático de la violencia, el control de las economías lícitas e ilícitas a su favor y, la posibilidad creciente de administrar el clientelismo político en pro de sus intere-

ses, le ha permitido ampliar sus radios de acción de tal manera, que ha adquirido la capacidad para incidir en las agendas gubernamentales y, en últimas, para imponer las condiciones propias del dominio del capital ilícito en una sociedad: la creación de legitimidades e identidades en torno a las múltiples expresiones (sociales, políticas, económicas, políticas y culturales) que este puede adquirir¹⁹.

✖



19 Sólo para darle bases sólidas a mi argumento, señalo ejemplos fehacientes de lo que resulta ser un panorama lamentable para el país, pero que resulta inevitable hacerlos: la parapolítica, la yidispolítica, las empresas nacionales y multinacionales que financiaban y ayudaban a ingresar armas para el paramilitarismo como el caso de La Chiquita Brands, el sometimiento de otras estructuras delictivas y de economías ilícitas por parte del paramilitarismo como en los casos del Chance en la costa Caribe, el contrabando de gasolina en la Guajira, las economías informales y el contrabando de mercancías en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, entre otros.

¿Son reales las narcolimosnas?

María Teresa Cifuentes Traslaviña¹

En el debate que se da en México acerca de la presencia y las acciones del narcotráfico en el país azteca se dice que “México se está colombianizando,” en tanto allí como en Colombia es evidente la maquinaria de muerte que han desplegado los narcotraficantes para atacar a quienes se oponen a sus acciones ilegales o para combatir a sus rivales. Pero no sólo ha sido en el amplio espectro de la violencia donde se presentan semejanzas; en México como en Colombia se han realizado tareas, a veces muy sofisticadas, para penetrar las instituciones y permear diversos sectores de la sociedad. En ese propósito no han escapado ni las instituciones religiosas.

Es así como en México se ha hecho pública la presencia de los dineros de los

narcos entre sectores de la Iglesia católica, en el que aparecen involucrados obispos y sacerdotes, y por las respuestas que éstos dan a los señalamientos se evidencia que las afirmaciones en tal sentido son ciertas, como se deduce de las declaraciones ventiladas en la prensa donde algunos clérigos aceptan haber recibido estas donaciones. Así las justifican: “Apoyado en el pasaje bíblico en el que María Magdalena le lava los pies con perfume a Jesucristo, el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, admitió que a la Iglesia católica llegan limosnas del narcotráfico, pero que

¹ Profesora universitaria e investigadora independiente.



se purifican al entrar a ella”². Otro clérigo, encargado de asuntos educativos de la Conferencia Episcopal mexicana, a quien se le preguntó “si la Iglesia no debería rechazar las limosnas de las que sospeche provienen del narcotráfico”, respondió: “No porque el origen del dinero sea malo hay que quemarlo. Hay que transformarlo, más bien. (...) Si una persona se puede transformar, cuánto más lo material.” Otra respuesta también de un sacerdote señala: “He conocido casos, pero se han purificado”³.

Estos ejemplos muestran, por una parte, que las narcolimosnas han sido reales en la Iglesia mexicana y por otra, la complacencia de ciertos clérigos con estas prácticas. Lo anterior ha provocado titulares de prensa cómo: “Polémica con la Iglesia en México por narcolimosnas.”⁴ Estas discusiones han llevado a pronunciamientos del cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera, en el que señala que “el dinero del narcotráfico no tiene cabida en los recursos de la Iglesia católica.”⁵

En México, cuando se toca el tema de las narcolimosnas, con frecuencia se hace alusión a hechos similares en Colombia. Vicente Leñero, guionista de la película “El crimen del Padre Amaro”, en reflexiones ante el escándalo que la película suscitó en sectores católicos, señala: “Pienso que al episcopado mexicano le enoja también la película por el tema de las narcolimosnas (...) No hay duda que los Escobar de Colombia y los Arellano de México o el Señor de los Cielos tendrían mucho que decir sobre un asunto que evidentemente preocupa a nuestros cardenales Salazar y

Rivera. ¿O es acaso inverosímil el episodio que aborda las narcolimosnas en la película? ¿Es calumnioso?...”⁶

La situación en Colombia en relación con las narcolimosnas no ha tenido la trascendencia de México y esto nos lleva a preguntarnos ¿Ha sido tan afortunada la Iglesia Católica en Colombia que el narcotráfico no ha logrado acercarse a ella con estas dádivas, ni aprovecharse de su prestigio para acogerse a su sombra, al desarrollar prácticas de aparente “beneficencia” y así conseguir el aval de tan prestigiosa institución y sumar adeptos que se tornen complacientes con sus prácticas? Esta pregunta es pertinente mucho más cuando cada día las noticias, las investigaciones de las autoridades y los estudios académicos muestran cuán grande ha sido la penetración del narcotráfico en instituciones tanto gubernamentales como no oficiales y cómo han desarrollado métodos tan sofisticados para incrustarse en el corazón de los mismos organismos de seguridad el Estado.

La Iglesia Católica en Colombia ha salido bien librada en tanto no se han presentado pruebas que soporten ante las autoridades el acercamiento de los narco-

2 Infosel financiero. 20/09/2005. www.Terra.com.mx/artículo

3 Ibid.

4 El Clarin. www.clarin.com/diario/1997/09/25

5 Impacto. Iglesia rechaza narcolimosnas. 22.12.2008. www.medios.com.mx

6 Leñero Vicente. Unión adúltera con el poder. www.sectas.org/Secciones_Especiales/padreamaro/leñero.



traficantes a sus organizaciones y a sus clérigos, pero las denuncias de ciertas relaciones de conocidos capos con algunos clérigos no ha tenido la trascendencia que se le ha dado en el país azteca, y cuando hace algunos años también se ventilaron en los medios situaciones similares, rápidamente la jerarquía entró a desmentir tales aseveraciones y, vale decirlo, emitió comunicaciones rechazando la aceptación de dineros de los narcotraficantes por cualquier sector de la sociedad; pero eso no quiere decir que no aparecieran algunos sacerdotes cercanos a los capos, sólo que aquí rápidamente esas denuncias no tuvieron eco entre los ciudadanos ni entre los creyentes católicos y sólo unos cuantos columnistas o personas allegadas a los narcos han denunciado esas posibles relaciones.

Desde los años ochenta fueron apareciendo en la prensa algunas referencias sobre la recepción de dineros del narcotráfico por parte de miembros del clero. En el libro de Fabio Castillo “Los jinetes de la cocaína” se señala que las campañas cívicas adelantadas por Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, estuvieron avaladas por los sacerdotes “Elías Lopera Cárdenas y Hernán Cuartas quienes pronunciaban encendidas homilías en defensa de las campañas de Escobar Gaviria. (...) Pese a que en el periódico del narcotraficante se publicaban las fotos de Lopera y Cuartas, el Arzobispo de Medellín, Mons. Alfonso López Trujillo, nunca se opuso a su práctica...”⁷ Igualmente se afirmó que los señalados sacerdotes Lopera y Cuartas formaban



parte de la Junta Directiva de la organización “Medellín sin tugurios”, obra social emprendida por Pablo Escobar para dar soluciones de vivienda a los pobladores más empobrecidos de ciudad.

Las campañas benéficas de Pablo Escobar le sumaban réditos al vender la imagen de gran benefactor de los sectores populares. Lo mismo consiguió con la Campaña Medellín Cívico, a través de la cual donó miles de arbustos para sembrarlos en parques y zonas verdes de la ciudad. La Revista Semana tituló un artículo sobre el capo como “Un Robin Hood Paisa.”⁸ En 1983, siendo congresista, fue expulsado del movimiento de Renovación Liberal por sus nexos con el narcotráfico. Es decir, cuando posaba de hombre generoso con los desvalidos, iban creciendo

7 Castillo Fabio. Los jinetes de la cocaína: Ed. Documentos Periodísticos, Bogotá, nov. 1987. II. Edición. P.64.

8 Semana 16 mayo de 1983



sus excentricidades como la compra de la hacienda Nápoles donde llevó un buen número de animales exóticos, pero igualmente se iban conociendo sus actividades en el narcotráfico.

Ahora bien, ante las constantes revelaciones de las actividades ilegales de Escobar, algunos columnistas se preguntaban por qué, por ejemplo, el Cardenal Alfonso López Trujillo, Arzobispo de Medellín en la época, no tomaba medidas al ver a dos de sus sacerdotes vinculados con las actividades sociales del capo. La respuesta del arzobispo ante insinuaciones de cierta permisividad e inclusive de cercanía con el jefe del cartel de Medellín, fue siempre defenderse, así lo hizo cuando demandó por injuria y calumnia a María Jimena Dussán, por una columna publicada en *El Tiempo* el 25 de abril del 2005, en la que se habló de las buenas relaciones del purpurado con el programa Medellín sin Tugurios. Es difícil entender porqué no se conocen contundentes pronunciamientos públicos del fallecido cardenal frente a la relaciones de sacerdotes con el capo, caso de los padres Lopera y Cuartas, cuando en otros campos estaba pronto a fijar su posición cuando los sacerdotes osaban criticar al establecimiento por mantener las profundas desigualdades sociales.

A pesar de que las actividades de los narcotraficantes eran de conocimiento público, sus donativos eran bien recibidos, seguramente con cierta ingenuidad por sencillos sacerdotes de provincia. El párroco de Necoclí, Luis Angel Gutiérrez, señalaba: “la Fiesta del Coco no sería nada sin el apoyo de don José” y “las gentes

han fijado la mirada en este hombre (Pelusa) que como obra de Dios llegó a Necoclí para ayudar en torno a las obras de desarrollo”. Se refería, el buen párroco, a uno de los primeros grandes narcotraficantes, José “Pelusa” Ocampo.⁹

Pero no solamente sacerdotes de alejados municipios aceptaban haber recibido dineros de ilegales. Cuando era obispo de Pereira, el hoy Cardenal Darío Castrillón, hizo una denuncia sobre la presencia de dineros del narcotráfico en la política y allí aceptaba haber recibido narcolimonas: “Hasta yo mismo he recibido dinero de la mafia y lo he repartido entre los pobres.”¹⁰ Igualmente Fabio Castillo, en el libro “Los jinetes de la cocaína”, recoge una fotografía en la que aparece Mons. Darío Castrillón junto a Carlos Lehder durante la inauguración de la Posada Alemana, ocasión en que el prelado bendijo las instalaciones.

Parece que Mons. Castrillón nunca negó haber recibido donaciones del narcotráfico. Siendo Arzobispo de Bucaramanga y cuando la Iglesia Católica se sumaba a las muchas denuncias por el ingreso de dineros de la mafia en la campaña presidencial de Ernesto Samper, en declaraciones al informativo NTC “sostuvo que los aportes de narcotraficantes arrepentidos destinados a los pobres son ‘buenas acciones’, y enfatizó que deben

9 Ibid.

10 Gil Montoya Rigoberto. Resumen del libro “El Cardenal Castrillón entre la fe y el poder” de Marcelino Peña, Bogotá 1999



diferenciarse de las sumas depositadas a favor de las campañas políticas. El obispo (...) consideró que cuando una persona se arrepiente y destina el 'producto del pecado' a los pobres, es cosa buena. Cosa distinta es tomar champán con ellos (los narcotraficantes), disfrutar de la riqueza de ellos y tomar una buena parte de esa riqueza para hacerse con el poder."¹¹ Bueno, no sabemos, seguramente se arrepintieron los narcos que hicieron las donaciones a Monseñor Castrillón.

Pero ¿qué repercusiones tuvieron las declaraciones del destacado monseñor en la sociedad colombiana y en el seno de la Iglesia? Pues que se conozcan, no muchas y lamentablemente por la apreciación que se tiene, en el sentido de que en Colombia nadie se salva de haber recibido algún "beneficio económico" del narcotráfico, nadie está autorizado para sancionar tales prácticas. Pero lo que deja ver es una conciencia laxa, cierta complacencia con semejantes proceder y lo más fácil, acostumbrarse a mirar a otro lado para no ver lo que está sucediendo frente a todos.

También ha habido sacerdotes que se negaron a recibir ayudas de los capos de la droga. Un antiguo párroco de la población de Pacho, en Cundinamarca, se negó a recibir ayuda del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, oriundo de la misma población, para restaurar el templo. Pero no sólo se negó a recibir sus dádivas, con un buen grupo de feligreses hizo una manifestación frente a la discoteca de propiedad del narcotraficante e instalada cerca al templo parroquial, denunciando



la venta de droga y los escándalos que allí se sucedían.¹²

Se supone la molestia de Rodríguez Gacha por la negativa del párroco. En Pacho se dice que decidió construir una moderna y lujosa capilla a la salida del pueblo, obra que realizó la familia del capo. Hoy es el templo de una parroquia; a la pregunta de quién la había construido, allí dicen que fue una familia y que se reservan el nombre.

Personajes cercanos a los grandes narcotraficantes como el famoso abogado defensor de varios de ellos, Gustavo Salazar Pineda, en un libro titulado "El confidente de la mafia se confiesa," y aunque dice que la editorial española que lo publicó le censuró tres capítulos, entre ellos uno que tenía que ver con las alianzas que tuvieron sus clientes con el clero; en el libro hace señalamientos de entrega de dineros a ciertos clérigos: "...uno de los más acaudalados y poderosos mafiosos del mundo, Helmer Herrera Buitrago, mi cliente, confidente y amigo, me con-

¹¹ La Iglesia dijo que el proceso contra Samper "causa risa". Clarín Digital. Lunes 8 de abril de 1996. Buenos Aires, Argentina. www.clarin.com/diario/96/04/08

¹² Castillo Fabio, op. Cit. P.89



taba asiduamente el mucho dinero que entregó al obispo de Palmira, su tierra natal. Ese mismo prelado, a propósito del proceso 8.000, se pronunció varias veces contra las mafias del narcotráfico colombiano y contra los políticos que recibieron dineros del cartel de Cali”¹³.

Igualmente el abogado Salazar Pineda en un entrevista a la Revista Semana para comentar la censura de los tres capítulos y a la pregunta: “Qué dice sobre el clero”, contesta: “Yo puedo jurar ante un fiscal que la mafia dio plata a dos altos jerarcas de la Iglesia. Yo hablé en vida con los mafiosos. Uno es el cardenal Alfonso López Trujillo. El recibió dinero en efectivo en el club Unión de Medellín. La plata se la dio Gustavo Gaviria, el primo de Pablo Escobar.” Y a otra pregunta contestó: “Mire, yo estoy dispuesto a presentar lo que tengo de pruebas. La plata que también le dieron a monseñor Pedro Rubiano. La iglesia que construyeron en Barranquilla los Nasser Arana. Yo he defendido a gente de todos los carteles. Me falta el de la iglesia, no más. Espero que pronto me llamen.”¹⁴

Por supuesto que los obispos se han defendido. Monseñor Pedro Rubiano desmintió las declaraciones de Salazar Pineda, al afirmar “que no conoció a ‘Pacho Herrera’ y que nunca recibió dinero del narcotráfico.” “Eso es una calumnia y una calumnia infame. Este señor al decir eso se esconde diciendo que los que podían dar las pruebas ya murieron, entonces es una patraña.” “Yo conocí a los Rodríguez porque estuvieron detenidos. Conocí a Gilberto cuando llegó de España, cuando estaba detenido y salió libre porque no

encontraron nada.” “Jamás la Arquidiócesis de Cali recibió dinero de esta gente, lo mismo que en Bogotá. Jamás hemos recibido con ese origen del narcotráfico, dineros para la Iglesia.” “Yo les he advertido a los sacerdotes que mucho cuidado con ir a recibir dineros que no se saben de dónde vienen porque realmente serían un daño muy grande para la Iglesia.”¹⁵

A diferencia de Monseñor Rubiano, que niega cualquier contacto con los narcotraficantes, el fallecido fundador de la Corporación Minuto de Dios, que ha extendido por buena parte del país sus obras sociales, el sacerdote Rafael García Herreros, en la cumbre de sus ochenta y más años, de manera pública, a través de la televisión y en constantes declaraciones, enviaba mensajes a Pablo Escobar solicitándole la entrega de algunos personajes secuestrados por orden del capo como el actual vicepresidente de la República, Francisco Santos y la comunicadora Maruja Pachón y luego motivándolo para que se entregara al gobierno.

La prensa registraba los mensajes del padre García Herreros con cierta inquietud. Una columnista señalaba: “... el pasado 18 de abril muchos telespectadores pensaron con triste resignación que a Gar-

13 Salazar Pineda Gustavo. El confidente de la mafia se confiesa. El narcotráfico al descubierto. Ed. Nombre Latino. 2005. Madrid. p.3

14 Semana. Sábado 11 de febrero de 2005. http://semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IDArt

15 Elisabeth Meneses. Especial para el tiempo.com. Toronto, Canadá. 22 febrero de 2006. www.cardinalrating.com





cía Herreros le había llegado la hora de la demencia senil. Esa noche el sacerdote le pidió al mar respuestas a sus cavilaciones: ‘Quisiera hablar con Pablo Escobar a la orilla del mar... Me han dicho que quiere entregarse. Me han dicho que quiere hablar conmigo. Oh, mar... ¿qué debo hacer?’ Y a una pregunta sobre si pensaba llevar a Pablo Escobar a las puertas de la cárcel, contestó: “No, pienso llevarlo a las puertas del cielo”. García Herreros se mostraba generoso y clemente con Escobar, al referirse a él decía “Pablo no ha cometido todos los crímenes que se le atribuyen. De vez en cuando, un hombre pasa a ser el chivo expiatorio de todos los crímenes y todos los males; eso le ha pasado un poco a Pablo.”¹⁶

Se señala que la familia Ochoa, tres de cuyos miembros formaban parte del cartel de Medellín, tuvieron mucho que ver en la mediación de García Herreros para la entrega de Escobar. Y es que hubo cierta cercanía de García Herreros con esta familia y parece que no dudaba en proponerles que financiaran nuevos proyectos de obras sociales.

En un texto que recoge apartes de la vida y obra de este sacerdote se citan declaraciones que tienen que ver con esta idea: “Les propuse a los Ochoa hacer una

industria de confecciones en la cercanía de la cárcel. Ellos la manejarían y un cristiano de Estados Unidos nos vendería el producto en ese país y en otros países.” “Vamos a cambiar la cárcel en una industria. Vamos a cambiar los corazones, vamos a llevar consuelo y optimismo. Me dijo Fabito, el menor, que ustedes conocen bien, por los periódicos y revistas, que iba a tomar este proyecto como penitencia, que no le pusiera otra. El lo va hacer con sus hermanos a favor de los pobres. Este es un paso muy importante de arrepentimiento de los jóvenes Ochoa en su camino hacia Dios”.

“Ustedes no me van a criticar, sino van a aceptar esto en silencio. Vamos a tener una linda industria allá anexa a la cárcel de Itagüí. Si nos resulta, extenderemos esto a muchas cárceles de Colombia, y posiblemente de toda América. Es una nueva actitud del mundo carcelario.” Hasta aquí García Herreros, y continúa el autor de la biografía: “El proyecto no se realizó, y Fabio Ochoa salió de la cárcel, pero luego fue aprehendido de nuevo y extraditado

¹⁶ Lozano Pilar. Rafael G. Herreros. El sacerdote que negocia la entrega del “narco” Pablo Escobar. Bogotá, 01/06/91. www.elpais.com/articulo/ultima/Rafael/G/Herreros



a los Estados Unidos.¹⁷ Alguien que conoció de cerca al Padre García Herreros considera que no era extraño su comportamiento, afirma que él no dudaba en acercarse a creyentes o no creyentes, a personas virtuosas o conocidos personajes alejados de la Iglesia y sus mandatos. Igualmente indica que actuaba de manera transparente, sin ocultar nada, así recibiera críticas. Por eso la cercanía a Pablo Escobar o a la familia Ochoa, la interpreta como una expresión de la particular forma de ejercer su tarea pastoral.

Y la jerarquía ¿qué opinaba sobre el narcotráfico y sus actividades? Oficialmente la Conferencia Episcopal se ha pronunciado rechazando sus prácticas, pero no se encuentran de manera explícita referencias a las narcolimosna, aunque de los textos se puede deducir. A mediados de los años ochenta en un pronunciamiento de la XLI Asamblea del Episcopado sobre drogadicción y narcotráfico señala: “El silencio complaciente de la sociedad, la falta de oportunas denuncias

y la aceptación de dádivas de parte de personas implicadas en esas indebidas actividades, han contribuido también a agravar el problema. Se estimulan estas situaciones cuando hay actitudes débiles ante estos traficantes que perseverando en su delito quieren cubrirlo con donaciones. Cuando no hay conversión, sino manera de encubrir situaciones de pecado, hay que tener el coraje en este caso, como en otros similares, para decir como el Apóstol Pedro: ‘Perezca tu dinero y tú con él’ (Hechos 8,20).¹⁸

De otra parte, la jerarquía de manera oficial no ha aceptado la existencia de las narcolimosnas, parece que algunas donaciones, reconocidas por sus receptores, como vimos antes, fueron algo esporádico y no constituyeron o constituyen prácticas que merecieran una condena tajante y explícita. Cómo se señaló, será que se puede afirmar: de buenas la Iglesia Católica colombiana que ha logrado mantenerse ajena a la tentación de las jugosas y no tan santas donaciones.

✘

17 Jaramillo Diego, CJM: Rafael García Herreros, una vida y una obra. Cwgyzq.blu.livefilestore.com

18 Conferencia Episcopal de Colombia XLI Asamblea Plenaria del Episcopado. Pronunciamiento del Episcopado colombiano sobre drogadicción y narcotráfico. Bogotá, 14 de julio de 1984



CULTURA, ESTÉTICA Y MAFIA

Magio, narco y traqueto

Estructuras existenciales de la vida mafiosa

Adrián Serna Dimas¹

Introducción: las fuentes de la monstruosidad

Los monstruos son las invenciones con las cuales una sociedad mimetiza la relación que sostiene con unos deseos que no concitan en ella la reciprocidad sino la rivalidad, que no atraen por amor sino por odio, que no procuran la paz sino que exacerbaban la violencia. Entonces, los monstruos sociales son la manifestación encarnada de los deseos que tiene vedados para sí una sociedad determinada, que se presentan como enemigos peligrosos en tanto ellos no son otra cosa que la propia sociedad duplicada en el desafuero: los monstruos sociales no son opacidades de una realidad extraña que amenazan la estabilidad

natural de la sociedad, sino presencias contundentes de las múltiples extrañezas que guarda para sí una sociedad expuesta permanentemente a la contradicción².

Bien vale esta reflexión preliminar para emprender una mirada panorámica a las estructuras existenciales de la vida mafiosa: la opinión mediática colombiana no ha dejado de señalar el carácter monstruoso del narcotráfico, pero ubicándolo como un fenómeno incomprensible para

1 Director del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPAZUD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

2 Cf. René Girard. La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama, 1983.



una sociedad históricamente católica, demócrata y laboriosa, identificándolo de manera privilegiada con la influencia de factores externos y asociándolo con sectores o grupos marginales cuyas visiones y divisiones de la existencia nada tienen que ver con las que sostienen a la sociedad mayoritaria. Sin embargo, es en la misma sociedad colombiana donde están las fuentes de este monstruo que no sólo la ha hecho víctima sino también posesa. Precisamente la victimación y la posesión como situaciones alternas y complementarias son las que hacen del narcotráfico una auténtica tragedia nacional.

Así, la figura del monstruo permite restituir en las estructuras existenciales de la vida mafiosa la presencia entera de la sociedad colombiana. Esta sociedad se ha caracterizado a lo largo de su historia por un campo productivo desajustado, por el peso creciente del centralismo y el regionalismo, por las brechas profundas que separan a las distintas clases sociales, por las certezas en la primacía del estamento o en la preeminencia de la clase, por las prácticas excluyentes y confinantes y por las creencias en unas visiones y divisiones del mundo que predestinan la riqueza para unos y que signan la miseria para otros. Diferentes agencias de la sociedad colombiana, como la iglesia, la escuela y los medios de comunicación, han exaltado históricamente unos valores sociales que, convertidos en esencias de la especie o de la condición social, han pretendido hacer aceptable este extenso repertorio de contradicciones surgido de los valores propiamente económicos. De

este modo se ha inculcado la generosidad, la honorabilidad, la moderación y el cosmopolitismo ético como actitudes naturales que deben guardar los que más tienen, al tiempo que se ha inculcado la lealtad, la honestidad, la modestia y el localismo moral como actitudes naturales que deben guardar quienes tienen poco o no tienen nada. Estos valores sociales, que terminan definiendo lo bueno y lo deseable y lo malo y lo indeseable para las distintas clases y fracciones de clase, funcionan hasta hoy como recursos que hacen admisible la condición de necesidad y de solvencia, que hacen aceptable el estado de posesión y de desposesión y que, con esto, permiten administrar el deseo en la vida cotidiana.

Sin embargo, la distribución de unos valores sociales que sostienen al mismo tiempo la distribución de unos valores económicos ha implicado la intervención de una compleja economía de los bienes simbólicos que, efectivamente dominada por agencias como la iglesia, la escuela o los medios, ha distinguido y articulado los mercados que organizan estos dos tipos de valores. El mercado de los valores económicos tiende a reevaluarlos en función del interés y a devaluarlos en función de la renuncia; el mercado de los valores sociales tiende a reevaluarlos en función de la renuncia y a devaluarlos en función del interés: dos mercados simétricos, invertidos y complementarios, donde lo que es virtud en uno tiende a ser vicio en otro y viceversa. La articulación de estos mercados depende de esta economía de los bienes simbólicos que, imponiendo unos tiempos



de moratoria social legítimos, puede sublimar a los valores sociales desprendiéndolos de cualquier injerencia económica y a los valores económicos desprendiéndolos de cualquier injerencia social, convirtiendo a unos y a otros en esencias de la especie o de la condición social.

En Colombia, con unos valores económicos sujetos a la concentración minorista y con unos valores sociales orientados a contener la carencia mayorista, la operación de estos dos mercados permitió la perpetuación de los predestinados y de los signados. Las fortunas adquirieron una legitimidad bondadosa en la medida que la concentración hizo tanto más factible la generosidad, la honorabilidad, la moderación y el cosmopolitismo: la propia concentración económica fue revestida como resultado exclusivo de la constancia o la perseverancia. Las pobrezas adquirieron también una legitimidad bondadosa cuando la incapacidad de concentración no supuso el agotamiento de la lealtad, la honradez, la modestia y el parroquianismo: la propia carencia económica fue edulcorada con la paciencia o la resignación. Entre las buenas fortunas y las buenas pobrezas quedó gravitando una mínima clase media conformada, por un lado, por fracciones de viejos afortunados venidos a menos que reinventaron los valores de su clase no por medio de la constancia sino de la perpetuidad del privilegio; por otro lado, por fracciones de jóvenes aspirantes a fortuna que redimieron los valores de su clase no por medio de la paciencia sino de la asiduidad del mérito. En medio de las fortunas, las pobrezas y

las aspiraciones quedaron las existencias renuentes a unos valores que consideraron insustanciales o irredimibles por el privilegio o por el mérito, donde la insatisfacción fue revestida como resentimiento. Valga decir que una sociedad con fuertes rasgos estamentales, vivida o sobrevivida con los efectos de una economía simbólica que pudo amalgamar unos valores de extracción eminentemente religiosa con unos valores decididamente seculares, prácticamente sacrificó a la ciudadanía como identidad soportada en unos valores cívicos comunes en capacidad de democratizar el mundo público³.

Las estructuras existenciales de la vida mafiosa surgieron de la especulación de estos dos mercados de valores suscitada por la simplificación de la economía de los bienes simbólicos. De entrada hay que señalar que estas condiciones de especulación y simplificación fueron generadas por las profundas transformaciones del país desde los años sesenta: desruralización acelerada, urbanización crítica, profundización del desajuste del campo productivo, aumento de la concentración de la riqueza, masificación del desempleo y la pobreza y expansión del clientelismo por un acuerdo bipartidista que convirtió al Estado en objeto de un auténtico régi-

3 Las relaciones entre la estructura del mercado de valores económicos y la estructura del mercado de valores sociales y sus incidencias en la construcción de la ciudadanía en Colombia procede de Adrián Serna Dimas. Ciudadanos de la geografía tropical. Ficciones históricas de lo ciudadano. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2006.



men de aparcería burocrática, todo esto con la presencia constante del conflicto, la inseguridad y la violencia. Por un lado, esto fragilizó la capacidad de los valores sociales consuetudinarios para contener los desarreglos del mercado de valores económicos vigente. Por otro lado, esto debilitó la ascendencia de las agencias dominantes de la economía simbólica como la iglesia, la escuela y los medios de comunicación de entonces. Finalmente, esto resquebrajó la creencia en los beneficios de la moratoria social y, con ello, en su legitimidad. En últimas, surgió una sociedad descreída del tiempo invertido, porque éste no ofrecía ninguna garantía: el tiempo invertido en educación para obtener un título, en trabajo para acceder a un salario, en ahorro para adquirir una posesión y aún en la participación para adquirir una representación política, entraron en cuestionamiento.

Obviamente que los narcotraficantes no fueron los primeros en atentar contra la creencia en la moratoria social. En primer lugar, porque una sociedad sometida históricamente a la incertidumbre de las mayorías, sin capacidad de universalizar los soportes básicos de la promesa social como lo son la educación y el trabajo, nunca pudo honrar esta creencia con todas sus agencias y en todos sus agentes. En segundo lugar, porque esta misma sociedad estaba familiarizada con las prácticas clientelistas que, organizadas en torno a la administración del Estado, supusieron desde siempre atentados contra la moratoria social, aunque éstos no necesariamente se presentaron como tales porque

En últimas, surgió una sociedad descreída del tiempo invertido, porque éste no ofrecía ninguna garantía...

se consideraron consecuciones conexas a un privilegio que obligaba a nunca dejar de mandar o como realizaciones de un mérito que concedía al que nunca dejaba de obedecer. De hecho, uno de los efectos contundentes de la magia clientelista fue que pudo reeditar una vieja herencia colonial: revestir el cargo público como título en sí mismo, convirtiendo su consecución en carrera o trayectoria, con lo que se saturó de tiempo social el privilegio de mandar y el mérito de obedecer en detrimento del tiempo social que debía su legitimidad a la educación o el trabajo.

La novedad de los narcotraficantes radicó en que atentaron contra la creencia en la moratoria social contravirtiendo precisamente la efectividad de los valores sociales consuetudinarios: la generosidad, la honorabilidad, la moderación y el cosmopolitismo de los que más tenían y la lealtad, la honradez, la modestia y el localismo de los que no tenían nada, simplemente habían perpetuado al país de “los mismos con las mismas”, hecho aceptado masivamente por una sociedad de buenos cristianos, de ciudadanos apenas electoreros y de audiencias cautivadas por radionovelas y novelas de folletín que urdían sus tramas con la trasgresión de los valores de siempre y sus finales con la restitución del orden. Los narcotraficantes



sometieron la generosidad y la lealtad a la compensación; la honorabilidad y la honradez al orgullo; la moderación y la modestia a la ostentación; el cosmopolitismo y el localismo a lo fronterizo: la moneda para la movilidad no serían más el privilegio y el mérito sino el estatus y el prestigio. No eran valores extraños o ajenos, sino la realización evidente e inmediata de los viejos valores que habían entrado en desuso o, mejor, los viejos valores actualizados por una economía depredadora: compensación, orgullo, ostentación y liminalidad no son otra cosa que el resultado de la capitalización criminal de los viejos valores.

De este modo los narcotraficantes, con un descomunal negocio criminal, encontraron un medio rápido para acceder a unos valores económicos y para imponerlos en unos valores sociales viejos, tanto que terminaron revistieron al valor económico como valor social en sí mismo. Y esto fue así porque los narcotraficantes, a diferencia de otras estructuras criminales, no auspiciaron sólo la resolución inmediata de una necesidad, el disfrute clandestino de la posesión o la reproducción exclusiva de un nicho delictivo: los narcotraficantes, por la capacidad de acumulación de su actividad y por la presión que pudiera ejercer sobre ella el entorno social, judicial, legal y político, buscaron colonizar la existencia compartida, camuflarse en ella, tarea que en modo alguno podían hacer con valores extraños sino con los valores consuetudinarios de la sociedad colombiana pero llevados al extremo de la redundancia, la exageración y la



banalización. No fue una tarea calculada y racional: los narcotraficantes asumieron su colonización de la existencia compartida embebidos en las propias creencias que soportaban a ésta, tanto que su escala de valores terminaría afianzando el conservadurismo histórico de la sociedad colombiana.

Precisamente en las estructuras de nuestros mercados de valores, en sus desajustes, en sus limitaciones y en sus incapacidades, están las raíces de las estructuras existenciales de la vida mafiosa, lo que ciertamente permite trascender los recurrentes estereotipos que pretenden mostrarlas como expresiones totalmente extrañas a la sociedad colombiana.

Las estructuras existenciales de la vida mafiosa han sido reconocidas con cierta lucidez por parte de la música, la literatura, el cine y la televisión. No obstante, no lo han sido tanto desde de las ciencias y las disciplinas académicas, que han estado más inclinadas a indagar otras expresiones del fenómeno narcotraficante: al negocio que mueve, a la corrupción que provoca y a la violencia a la que apela,



más aún cuando éstos se enquistaron en un viejo conflicto social y armado como el colombiano. Sin embargo, para entender al narcotráfico más allá de la racionalidad de una estructura económica criminal, para dilucidar su capacidad de anclaje en la sociedad colombiana, su emplazamiento en las diferentes regiones del país y sus formas de reproducción generacional, urge entender estas estructuras existenciales nutridas por una cotidianidad preñada con nuestra propia historia compartida. Obviamente que estas estructuras existenciales no son inmutables: ellas se han transformado en ajuste a esta historia y a los propios cambios internos del fenómeno narcotraficante. Las organizaciones narcotraficantes han mudado de bandas a carteles y de carteles a cuadros mafiosos, lo que ciertamente ha sido correspondido con los cambios de unos estilos de vida magios a unos propiamente narcos y de unos estilos de vida narcos a unos traquetos.

Los magios

A finales de los años sesenta, en medio de un país que no desistía de las promesas del frentenacionalismo pero que al mismo tiempo asistía a nuevas expresiones de descontento social, comenzaron a aparecer personajes con alguna fortuna que pronto se hicieron notar en sus círculos inmediatos. En la provincia habitualmente eran “hijos de vecino”, como suele decirse, que incrementaron viejas tenencias o que supieron rendir sus pesos en negocios de pueblo y en la adquisición

de una que otra parcela. En las ciudades aparecieron en las barriadas populares, unas veces como “chinos de barrio” bendecidos por un golpe de suerte y otras veces como recién llegados que traían consigo algún capital. También aparecieron en las barriadas de clase media, percibidos como parte de esa migración cada vez más constante hacia la ciudad. Sin embargo, en la medida que las fortunas fueron adquiriendo más notoriedad, las percepciones empezaron a cambiar. Aunque a los afortunados se les comenzó a asociar con actividades delictivas cada vez más comunes en las ciudades, como el hurto de residencias y vehículos, hubo una que se convirtió en recurrente: éstos no podían ser otra cosa que contrabandistas de cigarrillos, licores, textiles o electrodomésticos.

El contrabandista pronto se convirtió en objeto de estereotipos, sobre todo en las ciudades: un personaje de apariencias extrañas, surtido casi siempre desde la provincia, con adquisiciones suntuosas cuando no estafalarias y con actitudes indisciplinadas caracterizadas por la festividad y el nomadismo. En una sociedad que desde siempre exaltó la posesión de la residencia y la tenencia de hogar, que resultaron determinantes para perpetuar la nobleza de los constantes y para amarrar la existencia endeudada de los pacientes, resultaba incomprensible el atesoramiento sin casa ni familia a no ser que éste procediera de los malos pasos o estuviera sujeto a la mirada de la ley. El contrabandista que sentaba cabeza, que habitualmente abandonaba el negocio o





lo utilizaba para soportar otros de carácter legal, adquiría reconocimiento, respeto y ascendencia. Pero el contrabandista que aparecía y desaparecía recibía no sólo el estereotipo sino el estigma: sujeto conflictivo dispuesto a la bulla y la refriega, sujeto sospechoso que en medio de sus huidas podía escapar sin pagar arriendos o servicios, sujeto estrambótico zurcido en riquezas en el seno de una sociedad de prestantes moderados y de pobres modestos. En la aldea o la barriada estos eran los motivos de juicio recurrente a los contrabandistas, en nada relacionados con los esgrimidos por la propaganda oficial, especialmente desde los años sesenta, que los acusaba de atentar contra una economía decidida en la sustitución de importaciones. Pero para la gente de todas las clases y condiciones el contrabando no entrañaba ningún atentado, lo que se vio reflejado en la expansión de los grandes centros de comercio poco formal o informal conocidos como “sanandresitos”, en el tráfico abierto o clandestino entre fronteras o simplemente en el encargo corriente sin pago de impuestos de bienes de consumo o suntuarios a cualquiera que visitara el exterior.

Con el contrabandista apareció igualmente en las ciudades el esmeraldero, eventualmente algún patrón pero habitualmente un intermediario entre la mina y la calle. El esmeraldero, a diferencia del contrabandista nómada, fue configurando sus propios nichos en la ciudad, arraigando en determinadas barriadas, utilizando los lazos que le heredaran generaciones anteriores de paisanos y apelando a los estilos de la clase popular pudiente representada por los dueños de mercados barriales, los expendedores de carnicerías y los propietarios del creciente transporte público. Sin embargo, la resonancia que alcanzaron las primeras guerras esmeralderas y los brotes de ellas en algunos pueblos y ciudades fueron afianzando otro estereotipo: el esmeraldero como alguien dispuesto a cuidar el honor y la honra con las armas, que sobrevivía en un negocio siempre sensible a la pretensión, lo que lo hacía excesivamente reservado pero en determinadas circunstancias igualmente violento. Pero, al igual que con los contrabandistas, la sociedad ni resintió su prosperidad en la provincia ni su advenimiento en las ciudades. Unos y otros crearon sus espacios, forjaron unos estilos de vida propios y reprodujeron sus creencias y expresiones regionales en unas ciudades que cada vez más eran el resultado de los inmigrantes de la provincia.

No obstante, a principios de los años setenta, se hizo evidente que en medio de las fortunas del contrabando y las esmeraldas estaban prosperando otras vinculadas con “negocios oscuros o extraños” con la marihuana. En una sociedad toda-





vía parroquial, en el que se enseñaba que los indígenas habían sido embrutecidos por los alucinógenos del perverso Buziraco, que apenas si asociaba la “yerba” con unos sectores reducidos de viciosos o emancipados o con algunos usos de la farmacopea popular, poco se sabía del viejo negocio de los estupefacientes y de su espectacular desarrollo en medio de los conflictos armados de la guerra fría.

El tráfico de marihuana en Colombia surgió como un negocio regional, circunscrito especialmente a la costa Atlántica y dominado por unas viejas estructuras de señorío o patronazgo sujetas a unos roles y valores tradicionales. Estas estructuras, familiarizadas desde siempre con el contrabando de bienes y mercancías, afectadas entonces por la crisis de la agricultura algodonera, favorecieron la introducción y la producción de “yerba” en diferentes enclaves de la provincia, entre ellos, la Sierra Nevada de Santa Marta. La marimba producida era adquirida en el propio país por extranjeros, entre ellos por miembros de los cuerpos de paz, quienes eran los dueños de las rutas y de los centros de distribución en los Estados Unidos. Si algo reforzó la percepción sobre el carácter regional y estamental de la producción marimbera fue la resonancia que adquirieron las guerras entre familias guajiras, como

la de los Cárdenas y los Valdeblánquez, auténticas disputas por el honor y con la sangre nutridas con las economías de la marihuana⁴.

La condición marcadamente regional y estamental de la producción marimbera ciertamente la surtió de acentos míticos y legendarios que permitieron teñir como asunto cuasimágico su capacidad de birlar la acción del Estado. El tránsito de cargamentos de marihuana, la creciente introducción de dólares, su penetración al sistema bancario y financiero, su lavado por medio del contrabando consuetudinario de bienes y mercancías y las victimaciones por retaliaciones o “ajustes de cuentas” pasaron prácticamente inadvertidas para unas autoridades que en verdad eran altamente susceptibles al soborno. La magnitud de la bonanza marimbera pronto amenazó la estabilidad de la propia economía nacional, lo que obligó al gobierno de López Michelsen a crear la denominada “ventanilla siniestra” del Banco de la República, en capacidad de legalizar, controlar y normalizar las inmensas fortunas en dólares que estaban ingresando al país por vía del tráfico ilegal. La expansión del negocio, la necesidad de diversificar fuentes de producción y ru-

4 El efecto de las crisis económicas regionales en el origen de los diferentes focos de las mafias colombianas se encuentra en Darío Betancourt y Martha García. *Contrabandistas, marimberos y mafiosos*. Bogotá: Tercer Mundo, 1994. Sobre la guerra entre las familias guajiras véase Nicolás Cárdenas y Simón Uribe. *La guerra de los Cárdenas y los Valdeblánquez. Estudio de un conflicto mestizo en La Guajira*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007.



tas de tráfico nacional, la omisión de las autoridades y la legalización subrepticia de capitales dudosos, permitieron que las riquezas de la marihuana llegaran a otras regiones y ciudades.

La plata de la maracachafa empezó a llegar a las ciudades del interior representada en liquidez inflacionaria destinada a pagar todo tipo de servicios, en bienes y mercancías de contrabando extremadamente baratos y en capitales ampulosos para negocios que irrigaron ciertos sectores económicos y poblacionales por vías legales e ilegales. Fue entonces cuando en las ciudades se hizo abierto y asequible un viejo mercado hasta entonces restringido y suntuario: el de los electrodomésticos. En efecto, la segunda mitad de la década del setenta trajo consigo una expansión inusitada de las ofertas en electrodomésticos, convertidos en objetos aspiracionales que, en medio de una sociedad de desposeídos de cualquier propiedad o de poseídos por todo tipo de deudas, favorecieron la creencia en la posibilidad de tener y acumular, erigiéndose al mismo tiempo en un marcador de estatus y prestigio en las microsociedades de barriada. El auge de electrodomésticos nos permitió pasar en pocos años de los tubos a los transistores, de las pasacintas a las grabadoras, de las radiolas a los equipos de sonido y de la restringida televisión a blanco y negro a la crecientemente masificada televisión a color de los años ochenta. Cómo no decir que nos convirtió en un cada vez más aislado territorio beta. Aunque pocas veces referida, la “revolución del electrodoméstico”



fue determinante: sembró entre la gente la posibilidad real de acceder a algo, profundizó la privatización de las existencias y abrió a las sociedades urbanas a las famosas “revoluciones de medios” que se sucederán en la radio y la televisión de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta⁵.

Pero las economías de la marihuana no sólo favorecieron la compra y venta de grabadoras, neveras y televisores. La marimba, que circulaba ante todo por las rutas de Centroamérica y el Caribe, puso en contacto a pequeños contrabandistas independientes y a intermediarios de grandes jefes con algunos centros estratégicos, entre ellos, Ciudad de Panamá y Colón en Panamá y Miami y Nueva York en los Estados Unidos. Por esta vía los traficantes tuvieron contacto con los estilos de vida de un tropicalismo de primer mundo: suburbios con mansiones soberbias, avenidas custodiadas por edificios de refulgentes vidriados, diseños interiores que hermanaban imitaciones clásicas con perendengues locales, hom-

⁵ Queda apenas como insinuación la tesis de Marvin Harris que identifica esta “revolución del electrodoméstico” en los Estados Unidos en los años cincuenta, ubicándola como una de las bases fundamentales para lo que fueron las revoluciones de los años sesenta. Cf. Marvin Harris. La cultura norteamericana contemporánea. Una visión antropológica. Madrid: Alianza, 1984.



bres y mujeres de atuendos vistosos con joyerías y bisuterías recargadas, grandes jeeps y camionetas. Este tropicalismo de primer mundo, que no dejó de suscitar fascinaciones en las oligarquías equinociales caribeñas durante todo un siglo, se convirtió en una de las fuentes inagotables del estilo arquitectónico narco-colonial que pronto habría de llegar a pueblos y ciudades colombianas aún cuando estuviesen encaramados en las más frías montañas.

Precisamente, el manejo de gruesas sumas de dinero en efectivo, la posesión abrupta y desmedida de electrodomésticos, el acceso a determinados atuendos y vehículos y, en los casos más visibles, la construcción o la adquisición de viviendas descomunales, advirtieron la presencia de “los tocados por el dinero mágico”, de los magios, aquellos hombres venidos de lejos o de la nada que de un momento a otro estaban sepultados en adquisiciones lujosas, en estilos de vida fastuosos y en existencias despilfarradoras. El magio fue lo único visible de una economía que, pese a la extensión de sus tentáculos, era invisible. De hecho, la excesiva visibilidad del magio frente a la escasa visibilidad de sus negocios lo hizo objeto del rumor, proclive a aumentar sus alcances pero, al mismo tiempo, eficiente para cautivar a nuevos aspirantes: el país supo del magio más por el rumor que por la certeza. Aunque desde comienzos de los años setenta la prensa hizo las primeras denuncias sostenidas sobre el negocio, tuvo que pasar prácticamente una década para que salieran a la luz los primeros estudios siste-

advirtieron la presencia de “los tocados por el dinero mágico”, de los magios, aquellos hombres venidos de lejos o de la nada que de un momento a otro estaban sepultados en adquisiciones lujosas, en estilos de vida fastuosos y en existencias despilfarradoras. El magio fue lo único visible de una economía que, pese a la extensión de sus tentáculos, era invisible.

máticos sobre el mismo, pero interesados más en sus dimensiones económicas y macroeconómicas⁶. Tan sólo en los años ochenta, cuando el negocio prácticamente agonizaba, apareció una versión televisiva sobre los marimberos basada en la novela recién aparecida de Juan Gossain “La mala yerba” (1982).

Sin embargo, el derroche de los traficantes, la competencia directa generada por los cultivos marimberos en los Estados Unidos, las desventajas del tráfico de marihuana frente a las ventajas de la coca que fuera por una década su “ahijada en la sombra” y las fumigaciones con DDT y Paraquat promovidas por una cada vez más agresiva política antidrogas norteamericana, fueron eclipsando progresivamente a las economías de la marihuana colom-

6 Las primeras denuncias sostenidas en los medios fueron realizadas por la Revista Alternativa. Un primer estudio sistemático lo realizó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF. Marihuana: ¿Legislación o represión? Bogotá: ANIF, 1979.



biana a comienzos de los años ochenta. En algunos casos el magio fue asesinado, desertó o simplemente descendió a la cadena delincencial corriente; en otros casos el magio se reinventó convirtiéndose en un genuino narco. De la marimba a la coca obviamente que hubo un cambio sustantivo en el negocio, pero también en la misma sociedad colombiana.

Los narcos

Desde el inicio mismo de la explotación de la marihuana los traficantes avizoraron el potencial de la cocaína. Como en el caso de la marimba en la costa Atlántica, el desarrollo y la consolidación del tráfico de coca, de pasta y de cocaína tuvo en medio la crisis de distintas economías regionales, como la textilera en Antioquia y la azucarera en el Valle del Cauca. En el caso antioqueño, la crisis económica profundizó las condiciones de pobreza de la ciudad de Medellín, lo que favoreció el aumento de cordones de miseria, de barriadas sufrientes y de entornos proclives a bandas organizadas cooptadas por el negocio de la marihuana: la vieja vida maleva, surgida del desarraigo de los campesinos provocada por la industrialización de los años veinte y treinta, cedió a la vida malandra de los jóvenes surgidos de la ausencia de oportunidades y del desencanto de la política de los años sesenta y setenta. En el caso vallecaucano, la crisis económica alcanzó incluso a miembros de unas clases medias bajas que, en algunos casos asalariados y en otros igualmente partícipes de bandas organizadas

cercanas a la marihuana, se encontraron con escasas expectativas de futuro. En los dos casos eran insolvencias en medio de unas sociedades regionales que conservaban fuertes rezagos estamentales, dominadas por unos viejos linajes históricos, que acumulaban de manera desproporcionada tanto la riqueza rural como la urbana, de donde habrán de salir de sus pobrezas Pablo Escobar Gaviria y Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, barones entre tantos varones que harán del narco todo un estilo de vida⁷.

En medio de esta situación de crisis regionales, pobladores de todas las clases y condiciones del valle del Aburrá, del eje cafetero y del valle del Cauca salieron hacia los Estados Unidos por medios le-

7 Dentro de los estudios más representativos sobre los jóvenes de Medellín y Cali en medio de las espirales del narcotráfico están los de Pilar Riaño. Jóvenes, memoria y violencia en Medellín. Una antropología del recuerdo y el olvido. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Universidad de Antioquia, 2006 y Adolfo León Atehortúa. La violencia juvenil en Cali. Cali: Secretaría de Gobierno Municipal, 1992.





gales e ilegales, decididos al rebusque, a la delincuencia común o a trabajar como mulas del apenas visible negocio del tráfico de cocaína. Los jóvenes desarraigados por la desilusión y la aventura se fueron al corazón del consumo de estupefacientes, reconocieron sus ciudades, delinquieron en sus calles y adquirieron la experiencia suficiente para hacerse a unas redes de distribución que empezaron a nutrir una vez regresaron a Colombia donde simultáneamente emprendieron la progresiva acumulación de la hoja y la pasta procedentes de Perú, Bolivia y en menor medida del propio país. En el curso de unos pocos años, antiguos jóvenes que habían sido reos o prófugos de la justicia estadounidense estaban de regreso en el país como prósperos propietarios, en una especie de “parábola de los hijos prolijos”, una versión invertida del pasaje bíblico del “hijo pródigo”: críos expulsados por las desventuras de la madre patria, enriquecidos de manera superlativa por un negocio de vicio y ocio, que regresaron al seno familiar con orgullo y dispuestos a afianzar el mismo discurso parroquial y patriotero que para entonces exaltaban unas élites venidas a menos en procura de unos regionalismos y nacionalismos que avivaran

una sociedad económicamente asolada y políticamente claudicante.

Pero mal puede decirse que los narcos llegaron a pervertir un país inocente. El fin del frentenacionalismo puso en evidencia las peores nocividades de la alternancia política: partidos con programáticas disueltas, expuestos a competir maximizando el clientelismo en sus nichos burocráticos, sometidos a invertir de manera desaforada para conseguir electorado y que, luego del fracaso reeleccionista de Lleras Restrepo y de López Michelsen en el liberalismo y de las derrotas de Gómez Hurtado en el conservatismo, quedaron huérfanos de esos linajes estamentales que decidían de manera unánime el orden de sucesión a los cargos de elección o nombramiento. El aperturismo no pudo aprovechar la liquidez excepcional de divisas que produjeron las bonanzas legales y legalizadas para transformar el modelo económico y, por el contrario, favoreció la tendencia oligopólica del sector industrial y la acumulación descontrolada del sector financiero al tiempo que permitía el aumento de la inflación, la depreciación de salarios y la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores. En medio de las contradicciones políticas y económicas que favorecían a unos cuantos, los gobiernos emprendieron la represión brutal del descontento social sometiéndolo con políticas de aseguramiento interno anticomunistas de corte netamente terroristas. El clientelismo político, el desajuste económico y el aseguramiento criminal de la vida pública fueron las fisuras por donde penetraron los narcotraficantes a los cam-



pos dominantes de la sociedad colombiana, tránsito que los convirtió en políticos populistas, en empresarios monopolistas, en consumidores arribistas y en ciudadanos reaccionarios y conservadores. No es extraño que coloquialmente se diga que ha sido tal la perversión de nuestros políticos, de nuestros hombres de fortuna y de nuestras instituciones que terminaron pervirtiendo a los propios narcos.

En estas fisuras tan profundas como nuestra historia y tan amplias como nuestras desigualdades se establecieron los circuitos de recambio que permitieron desplazar o sustituir un mercado cerrado de privilegios y de méritos por un mercado abierto de estatus y prestigios. Los narcotraficantes apelaron a estos circuitos inicialmente con el fin inmediato de lavar valores económicos y posteriormente con el objetivo de blanquear valores sociales: lavado y blanqueo operaron como los mecanismos que pudieron acelerar la conversión de valores económicos en valores sociales, en últimos, se constituyeron en los medios específicos que interpusieron los narcotraficantes para derogar la de por sí frágil creencia en la moratoria social. De este modo, lavado y blanqueo urgieron efectividad en la generosidad para garantizar lealtad auténtica en las relaciones (compensación), revistieron de honestidad a los capitales mal habidos para arrojarle honorabilidad a la adquisición exagerada (orgullo), obligaron a la modestia de tener menos de lo que realmente se podía gastar y a la moderación de gastar menos de lo que realmente se podía tener que, por la magnitud de su negocio en un

No es extraño que coloquialmente se diga que ha sido tal la perversión de nuestros políticos, de nuestros hombres de fortuna y de nuestras instituciones que terminaron pervirtiendo a los propios narcos.

país de miserables, fue en uno u otro caso tener y gastar de más (ostentación) y convirtieron los juicios absolutos en contra de la perversión de la droga y sus delitos en afirmaciones relativas o provisionales que en últimas podían variar dependiendo del lado de la frontera desde el cual se profirieran (moral fronteriza).

Precisamente, la conversión de valores por medio del lavado y el blanqueo transformó al magio en narco: del hombre que hacía magia consigo mismo en una realidad cruda al hombre que con crudeza hacía mágica la realidad de muchos. Esta conversión comenzó orientando el lavado y el blanqueo hacia unos sectores económicos legales cuyas formas de acumulación no obstante eran prácticamente esotéricas, propicias para insuflar grandes cantidades de capital con mínimas prevenciones. Entre estos sectores estaba la finca raíz urbana sometida de manera permanente a la especulación, la finca raíz rural afectada históricamente por la violencia, los equipos de fútbol soportados en la flexibilidad del valor de los jugadores y en inciertas taquillas domingueras, los toros de lidia y los caballos finos con sobreprecios inherentes a las



artes taurinas y equinas, las piedras preciosas, particularmente las esmeraldas, sujetas al comportamiento inestable de las zonas productoras y de las cadenas de comercialización. Las medidas de los gobiernos de los años setenta y de comienzos de los años ochenta favorecieron aún más la “esoterización” de otros sectores económicos, entre ellos, de algunos campos de la producción industrial y del comercio, de un sistema bancario y financiero descontrolado y agiotista y aún de los propios medios de comunicación, con lo cual abrieron los espacios necesarios para nuevas incursiones de los narcotraficantes. Además, la propia injerencia de capitales ilícitos no sólo profundizó la “esoterización” de estos sectores sino que la transmitió a otros. La “economía esotérica” se erigió, de este modo, como la portentosa piedra angular de unos mecanismos de lavado y de blanqueo en capacidad de convertir de manera rápida valores económicos y sociales.

Para los narcotraficantes la inversión de “dineros calientes” en los diferentes sectores de la economía no sólo supuso el acceso a determinados derechos de propiedad y la adquisición de bienes y mercancías sino igualmente su vinculación con unos medios sociales que los acogieron sin prevención o con absoluta aquiescencia, haciéndolos partícipes de unos estilos de vida comunes. Fue entonces cuando viejos hacendados, curtidos funcionarios del alto gobierno, empresarios de vieja estirpe y nacientes “yuppies” criollos conocieron a estos hombres afortunados no siempre bien hablados,

Precisamente, la conversión de valores por medio del lavado y el blanqueo transformó al mago en narco: del hombre que hacía magia consigo mismo en una realidad cruda al hombre que con crudeza hacía mágica la realidad de muchos.

muchas veces a gusto con el whisky con Coca-Cola, perseverantes en las modas rocambolescas de los años setentas, guapos de otrora dirían algunos, pero que forrados en una plata siempre escasa en un país en crisis, bien podían hacer parte de los círculos cercanos, quizás dentro de las infaltables amistades pudientes de campo o de provincia. Unos narcos, con resquemores, aceptaron estos círculos, los auspiciaron; otros, más sensibles, desistieron de ellos inventándose su propia clase de hacendados, funcionarios y empresarios; no faltaron quienes se mantuvieron en sus raíces o volvieron a ellas, menos dispuestos a modernizarse en la ciudad, más decididos a reinventar viejas estructuras de señorío en las provincias. De cualquier manera, fue en estos años prístinos del mercado de conversión por lavado y blanqueo que surgieron los primeros grandes edificios sobre inmensas avenidas, las grandes adquisiciones rurales en regiones como el Magdalena Medio y el valle del Cauca, las inclinaciones por la crianza o la lidia de toros, las fotos con reputados caballistas, las relaciones públicas con uno que otro periodista o



artista y las conexiones con los patrones esmeralderos; de estas últimas, precisamente, surgió uno de los hitos del narco de los ochenta: José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”.

El narco, aún en estos años finales del setenta, seguía siendo un hombre de su entorno básico, más cercano a sus orígenes que a sus aspiraciones. No obstante, sometido como estaba a las creencias de una sociedad estamental que no pretendía derruir sino reedificar, el narco supo que en un medio así el lavado y el blanqueo no conseguían plenamente su cometido si no se accedía al reconocimiento público con aclamaciones. Por esta sociedad estamental, de naturaleza marcadamente patriarcal, supo que este reconocimiento sólo se hacía manifiesto en toda su dimensión si el lavado y el blanqueo mostraban la misma efectividad en la conversión de patrimonios en matrimonios o, en una forma más descarnada, si los capitales mal habidos resultaban igualmente eficientes para esa práctica fundamental en cualquier sociedad de machos: el intercambio de mujeres. Porque en las sociedades estamentales la mujer discurre como objeto que no sólo identifica a un hombre con un estamento en particular sino que le permite a éste aspirar en sí mismo o por interpuesto descendiente a un estamento diferente.

En una sociedad donde los mercados económicos y sociales habían amojonado tan estrictamente los mercados patrimoniales y matrimoniales, el privilegio o el mérito de desear, querer o amar no eran otra cosa que sagas extensas de pavoro-



sas vicisitudes que sostenían a una vieja tradición de boleros y mariachis, que aupaban a una nueva generación de baladistas de maquillajes recargados, que encumbraban a best seller cada libelo de Corin Tellado, que animaban unas radio-novelas vespertinas con la voz de Gaspar Ospina y que cultivaban el ambiente para lo que serán los culebrones de Delia Fiallo en la televisión de los ochenta. Pero al final, la misma historia: el amor meritorio siempre tenía oculto un privilegio (el pobre en últimas era rico pero nadie lo sabía), el amor privilegiado se presentaba meritorio en sí mismo (el rico en últimas supo amar cuando tuvo el mérito de abandonar la vida calavera) o el amor trágico, que se quedó en el fondo de las copas, porque pese a su recurrencia tuvo poca circulación en los medios con excepción, precisamente, de algunas novelas colombianas (el pobre que nunca sería rico ni casado porque sólo era “amor de pobre” o que cuando casaba sólo era “malquerido” como en esos boleros magistrales de Felipe Pirela). Los narcos igualmente pudieron transar esos valores tan huma-



nos para surtirlos con toda la fuerza de la compensación, el orgullo, la ostentación y la moral fronteriza: las mujeres serían adquiribles, exhibibles, ostentosas y, en contra del conservadurismo del matrimonio, amantes libertinas y liberadas. De paso, estos valores fueron instaurando lo que en diferentes contextos se conoce como el mundo narcochic, el paroxismo consumidor que no sólo irrigó de capitales mal habidos los negocios de ropa, de joyería y de bisutería sino que terminó rubricando determinados estilos y diseños.

Ningún nicho pudo albergar mejor estas pretensiones que los reinados de belleza, esa pretérita y abrumadora tradición nacional que nos ha llevado a instaurar monarquías por todos los buenos frutos que supo darnos el designio de Dios o la selección natural, que para las reinas de cualquier modo son lo mismo pero invertido y viceversa. En este ámbito precisamente se conectaron las “economías esotéricas” con los “mercados de intercambio de mujeres”: en los reinados de región, en los reinados de cualquier cosa, pero sobre todo en el reinado de Cartagena, los narcos encontraron el espacio para el lavado de capitales, para el blanqueo de imagen y para la adquisición de mujeres, todo encubierto con un decorado festivo salpicado de élites caducas y de clases emergentes. Las reinas de belleza, expuestas a las insolvencias de unas rentas departamentales siempre deficitarias, cada vez más sometidas a incrementar presupuestos para una fiesta desmedida en gastos de todo tipo, encontraron en los narcos mecenas dispuestos a invertir con

Los narcos igualmente pudieron transar esos valores tan humanos para surtirlos con toda la fuerza de la compensación, el orgullo, la ostentación y la moral fronteriza: las mujeres serían adquiribles, exhibibles, ostentosas y, en contra del conservadurismo del matrimonio, amantes libertinas y liberadas.

pretensiones, obvias, de siempre recuperar, por ejemplo, convirtiéndolas en “mulas”⁸. Nada ilustra mejor la confluencia de estos dos mercados que la vieja anécdota, narrada por tantos autores, sobre el regalo que le hicieran unos narcos a su propio trabajador enriquecido el día en que éste casara con una ex reina de belleza: le regalaron un ajedrez con piezas en oro para que se diera cuenta “que un peón si se podía comer una reina”. Pero este auténtico mercado de mujeres no se detuvo en Cartagena: se extendió en distintas formas por todas las regiones, mediante las abominaciones del secuestro o del robo de jovencitas, por medio del contrato comercial con afamadas actrices, modelos y reinas que habrían de crear el negocio de las “prepagos” o con el clásico flirteo del hombre de éxito que porqué no decirlo fue suficiente para encantar y enamorar a mujeres exclusivas como la misma Virginia Vallejo.

8 Un análisis detallado se encuentra en Ingrid Bolívar. *Pasarela paralela: escenarios de la estética y el poder en los reinados de belleza*. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2005.



Los narcos, por medio de las “economías esotéricas”, fueron colonizando nuevos espacios sociales, ganando reconocimiento y reputación, haciéndose al “doctor” o al “don” que son tan de nuestra cosecha de investiduras majestuosas que a pesar de ello no tienen majestad que las presida. La resistencia en distintos espacios fue mínima y, cuando la hubo, fue menos por alguna postura ética contra el oficio de traficar y más por la perseverancia de viejas creencias sobre la preeminencia del estamento o sobre la primacía inveterada de la clase: el nuevo rico bien podía hacer lo que se le viniera en gana, porque el problema radicaba en que no tenía el apellido, el porte o la compañera legítima que garantizara la admisión. Pero poco importó, porque espacios tan exclusivos bien podían ser emulados por los narcotraficantes en todas sus pretensiones, quizás no para alojar prestantes familias, que aun así no faltaron, mejor para alojar a esas clases medias altas que se veían favorecidas por los capitales del narco, entre ellos, los políticos, ellos mismos una caricatura de los políticos de otrora. Además, tampoco hacía falta la exclusividad de los clubes en unas ciudades que desde finales de los años setenta habían adquirido cierto sabor cosmopolita, especialmente en materias de diversión y esparcimiento, abiertas a nuevos espectáculos, entre ellos, los cafés concierto, donde se dice iban los narcos especialmente motivados por sus amigos, amores o amantes. De manera paulatina el narco fue asumiéndose en los patrones de esa mafia que conociera apenas por las pelí-



culas, al punto que empezó a convertir al Vito Corleone escrito por Puzzo y cinematografiado por Coppola en una referencia para sus propios estilos de vida.

Pero los narcos no aspiraban sólo a la ciudad. Convencidos por la sociedad estamental de las dignidades que confiere la gran propiedad rural, los narcos emprendieron la ampliación de viejas posesiones o la adquisición de unas nuevas tanto en sus lugares de raíz como en otros parajes: esta decisión será especialmente calamitosa para el país, porque en ella estarán los orígenes del narcoparamilitarismo. De este modo los narcos pudieron reeditar o reforzar viejas estructuras de señorío, cargadas con todas las herencias de nuestra provincia, tinturadas con la imagen del suburbio emergente de Miami pero sobre todo inmersas en unas ensoñaciones de lo mexicano imbuidas de rancho y de frontera, de festivales populares y de ferias ganaderas, de compadrazgos y de ejércitos de cantina. De aquí surgirá la hacienda Nápoles de Escobar, con su colección de animales exóticos vivos, de animales prehistóricos de cemento, con sus lagos y bosques y, obviamente, con sus preciadas antigüedades: el viejo carro en que abatieran a “Bunny and Clyde” (o quien quiera que haya muerto en él, porque a secas se ve que murió a balazos) o la avioneta sobre el pórtico en



la que aparentemente el narco envió su primer cargamento. De aquí surgirá también la hacienda Cuernavaca, la joya de la corona de Rodríguez Gacha, una exaltación exagerada de una “mexicanidad” que parecía controvertir los estereotipos de ese campesinado andino tan sometido a valores consuetudinarios que lo convirtieron en legalista, temeroso, poco frentero, obligado a la pura supervivencia y signado por la desgracia. La “mexicanidad” reivindicada era la del “mero mero” que no temía la trasgresión de la ley, que encumbraba la valentía, que tenía por máxima pena la traición, que tenía en sus manos su propia destino, que no era esclavo de la tierra sino que hacía de ella lujo y ostentación y que no admitía la desgracia sino para los viles, porque para los decididos estaba destinada la tragedia. Sólo un campesino con estas creencias podía alfombrar la caballeriza de su máspreciado corcel.

Mientras los narcos tejían urdidos nudos con diferentes espacios económicos, sociales y políticos, el país recibía los ochenta con una desazón que más vale no reiterar, gobernado por un Julio César que no conocía de Galias sino de ocurrencias galimatías que distraían a la opinión de esa política de Estado decidida a confinar y torturar disidentes en cantones militares, guerra sucia dirigida especialmente contra el M-19. “El Eme”, que prohibía que una revolución en el trópico debía ser ante todo un acto carnestoléndico que no habría de conducirnos a los gélidos parajes del Estado socialista sino a un cálido Estado democrático que permitiera la re-

distribución justa de las fastuosas riquezas nacionales, pronto supo que el país estaba en vías de la “farandulización” y de la “narcotización” y decidió sacar provecho de ello. De allí que sus acciones espectaculares pretendieran el cubrimiento de los medios, lo que la llevó incluso al secuestro de periodistas y presentadores, entre ellos, del más popular animador de la televisión nacional de entonces, Fernando González Pacheco, el hombre de “Animalandia”, el mismo que por años habría de prometerle suertes a todos con la Lotería de la Cruz Roja. De allí también surgió uno de los principales errores de “El Eme”: aspirar al capital ilícito para financiar la revolución, secuestrando a los narcos o a sus allegados, entre ellos a Martha Nieves Ochoa, hermana del clan de los Ochoa. Los narcos respondieron montando una compleja estructura financiera y logística que inicialmente consiguió liberar a la secuestrada pero que ahí mismo se convirtió en el primer ejército narcoparamilitar: el Muerte a Secuestradores MAS. Con el MAS los narcos entraron en confrontación directa con “El Eme” que amenazaba su riqueza urbana pero también con las FARC que estaban reticentes a admitir los cultivos y laboratorios de coca que estaba apareciendo en la provincia colombiana producto de la presión de la política antidrogas norteamericana sobre la producción peruana y boliviana. Pero ante todo, con el MAS, los narcotraficantes le dieron al establecimiento toda la capacidad de desafuero para exterminar la movilización social y la izquierda democrática organizada.





Todo este ritmo inatajable del narco resulta incomprensible sino se señala que en el seno de la propia “sociedad de los buenos y legales” no faltaban sectores decididos a erosionar aún más esos mismos valores consuetudinarios tan pelechados por los barones de la droga. La primera mitad de los años ochenta trajo consigo una serie de escándalos de magnitudes nacionales: Jaime Michelsen Uribe con sus monumentales autopréstamos en el Grupo Grancolombiano, Roberto Soto Prieto con su descomunal robo al Chase Manhattan Bank y Monseñor Abraham Gaitán Mahecha captando masivamente dineros en esa gran pirámide que terminó siendo la Caja Vocacional, entre otros. No era la primera vez que se desfalcaba, robaba o captaba ilegalmente en el país, pero la repercusión masiva de los escándalos en una sociedad cada vez más atezada por los medios de comunicación hizo demoledora la escena donde los hijos de los elegidos, de prestantes familias, de reconocidos periodistas o de la Santa Madre Iglesia, tomaron la vida rápida para acumular de manera criminal. En las ciudades las gentes empezaron a hacer catarsis de su indignación o de su resentimiento, las mayorías en la privacidad de sus casas, frente a esas pantallas de televisión cada vez más convertidas en confesionario y plaza pública, los únicos que quedaban

en medio de una sociedad con mínima capacidad de protestar ante el cerco faccioso de agencias como el F-2.

En este telón de fondo de estamentos corruptos y venidos a menos el narco pudo cultivar con exageración sus estilos de vida, recibiendo en muchos casos el favor de la opinión corriente o aún de la propia opinión mediática, que alcanzaron a considerarlos bastiones de unos valores en retirada y, en algunos espacios, como verdaderas bendiciones del cielo. En efecto, el lavado y el blanqueo, que permitieron a los narcos acceder a empresas, a círculos sociales, a mujeres y a propiedades, también les permitieron intervenir en el propio mercado de bienes de salvación, derogando aún las propias moratorias supramundanas, permutando caridad y beneficencia por gracias y, como en el caso de Escobar, casi por la santidad misma una vez muerto (como Jesús Malverde, San Malverde, el contrabandista mexicano). Las limosnas de los narcos fueron desde el comienzo bien recibidas por curas y monjas que las consideraron saludables retribuciones cristianas. Las donaciones en efectivo y al instante a los damnificados del terremoto en Popayán en 1983 fueron vistas con ojos agradecidos por un país embebido en la solidaridad por Colombia (algo en lo que igualmente ayudaron las teletones





y las carreras C-100). La construcción de barrios pobres fue agradecida por todos aquellos que aspiraban a una Medellín sin Tugurios. Todo esto sin contar que el combate de los narcos contra los secuestradores tan propicio para la seguridad nacional, su emprendimiento en medio de una campaña a favor de lo hecho en Colombia y su iniciativa de pagar la deuda externa nacional, si bien suscitaron prevenciones o advertencias en algunos, no dejaron de despertar sentimientos favorables entre distintas mayorías. En últimas, el poder descomunal de unos mecanismos de lavado y blanqueo había alcanzado dimensiones inimaginables.

Al mismo tiempo, los narcos pudieron asentar sus estilos de vida con cierta fluidez porque éstos fueron consecuentes tanto con unas viejas estructuras de señorío propias del mundo rural como con unas urbanizaciones masivas y aceleradas que, empujadas por la violencia, trastocaron cualquier posibilidad de proyecto urbano consistente. Los planes urbanísticos, que nacían prácticamente yertos, dejaron que en el desorden de las

ciudades propiciado por los especuladores de tierras plantaran con certeza sus inmensas propiedades los nuevos ricos del narcotráfico. La arquitectura, venida a menos por un mercado constructor implacable con la función urbana, recibió unas veces impávida y otras veces con alborozo la presencia del barroquísimo estilo narco-colonial caribeño o del fulgurante estilo “mayami” envidriado. Los comerciantes de todo tipo de bienes y servicios, sometidos históricamente a la restricción del consumo suntuario, dispensaron sin miramientos todo tipo de excentricidades a las billeteras sin fondo, en especial amoblados, vestuarios y vehículos. Sólo en el caos urbano, tanto más visible en unas ciudades que en otras, pudieron penetrar los narcos con facilidad o con escasos miramientos. De hecho ellos mismos disfrutaron de dos características fundamentales de la ciudad colombiana de la segunda mitad de siglo: el distanciamiento y el confinamiento casi absoluto de las clases urbanas en virtud de sus posesiones y en detrimento de los espacios públicos colectivos y compartidos.

Pero el narco no sólo terminó validando su esquema de producción de estatus y prestigios sino que finalmente favoreció su legitimación por medio de distintas expresiones estéticas. En una sociedad con fuertes rasgos estamentales la experiencia estética estaba sometida a los valores consuetudinarios que dispusieron para unos la moderación que permitía la contemplación y para otros la modestia que no era otra cosa que supina ignorancia. La moderación contemplativa supuso una



inclinación a adquirir sólo en función del valor estético que era, no obstante, un valor esotérico, pues no entrañaba un uso particular que no fuera la contemplación misma. La modestia ignorante supuso una inclinación a adquirir sólo en función del uso particular que, desprendido de cualquier esoterismo, no implicaba por lo mismo estética alguna. El privilegio y el mérito, monedas indispensables de cambio, permitían a unos “estetizar” los usos aún cuando estuviesen sometidos a la carencia y a otros “utilizar” las estéticas cuando alcanzaban alguna capacidad de tenencia. De cualquier manera, uno y otro hicieron del arribismo un ideal estético, en unos como pretensión de ser lo que se había dejado de ser, en otros como pretensión de ser lo que nunca se había sido, en últimas, una práctica vergonzante propia de quien no tiene nada para moderar o de quien pretende escabullirse de la condición modesta⁹.

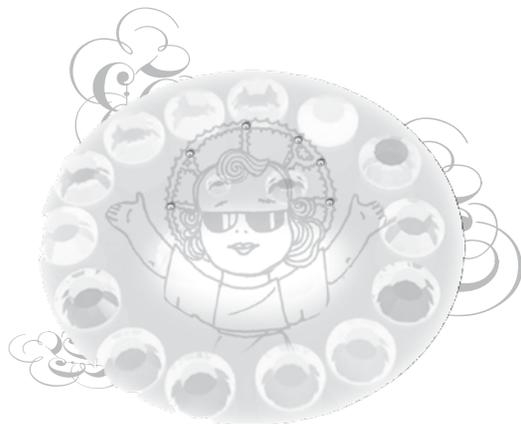
Precisamente, el lavado y el blanqueo le permitieron a los narcos desprender al arribismo de su condición vergonzante para erigirlo como práctica desvergonzada: sometidos ellos mismos a los efectos de la rápida conversión de valores económicos y sociales se encontraron de frente con un mundo de riquezas por adquirir pero desde su posición antigua de desposeídos o de deseantes. En principio adquirieron en demasía lo inmediato, lo que siempre habían tenido cerca en su pobreza; luego, en la medida que iban abriéndose al mundo, fueron adquiriendo lo que era demasiado para cualquiera, aún para la más boyante riqueza. A los narco les

fue impuesta como moda lo que para entonces era obsoleto e impusieron como moda lo que para entonces ni siquiera se había inventado. Esta situación los condujo a blindar las cosas más triviales con una riqueza inusitada, un modo extraño de pretenderle valores esotéricos a lo corriente, que los llevó a recubrir con oro inodoros y grifos sanitarios. Esta situación igualmente los condujo a adquirir como trivialidades las cosas más esotéricas, que los llevó a almacenar como inventarios de granero objetos de colección como los caballos finos (que conocían bien), los automóviles clásicos (que conocían menos) y algunas obras de arte (que no conocían nada y que de cualquier manera serán más asunto de traquetos y de traquetos engañados por un pobre mercado de arte como el nuestro). Los narcos no dudaron siquiera en consagrar las huellas de su propia vida criminal, convirtiendo en objeto de exposición una avioneta, engallando un revólver en esmeraldas, replicando en fotografías a los viejos revolucionarios mexicanos de los tiempos de Pancho Villa o a los gansters del Chicago de los años veinte y treinta. Nada mejor para un museo de las estéticas de lo inmediato que esa “cárcel de máxima seguridad” que era La Catedral.

Esto hizo que los narcos fueron especialmente sensibles a las expresiones populares, a las que afectaron en sus formas convirtiéndolas en espectáculos

9 Cf. Pierre Bourdieu. *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus, 1999.





y en sus contenidos imponiéndolas como testimonios de su propia existencia o de sus estilos de vida. De entrada habría que nombrar a los denominados narcocorridos, producto importado de México en los años setenta quizás por el mismísimo Rodríguez Gacha, interpretados por unas agrupaciones cuyas indumentarias no son otra cosa que la “barroquización” de las prendas de rancho comunes en el norte de México y el sur de los Estados Unidos. El narcocorrido, que recuperó esa vieja tradición del romancero vulgar andaluz del siglo XVIII que cantaba a bandidos y rebeldes, se convirtió en el medio de exaltación de los valores sustantivos de la vida narca¹⁰. Con el narcocorrido, tan propio de una cultura popular a la que los estereotipos nacionales siempre concibieron vinculada al sentimiento mexicano, también prosperó la salsa, menos evidente, más sutil, pero igualmente utilizada por los narcos para definir sus relaciones particulares con el terruño, con el dinero, con las vicisitudes de la vida y obviamente con las mujeres. De hecho, de uno de los temas de la afamada orquesta de Jairo Varela, el Grupo Niche, se dice que es un auténtico testamento de un narco para su hijo: “Luz, dale luz a tus sentidos, cógelas

con sabia fresca de aquel árbol, imaginación, acudo en el peligro, sobrio cuando tomes decisiones, salvo preparando el camino, amigo, saber cuál es el amigo, no hagas caso al que es mezquino, toca la puerta al buen vecino, anota en tu memoria las traiciones, considera injusta las razones...”

Pocos en el país que abandonaba los setenta y entraba a los ochenta pudieron evidenciar el ascenso raudo de unos estilos de vida propiamente narcos pero sobretodo lo que éstos podían depararle a la sociedad colombiana. La prensa, especialmente la escrita, apenas alcanzaba a identificar las huellas más visibles del negocio sobre el grueso de la economía y en el discurrir político de algunos enclaves regionales particulares. De resto, el trasegar de los narcos era más asunto de rumor o de chisme, en muchos casos causa de celebraciones y en otros simplemente de indiferencia. En una sociedad donde la criminalidad era corriente pero a pesar de ello poco conocida en sus vísceras, la imagen de la delincuencia organizada en la opinión mediática estaba consignada en las emisiones radiales de la “La ley contra el hampa” y en los cada vez más apabullantes enlatados televisi-

10 Sobre el narcocorrido se encuentran trabajos como los de Luis Astorga. “Los corridos de traficantes de drogas en México y Colombia”. En: Documentos del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1997. Carlos Valbuena. “Narcocorridos y Plan Colombia”. En: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, No. 3, 2004. Carlos Valbuena. “Ética y corridos prohibidos”. En: Revista Conciencia Activa, No. 8, 2005. En Colombia están los trabajos de Carlos Páramo.



vos procedentes de los Estados Unidos: hombres oscuros, rodeados de unos pequeños matones, habitando abandonados callejones y haciendo el trabajo sucio de grandes señores rodeados de mansiones y lujos. En medio de esta miopía sólo el teatro fuerte, que permanecía renuente a la comercialización de los escenarios que tanto cautivaba a unas clases medias y altas abatidas, pudo establecer un retrato eficiente del narco: en 1980 el Teatro La Candelaria puso en escena “Golpe de suerte”, de Santiago García, nuestra primera *Bildungsroman* del mafioso, al decir de Lucía Garavito, que escenificó precisamente el discurrir de unas existencias expuestas progresivamente a los entresijos de la vida mafiosa¹¹.

Pero todo esto empezó a cambiar desde 1983. Por un lado, la penetración cada vez más evidente de la producción coquera a territorio colombiano supuso las primeras rencillas entre guerrilleros y grupos de narcotraficantes que empezaron a robustecer bandas de crimen urbano y rural convirtiéndolas en verdaderos ejércitos de narcoparamilitares. Por otro lado, la creciente presión de los Estados Unidos llevó al propio gobierno colombiano a emprender medidas de represión contra cultivos y laboratorios. Finalmente, algunos periodistas y políticos empezaron a denunciar con más vehemencia la presencia del narcotráfico en diferentes sectores de la vida nacional. Uno de estos denunciadores fue precisamente el Ministro de Justicia del gobierno Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, quien lanzó desde su nombramiento fuertes señalamientos



contra los barones de la droga. El 30 de abril de 1984, pasadas las 7:00 pm., el Ministro Lara Bonilla fue asesinado en la ciudad de Bogotá, acontecimiento que en el instante supuso una declaratoria de guerra entre el Estado y los narcos. El día de las honras fúnebres, el propio presidente Betancur señaló que habían acabado los tiempos de departir con los narcos y habilitó el tratado de extradición firmado por Colombia con los Estados Unidos desde 1979 y que aún entonces estaba a la espera de pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Fue la guerra la que puso en evidencia la magnitud de la penetración de los narcos a la sociedad colombiana, pero no sólo en sectores acomodados de la economía y la política, sino también entre diferentes sectores de la clase media dedicados al testaferrato y entre las clases populares más pobres, donde el esquema de valores de los narcos había terminado imponiendo un estilo de vida aterrador: el

¹¹ Lucía Garavito. “Aquí no ha pasado nada”: narcotráfico, corrupción y violencia en Golpe de suerte y El Paso de La Candelaria. *Latinamerican Theatre Review*, Spring 1997.



del sicariato. En efecto, desde el asesinato de Lara Bonilla, se hizo evidente que décadas de abandono oficial, de miseria rampante, de existencia de bandas criminales y de penetración de insurgencias urbanas habían terminado convirtiendo las barriadas pobres de ciudades como Medellín en escenarios para unos jóvenes que, descreídos de esos valores consuetudinarios siempre insuficientes cuando no inanes, se habían convertido en mercenarios de los narcos para los cobros, los ajustes de cuentas, las intimidaciones a competidores locales y, desde la guerra misma, en armas letales contra los representantes del gobierno, la política, los medios y la academia. La extinción de la moratoria social, que entre los narcos supuso acceder a prebendas, para los sicarios supuso la proximidad o la cercanía recurrente de la muerte¹².

La guerra puso en vilo temporal los valores de la vida narca: cuestionó la vigencia de la compensación, del orgullo, de la ostentación y de la moral fronteriza. En medio de las persecuciones los narcos se fueron enfrentando con la traición, con la indignidad, con la pobreza y con el señalamiento de una moral unilateral. La fragilidad en los valores que habían soportado sus creencias más profundas restituyeron a los narcos a unos espacios que conocían desde antaño, a esos donde desde siempre la sociedad de padecientes, habitualmente los más pobres, habían resuelto la crisis de los valores consuetudinarios: a las prácticas de la religiosidad popular, de la magia y la brujería. En medio de la incertidumbre, los

Fue la guerra la que puso en evidencia la magnitud de la penetración de los narcos a la sociedad colombiana, ... entre las clases populares más pobres, donde el esquema de valores de los narcos había terminado imponiendo un estilo de vida aterrador: el del sicariato.

narcos robustecieron sus viejos circuitos mágicos en procura de bloqueos, de amparos y de rezos que les restituyeran la invisibilidad agotada por la sobreexposición pública. En la guerra entre carteles, Cali y Medellín se vieron inundadas de rezanderos, brujos y aún de sacerdotes vudús y otro tipo de santeros que, en últimas, tuvieron un efecto determinante: esoterizar la propia imagen del narco al punto que nunca se creyó totalmente en su muerte (como Rodríguez Gacha) o que su muerte lo condujo al mausoleo tan apreciado por muchos de los santos malditos (como Escobar Gaviria).

En medio de la crudeza de la guerra el país fue identificando las siempre rumoradas pero nunca bien conocidas entrañas de los estilos de vida narco, unas veces con realismo descarnado, otras con estereotipos recurrentes, no siempre de manera abierta sino como pretexto para

12 Cf. Elsa Blair. Muertes violentas. La teatralización del exceso. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2005. Igualmente véase Riaño Alcalá, op. cit.



distintas historias. La primera puesta en escena corrió nuevamente por cuenta del Teatro La Candelaria con la obra de Patricia Ariza “El paso” (1988), que mostró la vida narca descompuesta en corrupción y terror en capacidad de amenazar la existencia de todos los estamentos y las clases sociales¹³.

Le siguió a este esfuerzo la televisión, con dos seriadados dirigidos por Carlos Duplat Sanjuán, “Amar y vivir” (1988) y “Cuando quiero llorar no lloro” (1990), dos producciones sostenidas en la idea del sino: en la primera se muestra a la clase humilde que, pese a sus ideales y convicciones, de sus sueños y esperanzas, termina por efecto de las circunstancias sometida al gran crimen; en la segunda se muestra que las condiciones de las diferentes clases no exime a ninguna de ellas de claudicar en la violencia y por la violencia surgida de la corrupción de los prestantes, de la ingenuidad subversiva de las clases medias bajas y de la vida sicaria de las clases pobres. No obstante, las puestas en escena más impactantes, básicamente porque se concentraron en la vida sicaria misma, corrieron por cuenta del cine y la literatura: en el cine la película de Víctor Gaviria “Rodrigo D. No futuro” (1990) y en la literatura la investigación testimonial de Alonso Salazar “No nacimos pa’ semilla” (1990) y la novela de Fernando Vallejo “La virgen de los sicarios” (1993). Precisamente, la preocupación de cierta literatura por entender al sicario y al sicariato llevó a algún autor, probablemente a Héctor Abad Faciolince, a designarla como literatura sicaresca (que de hecho



ha motivado estudios comparativos con la literatura picaresca del siglo XVI).

Pese a las recurrentes informaciones sobre la letalidad de las drogas, a las denuncias sobre los excesos de la vida narca y las penurias de la vida sicaria, a las arremetidas violentas que emprendieron los narcotraficantes contra amigos y enemigos, a los atentados terroristas indiscriminados contra población inerte en calles, plazas y centros comerciales en diferentes ciudades del país, mal puede decirse que la sociedad colombiana que despidió los años ochenta terminó repudiando como un todo lo que significaban los narcos, sus negocios o sus estilos de

13 Lucía Garavito señala: “Si en Golpe se hablaba de una democratización de la riqueza, en El paso se trata más bien de la ‘democratización del dolor’ (...). En la estratificada sociedad colombiana, los campesinos, los pobres, los marginados, han sido por lo general los más directamente afectados por las diversas oleadas de violencia rural y urbana. Con el narcoterrorismo, la clase dirigente, la élite cultural y económica, la clase media intelectual y profesional, han venido a descubrir su propia vulnerabilidad e impotencia ante las fuerzas que controlan violentamente el país. Como lo subraya la pieza, personajes de la más diversa procedencia se encuentran juntos, sin privilegios sociales de clase o fortuna, compartiendo idéntico destino y enfrentando las consecuencias de la irrupción del terrorismo en su vida ordinaria”. Garavito, op. cit., pág. 81.



vida. Habitualmente el moralismo colombiano tiende a considerar que el “amor al narco” sólo permaneció entre barriadas humildes o pueblos de provincia que encumbraron a Escobar o a Gacha a un raudo ascenso santo o entre algunas viudas, esposas o amantes que recibieron como pocas los beneficios plenos de la riqueza mal habida. Pero no es así: los narcos no sólo capitalizaron de manera ilegal la economía, no sólo captaron votos sucios para la política, no sólo plantearon unos estilos de vida para ascender en una inflexible sociedad estamental y no sólo cometieron crímenes atroces para hacer todo esto; más allá, los narcos aceleraron los mercados de conversión de valores económicos a sociales, erosionaron la moratoria social y terminaron imponiendo la idea de que la existencia social radicaba en encontrar un medio de explotación que sin importar su legalidad o su licitud garantizara la compensación, el orgullo, la ostentación y la relatividad. Esta estructura profunda de valores, ahijada de los narcos, no obstante fue la misma que terminó exaltando una sociedad frivolizada, que será el ambiente propicio del traqueto.

Los traquetos

Para finales de los años ochenta y comienzos de los años noventa la guerra narca supuso una atomización de los grandes carteles: éstos se enfrentaron entre sí, claudicaron en diferentes regiones con cultivos y laboratorios, perdieron algunas rutas nacionales y casi todas las extranjeras, dispersaron sus capitales en

cientos o miles de testaferros y permitieron simultáneamente el ascenso de nuevos carteles con urdidos vínculos directos con la fuerza pública, con los paramilitares y con las guerrillas. Pero todo esto no supuso el fin del narco, sino su conversión en traqueto¹⁴.

Tras el fin de los viejos carteles, los miles de millones de dólares del negocio siguieron circulando, no en nichos controlados como lo pretendieron los narcos, sino en los cauces desenfrenados surgidos de la propagación de la producción coquera en diferentes regiones colombianas, de la expansión de un conflicto armado cada vez más cruento y de la propia diversificación de la economía suscitada por la apertura de los años noventa. Precisamente estos torrentes de capital por los vericuetos de una geografía de contradicciones llevaron a que el estilo traqueto se instalara en distintas formas: entre “raspachines” o recolectores de hoja de coca, jornaleros expulsados de unas agriculturas sin capacidad de competir o nubladas por crisis internacionales, quienes accedieron a unos modos de vida plagados de la incertidumbre del campo pero recubiertos de las ostentaciones de las ciudades; el estilo traqueto también está entre los “señores de la guerra”, mercena-

14 El término “traqueto” no es reciente. Su existencia se remonta a las primeras bandas de criminales cooptadas por el negocio del tráfico de cocaína en los años setenta. No obstante en años recientes el país empezó a aludir al traqueto y al traquetismo como una forma de definir las nuevas condiciones de la vida narca tras la caída de los grandes capos.





rios que dividen sus días entre las gestas en el monte y el consumo ostentoso en las ciudades de provincia; el estilo está más que refinado entre los intermediarios urbanos, aislados de la economía directa de la coca que somete al “raspachín” y del conflicto armado que vincula al “señor de la guerra”, el eslabón más liberado de una cadena de mafias que, por su capacidad de disfrutar plenamente los beneficios de la plata mala habida, es el epígono por excelencia de la vida traqueta.

En unos casos este traquete por excelencia es un personaje surgido de los fondos más clandestinos de los viejos carteles que, sobreviviente de las guerras intestinas del crimen, mantuvo o reemprendió la instalación del negocio actuando como un intermediario tradicional para el acopio, la exportación, la recaudación y la extorsión; en otros casos este traquete es un personaje sin arraigos claros, un desconocido miembro de la jerarquía de aprendices o testaferros, que igualmente mantuvo o reemprendió la instalación del negocio actuando como *agente outsourcing* o *empleado freelance* para las labores más tecnificadas del envío o el lavado. Porque el traquete por excelencia no es otro que la versión del narco en el capitalismo de última generación o, parafraseando a algunos autores, un agente del crimen organizado en medio del capi-

talismo desorganizado. En palabras más sencillas, un auténtico “narcoyuppie”.

A diferencia del narco, que quiso imponer un negocio comprando ínsulas Baratarias en el Caribe, colonizando a plata y a bala grandes provincias y desafiando abiertamente al Estado (al punto que siempre contrainsurgente no dudó en algún momento en rebelarse como un insurgente más), el traquete vive del pragmatismo que le concede la propiedad difusa del negocio, la tecnificación de los envíos, la sofisticación del lavado por paraísos fiscales o por reconocidos centros de negocio y la inusitada capacidad de reinversión que le ofrece una economía siempre medio abierta siempre medio cerrada. El traquete no necesariamente conoció el negocio en las calles de mala muerte de Queens sino que se familiarizó con él en medio de las empresas ficticias, de las juntas directivas maquilladoras, de las asambleas de accionistas y de las reuniones sociales donde no cesa de decirse que la política es el arte menor de los incapaces a diferencia de la economía que es el arte mayor de los emprendedores y los exitosos. La herencia diablada del narco y la pericia cultivada del traquete lo han convertido no en el “hijo prólijo” sino en el “hijo prodigio” de la mafia.

Pero como en el caso del narco, mal puede decirse que el traquete llegó a per-



vertir una sociedad inocente. Por un lado, la propia sociedad de los años ochenta y noventa, aún en su parroquianismo, no fue ajena a la caída del socialismo real y al ascenso de un capitalismo global que propagó las creencias en la crisis del Estado nacional y en la liberación anárquica de los mercados encumbrando el individualismo cerril, la competitividad a ultranza, la improvisación recurrente y la ganancia ostentosa como valores naturales de la existencia destinados a los más aptos, que pueden resolver todos esos valores consuetudinarios con simple y llano pragmatismo. De cualquier manera, unos y otros valores, los de vieja estirpe o los de nueva generación, terminaron coincidiendo en lo fundamental, en el carácter inevitable de las fortunas descomunales para unos y de las pobreza irredimibles de otros: para los primeros el mercado, el escenario de la selección natural que permite las evoluciones; para los segundos el estado, el escenario de la protección antinatural que permite las involuciones. Paradójicamente, nuestro estamentalismo arraizado en el siglo XVI resultó tierra fértil para cosechar el mundo conservador de finales de siglo XX: una explosiva conjunción del añejo “racismo de las apariencias” con el nuevo “racismo de las inteligencias”.

Este mundo que concilió perfectamente el viejo estamentalismo criollo con el neoconservadurismo global fue propicio para la farandulización de la vida pública y la frivolidad de la existencia: en medio de un país de incertidumbres, donde la promesa social se cumplía a cuenta gotas,

donde la posibilidad de vivir o sobrevivir, de ascender o descender socialmente, no parecía signada por nada ni por nadie, se afianzó la vieja idea de que la existencia sólo era cuestión de cada cual. Las viejas creencias sobre los “talentos naturales” de los colombianos, como el ingenio, la pujanza y el desvare, encontraron inversión sofisticada en un mundo orientado a la autoayuda, a la gestión del sí mismo, a la gerencia de los dones, masificado por unos oficiantes que se firman conferencistas y por una miríada de publicaciones que siempre son best sellers y hacen parte de los inventarios de las empresas. Al mismo tiempo, recluida la vida al control del sí mismo, los accidentes inexplicables empezaron a ampliar nuestro viejo menú de cartománticos, quirománticos, onirománticos, nigrománticos, etc., etc., que le dieron tonos de posibilidad futura a unas existencias plagadas de imposibilidades presentes. Todo esto en medio de la globalización de ciertas prácticas culturales, que nos trajeron la difusión masiva de prácticas como el yoga, que hasta entonces sólo sobrevivían en los viejos hippies de antaño, algunos de ellos convertidos en dilectos neoliberales. De cualquiera manera, la esoterización completa de la sociedad, entre todos los estamentos, por diferentes medios, no fue otra cosa que la pretensión de buscarle efectividad a unos valores consuetudinarios perseverantes.

Esta sociedad cada vez más privatizada en sus expectativas estuvo correspondida por una portentosa exposición mediática que le mostraba sólo un mundo de farándula: la vida pública quedó cir-



cunscrita a la inmediatez de una pantalla de televisión que desistió de nuestras tragedias compartidas para convertirlas en desgracias de unos cuantos, trueque que tuvo la fuerza de plantear que había una “sociedad buena” diferenciada de una “sociedad mala” y que el lugar en una u otra dependía solamente de decisiones individuales. El repertorio de los noticieros, entre los muertos, los goles y las tetas, nos condujo a pensar que había una sociedad que no éramos (donde estaban los malos), que había una sociedad compartida (donde estaban los buenos) y que había una sociedad que aspirábamos (donde estaban los bonitos y los inteligentes). Esto sin importar que los muertos tuvieran en medio los designios de alguna reina de la coca, que entre las fanaticadas deliraran a rabiarse narcos y paracos y que en los entretelones del glamour o de las bolsas de valores estuvieran las más grandes lavanderías de dinero magio, narco y traqueto. Pero nada de esto parece reprochable aún hoy, porque los casos parecen aislados, porque “no todos están untados”, porque el narcotráfico es sólo cuestión de unos cuantos malandros y vagabundas.

Este mundo de frivolidad y de farándula es la tierra de promisión del traqueto, que pudo galvanizar los valores del narco vertiéndolos a lo light y a lo loft, a lo sweet y a lo soft. De entrada el traqueto tiene un bien preciado: la juventud, capital valioso en este teatro de sombras envejecidas, que tiene por pura cédula de ciudadanía o que adquiere por nuestra apabullante industria de la cirugía estética. Le sigue la posesión rápida y abundante, tan exalta-



da en esta Calcuta suramericana que idolatra al éxito económico, que el traqueto tiene en todas las cantidades y formas. Le sigue el estilo, donde aún persevera el viejo narco pero donde lucha el aprendiz de yuppie, para hacerse a un mundo que no le precede, como a su antecedente, sino que él mismo ha ayudado a construir. El narco luchaba por ingresar a un mundo que sus creencias le habían signado superior a él; el narcoyuppie busca mantenerse en un mundo en el que sus creencias se han impuesto como derrotero para otros, tanto que no pocos “niños bien”, de buena familia, no han dudado en adquirir el estilo traqueto para no fenecer ante sus aventajados rivales. El traqueto está entre nosotros, vive entre nosotros, como dijera el alcalde Luis Eduardo Garzón, viste “Armani con zapatillas” en medio de la celebración general.

Precisamente, el valor narco galvanizado por la frivolidad y la farándula está en los principios de esa cada vez más apabullante producción sobre el narcotráfico en Colombia en los años recientes: en la literatura que abandonó la dolorosa sicaresca para cultivar las liviandades del traquetismo, en la televisión que desistió de la dramatización de los problemas para



simplemente convertirlos en espectáculo, en un cine que busca su propia tradición pero que no cesa de recaer en el estereotipo, en la fuente oficial, en la versión recurrente, sin capacidad de traslucir la profundidad de nuestros dramas y tragedias. De las puestas en escena de otros tiempos, que tienen entre sus virtudes el apelar a actores naturales en el cine, a tragedias de carne y hueso en la televisión, a hechos concretos en la literatura, pasamos a unos montajes donde el narco discurre a traqueto representado con la fastuosidad de esa farándula criolla que ha prosperado más por la apariencia que por el talento (como bien lo han dicho tantos actores y actrices de la vieja guardia). “Sin tetas no hay paraíso” y “El cartel de los sapos”, cumbres de la literatura traqueta por efecto de sus inmensas audiencias, buscan erigirse como testimonios para aleccionar a una sociedad sobre el penoso destino de los mal habidos, pero que en medio de un traquetismo perseverante sólo consiguen incrementar el resentimiento sobre aquellas auspiciadas y auspiciados por el mostrar y por el contar.

Muchos pueden decir que otros países igualmente asistieron, no de ahora, sino desde décadas atrás, a una frivolidad

de la existencia y a una farandulización de la vida pública sin que eso haya suscitado ningún conflicto. Puede ser cierto. Pero en aquellos países aún prospera una ética pública que ha desistido de valores consuetudinarios sujetos al estamentalismo o que los ha confinado exclusivamente a los ámbitos de la vida privada o a los fueros de las cofradías (a la profundidad de las instituciones, de las noblezas, de los académicos, de la farándula, etc.): de resto, existe una cultura pública portentosa, sujeta a los valores ciudadanos, que restringe la generosidad y la lealtad en beneficio de la tributación y la redistribución, que restringe la honorabilidad y la honradez en beneficio de la dignidad y el respeto, que restringe la moderación y la modestia en beneficio de la calidad de vida, que restringe el acomodamiento ético y el moralismo local en beneficio de la supremacía de las normas constitucionales y las leyes ciudadanas. Pero este, nuestro país camandulero, más sufrido que un cristo, sigue pidiendo la preservación o el retorno de esos valores consuetudinarios que, revestidos como buenos, han sido el caldo de cultivo del estamentalismo mafio que nos hace tan esotéricos, tan frívolos y tan reaccionarios.

✖



Autores materiales y materia del delito

Una lectura de Cartas Cruzadas y otras narrativas del narcotráfico

Gabriela Polit Dueñas¹

Este trabajo es parte de una investigación más amplia en la que analizo el impacto y la representación del tráfico de drogas ilegales en la literatura. Mi investigación se concentra en tres países, México, Colombia y Bolivia, porque han sido los más afectados desde la declaración de la “Guerra contra la drogas” en 1986, por el ex presidente Ronald Reagan.

Si bien lo que les es común a estos tres países respecto a la droga es la enorme demanda de los Estados Unidos, hay que comprender que el desarrollo y consolidación de los grupos dedicados al tráfico de drogas ilegales han tenido y tienen una situación muy distinta en cada uno de ellos. La situación de México, antiguo pro-

veedor de opio y sus derivados—incluyendo la heroína— a los Estados Unidos no es comparable con la de Bolivia, cuyo cultivo de coca está vinculado con prácticas ancestrales que nada tienen que ver con el relativamente reciente boom de la cocaína. Colombia, por su parte, no es un país productor sino desde los años ochenta cuando también se convierte en el principal proveedor de cocaína a nivel mundial. Estas diferencias están dinamizadas por la relación que los grupos de narcos locales establecen con el estado central y, por lo tanto, tienen que ver con la historia

¹ Profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin.



La fuerza de las mafias –como bien afirman los expertos- solo existe en la medida que establecen una equilibrada relación con el poder estatal.

política de cada país. El uni-partidismo mexicano no se parece en nada a la inestable democracia boliviana y menos aún al resquebrajado estado colombiano. La fuerza de las mafias –como bien afirman los expertos- solo existe en la medida que establecen una equilibrada relación con el poder estatal. Huelga decir que todas estas diferencias articulan una representación simbólica del narcotráfico de manera distinta en cada uno de estos países.

Desde que las drogas son asunto de seguridad de estado, todas las actividades relacionadas con su cultivo, transporte y consumo se han convertido en crímenes de primer orden. Este cambio de percepción que se establece dramáticamente en el último cuarto del siglo pasado, se registra en el código de una moral frágil, porque el tráfico de drogas ilegales es un mundo del que poco se conoce y del que mucho se juzga (pienso en lo que históricamente ha sido y es para los campesinos el cultivo de amapola en el norte de México, o el de coca en El Alto y el Chapare boliviano, e incluso en formas de contrabando que estuvieron aceptadas como medios legítimos de sobre vivencia entre los habitantes de la Guajira colombiana). Los cambios más sobresalientes de los discursos en torno a las drogas han dado pie al renacimiento de antiguas retóricas

racistas en el caso boliviano, regionalistas en el mexicano y en cierta medida en el colombiano. La guerra contra las drogas ha servido para legitimar la intervención militarizada de los Estados Unidos en los países andinos y últimamente en México, con el Plan Mérida. A pesar de esta Guerra, no se ha disminuido ni la oferta ni se ha controlado la demanda de sustancias. Por el contrario, se han intensificado los riesgos en el negocio –porque a mayor violencia por parte del estado, mayor violencia por parte de los narcos- magnificándose además sus ganancias.

La representación simbólica de todo este fenómeno sea quizá más conocida a través de los controversiales ‘narcocorridos’ en el caso mexicano. La literatura, sin embargo, también ha colaborado en la representación del narcotráfico. Como en todo fenómeno de esta magnitud, hay obras que de manera inteligente o seductora al menos, comercializan con estereotipos, creando universos maniqueos en los que es fácil distinguir el bien del mal. Pero también hay obras que desarticulan las dicotomías simplistas y nos confrontan con esa verdad siempre ambigua, siempre resbaladiza que es la esencia de la condición humana. En la primera parte de este ensayo voy a describir un grupo de novelas que se ocuparon del narcotráfico en Colombia y que se publican durante la década de los noventa, hasta principios de la década actual. Más que un análisis literario, aquí describo el fenómeno cultural que se conoció como la sicaresca y explico su evidente deuda con el narcotráfico. La segunda parte de



A pesar de esta Guerra, no se ha disminuido ni la oferta ni se ha controlado la demanda de sustancias. Por el contrario, se han intensificado los riesgos en el negocio –porque a mayor violencia por parte del estado, mayor violencia por parte de los narcos- magnificándose además sus ganancias.

mi trabajo, es el análisis de *Cartas Cruzadas*, novela de Darío Jaramillo Agudelo publicada en 1995. Pese a ser una de las obras menos comercializadas en la época en la que el sicario era el principal protagonista de la narrativa colombiana (si la comparamos con *La virgen de los sicarios* o *Rosario Tijeras*), es también una de las que mejor ilustra los graves procesos de descomposición social que el auge del dinero caliente suscitó en el país. El relato ofrece una mirada introspectiva que muestra una Colombia despiadada y sin derrotero; pero además es una obra que crea su propio linaje y nos recuerda a los lectores, que la literatura - aun el más crudo realismo- obedece a un registro propio.

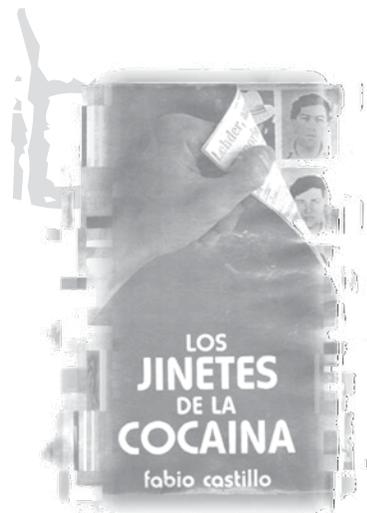
Un breve recorrido histórico

Los grupos dedicados al tráfico de drogas ilegales aparecen en Colombia hacia finales de los años sesenta, cuando los miembros del Cuerpo de Paz descubren una marihuana de altísima calidad en la zona de La Guajira. Esta hierba conocida como la Santa Marta Golden fue objeto de comercio de unas manos norteamericanas que la enviaban desde Colombia hacia otras manos norteamericanas que las recibían y distribuían en los centros de consumo en los Estados Unidos. El negocio de la cocaína comienza años después, a mediados de los setenta, e involucra en su transporte y distribución a colombianos que trabajan tanto en el lugar de envío, Colombia, como en el lugar de destino, los Estados Unidos. Con la crisis financiera de los setenta, que afectó a todas las áreas productivas del país, se genera un éxodo masivo de colombianos hacia Estados Unidos. Entre ellos está la mano de obra de la distribución de drogas en este país en los años siguientes. Esta misma crisis financiera ayudó a cooptar a personas de sectores bajos, medios y altos que se quedaron en Colombia y estaban dispuestas a participar en un negocio que daba réditos económicos inmediatos con –hasta ese momento- bajos riesgos².

No es sino hacia finales de los años setenta cuando se empiezan a establecer evi-

2 Las fuentes para reconstruir esta breve historia son Soren Gootenberg. “The ‘Pre-Colombian’ Era of Drug Trafficking in the Americas: Cocaine, 1945-1965”. Paper presented in LASA, Montreal: September, 2007. Alonso Salazar. *No nacimos pa’semilla*. Bogotá: Norma, 1990. Alonso Salazar y Ana María Jaramillo. *Las subculturas del narcotráfico*, Bogotá: CINEP, 1993. Juan Tokatlián. *Globalización, narcotráfico y violencia: siete ensayos*. Norma: Bogotá, 2000. Francisco Thoumi. “Por qué razón un país produce drogas y de qué manera esto determina la eficacia de una política: Un modelo general y algunas aplicaciones al caso de Colombia”. Conference delivered in the Cátedra UNESCO Meeting *Trasformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas*, IISUNAM, México City: February 25, 2004. Libardo Sarmiento y Ciro Krauthausen. *Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1991.





dentos vinculaciones entre el narcotráfico y el campo político y es en esta época en la que el entonces presidente Julio César Turbay firma un acuerdo de extradición con los Estados Unidos. La declaración de la “Guerra contra las drogas” que consolida al narcotráfico como un problema de seguridad nacional afianza la amenaza de poner en práctica esta ley y esto desencadena una crisis. A pesar de que Colombia fue víctima de una violenta reacción de los narcos, es importante reconocer que el narcotráfico no es el principio ni el fin de la violencia en Colombia. Una mirada histórica –como la que ofrece Mary Roldán en su clásico libro *Blood and Fire*– ya predice que la mayor incidencia del narcotráfico era la de lubricar antiguas formas de violencia que habían constituido la realidad del estado colombiano y su relación con los grupos paramilitares y las guerrillas. Tampoco en sus usos de violencia son originales los narcotraficantes. Los trabajos de María Victoria Uribe anotan que las masacres cometidas por los narcos en los noventa reproducen antiguos repertorios de violencia que predominan en el territorio colombiano desde los años de “La Violencia”³.

En su momento, sin embargo, la feroz reacción de los capos ante las contradicciones y la incapacidad de la elite política de resolver legalmente su situación, ayudó a construir un mundo maniqueo que de alguna manera –en su representación pública al menos– borraba antiguas tensiones entre los grupos armados que históricamente habían estado enfrentados –el estado, los paramilitares, la guerrilla. Aparecen los términos narcoguerrilla y narcoterrorismo como expresiones retóricas que hacían del narcotráfico una fórmula útil para explicar los males de Colombia y que ponían a su larga historia de violencia en un hiato⁴.

Pero la violencia del narcotráfico en el ámbito público tiene una fecha de nacimiento: en 1984, cuando un par de muchachos en moto se acercan al Mercedes Benz en el que viajaba el entonces Ministro de Justicia del Presidente Belisario

3 En el epílogo de su libro Roldán afirma que el narcotráfico, la disidencia política, la insurgencia de la izquierda, la criminalidad y la desobediencia civil se los denomina, indiscriminadamente, con la palabra con que se menciona al habitante de las comunas, al sicario.

4 Uno de los primeros libros que habla del problema del tráfico de drogas ilegales es *Los jinetes de la cocaína* de Fabio Castillo (Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1987). Desde un punto de vista histórico, una de las valiosas contribuciones de este libro, que en muchas instancias carece de referencias a las fuentes, es que en él se muestran los sentimientos generalizados que despertaron los narcotraficantes en esos primeros años de su aparición pública. El papel que jugó Pablo Escobar Gaviria en estos años está reportado en varios libros y estudios. La parábola de Pablo: auge y caída de un capo del narcotráfico, de Alonso Salazar (Barcelona: Editorial Planeta, 2001), ofrece una visión general y problematizada del capo como personaje y como protagonista del horror de Colombia en estos años.



Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, y lo matan a sangre fría. El pecado de Lara Bonilla fue afirmar que su responsabilidad como Ministro era la de limpiar al país de los narcotraficantes. Su compromiso –y su muerte– marcan el hito que determina que el tráfico de drogas ilegales dejaba de ser un delito común para convertirse en un crimen de estado. El Ministro había sacado a la luz juicios pendientes que Pablo Escobar tenía con la justicia y que, por obvias razones, habían quedado en los archivos. Con su muerte la sociedad colombiana se divide entre buenos y malos, y con ella se legitima la respuesta del estado frente a la presencia de los que desde entonces serán llamados “Los Extraditables”. Esto desencadena una década de horror, fruto de lo que se llamó el narcoterrorismo y que no encuentra fin sino hasta 1993, con la muerte de su principal gestor, Pablo Escobar Gaviria.

El asesinato de Lara Bonilla estuvo reportado con la foto de los dos niños que lo mataron. El uno Iván Darío Guizado Alvarez, quien disparó contra el ministro, murió al caer de la moto y sufrir una fractura de cráneo. Le sobrevive el conductor Byron de Jesús Velásquez Arenas, nombre que combina la mística que se le atribuye al sicario: ángel de lo perverso⁵.

Las caras de la violencia

La violencia de los años siguientes se presenta en un código propio que se articula alrededor de esos nuevos agentes sociales que habían matado a Lara Bonilla, los asesinos de la moto –niños habitantes

de las comunas de Medellín y de Bogotá– seducidos por el dinero del narcotráfico y que ahora pasaban a ser ‘sicarios’. A estos autores materiales, eslabones sueltos de un engranaje complejo de corrupción, doble moral y ambición, se los interpela jurídicamente, aunque ninguna otra instancia o persona es interrogada⁶.

En sus reflexiones sobre los legados éticos de Auschwitz, Giorgio Agamben afirma que una de las grandes trampas del pensamiento contemporáneo es confundir la ética con la justicia. Según Agamben los juicios a los miembros de las SS son los mejores ejemplos de esta confusión porque el proceso jurídico, cuyo presupuesto es la culpa y el respectivo arrepentimiento, estructuró para muchos el restablecimiento de un orden ético. Como Agamben afirma, el juicio jurídico es un fin en sí mismo y en nada aclara el conflicto ético que Auschwitz sucitó⁷.

El súbito protagonismo de los sicarios de alguna manera tiene un eco en las reflexiones de Agamben, porque el sicario es el personaje a quien se le somete al

5 Le debo esta aguda observación a Angela María Pérez-Mejía.

6 Es importante comprender que en este tiempo no hay leyes para procesar a los narcotraficantes. Las autoridades que querían establecer leyes estaban por un lado, muy comprometidas con la idea de “extradición” o, en su defecto, paralizadas por las tremendas amenazas que caían sobre ellos y sus familiares por parte de los narcos. La lista de gente que murió durante esos años después del asesinato de Lara Bonilla es muy larga.

7 Giorgio Agamben. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. Pre-Textos: España, 2005. Ver especialmente las secciones I y II.



La literatura no escapa a este universo maniqueo, por el contrario, se alimenta de él. Los sicarios se consagran como personajes que divagan entre la realidad y el mito...

criterio de la justicia para restablecer una idea de orden social. Los habitantes de las comunas, parte de los desechables, como se los ha dado en llamarlos en años recientes, son el mejor chivo expiatorio para explicar el origen moral de las desgracias de la sociedad colombiana. Los habitantes de la comuna son los extraños a los que se los demoniza para purificar al resto de la tribu. Así, en el imaginario colectivo, se dio algún sentido a la muerte de Lara Bonilla en 1984⁸.

La literatura no escapa a este universo maniqueo, por el contrario, se alimenta de él. Los sicarios se consagran como personajes que divagan entre la realidad y el mito, y esto los convierte en poderosos atractivos para la creación de ciertas obras que reproducen estereotipos y en muchos casos no tienen que seducir a los lectores ya informados y hasta convencidos de lo que leen. Esto explica en parte el fenómeno que se conoció como la sicaresca en Colombia⁹.

Las primeras obras sobre sicarios aparecen en los noventa en la crónica y en el cine. Víctor Gaviria escribe el guión de su primera película, *Rodrigo D, no Futuro*, una historia que muestra cómo los muchachos de las comunas de Medellín sortean su suerte con la muerte. Aunque el guión es de Gaviria, la historia nos la cuentan ellos en su lenguaje y con sus cuerpos. Gaviria

no nos explica a los muchachos, no los redime en su historia, preserva al máximo su visión del mundo, del honor, del amor y de la violencia como herramienta para sobrevivir. En nada se parece la visión que Gaviria da de la comuna a la que en ese mismo año Alonso Salazar da en su famosa crónica *No nacimos pa' semilla*. En este libro los asesinos de la moto explican porqué y cómo se dedican al negocio de la muerte, cuáles son las trayectorias personales y colectivas que los han metido en ese mundo desbarajustado. En su afán de acercarnos más a sus historias, Salazar añade a su libro un glosario final en el que su explicación se torna exhaustiva. Las preocupaciones de Gaviria y de Salazar son las de comprender la vida de los muchachos en las comunas, pero las suyas no fueron las únicas miradas hacia los sicarios.

Está la ficción. La obra más conocida, *La virgen de los sicarios*, publicada en 1994 por Fernando Vallejo, se vuelve famosa en 1997, cuando es traducida al francés y se termina de consagrar en el 2000, cuando

8 Sigo las ideas de Rene Girard acerca del efecto del chivo expiatorio: "a través del cual dos personas se reconcilian a expensas de un tercero que aparece como culpable de lo que los aqueja..." (la traducción es mía). René Girard. *Violence and the Sacred*. Baltimore: John Hopkins U.P., 1977, p. 12. Girard llama a este un extraño e inconsciente proceso que en este artículo considero crucial para comprender la ubicua presencia de los sicarios en muchos trabajos artísticos en la Colombia de los años noventa.

9 Desde el punto de vista de la comercialización de estas novelas y la nueva imagen de las ciudades latinoamericanas, ver los trabajos de Herrera-Olaizola. Alejandro Herrera-Olaizola. "Se vende Colombia, un país de delirio": El mercado literario global y la narrativa colombiana reciente". En: *Symposium*. Vol. 61, 1. Spring 2007. (43-56).





Barbet Schroeder hace una película con el guión del mismo autor.¹⁰ A esta obra le siguen *Rosario Tijeras* en 1999 de Jorge Franco y *Angosta* de Héctor Abad Faciolince del 2000¹¹. En estas obras el sicario tiene un papel central porque para él la muerte es una mercancía como cualquier otra. Aparece, además, como un personaje cuyo lenguaje hay que traducirlo; su cuerpo está inscrito por una cicatriz que lo marca como sobreviviente de una muerte vecina, haciendo evidente su condición de desechable, y que a la vez permite convertirlo en objeto de deseo tanto de la escritora como del deseo sexual. Los protagonistas de estas tres novelas sufren una fuerte atracción física por los sicarios –hombres y mujeres– y esa atracción es el motor de la narrativa. Se combina la sexualización del sicario y la violencia como una fórmula para narrarlo: se establece además una estética afín a lo que hegemonícamente representaba el sicario, la mano visible del narcotráfico y origen de los males en Colombia¹².

Distinta a estas obras, pero considerada por muchos como parte del fenómeno

de la sicaresca, está *Noticia de un secuestro*, la crónica en la que García Márquez ejerce con usual maestría su prosa periodística para contarnos el drama humano de los secuestrados por los narcotraficantes durante los años noventa. La intensidad del relato sobre la experiencia personal y colectiva del secuestro, la reclusión y el asesinato de algunas de las víctimas, deja poco espacio para observaciones intelectuales respecto a la posición de culpables e inocentes. Tal como propone su autor, en este relato hay un grupo de víctimas, personajes heroicos, y el grupo de sus victimarios, villanos amorales, doctores, choferes, abogados y asesinos a sueldo pagados por los narcos. Sin embargo, como bien asegura María Helena Rueda, el verdadero protagonista de este relato es el estado que, a pesar de las limitaciones para resolver el conflicto con los narcos, aparece como la única instancia que puede hacerlo. La paradoja es que en los rescucios de este drama, y quizá en una segunda lectura, llama la atención, sin embargo, la impotencia de la clase políti-

10 Erna Von der Walde Uribe. “La novela de sicarios y la violencia en Colombia”. En: Iberoamericana, Madrid: Editorial Vervue, Vol. 1, 2001.

11 Sobre las películas basadas en estas novelas están los trabajos de Héctor Fernández L’Oeste. Hay otras obras del cine que aparecen años después, Cuadernos de Medellín (Catalina Villar, 1998); La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, 2000); La Sierra (Scott Dalton y Margarita Martínez, 2005).

12 Slavok Zizek observa que la sexualización del otro se convierte, en muchos casos, en la única manera de representarlo. Ver especialmente *The Plague of Phantasies*. Verso: New York, 1997, pp. 74 -113.



ca para confrontar a los narcos, porque no hay ley que contenga sus crímenes¹³.

Hasta aquí el acercamiento que he propuesto mira a las obras como parte de un fenómeno. Sin embargo, reconozco que es importantísimo distinguir las diferentes visiones que cada una de ellas da de los sicarios. Lo que para efectos de mi análisis quiero subrayar, es que si algo tienen en común estas obras, es que generan un discurso alrededor de una culpa colectiva. “El desbarajuste de Colombia es algo que nos pasó a todos, todos somos responsables por esto que sucede,” como dice Fernando, el personaje autobiográfico de la obra de Fernando Vallejo. Pero como aprendimos con Primo Levi, toda culpa colectiva absuelve a los individuos de sus responsabilidades personales. La culpa colectiva neutraliza la situación y exime a los sujetos de tomar una posición reflexiva sobre los hechos, o para usar los términos de moda en discusiones de nuestro campo, se los exime de tomar una posición ética frente a la historia (quizá por eso la importancia del sicario como chivo expiatorio).

13 García Márquez cuenta que una vez el Presidente Gaviria le pregunta a Rafael Pardo Rueda, entonces encargado de Seguridad: “Dígame una cosa, Rafael, ¿a usted no le preocupa que uno de esos tipos se entregue de pronto a la justicia y no tengamos ningún cargo contra él para ponerlo preso?” Gabriel García Márquez. Noticia de un secuestro. Norma: Bogotá, 1994, p. 80. Esta paradójica aseveración muestra cómo, por un lado, los políticos buscaban implementar leyes que establecieran un orden y, por otro, la falta de leyes y las dificultades que enfrentaban para crearlas, llevó al país a un caos profundo. Esas eran las condiciones que se vivían en Colombia y que contribuyeron a la tragedia que se vivió en los años que siguieron en los que se pagaba los errores de la doble moral de la élite y el odio de Pablo Escobar hacia esa élite.

La otra cara de la violencia

En este contexto, la obra de Darío Jaramillo, *Cartas cruzadas* (Alfaguara: Madrid, 1994), es excéntrica, ya que se trata sobre la participación personal de los protagonistas en el proceso de descomposición social. La novela es de una profunda introspección cuya búsqueda gira en torno a la pregunta sobre la propia conciencia, la del autor y la de su clase. El interés en la novela se desplaza de la historia pública hacia la historia privada, la de los individuos y de las transformaciones en sus relaciones afectivas. La novela es, entre muchas otras cosas, una triste historia de amor. En ella, el autor muestra cómo, en los años que preceden el asesinato de Lara Bonilla y a la ola de violencia desencadenada por los narcos, la inmensa cantidad de dinero que circulaba en el país transformó a Colombia en una sociedad decadente y sin valores. El relato borra las dicotomías fáciles que se habían establecido como norma de representación en los noventa, porque hace evidentes los problemas que surgen cuando el enriquecimiento fácil e inmediato se vuelve una forma de vida en todos los estratos de la sociedad.

Entonces *Cartas cruzadas* invierte el argumento: el problema del narcotráfico no es la violencia, sino más bien la gestación de una sociedad despiadada. Se plantea que la verdadera lacra que trajo el negocio fue imponer una manera de relacionarse con el entorno única y exclusivamente a través del dinero.

Leída en contexto y en contraste con las obras de la sicaresca, esta novela hace



La consecuencia de este razonamiento tiene una verdad cruel que la articulan los sicarios cuando explican sus crímenes: “yo sólo hago el trabajo, culpables son los que me pagan”.

evidente –por omisión acaso– que el interés por los sicarios responde a la necesidad de organizar un discurso moral que absuelva a ciertos sectores de la sociedad y condene a otros. Es decir, que genere una memoria y, sobre todo, que asegure un olvido. En la necesidad de legitimar al narcotráfico como crimen de estado y sobre todo, como causa de todos los males de Colombia, el discurso político se convierte en un alegato moral, y sus desertores, los adictos, los narcos y sus sicarios, son los culpables. Todos los demás tratan de desvincularse públicamente de aquella fuente de dinero de la que gozaron, porque admitir su participación con los narcos sería ir en contra de la filosofía misma que legitima la riqueza y la posición hegemónica en la sociedad. El dinero caliente no tiene el valor que se le atribuye al patrimonio del esfuerzo, del esmero y hasta del linaje. El dinero caliente es, en ese sentido, mucho más democrático y esa es una de las aporías del narcotráfico que, como bien afirma Carlos Monsiváis, no es la causa, sino el producto más grave de la ética neoliberal. La consecuencia de este razonamiento tiene una verdad cruel que la articulan los sicarios cuando explican sus crímenes: “yo sólo hago el trabajo, culpables son los que

me pagan”. Su justificación es amoral y eso es lo que hace del sicario el protagonista de crónicas, películas y novelas, porque su posición nos deja perplejos. El fundamento de su lógica, sin embargo, tiene orígenes en un proceso general de decadencia cuya descripción es difícil de articular¹⁴.

Cartas cruzadas

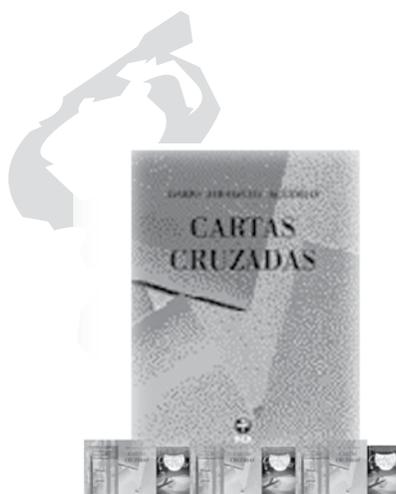
He llegado al final de mi recorrido. En el momento de comenzar la segunda parte del ensayo, el análisis de *Cartas cruzadas*, me pregunto si la propuesta de Darío Jaramillo es confrontar esa versión, casi de sentido común, que da el estado y la promociona el mercado de lo que sucede en Colombia en los noventa y que está retratada en la cara infantil de aquellos ángeles de lo perverso, los sicarios. La novela ciertamente irrumpe con una mirada que busca el interior para explorar algo complejo: un proceso de decadencia en el que es difícil marcar un principio y menos aún, determinar su fin. Necesariamente empiezo mi lectura pisando en ese vasto campo en el que las reflexiones sobre ética y representación y principalmente sobre literatura y política marcan los debates en nuestro campo. Convencida de que las respuestas acerca de la éti-

14 Cabe recordar que Darío Jaramillo escribe su novela después de perder su pierna por la explosión de una bomba atribuida a los narcos. En mi deseo de entender la articulación de una búsqueda ética, esta experiencia resulta importante ya que por ella, o pese a ella, Jaramillo se concentra en los procesos de decadencia en las relaciones afectivas, más que en el protagonismo de los sicarios.



ca no encuentran cauce en concepciones universales, sino en preocupaciones específicas, y de que no es la literatura, sino algunas obras en particular, las que nos pueden guiar a comprender los procesos humanos, propongo leer *Cartas Cruzadas* como una obra sobre el impacto del narcotráfico en Colombia, pero ante todo, como una novela epistolar, que reclama un análisis dentro de su propio registro.

El género epistolar comparte con el autobiográfico un fenómeno que constituye su mayor riqueza y a la vez su mayor complejidad epistemológica: el sujeto que crea se convierte en texto, en el objeto de la creación. El sujeto se auto-inventa, el texto se convierte en un segundo advenimiento, una autoconciencia auto-consciente. Pero el hecho de que el yo se 'cree' también se puede leer como una 'desapropiación' del yo. Es una manera de mirar al 'yo' con distancia. Hablando de la autobiografía, Paul De Man dice que no es un género literario sino una forma de textualidad que posee la estructura del conocimiento y de la lectura. Lo cual es aplicable a la mirada que Darío Jaramillo propone en su novela. Los personajes que escriben el relato son a su vez de quienes se escribe en el relato y las cartas exponen una doble mirada, aquella que en el cruce epistolar va tejiendo la historia, y la del testimonio individual que cada personaje da sobre los procesos internos. Esta mirada introspectiva está además reforzada por el diario de Esteban, único texto que no está en el cruce epistolar y que lo escribe uno de los protagonistas del relato, con quien se identifica el autor.



La correspondencia se da con mayor o menor intensidad entre todos los personajes. Como en toda novela epistolar hay un texto que contiene a los demás, en este caso es la carta que Raquel escribe a Juana, la que hilvana el resto de la correspondencia. Esteban es un joven de Medellín que mantiene relación epistolar con su amigo de la infancia Luis, joven también de Medellín que ahora es profesor de literatura en Bogotá.

Esteban viene de una familia adinerada, Luis es de clase media. Esteban es periodista deportivo, trabaja como locutor en una emisora y vive holgadamente por las rentas familiares. En Bogotá, Luis se enamora de una muchacha de la burguesía adinerada de Medellín, Raquel. Comparten un departamento sencillo y tiene una vida austera que es la que Luis paga con su sueldo de profesor. El dinero de la familia de Raquel nunca fue parte de la vida de la pareja, que en vez de tener aspiraciones materiales, aman sus oficios —el profesor, ella periodista—, sus libros y su música. Raquel tiene una hermana, Claudia, quien se casó, se divorció después de tener un hijo —Boris— y se fue a vivir a Nueva York donde conoció a Juana, su amante.



Dos categorías fundamentales se establecen en el encabezado de cada carta, el lugar y la fecha en la que se escribe. En esta novela, estas categorías, tiempo y espacio, son parte fundamental del gesto de introspección que propone su autor. La primera carta de Luis a Esteban, con la que inicia el relato, es de octubre de 1971 y la carta de Raquel a Juana, la que cumple una función de hilo narrativo, es de noviembre de 1983. El cruce epistolar transcurre en la década que antecede a la visibilidad de los narcos en el escenario público. Su recorrido, en cambio, marca el territorio imaginario de la nueva Colombia: Luis y Esteban se escriben entre Bogotá y Medellín. En Nueva York viven Claudia, Juana y en algún momento, Raquel y Luis. La madre de Claudia y Raquel, que había abandonado a sus hijas para irse con el psiquiatra que le trataba de su alcoholismo, está radicada en Miami. Así se cierra la geografía de la novela: Medellín, Bogotá, New York y Miami, las ciudades del narcotráfico de esa nueva 'Colombia' globalizada.

Todos los lugares comunes y los prejuicios respecto a la droga y al narcotráfico, los recoge Esteban y los revisa en su diario. Su voz es la que elabora profundas reflexiones sobre Colombia. Desde su constitución como una sociedad clasista hasta el fetiche de la palabra en un país dominado por una élite de gramáticos y abogados que poco o nada pueden decir ante los cambios vertiginosos que se experimentan en esos años. Cuenta los orígenes del negocio con la marihuana en la Guajira y los inicios del tráfico de co-

caína. Escribe con detalle sobre los precios de las drogas, los diferentes puntos de comercialización y algunas maneras en las que opera el negocio; así el relato desmitifica rumores. En sus intercambios con Claudia, bebedora y consumidora asidua de cocaína, Esteban discute los efectos de las drogas y la función de su severa prohibición. Claudia en algún momento parece víctima de la adicción, pero una hepatitis la condena a un período de abstinencia que la lleva también a dejar la cocaína. Queda claro que el problema de las drogas no es el consumo.

Estos largos tramos del relato también le permiten a Esteban cuestionarse sobre la legitimidad del negocio: ¿En qué se diferencia el dinero de los narcos de la fortuna de su padre o del de Raquel? ¿Acaso es que los primeros supieron ser discretos? ¿Es el error de los narcos, es su necesidad de mostrar, de mostrarse? No hay respuesta certera. El único argumento firme en contra del narcotráfico es que éste hizo de Colombia un país en donde todo era comprable, donde los problemas se resolvían con dinero, entonces las formas sociales de relacionarse pasan a ser el estupro, la coima, el secuestro, todo y todos tienen un precio.

Por historias de encuentros azarosos con antiguos conocidos del colegio o de la universidad, Esteban se entera de quienes empiezan a trabajar para los narcos en el tráfico de las drogas y sobre todo en el lavado de dinero. Para sorpresa suya, son muchos los amigos, conocidos y parientes que se han tentado con el negocio. La anécdota que más le llama la atención



y que quizá cumple la función de metáfora de todo el relato, es la que le cuenta un antiguo compañero de colegio que le confiesa haber tenido el trabajo más difícil en la industria del narcotráfico: el de contar dinero.

....El mayor problema consiste en qué hacer con el dinero, desde la manipulación, el conteo, el control y el transporte, hasta cómo invertirlo, cómo legalizarlo. Era una cosa de locos. Millones y millones y millones. Por libras, por kilos, por cajas, por toneladas. Era tan descocada la escena... que los novatos que traíamos a trabajar, al ver aquello, ese depósito de millones, entraban en un delirio, en una extraña locura. Acariciaban los billetes y se abrazaban con ellos, se los pasaban por toda la piel, indiferentes al olor que despedían, como si con ese frenesí extraño se contagiaran de riqueza... A los pocos minutos se ponían verdes, los ojos vidriosos como si la fetidez de los billetes les invadiera los pulmones en un solo golpe intempestivo, instantáneo y los dejara ahí fulminados (p. 354).

Este delirio con el dinero es el objeto de las extensas reflexiones de Esteban, que trata de encontrar explicaciones a la descomposición social que se vive, como quien trata de resolver un acertijo.

Pero si Esteban es el personaje de la reflexión, Luis es el personaje de la transformación. En su estancia en Nueva York, mientras termina su doctorado en literatura latinoamericana, escuchando las historias de su amigo Esteban, que acababa de heredar la enorme fortuna de su padre, Luis

empieza a experimentar una profunda codicia. Codicia que además la inculca su cuñado Pelusa, que lo ha invitado a ganarse dinero fácil colaborando con él. Poco a poco Luis deja de ser el hombre de gustos simples y amor por los libros, para convertirse en un hombre interesado por las marcas, los carros, los lujos. Esa codicia se gesta en la Gran Manzana, capital del consumo, pero crece en Colombia, donde Luis se convierte en un hombre de gustos exquisitos, viste el uniforme de los narcos, camisa de seda, reloj de lujo y desarrolla nuevas tendencias en su manera de socializar: consume alcohol, cocaína y sale con otras mujeres. No hay rastro en él del profesor de literatura, amante de Rubén Darío, con ideales de izquierda, al que tanto amó Raquel. Luis se vuelve un hombre paranoico y lleno de secretos. Es un desconocido para Esteban y más aun para Raquel¹⁵.

Es Raquel quien mejor reporta los cambios en su amante. Luis empezó a mentir, aduciendo que iba a dar conferencias en universidades al interior del país, y hacía viajes cortos a Miami. Cuando Raquel encuentra los pases de abordar, descubre la mentira y comprende que el verdadero viaje que Luis había emprendido no tenía regreso. Pese a la transformación de Luis, ellos siguen viviendo juntos y hacen algunos viajes en los que ella le ayuda y abre algunas cuentas bancarias bajo su nom-

15 Cabe decir que las visiones de Luis sobre Rubén Darío y el Modernismo son bastante tradicionales. Lo que más admira él sobre el movimiento es la idea de *laissez-faire* y la admiración por el individualismo. Esa lectura marca también su propia postura intelectual.



bre. Raquel sabe que infringe algo, que no es fácil de determinar. Lo hace porque ama profundamente a Luis, y porque todas estas operaciones con el dinero están muy distantes del negocio que lo genera. Su colaboración es, paradójicamente, su resistencia a aceptar que su compañero se había transformado en un narcotraficante. Describe su alienación con detalle en la extensa carta que escribe a Juana. Esa carta es la repetición de una pregunta que pese a que organiza todo el relato, no puede llegar a resolverse, a dar una respuesta concluyente ¿Qué le pasó a Luis? ¿Qué le pasó a Colombia?

Harto de las frustraciones propias del trabajo académico, y sin la necesidad de trabajar para la universidad, Luis decide renunciar. Está sumergido en la arrogancia de quien no necesita de nadie. Su prepotencia y la de sus nuevos amigos –observa Esteban en su diario- son los valores que lastimosamente asume el resto de la sociedad. Todo tiene un precio y quien no tiene dinero, se pone un precio para tenerlo.

En el apogeo de su riqueza, Luis compra a la familia de Esteban un departamento de lujo para su mamá. La familia de Esteban, dedicada al negocio de la construcción y bienes raíces, disfrutaba del auge de su negocios que fue uno de los más beneficiados por las inversiones de los narcos. La madre de Luis, sin embargo, nunca cambió su modesto apartamento con aquel que su hijo le había comprado. Hacia el final del relato, Luis, acorralado por sus propios compañeros de negocio que ya habían matado a su

cuñado y con la certeza de que él sería la próxima víctima, decide esconderse ahí. Esteban es el único vínculo con el mundo exterior y le apera con comida, whisky, cigarrillos, algunos libros y su música favorita. En esta época de encierro los amigos retoman algo de la complicidad que había hecho su amistad. Luis y Esteban tenían una pasión común, la poesía. Esteban escribe sin decidirse a ser poeta. Luis estudia a Rubén Darío y – con la tesis que escribió sobre su obra en la universidad en Nueva York- se había convertido en un experto del Modernismo. Este gusto compartido le permite al autor poner en el intercambio epistolar entre los amigos, reflexiones sobre la poesía, sobre las dificultades del oficio e incluso incluir alguna de sus obras como piezas escritas por Esteban (se explica porque Darío Jaramillo es uno de los poetas colombianos más conocidos dentro y fuera del país).

Este diálogo permanente sobre poesía mantiene al lector atento a esa preocupación por la literatura que sostiene el relato. Hay un eco de los versos de Rubén Darío, [“Yo persigo una forma...”,] porque para el poeta, autor de *Cartas cruzadas*, no es concebible un relato realista sin la exigencia de la perfección de su forma. Ese doble movimiento se objetiviza en el recurso que adopta para escribir la novela. La carta en la que los personajes cuentan la historia y se narran a sí mismos. La carta es el centro de la narrativa. Es por esto que la historia, además, establece su genealogía propia al mencionar dos relatos fundamentales que son la clave de mi reflexión final.



La primera obra es *El Coronel no tiene quien le escriba*. Raquel cuenta que en medio de esa alienación de hoteles de lujo y cuentas bancarias, en uno de esos viajes en que visitan a Juana, a Claudia y a Boris en Nueva York, fue la última vez que vio a Luis disfrutando de la literatura; los adultos deciden leer a Boris esta obra de García Márquez en voz alta. La segunda obra es *The Purloined Letter* de E. A. Poe. Cuando Luis se esconde en el apartamento que él había comprado a su madre, Esteban intrigado le pregunta porqué había decidido esconderse ahí, en ese lugar, tan obvio en Medellín y en su propio apartamento. Luis confiesa que sigue la lógica de Poe. Pocos días después, Luis desaparece del departamento, de Medellín y de las vidas de Raquel y Esteban, sin dejar rastro.

Cartas cruzadas se desdobra en dos historias –en las que el objeto central de la narrativa es también una carta y que son las que las contienen–. *El coronel no tiene quien le escriba* tiene que ver con la Colombia rural en la que los años de “la violencia” dejó una marca que García Márquez también registró a través de una carta. Una carta que nunca llegó a su destino, o mejor dicho, que nunca se escribió, pero que marcó la vida de muchos. La mierda que decide comer el Coronel al final del relato, confirma esa ambigua realidad de que la carta fue lo que hizo y lo que acabó con la vida del Coronel. Con *The Purloined Letter* la novela se desdobra

en la oblicua realidad de Poe en esa carta robada. Dupin descubre el escondite de la carta que el comisario no supo encontrar porque su lógica es la de *examinar en la oscuridad*. Acaso eso es lo que hace Darío Jaramillo en un relato en el que examina aquello que no estaba a la luz, por su repliega en la intimidad. Si la carta de García Márquez sirve para mostrar las amarguras de la espera, la de Poe muestra las complacencias del método en la búsqueda. En ambos casos el contenido de las cartas está en un espacio opaco (lo que en el inglés de Poe se dice *odd o bizarre*). No en vano Lacan encuentra en el cuento de Poe el caso perfecto para ilustrar su concepción del lenguaje, estructurante e inasible a la vez.

Cartas cruzadas muestra que la literatura constituye un aspecto fundamental de la existencia, pero que más allá de lo que se narra, del argumento de la historia –en este caso de lo que contienen las cartas– hay una verdad que no se puede articular. Por eso Luis se desvanece de la historia. Su muerte o su captura significarían concluir el relato con un orden, el escatológico o el jurídico. Pero la ubicuidad de su paradero al final de la historia propone una narrativa en la que la verdad se muestra como un proceso, estructurante e inasible a la vez. En ese sentido la literatura –el arte quizá– sea la más adecuada manera de articular un argumento ético. Porque ambos están determinados por la búsqueda y están fuera del reino de lo obvio.



El narcotráfico en área de penal

Reflexiones sobre goles y carteles de la droga en Colombia

David Leonardo Quitián Roldán¹

En agosto de 2007 los cables noticiosos del mundo daban cuenta de un hecho corriente en Colombia: la aprehensión, en Brasil, de un presunto capo de la droga de nacionalidad colombiana. Sin embargo, pese a la normalidad que para los colombianos entraña desde principios de la década del ochenta ese tipo de información, si hubo estupefacción generalizada por la identidad del hombre atrapado por la policía secreta de Sao Paulo y por el rótulo de “capo” que se le daba; se trataba, ni más ni menos, que del autor del gol más recordado en la historia del fútbol nacional: Freddy Rincón, acusado de blanqueo de dinero y solicitado en extradición por la justicia de Panamá. La “Espiga” Rincón, con su reseña policial, pasaba de ser el

héroe deportivo de la Copa Mundo Italia 90 (cuando marcó “in extremis” el gol del empate ante los alemanes) a ser un narcotraficante más de la escrupulosa lista del Departamento Estadounidense Anti-drogas DEA.

Claro que esa noticia, examinada con cuidado, no debería despertar tanta sorpresa en la opinión pública colombiana, ya que tres meses antes hubo una de un talante similar: Luis Eduardo Méndez, ex presidente del primer club colombiano que ganó el título nacional, el Independiente Santa Fe, se entregó a la justicia del estado de la Florida que desestimó

¹ Profesor de las universidades Pedagógica Nacional, Incca de Colombia y de los Llanos.



los cargos en los que se le imputaba la exportación de cocaína al país del norte, pero que finalmente lo condenó a pagar 70 meses de prisión por obstruir a la justicia de Estados Unidos al facilitar el escape del narcotraficante Rafael Caicedo, hoy tras las rejas en una penitenciaría norteamericana. Así mismo el corresponsal de la Agencia EFE en Bogotá informó a sus abonados, en marzo de este año, que José Ignacio Martán, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, había sido vinculado a un proceso judicial en el que se le sindicaba de asociarse con el Cartel del Norte del Valle² en el tráfico de drogas y por ello su nombre y la razón social del equipo que presidía, el Cortuluá Fútbol Club que participa en la categoría de ascenso (la Primera B), pasó a integrar la famosa “Lista Clinton” que es el temido listado financiero que la Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) confecciona con los nombres de las personas y empresas sindicadas de lavado de activos provenientes de la mafia narcotraficante.

Siguiendo con la relación reciente de hechos en los que el tráfico de drogas y el fútbol colombiano aparecen en el mismo titular noticioso, mencionemos el frustrado escándalo originado, el 21 de junio de 2007, por el sensacionalista Diario *The Sun* de Inglaterra en el que el talentoso ex delantero de los clubes Newcastle United FC y Parma FC, Faustino Asprilla, es señalado como “barón de la droga” al relacionarlo como socio del reconocido traficante Osmiro Méndez que es buscado por autoridades inglesas e italianas por el

envío de varias toneladas de cocaína al Reino Unido y a la bota itálica. Vale decir que al día siguiente de publicada dicha noticia, el diario británico se retractó de la misma y ofreció excusas al polémico ex jugador que es célebre en Colombia por sus goles con la tricolor (en especial por los dos tantos marcados a la selección argentina en el humillante 5 a 0 que los “cafeteros” le infligieron a los “gauchos” en la eliminatoria mundialista de 1993), por su afición a las mujeres, a los caballos y a las pistolas³.

Para ir rematando este breve prontuario de gente de fútbol asociada a carteles del narcotráfico, refiramos la publicación de un informe confidencial de la Revista *Semana* (08/11/2007) que revela los negocios fraudulentos de paramilitares con equipos de fútbol del rentado nacional. Los negociados incluían *infiltración de fichas*⁴ en la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol (Fedefútbol); sobornos de árbitros, arreglo de partidos, transacciones de pases de jugadores e, incluso, la compra de

2 Organización narcotraficante derivada del antiguo Cartel de Cali conducido por la familia Rodríguez Orejuela.

3 Hace un tiempo el ‘Tino’ Asprilla está en boca de toda Colombia por ser el primer hombre en la historia patria que aparece desnudo en la portada de una revista de farándula de circulación nacional. Cf. / Soho/ No. 89, septiembre 2007.

4 El sociólogo Álvaro Camacho Guizado nos explica en el libro *Droga y sociedad en Colombia: El poder y el estigma* (Bogotá: CEREC-CIDSE, 1988) que la expresión “infiltración de fichas” es propia del argot narcotraficante y denota la inclusión de un miembro de la banda en una estructura ajena que se quiere vigilar o controlar.





una empresa que serviría como fachada de testaferros: el Deportivo Independiente Medellín, prestigioso equipo de fútbol antioqueño en el que figuran respetables accionistas como los directores técnicos Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez considerados héroes nacionales por sus éxitos premundialistas con la selección mayor⁵. La investigación de Semana señala que los dineros para financiar esas actividades comerciales *non santas* provenían de la extorsión y el narcotráfico. Total: toda una red de fraudes e ilícitos orquestados por el hampa paramilitar que produjo una encendida controversia nacional y una avalancha de declaraciones públicas (incluidas las de los técnicos aludidos), comunicados de prensa y desmentidos oficiales en un juego de “dimes y diretes” que ocuparon buena parte de los editoriales de prensa y fueron el tema del día en los programas deportivos y de opinión del periodismo colombiano.

Para colmo de males, en el ya de por sí agitado medio colombiano, el hijo mayor del clan Rodríguez Orejuela lanzó al mercado editorial, a mediados del mes de septiembre de 2007, un libro titulado *El hijo del ajedrecista* (Bogotá: Oveja Negra y Quintero Editores, 2007) en clara alusión al alias con que su progenitor era conocido en los círculos policivos y en la sociedad en general. En tan explosivo texto, el

autor en su calidad de informante privilegiado relata como su padre y su tío construyeron un imperio económico que filtró buena parte de la sociedad vallecaucana y nacional a través de emporios periodísticos, empresariales, deportivos y bursátiles alimentados con dineros provenientes del tráfico de sustancias ilícitas. Así, en un capítulo lleno de datos sorprendentes, Fernando Rodríguez Mondragón cuenta cómo el Cartel de Cali y sus socios de otras regiones introdujeron “dineros calientes” en la entraña del deporte rey en Colombia: el fútbol. Entonces, gracias a esa nefasta bonanza de dólares, llegaron al país algunos de los mejores jugadores suramericanos del momento como Óscar ‘Pinino’ Mas, Aurelio José Pascuttini, Roberto Cabañas, Julio César Uribe, Juan Manuel Battaglia, César Cueto, Esteban Barberón, José Daniel Van Tuyne, Ricardo

5 Según la edición 1319 de la Revista Semana, en febrero del 2007 el directivo del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Rodrigo Tamayo (acusado por el revisor fiscal del club, Juan Bautista Ávalos, de ser socio de Pablo Escobar y del paramilitar Diego Murillo Bejarano ‘Don Berna’) vendió de manera irregular el control del equipo por 7.800 millones de pesos a “Sueños del Balón”; una sociedad en la que están los reconocidos entrenadores Francisco Maturana, Hernán Darío Gómez, Víctor Luna y Juan José Peláez. Dada esta historia del DIM, una la de las tareas de la Fiscalía será determinar si realmente el equipo fue vendido o si fue una simulación.





Gareca, Guillermo La Rosa, Julio César Falcioni, entre otros, quienes ayudaron a crear una liga de fútbol de primer nivel y de la talla de la argentina y brasilera, lo cual hizo recordar a los hinchas colombianos la límpida y gloriosa época de El Dorado⁶ cuando sin capitales oscuros el balompié nacional brilló con luz propia. Un buen ejemplo de ese refulgir deportivo de la década del cincuenta del siglo pasado es el Club Los Millonarios de Bogotá que se dio el lujo de ser considerado “el mejor equipo del mundo” al vencer al encopetado Real Madrid en su propio estadio⁷.

Pero el libro del heredero del Clan de Cali no alude solo a la influencia monetaria de los Rodríguez Orejuela a nivel de clubes; también relata que treinta años después de El Dorado los dineros mal habidos alcanzaron, incluso, al “tótem nacional”, la Selección Colombia que, pese a contar con la mejor camada de futbolistas de todos los tiempos (que nos llevaron a tres mundiales consecutivos) recibió “una manita” de “Los amos del juego”⁸ que llegaron al exceso de sobornar a un árbitro para que en un juego amistoso disputado en Manizales en marzo de 1994, previo al mundial de Estados Unidos, favoreciera al equipo tricolor que, con esa inusual ayu-

da extra, logró empatar el partido ante el Flamengo de Brasil (que ganaba 3 a 1) y “recobró así la confianza necesaria para afrontar la Copa Mundo que se avecinaba”⁹. Meses después, mientras la escuadra nacional esperaba su primer partido mundialista en Los Ángeles (California), el otro Cartel, el de Medellín, influiría en el entorno de la Selección cuando, a través de casetes y llamados telefónicos a su Director Técnico, Francisco Maturana, le aseguraron que protegerían y apoyarían al conjunto patrio ante las amenazas de un grupo autodenominado “Lifucol” (Limpieza del Fútbol Colombiano) que textualmente le exigía a ‘Pacho’ Maturana que “echara del equipo a varios jugadores que pertenecían a los carteles de la

6 Romántica década del balompié colombiano (situada en los cincuenta) que se caracterizó por la masiva llegada de jugadores del sur del continente como Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera y Néstor Rossi que, aprovechando huelgas futbolísticas como la ocurrida en Argentina, emigraron a Colombia donde les esperaban mejores sueldos y una afición que los acogió con entusiasmo y cordialidad.

7 El 31 de marzo de 1952 Millonarios, en el marco de “Las bodas del Real Madrid”, venció 4 a 2 al club madrileño en el estadio Chamartín de la capital española. “Millonarios el mejor equipo del mundo” y “lo más grande que ha visto Madrid: Millonarios de Bogotá” fueron, según Jorge E. Peña, algunos de los titulares de la prensa ibérica. Jorge E. Peña et al. Millonarios: 50 años de gloriosa historia. Bogotá: Edición privada, 1996.

8 Juan Ignacio Rodríguez. Los amos del juego. Bogotá: Periódicos y Revistas, 1989.

9 Testimonio dado por Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, el 7 de septiembre de 2007 a la W Radio de Caracol, en el que narró que pese a la calidad del equipo nacional, el Cartel de Cali proporcionó recursos para hacerle el camino más expedito hacia sus metas deportivas.



droga”¹⁰; la amenaza hacía clara alusión a la comprobada amistad de Escobar y sus socios con los futbolistas *paisas*¹¹ que militaban en el onceno colombiano.

Fue tal el revuelo originado por el libro (y por las comprometedoras fotografías que publica)¹² que en casi todos los medios de comunicación nacionales (tanto impresos, audiovisuales y electrónicos) hubo avalancha de comentarios, correos y opiniones al aire de lectores, corresponsales, televidentes y oyentes que exigían que clubes criollos como el América de Cali, Atlético Nacional y Millonarios devolvieran “las estrellas”¹³ que habían cosechado por obra y gracia de la bonanza marimbera y cocaleira. La paradoja subyacente en ese angustioso pedido es que si se hiciera caso de él, tendríamos que borrar de un plumazo el mejor periodo del fútbol colombiano en lo que respecta a su faceta internacional (7 subcampeonatos y un título de la Copa Libertadores de América; el título de la Copa América de selecciones en el 2001 y las clasificaciones a los mundiales de Italia 90, Usa 94 y Francia 98).

Un corolario de esos episodios noticiosos y la mejor ilustración de los mismos es la orden de captura, proferida por la Fiscalía General de la Nación el pasado 14 de septiembre de 2007, contra el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corso, quien es acusado de determinar el asesinato de un ex funcionario de la alcaldía y es señalado de tener nexos con grupos sobrevivientes de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)¹⁴ y narcotraficantes del corredor limítrofe colombo-venezolano. Ante esa disposición del ente acu-

sador, cientos de cucuteños se apostaron en las afueras del Palacio Municipal y con arengas hacia el Fiscal General de la Nación y otros contradictores del mandatario local y entonando cánticos del “doblemente glorioso” Club Cúcuta Deportivo, impidieron que el sindicato fuera sacado del edificio y trasladado a Bogotá por detectives del Cuerpo Técnico de Investigación. Y como si fuera poco, en el partido que el club “motilón”¹⁵ afrontó 48 horas después del “espontáneo bloqueo ciudadano” contra la disposición de arresto al burgomaestre de la frontera, el delantero Lionard Pajoi celebró a rabiar un gol levantando la camisa roja que ha distinguido al alcalde en sus correrías políticas, en claro agradecimiento por el desmesurado –y sospechoso- apoyo económico que el dirigente municipal ha dispensado al equipo de fútbol de la ciudad que ganó

10 Rafael Mendoza. Tras el equipo de ensueño: la increíble historia de la Selección Colombia. Armenia: Kinesis, 2003.

11 Nombre dado a los habitantes de Antioquia, cuya capital es Medellín.

12 Gente del mundo de la farándula y de la política nacional aparecen en decenas de fotografías publicadas en la obra literaria del hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela; pero la foto más impactante es en la que aparecen algunos miembros del clan de Cali con Hugo Santelli, ex presidente del club River Plate y ex ministro de Hacienda de Argentina.

13 En algunos países, incluida Colombia, la expresión “estrella” denota la obtención del título de liga de fútbol.

14 Organización paramilitar creada por el asesinado Carlos Castaño Gil y bautizada con la sigla AUC que pretendió agremiar, con relativo éxito, a todos los grupos contrainsurgentes de Colombia.

15 La etnia motilona es el grupo indígena que inspira el nombre popular con que se distingue al Club Cúcuta Deportivo.



—en la administración de Suárez Corso— la categoría promocional y luego el torneo nacional llegando, incluso, a semifinales de la Copa Libertadores de América.

Ante tales evidencias periodísticas que relacionan al fútbol colombiano con la exportación y comercialización ilegal de alucinógenos, realizada por bandas organizadas, aflora la siguiente pregunta: ¿son esas noticias hechos aislados del fenómeno narcotraficante o son una pequeña muestra del maridaje entre el fútbol colombiano y los carteles de la droga? Una simple mirada a la realidad nacional haría obvia la respuesta, sin embargo apliquémosle el beneficio de la duda al formular los siguientes interrogantes: ¿qué razones habría para que un deporte tan popular —y a la vez prestigioso— como el balompié hiciera alianza con el negocio de la coca? ¿Cuál es la explicación para que hombres con fortuna económica —como los ex futbolistas mencionados— se asocien con narcotraficantes? ¿Es ese, en caso de ser cierto, un fenómeno netamente colombiano? Así mismo ¿qué posibles beneficios encuentran los carteles de la droga en el fútbol? ¿Desde cuando lo tienen en la mira y/o desde cuando han entablado una íntima relación con él? ¿Qué tanto han facilitado, por acción u omisión, los políticos, los organismos de control y los potentados económicos este indebido pacto? ¿Es esto un simple show massmediático? No obstante, más allá de la crónica periodística y del dato histórico, brotan tres preguntas adicionales: ¿Cuál es la relación entre drogas, tráfico y deporte de alto rendimiento? ¿Acaso esos elementos

se encuentran en la adicción y el doping? ¿Es posible que la llegada de los futbolistas al comercio de psicotrópicos se de por vía del propio consumo?... son dudas que asaltan al colombiano promedio, que no van a ser absueltas en este artículo, pero que urgen ser tratadas con la mirada compresiva de la academia.

Primeros pases que condenan

Nuestro país se ha caracterizado por la proclividad al ostracismo de sus propios ciudadanos, sea por causa de la violencia política (en calidad de refugiados o exiliados), por causa de la escasez de oportunidades económico- profesionales (los que migran como ilegales a Estados Unidos y España, sobre todo; más los “cerebros fugados” que se establecen en países que apoyan y valoran sus capacidades intelectuales) y los que, por no saber otro oficio, por desesperación o por tradición familiar, salen a delinquir en patrias ajenas o llevan en sus cuerpos unos gramos de droga que les alivie sus dramáticas situaciones¹⁶. Pero a esos tipos de salida habría que agregar una más: la ligada a los acuerdos bilaterales de extradición que tiene el gobierno colombiano con varios países amigos y cuyo caso paradigmático

16 La premiada película *María Llena eres de gracia* (2004) del director Joshua Marston hace una buena ambientación de las motivaciones de los correos humanos del narcotráfico (“las mulas” en el argot periodístico) a la hora de arriesgarse a llevar un cargamento en el interior de sus estómagos o en su equipaje.



¿son esas noticias hechos aislados del fenómeno narcotraficante o son una pequeña muestra del maridaje entre el fútbol colombiano y los carteles de la droga?

es el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos en el que cerca de 750 nacionales han sido enviados a juicio ante las cortes yanquis por iningún norteamericano entregado a la justicia nuestra!¹⁷

Pues bien, los expedientes judiciales dicen que el 15 de noviembre de 1984 es la fecha en la que fue extraditado el primer colombiano a la patria del Tío Sam. Dicho compatriota fue Hernán Botero Moreno, acusado y condenado a 30 años de cárcel por lavar 52 millones de dólares. El Doctor Botero era presidente y gerente del Club Atlético Nacional y es “recordado en una gran foto en la que exhibía un puñado de dólares durante un partido de fútbol que perdía su onceno”¹⁸. Una buena ilustración del aire fraternal que envolvía a los narcos con la dirigencia del balón pie de entonces, se expresa en la decisión de la Dimayor que, luego de esa extradición, ordenó suspender los partidos de la fecha ien señal de duelo! Años después, frente al tribunal estadounidense, el dirigente deportivo admitiría la presencia de “dineros calientes” en el balompié antioqueño y del país en general. Dicha delación ratificaría la silenciosa entrada de la organización de Pablo Escobar en la administración de los dos clubes profesionales de Medellín y en

la presidencia del otro club de Antioquia: el Envigado Fútbol Club que, en 1991, fue el primer equipo nacional que, sin participar en otros torneos promocionales, ganó el campeonato de la segunda división y ascendió a la categoría élite del fútbol en Colombia. No sería extraño que, a raíz de la exportación judicial de Botero Moreno¹⁹, el Cartel de Medellín (nombre con el que los organismos de policía de USA bautizaron a la banda de Escobar) firmara todos sus comunicados con el rótulo de “Los Extraditables”, cuyo tenebroso lema rezaba: “Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos”.

Por todos es sabido que las matas de *Erythroxylon coca* son oriundas de América y que las plantas de marihuana y de la herbácea amapola se dan con prodigalidad en las selvas amazónicas y en altiplanicies andinas²⁰; pero lo que casi nadie

17 En el gobierno del actual presidente de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez, se han extraditado –hasta septiembre de 2007- 670 compatriotas lo cual constituye un record si se compara con las cifras de extraditados en mandatos anteriores.

18 Fabio Castillo. Los jinetes de la cocaína. Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1987, p. 151.

19 Tampoco habría que olvidar que el segundo colombiano en ser enviado a manos de la justicia norteamericana fue Carlos Ledher, también socio de Pablo Escobar, quien tenía pocos vínculos con el fútbol, pero que también influyó para la creación del grupo de “Los Extraditables”.

20 El arbusto de coca crece en terrenos que oscilen entre los 600 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar y el cáñamo de cannabis sativa herbácea (marihuana) florece en casi cualquier ecosistema; mientras que la flor amapola, insumo principal de la heroína, requiere mayor altitud germinando de los 2.000 a los 3.500 m.s.n.m.





conoce es que el procesamiento de esas plantas naturales con precursores químicos (éter etílico, acetonas, ácido clorhídrico, queroseno, etc., etc.) en laboratorios clandestinos no es un invento netamente colombiano al contar con antecedentes en Perú y Bolivia. De la misma manera, pocos se atreven a decir que los pioneros del negocio exportador fueron algunos chilenos que desarrollaron esa incipiente actividad en tiempos del dictador Augusto Pinochet²¹; claro que yéndonos más atrás deberíamos decir que el primer antecedente documentado, en el ámbito orbital, es el de las dos guerras del Opio que, a mediados del siglo XIX, enfrentaron a Inglaterra y Francia con China. Pero más allá de emitir juicios de valor culpando a éste o aquel país y más allá de jugar al historiador señalando la fecha exacta en la que se ‘coronó’ el primer embarque de droga en el primer mundo²², la pretensión de este artículo es relatar con sentido crítico algunos de los momentos de encuentro entre la práctica delincinencial de los narcos y el complejo ámbito del balón pie; intentando aportar pistas y elementos de juicio que ayuden a comprender con mayor justicia y menos prejuicio las posibles motivaciones que originaron el aparente contubernio entre el tráfico de alcaloides y drogas psicotrópicas, con el deporte más popular en Colombia y el mundo: su majestad el fútbol.

América de Cali o la hegemonía valluna²³

La Corporación Deportiva América de Cali es la institución futbolera más antigua de Colombia: fue fundada en 1927, pero sus comienzos son para olvidar ya que de los llamados equipos grandes del país fue el último equipo en alcanzar una estrella en el torneo nacional; no obstante, desde aquel primer trofeo de campeón obtenido el 19 de diciembre de 1979, su racha de títulos no tiene parangón en el balompié criollo: América, la ‘Mechita’ como la llaman sus fervientes seguidores, cosecha la nada despreciable cifra de trece títulos en sus vitrinas, cinco de ellos alcanzados en forma consecutiva (de 1982 a 1986) y fue finalista de tres Copas Libertadores de América en línea (ediciones de 1984,

21 Federico Tatter et al. “DINA y Pinochet se financiaron con crimen organizado”. En: <http://www.voxpublica.org/derechos/archives/002761.html>. Fuentes: Reporte Nizkor, Chile (Agosto, 2006) y Diario La Nación, Santiago de Chile (21 de mayo de 2006).

22 El filme *La Virgen de los sicarios* (2.000) del director Barbet Schroeder, basada en la obra de Fernando Vallejo, muestra cómo los narcotraficantes queman fuegos artificiales y pirotécnicos para celebrar la exitosa llegada de un embarque de drogas a EE.UU.

23 La expresión “valluno” alude a ‘vallecaucano’ que es el gentilicio de los nacidos en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Santiago de Cali.



85 y 86), hazaña solo lograda por el Boca Juniors de Argentina²⁴. ¿La razón de tales éxitos deportivos? Cualquier vallecaucano respondería sin pensarlo dos veces: el abundante dinero invertido por la familia Rodríguez Orejuela en el equipo. De hecho, la plantilla de jugadores del club escarlata era de las más costosas del continente al contar con luminarias deportivas del cono sur entre las que destacaron Juan Manuel Bataglia y Roberto Cabañas (Paraguay), Julio César Falcioni y Ricardo Gareca (Argentina) y la súper estrella de los colombianos Willington Ortiz. El estelar elenco era dirigido por el director técnico más ganador de títulos en Colombia, el médico Gabriel Ochoa Uribe²⁵ que, después de retirado de los bancos técnicos, aceptó abandonar el consultorio y regresar a su profesión deportiva para conducir al equipo caleño, luego de una jugosa oferta económica hecha por el presidente del club, ‘Pepino’ Sangiovanni, en 1979. En fin: el remozado club de principios de los ochenta fue conformado para ganarlo todo y la verdad sea dicha, ese propósito se consiguió; el América de Cali comparte predominancia con el capitalino club de Los Millonarios (que suma 13 títulos) y es una marca registrada en toda Suramérica. Así mismo, es el equipo más destacado por Colombia –en número de puntos- del prestigioso torneo surcontinental y ha sido el único de nuestro país en figurar en el cuarto puesto del ranking mundial de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS)²⁶. Un mito urbano ilustra la bonanza deportiva y económica de “los diablos rojos”²⁷; se

trata de aquel relato –muy popular en estratos bajos de Cali- que cuenta que Diego Armando Maradona alcanzó a vestirse de rojo y entrenar en Cascajal (sede del equipo), hasta que la negociación entre Boca Juniors y América se dañó porque el Barcelona de España puso más dinero por los derechos deportivos de la estrella argentina.

Pero esa historia dorada del equipo escarlata que tantos nuevos hinchas le granjeó, ya es cosa del pasado: actualmente el equipo se encuentra embargado por dos frentes; de un lado está la congelación de sus cuentas bancarias y la proscripción financiera por causa de la Lista Clinton que convierte a la razón social del club en

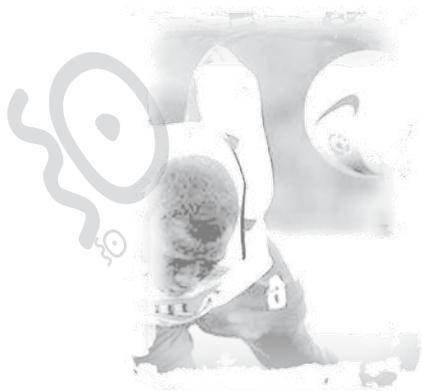
24 “La Maldición del Garabato” es, según sus miles de seguidores y simpatizantes, la culpable de que el equipo escarlata de la capital del Valle del Cauca no haya podido nunca alzarse con el trofeo sur continental de clubes. Dicho conjuro, proferido por un directivo desertor, se aplicaba –inicialmente- para los torneos locales, pero a raíz de la seguidilla de títulos nacionales, la maldición se desplazó hacia las copas internacionales en donde el América, pese a haber disputado cuatro finales de la Libertadores (tres de ellas consecutivas) no ha podido subir al podio de campeón. Claro que, como dato curioso, muchos atribuyen la sequía internacional a razones ético- religiosas: el equipo del clan Rodríguez Orejuela no podrá triunfar hasta que no saque de sus arcas el “dinero maldito” de la droga y hasta que no elimine al diablo como blasón de su divisa.

25 El Doctor Ochoa Uribe acumula, como entrenador, 11 títulos de liga nacional: cinco con el Club Millonarios y seis con el Club América de Cali.

26 En medición hecha y publicada, en agosto de 1985, por parte de la IFFHS.

27 El mote de “Diablos rojos” deriva del escudo del equipo en el que aparece la figura de un Mefistófeles empuñando un tridente satánico.





algo menos que un occiso comercial ya que cualquier depósito en sus cuentas de ahorro en Colombia y el mundo queda automáticamente congelado por el departamento del tesoro estadounidense, por lo que el equipo debe ser manejado con finanzas de barrio: todos los movimientos monetarios deben hacerse en efectivo y a nombre de personas naturales lo que estimula el ilegal ejercicio del testaferrato²⁸. El otro secuestro financiero del equipo del Valle del Cauca es por cuenta de la justicia ordinaria colombiana que ha decidido que se practique extinción de dominio (expropiación policiva y administración estatal provisional) de empresas, compañías, medios de comunicación²⁹, acciones bursátiles y de predios urbanos y rurales del conglomerado familiar presidido por Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, capos del extinto Cartel de Cali, hoy en prisiones norteamericanas en virtud del tratado de extradición. Muchas de esas empresas y posesiones fueron declaradas como objeto de “lavado de activos” en lo que coloquialmente se denomina “lavanderías”, cuya razón de ser –dicho también en jerga popular– “es servir como empresas fachada para blanquear dinero”. Por tal razón, el club de fútbol ya no cuenta con los ingentes ingresos que le proporciona-

ba el consorcio empresarial de los hermanos Rodríguez Orejuela y buena parte de sus patrocinadores (hoy inexistentes ya que ninguna firma se arriesga a aparecer en la camiseta de un equipo paria) están administrados por el Estado colombiano por intermedio de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Una coincidencia que emparenta el *modus operandi* de la banda de narcotraficantes de Cali con la de Medellín es que varios presidentes del club rojo de Cali, al igual que algunos dirigentes de los equipos de Antioquia, resultaron encarcelados por sus evidentes nexos con el mundo de las drogas³⁰: al jerarca escarlata Pedro Chang le fue dictada medida de aseguramiento y fue recluido durante algún tiempo en el calabozo de la Fiscalía por el cargo de enriquecimiento ilícito a favor de terceros; mientras que Juan

28 Modalidad usada con frecuencia por los narcotraficantes que, para alejar las sospechas de la ley sobre sus negocios ilícitos, consiguen que sus bienes y sus transacciones queden en manos y sean realizadas por terceras personas.

29 El Grupo Radial Colombiano (GRC) pertenecía a la familia Rodríguez Orejuela. Desde sus micrófonos algunos periodistas áulicos de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela le hacían buena prensa a sus empresas; el caso más ilustrativo es el de “La Guerrilla deportiva”, grupo de periodismo deportivo que obviaba la procedencia de dineros indebidos en el América de Cali, haciendo énfasis en sus contundentes triunfos futboleros.

30 Vale aclarar que una de las principales empresas manejadas por el Cartel de Cali era “Drogas la Rebaja”; cadena de droguerías ubicadas en medio centenar de municipios de Colombia. La paradoja implícita en esta circunstancia es evidente: un Cartel de drogas ilícitas (y que comercializa alucinógenos) tiene, a su vez, una empresa de fármacos terapéuticos.



José Bellini³¹, presidente del América y de la Federación Colombiana de Fútbol, estuvo tres años tras las rejas por causa del inusitado aumento patrimonial que registró en sus finanzas y por la relación de su nombre en la contabilidad de los Rodríguez Orejuela. Otros presidentes del Club América y de la Fedefútbol que fueron investigados por sus presuntos nexos con “El Ajedrecista” son Oreste Sangiovanni, Carlos Puente³² y Álvaro Fina. Al respecto, Fernando Rodríguez dice en su libro: “Ese poder también se extendía a la Federación Colombiana de Fútbol cuando fue manejada por León Londoño Tamayo, amigo personal de los hermanos Rodríguez; Juan José Bellini, quien fue la mano derecha de Miguel Rodríguez; y Álvaro Fina, quien fue incondicional con los capos. Miguel llegó a tener cupos fijos en las selecciones Colombia, esto es que tenía derecho a sugerir jugadores, técnicos y médico”³³.

Claro que la mafia narcotraficante del occidente colombiano no solo ha metido sus narices en el mundillo futbolero ya que tenemos noticia de sus incursiones en la orbita política; de hecho la principal crisis institucional de las últimas cinco décadas en Colombia surgió de la entraña del Cartel de Cali: “el Proceso 8.000”³⁴, en el que se develó que la elección del presidente Ernesto Samper Pizano para el periodo comprendido entre 1994 y 1998 fue parcialmente auspiciada con dineros calientes de la mafia del tráfico de estupefacientes. A la postre el mandatario liberal fue exonerado por su juez natural: el Congreso de la República en un largo proceso que dejó serias dudas de legitimidad,

pero que originó que medio centenar de políticos, periodistas³⁵ y empresarios (principalmente vallecaucanos) fuera a parar a la cárcel en medio de una tempestad política que produjo ríos de tinta y estremeció la institucionalidad nacional: el presidente Samper se sustrajo de gobernar para dedicarse a su defensa; Estados Unidos le retiró la visa y no certificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico³⁶, las cifras in-

31 El profesor Pedro Chang logró explicar sus negocios y salió de prisión el 28 de febrero del 2000; en tanto que Juan José Bellini estuvo apesado entre noviembre de 1995 y octubre de 1998. En esa fecha salió con libertad condicional.

32 Que hoy aparece como presidente vitalicio del equipo escarlata ya que nadie se expone a administrar al Club América, so pena de ser incluido en la Lista Clinton a la que Carlos Puente pertenece desde hace una década.

33 Fernando Rodríguez y Antonio Sánchez. El hijo del ajedrecista. Bogotá: Editorial Oveja Negra y Quintero Editores, 2007, p. 86.

34 Publicitado proceso judicial apenas superado por el actual escándalo que los medios de comunicación nacionales han llamado de la ‘Parapolítica’ (contubernio de paramilitares con funcionarios públicos y políticos en general e infiltración paramilitar en el gobierno y la función pública).

35 El periodista Alberto Giraldo fue la figura más conocida de los medios de comunicación que fue a prisión por culpa del “Proceso 8.000” y los periodistas deportivos Esteban Jaramillo, Rafael Araujo y Mario Alfonso Escobar “Mao” purgaron sentencia judicial por cuenta de cheques girados a su nombre por el Cartel de Cali.

36 Inequitativa fórmula estadounidense consistente en obviar la lucha contra el consumo interno para dedicarse a aprobar o reprobar (según estadísticas) las políticas nacionales de sus países aliados en materia de erradicación de cultivos ilícitos y persecución de las estructuras de procesamiento, distribución y comercialización de la droga. El premio al esfuerzo de cada país se ve recompensado con regulares desembolsos económicos y con la asistencia técnico-militar y el castigo es la supresión de esos aparentes beneficios.



flacionarias y de desempleo aumentaron; el país decreció en su macroeconomía (aumentó considerablemente el precio del dólar y disminuyó el PIB y el porcentaje de exportaciones, entre otros indicadores)³⁷ y se sucedieron una serie de asesinatos de figuras políticas de primer nivel³⁸ que hicieron salir a flote la casi comprobada conspiración para derrocar al sospechado presidente de turno. De igual manera, no podemos olvidar la cruenta guerra librada entre sí por los carteles colombianos en procura de hacerse a las rutas y los mercados internacionales de la droga. El nefasto saldo de esa descarnada batalla campal fueron los atentados selectivos que plagaron de sicarios y mercenarios las calles de las ciudades de Medellín y Cali y las cobardes bombas detonadas en una y otra ciudad contra empresas de ambas organizaciones delincuenciales en las que perecieron cientos de inermes e inocentes compatriotas.

Volviendo al campo de juego, podríamos decir que el mejor colofón para significar lo que fue el Cartel de Cali nos lo proporciona la dedicatoria de triunfo que el delantero Anthony “el Pipa” de Ávila hizo en vivo y en directo por la televisión nacional a su “Patrón” recluido en la penitenciaría La Picota de la capital de la República. El afectuoso saludo fue difundido al país en franja *prime time* y ocurrió en un día de fiesta patria: el 20 de julio, que es la fecha en la que se rememora el grito de Independencia en Colombia. En dicho saludo se veía que el jadeante futbolista, que acababa de marcar el tanto que clasificó a la Selección Nacional al Mundial de Francia

98, ofrecía su importante gol al “Ajedrecista” Gilberto Rodríguez Orejuela –capo del cartel caleño- recién capturado por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional³⁹. Por esa razón, el gobierno estadounidense le cancelaría la visa al “Pitufo” de Ávila que no pudo volver a enfundarse la camiseta del Metro Stars de Nueva York en el que militaría hasta ese mes de julio de 1997. No obstante, el puntero que se preocupó por pegar -en todos los partidos que jugó con el América- una cinta blanca que tapaba el diablo del escudo americano, sería recomendado –después del episodio de la dedicatoria- por los “señores de la droga” a sus ‘amigos’ del Ecuador para que fuera recibido con todos los honores en el fútbol bananero⁴⁰ en donde tuvo gran suceso deportivo. Otros compañeros de generación y de equipo de Anthony de Ávila no corrieron la misma suerte: el lateral Wilson Pérez fue arrestado, el 16 de octubre de 1995, en el aeropuerto Ernesto Cortizos de

37 Percepción del autor que se basa en la avalancha de columnas de opinión e informes económicos de prensa que confirmaban esa dramática situación político- financiera del país en épocas del “Proceso 8.000”.

38 Elizabeth Montoya de Sarria (conocida por la prensa como “la monita Retrechera”) fue la primera víctima. Se presume que su violenta muerte se debió a una comprometedor fotografía que relacionaba al presidente Samper con personajes de oscuro pasado. Luego, comandos sicariales acabaron con la vida del general Fernando Landazábal Reyes y del político conservador Álvaro Gómez Hurtado.

39 Grupo élite de la Policía Nacional conformado con el objeto de atrapar a los capos de los narcóticos.

40 La asociación del país ecuatoriano con su principal renglón de la economía es apenas lógica



Barranquilla al intentar sacar 171 gramos de cocaína en su equipaje, Wellington Ortiz⁴¹ fue incluido en la lista Clinton y por ello frustró su deseo de ser director técnico ya que por esa situación nadie lo contrata y Albeiro “El Palomo” Usurriaga fue asesinado en el 2004 –en un presunto ajuste de cuentas del paramilitarismo- en su barrio natal de Cali cuando jugaba dominó, un popular juego de mesa de los litorales colombianos.

Atlético Nacional y el predominio *paisa*

A su vez, la ciudad de la “eterna primavera” a la que Boogie “el aceitoso” no quiso venir por físico temor⁴², alberga al primer equipo en ganar un partido en el torneo de fútbol colombiano⁴³ y al primero del país en alzarse con la codiciada Copa Libertadores de América; nos referimos al Atlético Municipal, hoy rebautizado como Club Atlético Nacional. El Nacional tiene cosidas diez estrellas en su escudo y ha ganado, aparte de la Libertadores, cuatro campeonatos internacionales por lo que sus hinchas lo denominan “el rey de copas”. Sin embargo, algunas de sus victorias han estado empañadas por la sospecha nunca comprobada de influencia narcotraficante en los resultados finales. Una anécdota que resulta reveladora de tal aseveración es la que relata cómo el “verde de la montaña” tuvo que repetir, en la Copa Libertadores de 1989 (año en que fue campeón), un partido ante la acusación de soborno mafioso a árbitros internacionales⁴⁴ y cómo la plaza antioqueña

(en especial, el estadio Atanasio Girardot) fue vetada por jueces, equipos rivales y veedores internacionales ante las presuntas amenazas de muerte emitidas por Pablo Escobar y sus lugartenientes a todo aquel que se atravesara en el camino al triunfo de “los puros criollos”⁴⁵. Al final el club dirigido por Francisco Maturana tuvo que conformarse con jugar ‘exiliado’ en el estadio El Campín de Bogotá en donde René Higuita fue la gran figura al atajar cuatro penaltis que facilitaron que él y sus

41 El “Viejo Willy” se disputa con Carlos “El Pibe” Valderrama el honor de ser el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol colombiano.

42 Ver la simpática tira cómica del caricaturista argentino Roberto Fontanarrosa en la que el célebre mercenario declina “un trabajo” luego de que le dicen dónde debe realizarlo: la ciudad de Medellín, Colombia.

43 Esto sucedió el 15 de agosto de 1948, año en que se inauguró el torneo local, cuando Rafael Serna anotó el primer tanto del Municipal ante el equipo de la Universidad Nacional.

44 El silbato argentino Carlos Espósito le contó al periódico Cronista Comercial (13/04/1990) de Argentina que fue amenazado de muerte en Medellín cuando dirigió un partido de la Copa Libertadores de 1989; año en el que Atlético Nacional fue campeón. Así mismo, el pito uruguayo Juan Daniel Cardelino denunció que, el 29 de agosto de 1990, intentaron sobornarlo para que influyera en el resultado del partido que disputaron Nacional y Vasco da Gama. El partido, ganado por Nacional, debió repetirse y todos los estadios de Colombia estuvieron suspendidos, para eventos internacionales, por tres meses.

45 El mote de verde de la montaña salta a la vista al ver el uniforme del Atlético Nacional y relacionarlo con “la tacita de plata” que es la metáfora geográfica que mejor describe a Medellín, ciudad enclavada en medio de montañas. Así mismo, el apelativo de “puros criollos” se dio en las décadas del 80 y el 90 cuando se puso de moda el slogan “Hecho en Medellín” que fue replicado por el club antioqueño que se negó a contratar extranjeros.





compañeros accedieran a la esquivada gloria suramericana de levantar el trofeo de clubes más importante de América.

Pero la “prueba reina” que enlaza al clan de *Medallo*⁴⁶ con el mundo de los guayos es el libro escrito desde la cárcel por Roberto “El Oso” Escobar, hermano mayor de “El Patrón” y confeso narcotraficante que además es investigado por el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984. El mayor de los Escobar pagó un tiraje de 5.000 ejemplares en los que revela datos íntimos de su vida, de sus parientes y de sus amigos, socios y allegados involucrados en tráfico de estupefacientes. La trama literaria de *Mi hermano Pablo* transcurre en la Cárcel ‘La Catedral’, penitenciaría construida bajo los requerimientos geográficos, estratégicos y arquitectónicos ordenados por “el padrino de los pobres” para así torcerle el cuello al cisne jurídico. Maniobra que le permitiría acogerse de manera espuria a la ley colombiana sin exponerse a una captura de los marines norteamericanos que siempre lo tuvieron en la mira; cuestión llena de ilegalidad y de paranoia y que a la postre provocó que el hombre más buscado del planeta se evadiera -en junio de 1992- con su guardia personal de dicho centro de reclusión

apenas sintió que el gobierno de César Gaviria “podía traicionarlo” entregándolo a agentes de la justicia estadounidense. En esa versión de los hechos de Roberto Escobar, se cuenta como el Cartel de Medellín organizaba frecuentes partidos del fútbol contra jugadores profesionales de las plantillas de los tres equipos de Antioquia: el “Poderoso” Deportivo Independiente Medellín, el Atlético Nacional y el Envigado Fútbol Club. “Los partidos eran interminables y duraban hasta que Pablo quisiera y ello ocurría cada vez que el equipo del Cartel anotaba el gol del empate o de la victoria (...) Escobar era buen jugador, le pegaba durísimo al balón. El siempre se hacía adelante y se enfundaba la camiseta número 9”. Según “El Osito”, después de esos convites “se repartía dinero entre futbolistas y técnicos y se hacían recomendaciones deportivas para que los tres equipos de Antioquia siempre estuvieran en la punta del campeonato”⁴⁷.

Las infidencias relatadas en 168 páginas por Roberto Escobar (ciclista retirado y ex-entrenador del team nacional) se corresponden con los escándalos de prensa suscitados por las frecuentes visitas de celebridades del balón como René Higuita y Leonel Álvarez a la ficticia prisión de Es-

46 Apócope de Medellín que tiene una variante perversa: “Metrallo”, que remite a la aguda violencia vivida en la ciudad durante el imperio de “Los Extraditables”.

47 Roberto Escobar. *Mi Hermano Pablo*. Ciudad no mencionada: Quintero Editores, p. 196 y 198.



cobar, desde la cual seguía orquestando sus fechorías. Imágenes del célebre portero y de otros compañeros suyos a bordo del jeep que los conducía desde el anillo externo, controlado por el Ejército, hasta la puerta de los guardianes al servicio de Pablo Escobar, fueron repetidas hasta la saciedad por los medios colombianos y replicadas en el mundo entero. Así se sellaba el contubernio entre los “Jinetes de la cocaína” y “los dueños del balón”⁴⁸; matrimonio mal avenido que inició cuando el jefe del cartel de Medellín construyó y techó varias canchas de fútbol del Valle del Aburrá (zona metropolitana de Medellín), cuando auspició con fraudulenta generosidad a muchos equipos de fútbol locales y cuando patrocinó la presencia de un equipo nacional de ciclismo⁴⁹ —el otro deporte nacional— en la principal prueba por etapas del mundo: el Tour de France⁵⁰.

Sin embargo, el clímax de la influencia del negocio de narcóticos en el deporte colombiano se palpó en 1988 cuando el juez Armando Pérez fue secuestrado y apareció, al cabo de 20 horas, con un mensaje de sus captores que advertían que “si los árbitros mantenían una conducta parcializada, algunos de ellos podrían ser ‘borrados’...”⁵¹. Ante esa cruda amenaza el gobierno nacional, a través de su Ministro de Educación, Manuel Francisco Becerra Barney⁵², empezó a presionar a la Dimayor y sus abonados, los clubes, para que cumplieran con lo establecido por la ley en cuanto a la rendición y depuración de cuentas financieras y en torno a la exigencia de garantías mínimas (laborales, de patrocinio, de logística de los

Según “El Osito”, después de esos convites “se repartía dinero entre futbolistas y técnicos y se hacían recomendaciones deportivas para que los tres equipos de Antioquia siempre estuvieran en la punta del campeonato”

partidos, etc., etc.) para el buen desarrollo del espectáculo. Se optó por aceptarle la renuncia al presidente del ente de clubes colombianos (León Londoño Tamayo) y se eligió a un dirigente destacado por su pulcritud empresarial (Álex Gorayeb) a quien le tocó la desdicha de suspender el torneo nacional a raíz del asesinato del árbitro Álvaro Ortega en Medellín luego de un derby entre el equipo de los amores del Cartel de Cali, el América, versus el preferido por la organización de Escobar, el Atlético Nacional. El partido terminó en tablas por lo que, según el Diario El Co-

48 José Cipriano Ramos Valencia. *Colombia versus Colombia: 50 años de fútbol profesional y violencia política*. Bogotá: Intermedio Editores, 1998, p. 140.

49 En los cócteles bogotanos todavía se escucha la anécdota que relata cómo nuestros pedalistas cargaban gramos de cocaína en los tubulares y los marcos de las bicicletas que llevaban como instrumentos deportivos a las carreras europeas.

50 Fabio Castillo, op. cit., p. 162.

51 Jorge y Juan Guillermo Ruiz. *Historia del fútbol profesional colombiano*. Bogotá: Edición exclusiva de El Espectador, 1999, p. 96.

52 Quien debió declararse impedido ya que tiempo después resultaría detenido en el marco del Proceso 8.000.



lombiano (16/11/1989), “fue desempata-
do a tiros”. Ese año, en el que el América
de Cali punteaba, el título fue declarado
desierto. El otro hecho, en el que vuelven
a aparecer drogas y fútbol, que sacudió a
la opinión pública mundial ocurrió el 2 de
julio de 1994: la muerte violenta del an-
tioqueño Andrés Escobar, defensa central
de la selección Colombia, que –cuando
aun no había terminado el mundial *grin-*
*go*⁵³ de ese año- fue ultimado a balazos a
la salida de una discoteca medellinense,
por la ráfaga criminal de Humberto Muñoz
Castro, un dolido escolta vinculado con
apostadores y narcotraficantes, que le co-
bró al carismático futbolista el autogol que
cometió en la Copa Mundo de Usa 94.

Otros futbolistas que repitieron el sino
trágico del “gentleman” Andrés Escobar
fueron Omar “El Torito” Cañas quien en fe-
brero de 1993 fue asesinado por pistoleros
del narcotráfico (Briceño, 98: 40) y Felipe
‘Pipe’ Pérez, un ex futbolista profesional
que formó parte de la deslumbrante Se-
lección juvenil colombiana que participó
en el Suramericano de Asunción del Pa-
raguay en 1985. El volante de armado fue
abatido en septiembre de 1996, después
de salir de prisión y soportar acusaciones
que le señalaban como perteneciente a
la banda mafiosa de Escobar (Ramos,
Op. cit., p. 148). De igual manera, desde
1980, cerca de diez dirigentes de los tres
clubes profesionales de la región paisa
terminaron sus existencias por culpa de
sus vínculos con el tráfico de sustancias
alucinógenas, siendo el caso más dramá-
tico el del Envigado Fútbol Club que pasó
de ser algo así como “la caja menor de



Escobar” a la temible “Oficina de cobros
de Envigado” que está al servicio, hoy día,
de paramilitares como alias “Macaco”
(Carlos Mario Jiménez). Algunos directi-
vos del fútbol antioqueño que llenaron los
obituarios funerarios fueron: Pablo Correa
Ramos, directivo del DIM; Octavio Piedra-
híta, ex propietario de Nacional y el Depor-
tivo Pereira; Carlos Arturo Mejía Gómez,
del Comité Organizador del Suramericano
Juvenil en Pereira (+ en 1986); Arquíme-
des Victoria, secretario de la Liga Metro-
politana de Fútbol (1988); Germán Mejía
Arango, dirigente de Manizales (1990);
Gustavo Upegui y Octavio Velásquez, pre-
sidente y ex gerente, respectivamente, del
Envigado Fútbol Club (2006). Para colmo
de males digamos que en medio de esa
tanda de muertes criminales el estelar ar-
quero René Higuita fue a parar a la cárcel,
en 1993, por mediar en la negociación de
un secuestro con narcotraficantes y el me-
diocampista de El Nacional y la Selección,
Diego Osorio, experimentó una situación
similar al ser detenido, en 2003, al intentar
ingresar unos gramos de coca en EE.UU.

53 Gringo es equivalente, en Colombia, a estadounidense.



Cerramos este acápite diciendo que tal como aconteció con el clan de Cali, Pablo Escobar y sus muchachos influyeron dramáticamente en la política nacional: en 1982 el mismo capo resultó elegido a nombre del tradicional Partido Liberal Colombiano, en la suplencia de un escaño de la Cámara de Representantes y años más tarde, ya en la delincuencia explícita, se ofreció a pagar la deuda externa si el gobierno nacional le juraba no extraditarlo a los Estados Unidos. De igual manera, además del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984, Escobar segó la vida de importantes personajes de la vida nacional como la del director del periódico *El Espectador*, Guillermo Cano (asesinado en diciembre de 1986), quien en valientes editoriales venía denunciando los delitos de “El Patrón” y había señalado la perniciosa infiltración de la mafia en varios sectores de la sociedad colombiana, incluido el ámbito futbolístico. Tres años después del magnicidio periodístico, la sede del rotativo bogotano fue dinamitada. Fue por esa época que el jefe del Cartel de Medellín inauguró un régimen del terror sustentado en los bombazos y en los asesinatos selectivos perpetrados por su ejército de sicarios. La policía Nacional debe recordar con pavor ese tiempo ya que el gángster de las drogas ofrecía “cinco millones por cada policía muerto y dos por cada herido”. Era tanta la ambición de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que no pudo resistirse a la codicia del poder político y terminó asociándose —en 1989— con un candidato a la presidencia de la República que resultaba prometedor: Al-

berto Santofimio Botero; sin embargo, la calculadora mente del capo de las drogas de Medellín sabía que aun debía eliminar un duro escollo, el que representaba el candidato presidencial del liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien cayó bajo las balas asesinas de los matones de Escobar el 18 de agosto de 1989⁵⁴.

Millonarios y Santa Fe: el centro se hace periferia

Colombia suele definirse como un país de regiones y en cierta medida acéfalo⁵⁵; es decir, sin centro ni capital. No obstante desde la Independencia el centralismo ha predominado —con escasas interrupciones— con sus aciertos, sus vicios y limitaciones y por ese sistema de gobierno, entre otras cosas, puede afirmarse que se perdió la provincia de Panamá⁵⁶. Dicha falta de cabeza es la que hizo afirmar a Daniel Pécaut que en nuestro país existía “modernismo sin modernidad”⁵⁷, fórmula que se patentiza en las contradictorias

54 Virginia Vallejo. *Amando a Pablo, Odiando a Escobar*. Bogotá: Grijalbo, 2007, p. 45.

55 Francisco Leal. *La inseguridad de la seguridad, Colombia 1958-2005*, Bogotá: Planeta, 2006, p. 15.

56 La principal consecuencia del conflicto civil colombiano que enfrentó, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, a liberales contra conservadores, mejor conocido como “La guerra de los mil días” fue la separación de la provincia de Panamá en noviembre de 1903.

57 Daniel Pécaut. *Colombia: violencia y democracia*, reproducido en *Guerra contra la Sociedad*. Bogotá: Planeta, 2001, p. 89.





maneras de llamar a nuestra ciudad capital que unas veces es ensalzada como “una de las más inseguras del mundo”, pero también es vista como la del “español mejor hablado”; que en oportunidades aparece rotulada como la de “mayores índices de indigencia”, pero es reconocida como “la Atenas Suramericana” siendo no hace mucho distinguida como “la Capital Iberoamericana de la Cultura” y como la merecedora del Premio León de Oro de la Bienal de Venecia 2007 y designada como “Capital mundial del libro”, entre otros premios y reconocimientos... pues bien, por estos días Bogotá DC., es llamada “la Casa de la Selección Colombia” (dignidad que se disputó con Barranquilla) y es la morada de siempre de los dos equipos más tradicionales del país: Independiente Santa Fe y el Club Los Millonarios que, como un recuerdo indeleble de una nación que a lo largo del siglo XX se desangró por la lucha bipartidista, mantienen presente en el recuerdo colectivo de los cachacos⁵⁸, los colores rojo y azul y la antigua pugnacidad de los partidos liberal y conservador, respectivamente.

Decir que estos clubes han tenido una historia fulgurante es verdad de Perogrullo; los dos fueron los primeros campeones de la liga nacional y actuaron como protagonistas principales de El Dorado y los dos equipos tuvieron en sus filas a rutilantes figuras del balón venidas de todas las latitudes del mundo; no obstante su actualidad es triste y dista mucho de los lustrosos años de gloria de las décadas del 50, 60 y 70: Millos no alza la copa nacional desde 1988 y Santafecito lindo desde 1975⁵⁹. Un indicativo de la precaria situación futbolística de los dos clubes en el último tiempo es que ahora se les ve pasando apuros para clasificar a semifinales cuando antes llegar a esa instancia era cosa natural; hoy Millonarios y Santa Fe no cuentan con las costosas nóminas de jugadores que caracterizaron la época de los carteles de la droga: ya no inspiran el respeto de antaño y el estadio El Campín no es visto como el lugar inexpugnable de los cincuenta ... Empero, no debe hacerse una lectura a priori de estos datos porque se puede llegar a conclusiones equivocadas como la que dice que los ‘embajadores’ y los ‘cardenales’ no gozaron de los atajos e inescrupulosas bondades deportivas ofrecidos por la mafia y por ello no cosecharon más títulos.

58 Cachaco es sinónimo de andino, de “gente del interior”, de habitante no costero; de persona lejana al mar.

59 Millos es el diminutivo de Millonarios y “los embajadores” y “los albiazules” son sus mote de antaño. A su vez, Santafecito lindo y los ‘Cardenales’ son los nombres populares del oncenio albirrojo.



Nada más alejado de la realidad: ambos clubes bogotanos fueron objeto de inversiones narcotraficantes así sus resultados no hayan resultado tan halagüeños como los vividos por los conjuntos de Antioquia y el Valle del Cauca. En otras palabras: si hubo dineros malditos en sus arcas, sólo que no contaban con el respaldo de un Cartel (tal como aconteció con América de Cali y Nacional de Medellín) sino con la presencia peregrina de algunos narcotraficantes entusiastas que introdujeron parte de sus ilícitas ganancias en el negocio del fútbol.

La historia negra de Millonarios comienza con Edmer Tamayo, ya muerto, de quien se afirma era propietario de un cargamento de 2000 kilos de cocaína, capturado en septiembre de 1982. A Tamayo también se le vincula como propietario de un cargamento de 65 kilogramos de cocaína incautado en Barranquilla. Los intereses de Tamayo fueron representados por los abogados Germán y Guillermo Gómez, vinculados por la justicia colombiana con el capo del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. Más adelante, en una rápida y oscura transacción, un socio de Escobar llamado Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mejicano”, se convirtió en el nuevo mayor accionista del elenco albiazul. Pesquisas posteriores de las autoridades judiciales y de policía revelaron que, entre 1987 y 1988, Rodríguez Gacha apoyó con el corazón y la chequera al equipo, que vivió un nuevo juego dorado⁶⁰. De esos dos años son las sospechadas coronas albiazules que en su tiempo fueron denunciadas a los cua-



tro vientos por el actual director técnico de la Selección Colombia, Jorge Luis Pinto, quien señaló públicamente a Luis Augusto García (ex entrenador de la selección absoluta) “como sobornador de jugadores y árbitros para obtener buenos resultados con Millonarios”⁶¹.

Según el investigador José Cipriano Ramos⁶², “El Mejicano” premiaba con un millón de pesos a todo el que anotara un gol en los partidos del torneo profesional, por lo que los jugadores de Millonarios se esforzaban al máximo para romper las redes adversarias. Después de los grandes triunfos, invitaba al equipo a su finca de Pacho (Cundinamarca), cerca de la capital, para premiar a los goleadores y celebrar con whisky y carnes de cerdos sacrificados a balazos. Los futbolistas agradecidos no decían “muchas gracias” sino “muchas *gachas*”⁶³. Vale decir que “El Mejicano” fue abatido en una espectacular operación de

60 Ramos, op. cit., p. 143.

61 Hernán Pelaez Restrepo. El milagro del fútbol colombiano. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1994, p. 176.

62 Ramos, op. cit., p. 144.

63 Juego de palabras en el que la expresión “gracias” es sustituida por la del apellido del narcotraficante Gacha.



la policía en diciembre de 1989, pero su familia –a través de su esposa– siguió al frente del equipo hasta que fue objeto de extinción de dominio por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes que hoy administra el 29,7% de las acciones de Millonarios incluida su cotizada sede deportiva ubicada al norte de Bogotá y que está avaluada en 2500 millones de pesos. Ante esa situación y recurriendo a la ironía, no sería incorrecto afirmar que en el mundo del fútbol criollo, el equipo capitalino es, después de la Selección Nacional, patrimonio del Estado colombiano.

Pero si por el lado de las toldas azules llueve, por las rojas no escampa: el Independiente Santa Fe, el equipo de los *rolos*⁶⁴ auténticos⁶⁵, también tiene su oscuro pasado; el equipo fue controlado primero por el llamado Grupo Inverca, de Fernando Carrillo, quien fue señalado como propietario de una cadena de droguerías en Colombia, a través de la cual distribuía insumos para el refinamiento de coca. En noviembre de 1978 informes policiales afirmaban que Carrillo tenía a Miami como centro de distribución del alcaloide que producía y por ello no causó extrañeza que en mayo de 1981 se le hicieron cargos por haber participado en envíos de cocaína a La Florida. Después de esas graves acusaciones Carrillo desapareció del club sin dejar rastros⁶⁶. Luego el equipo santafereño pasó a manos de Silvio y Fanor Arizabaleta Arzayus, narcotraficantes vallecaucanos que legaron su dominio del club albirrojo al colega de negocio Justo Pastor Perafán, hoy condenado en Estados Unidos, que antes de ser atrapado

por la DEA entregó la dirección ejecutiva del equipo a César Villegas quien pagaría los platos rotos de su testaferrato, con un publicitado carcelazo en el que la justicia colombiana aplicó “una pena ejemplar en vista del nivel de estudios del doctor Villegas y de su condición de dirigente deportivo”⁶⁷. Así Villegas se adelantaría unos años al también presidente santafereño, Luis Eduardo Méndez, relacionado al principio de este artículo como un convicto de la ley norteamericana.

La addenda de los dos clubes bogotanos es tan triste como la historia del último tiempo: hoy Millos y Santa Fe están intervenidos por el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes) por razón de sus debilidades institucionales detectadas por la Superintendencia de Sociedades⁶⁸; igualmente, las dos escuadras futboleras están cerca de la ruina económica por lo que tuvieron que acogerse a la Ley 550 o “Ley de quiebras” y si no marchan deportivamente es por razones atribuibles, entre

64 Rolo es el gentilicio popular de bogotano.

65 Periodistas bogotanos de vieja guardia como Daniel Samper Pizano, Yamid Amat, Guillermo ‘La Chiva’ Cortés y Julio Sánchez Cristo; además del vicepresidente Francisco Santos y buena parte de los rolos de más de cincuenta años son hinchas del sufrido Santa Fe.

66 Castillo, op. cit., p. 98.

67 Gabriel Briceño. “La increíble historia de los dirigentes y sus chequeras desalmadas, II Parte” Deporte Gráfico No. 1082 (Diciembre), 1998, p. 39.

68 Organismo encargado de vigilar y regular el sector en donde se encuentran los clubes y las corporaciones deportivas en Colombia que señaló, desde mediados de los 80’s, la presencia de dineros calientes en los equipos de fútbol.

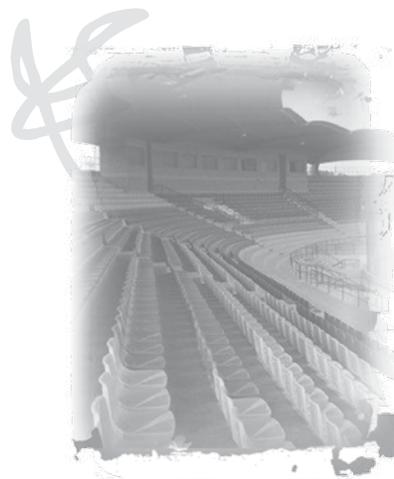


otras causas, al desgüeño administrativo fomentado por la prioridad de lavar activos y satisfacer ambiciones personales antes que incurrir en eficiencia gerencial y en eficacia competitiva.

Concluimos el relato de los negociados narcotraficantes en plena área de 16 con 50, diciendo que otros equipos de provincia como el Deportes Tolima, el Deportivo Pereira, el Unión Magdalena, el Atlético Bucaramanga, el Deportes Quindío, entre otros clubes de la primera, la segunda e incluso la tercera división, han enlodado su historia y sus títulos con las turbias relaciones con “hombres del maletín” que han aportado a sus arcas dinero perverso a cambio de prestigio social o coartadas financieras para sus fraudes, trampas e ilícitos.

Pitazo final, pero el partido aun no acaba

No parece haber dudas de que el narcotráfico posó sus nefastas garras en la nación colombiana dejando muy pocos claros para escabullirse de su hediondez; tampoco nadie hoy día es tan ingenuo de pensar que nuestro fútbol permaneció incólume frente a las tulas atestadas de dólares que se pasearon por los campos de entrenamiento, los camerinos, los salones de reunión de directivos y las mismísimas salas de redacción de los medios de comunicación. La droga y su estela maldita se enseñorearon de nuestro país y lograron algo que parecía imposible: subordinaron a la orgullosa clase política que –hasta entonces- sustentaba su poder en



la falacia de la opulencia y pusieron de rodillas al establecimiento; cuestión que no habría inquietado a nuestros vecinos (especialmente al del norte del río Bravo) de no ser porque centenas de contenedores (de la más diversa forma) desembarcan en sus predios, inundando de hedonismo a la insaciable juventud que troca billetes de a dólar por miligramos de placer sintético. Claro, el problema es que ese negocio –en la perspectiva de EE.UU.- no paga impuestos y que sus generosas ganancias no se quedan en suelo estadounidense ¡He ahí un problema de elemental comprensión económica!

Pero más allá de seguir esgrimiendo argumentos en contra del narcotráfico (que no se acabará mientras haya la descomunal demanda); más allá de exigir la inmediata despenalización de la libre circulación de las drogas (lo que derrumbaría el imperio de las mafias alrededor suyo) y trascendiendo la queja lastimera que tanto nos ha caracterizado (los últimos cinco presidentes colombianos solo supieron pedir, con ojos aguados, helicópteros y dólares para mitigar el peso de nuestros muertos por violencia narcotraficante), conviene que todos reflexionemos sobre



lo que ha significado el fenómeno narco en Colombia y cómo transformó nuestra sociedad (e incluso nuestra cultura). Pues bien, ese ejercicio analítico es tarea ardua y de largo aliento, por lo que resumo el deber citando una metáfora que lo denota: “la cultura del atajo”, detectada por el sociólogo Álvaro Camacho Guizado, que se valió de la mirada profunda del etnógrafo para descubrirla y acudió a la creatividad del ladino para acuñarla bajo esa expresión verbal.

La cultura “del camino más fácil” se sintetiza de forma óptima en el argot popular que la llama “el traquetismo” o “la cultura del traqueto” ¿Quién es el traqueto? La verdad no es difícil describirlo cuando se ha vivido en Colombia y, más aun, cuando se han conocido ampulosos ambientes como el del fútbol profesional colombiano. Un traqueto es un jugador que recibe un soborno para perder o un profesor que acepta un ingreso extra para promover un estudiante que no lo merece o una mujer ‘prepagó’⁶⁹ que vende su cuerpo para comprarse un mejor modelo de teléfono celular. Pero traqueto es también quien ofrece el estímulo; traqueto es el que supedita su felicidad al valor del dinero y lo que se puede conseguir con él. Traqueto es el que aprecia su poder en ceros a la derecha; traqueto es el que vive en el reino de la suposición, la engañifa, la falacia y la apariencia. Traqueto es el que vive “drogado” de la realidad: traqueto es el narcotraficante directo y el que disfruta su entorno.

¿Será la sociedad colombiana, una sociedad traqueta? Si y No. Si, cuando

se observa que los grupos alzados en armas (de extrema derecha como los paramilitares e izquierda como las guerrillas marxistas y guevaristas) subsidian buena parte de sus acciones con los generosos réditos de la droga y la extorsión: están obrando con la ley del menor esfuerzo expresado en la explotación del placer y el dolor ajeno. De contera, pese a lo atroz del conflicto, del presidente para abajo todos niegan la guerra civil y luego aparecen en encuestas mundiales como el segundo país más feliz del mundo⁷⁰ ¿No es eso simulación? ¿No es eso un remedo del escapismo artificioso del esnobista? ¿O será que eso es simple olvido? Entonces ¿Será el olvido una estrategia terapéutica ante tanto dolor?... Probablemente, pero volvamos a lo nuestro: No se es traqueto cuando se asume la mano como llega; cuando se acepta que nuestra patria tiene cerca de dos millones de desplazados y cerca de cuarenta mil refugiados. No se es traqueto cuando se reconoce que políticos y paramilitares edificaron su imperio con el terror ciudadano; No se es traqueto cuando se admite que la dirigencia nacional de los últimos treinta años se ha alimentado con las ilegítimas ganancias del narcotráfico.

69 Expresión coloquial para designar a las mujeres que intercambian sexo por bienes en especie; sean estos elementos tecnológicos, ropa de finas marcas o una vida de elegancia y glamour.

70 Alusión a una encuesta, de reciente aparición en la prensa, en la que Colombia, pese a todos los pronósticos, aparece en el segundo lugar del escalafón mundial de felicidad, apenas derrotada por una pequeña isla del Pacífico oriental.



Aceptar la cruda realidad, sin eufemismos ni disimulos (y sin amnesia provocada)⁷¹ es la mejor forma de negar el traquetismo. Claro que todavía restará la fase más importante; la de la acción de cambio, de mejora, de transformación, de movilización... ¿Y el fútbol? Ah... ¡el fútbol! El fútbol siempre ha sido una ilusión, una ensoñación, un sub- mundo. El fútbol, sobre todo el de Colombia (pero no se descarta que pase en todas partes), contiene rasgos *sui generis* que lo hacen único en su capacidad para mitificar, por lo que sus efectos, “narcóticos” si se prefiere, afectan a la sociedad tanto como pueda resistirlo, que es lo mismo que afirmar que afecta a la sociedad tanto como dure el comienzo del siguiente partido o como tarde el arranque del siguiente campeonato: el fútbol es el reino de la esperanza posible (siempre se puede ganarle al mejor equipo; así sea “un día de estos”) por lo que hacerle un juicio al fútbol es tan inoficioso como castrar un alacrán.

Claro que si se persiste en la idea de hacerle un juicio político al fútbol, amparado en la máxima esgrimida por los sindicatos europeos de la década del setenta y reproducida por los intelectuales de izquierda de América Latina, que –parafraseando a Marx– reza “el fútbol es el opio del pueblo”⁷²; tendríamos que mencionar tres episodios de poderoso simbolismo en la historia colombiana: el primero es la abrupta creación del torneo profesional de fútbol colombiano que fue estrenado a las volandas en 1948, dos meses después del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán cuya muerte recrudeció la

lucha bipartidista en Colombia conocida como “La Violencia”⁷³. El segundo y tercer hecho van de la mano: son las órdenes perentorias de los gobiernos de turno y de los directivos de medios de comunicación para transmitir en los canales de televisión pública partidos de fútbol y la sospechosa difusión noticiosa de los mismos en la radio y la prensa, que disimularon y ocultaron dos tragedias nacionales: la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 (en 1985) y la muerte de Luis Carlos Galán (en agosto de 1989)⁷⁴; ello como evidente estrategia para exorcizar la protesta popular ante sendos magnicidios.

71 Resulta muy ilustrativo que por estos días, en el marco de la controvertida Ley de Justicia y Paz que cobija a los paramilitares que se entregaron a la justicia, se asista a la feria del olvido y la macabra distorsión de los hechos: se pasa de largo muchas masacres y varias de ellas son presentadas como “hechos de guerra”. El colmo del cinismo es el de los paramilitares desmovilizados que han acudido a la figura de la amnesia para eludir la delación de sus vejámenes.

72 Rubén Olive y Arlei Damo. Fútbol y cultura. Bogotá: Norma, 2001. La sentencia original, escrita por Karl Marx en su Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1844), dice “La religión es el opio de los pueblos”.

73 El ‘Negro’ Gaitán, candidato presidencial por el partido liberal, fue asesinado el 9 de abril de 1948 en un hecho rotulado por la historia como “El Bogotazo”; magnicidio político que agudizó el conflicto civil entre los dos partidos hegemónicos de Colombia: el conservador y el liberal.

74 El presidente Belisario Betancur y su ministra de comunicaciones Noemí Sanín, ordenaron que se televisara el juego entre Millonarios y el Unión Magdalena la noche del 6 de noviembre de 1985; así mismo, es reveladora la intensidad con la que la programadora Caracol Televisión promocionó el partido de eliminatoria mundialista entre Colombia y Ecuador en detrimento del cubrimiento noticioso al funeral del asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento.



¿Qué se puede pensar de una patria que refunde su tragedia política en la impostada fiesta del gol? Responder tamaño interrogante es atrevido y aventurado; no obstante se puede acudir a la lúcida labia de Francisco Maturana quien en uno de los raptos filosóficos que lo han hecho célebre, sentenció: “se juega como se es”; en esa perspectiva sociológica habría que concluir que nuestra nación es más ilusoria de lo que parece ya que reposa su proyecto de unidad en una ilusión mayor; ya que descansa su idea de nación en prácticas alteradas y desnaturalizadas como la del fútbol y la política alimentados con gasolina narcotraficante⁷⁵ ¿Será que es cierta aquella máxima garciamarquiana que dice que en Colombia la realidad supera la ficción? ¿Será que el “realismo mágico” de Macondo se extiende a todos los ámbitos de la geografía nacional?...

¿Será que ese argumento es otra excusa escapista, amnésica y traqueta?

Finalizamos recordando que Roberto Da Matta y Eduardo Archetti dibujaron al Brasil y a la Argentina a partir del estilo de juego de sus selecciones de fútbol; la nación de la samba se puede resumir en las cualidades de Pelé y la de los gauchos en las picardías de Maradona⁷⁶; así mismo, Colombia se hará a conocer en todo el orbe ya no por el gángster y el Nóbel⁷⁷, sino por el *tensionadito bacano* del ‘loco’ René Higuita que con esa frase resumía su ansiedad de lucha ante la divertida adversidad del medio. Esa es la mejor radiografía del colombiano: la del ser que se permite ilusionarse sabiendo que tiene pocas posibilidades de éxito y que desconoce si realmente le interesa ganar; la del sujeto para el que –como también dijera Maturana- *perder es ganar un poco*.

✖

75 En este segundo semestre de 2007 se incrementó la presión de la prensa nacional e internacional en torno a los supuestos vínculos del presidente Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico. Además de los citados libros de Fabio Castillo y de Virginia Vallejo que aseguran tener pruebas de presuntos encuentros del primer mandatario de los colombianos y de algunos de sus familiares y allegados con la mafia (de hecho el ideólogo del gobierno Uribe, José Obdulio Gaviria, es primo de Pablo Escobar), está el hecho de las numerosas acusaciones periodísticas que pretenden relacionarlo con los paramilitares; situación que nos recuerda el Proceso 8.000 que conmocionó la historia reciente de Colombia.

76 Roberto Da Matta (comp). O universo do futebol: esporte e sociedade brasileira. Río de Janeiro: Pinakothek, 1982. Eduardo Archetti. Masculinidades. Fútbol, tango y polo en la Argentina. Buenos Aires: Antropofagia, 2003.

77 Walter Broderick. Camilo: el cura guerrillero. Bogotá: Intermedio Editores, 2005, p. 7.





Los daños y las pérdidas asociadas al desplazamiento forzado en las ciudades¹

Martha Nubia Bello²



Página anterior.

1 Este artículo hace parte de la publicación “Justicia reparativa y desplazamiento forzado desde un enfoque diferencial. Daños y pérdidas asociadas al desplazamiento forzado en ámbitos urbanos” editada por el Grupo de Investigación del Desarrollo Social – GIDES, Universidad de San Buenaventura Cartagena, Colombia. Con el apoyo financiero del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo – CIID/IDRC. En prensa.

2 Profesora asociada, Departamento de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia.

Las ciudades concentran poblaciones desplazadas provenientes de diversas regiones del país, expulsadas por distintos móviles y actores. Son también una población heterogénea por sus posibilidades sociales, sus actividades económicas y políticas. En este sentido es difícil hablar de unas realidades comunes y generalizables en términos de las pérdidas, los daños, las transformaciones, las expectativas y las prácticas de reparación. Tal vez las circunstancias que afrontan las personas desplazadas están condicionadas no solo por sus haberes y experiencias previas, sino por las características y dinámicas de los contextos urbanos a los que arriban. En este sentido los contextos analizados permiten observar una serie de características que repercuten poderosamente en lo que las personas validan y significan como pérdidas y también en sus expectativas de reparación.

Sin embargo independientemente de sus circunstancias y vivencias en las ciudades, las personas portan historias ya cargadas de pérdidas y daños, que son evocadas y nombradas como el *antes de*, en la multitud y variedad de historias es posible apreciar la crudeza del conflicto armado y de la violencia sociopolítica y la

extraordinaria vulnerabilidad a la que es sometida la población campesina y civil.

La vulnerabilidad de la existencia física y la experiencia de la muerte

Los relatos más contundentes dan cuenta de un número significativo de personas que huyeron desplazadas porque sus familiares fueron asesinados y porque su integridad física estaba en riesgo. En este sentido la pérdida más dramática y también irreparable está referida al asesinato de familiares y con ella a la destrucción de proyectos de vida individuales, familiares y comunitarios. El desplazamiento como se describe en numerosos informes es una respuesta de protección frente a la sensación de riesgo extremo y de vulnerabilidad física. Las continuas amenazas de muerte y la narración extensiva de los horrores descritos por quienes presenciaron torturas y asesinatos generan un miedo generalizado en la población que no se siente segura y por esta razón empieza a modificar y a alterar drásticamente no sólo sus actividades productivas, sino sus formas de sociabilidad y hasta la intimidad de su vida cotidiana.





Que la vida se puede perder como resultado de la acción violenta de cualquiera de los actores armados, es una verdad que coloca a las personas en tal situación de incertidumbre y de miedo que impide que puedan continuar con sus proyectos y que destruye cualquier perspectiva de futuro en sus lugares de origen y de trabajo. Así lo afirma Villa: “Muchas de las personas que han vivido el desplazamiento forzado han incorporado a sus recuerdos de vida no sólo la narración de eventos como estos sino, en suma, toda una memoria que nos habla de una casi inevitable proximidad de la muerte, de que “...la muerte siempre nos ha perseguido”³.

Sin embargo, no solo se teme perder la vida, también se expresa el miedo a otros daños físicos, como resultado de las minas antipersona, de las balas del fuego cruzado o a los bombardeos. En efecto, son numerosos los testimonios que dan cuenta de la pérdida de miembros del cuerpo, daño severo del oído y la vista, y sobre todo de un deterioro progresivo de la salud por afectaciones al corazón y estrés agudo.

La pérdida de los bienes materiales: el deslizamiento entre el despojo económico y el simbólico.

La pérdida de viviendas, enseres, cultivos, animales y demás pertenencias, figuran entre los registros de daños más sensibles ocasionados a las familias desplazadas, pues en estos haberes estaba representado el esfuerzo de generaciones

y expresaban la concreción de sueños y de aspiraciones individuales y familiares.

Los bienes materiales hicieron parte de la identidad personal y familiar, en tanto a partir de ellos era posible el reconocimiento de la capacidad de trabajo y de esfuerzo, de la responsabilidad y de la honorabilidad de las personas. De tal suerte que su pérdida no implica solo un detrimento de un capital económico, ya de por sí significativo e importante, sino de un capital simbólico que en la experiencia de los desplazados es significado como el despojo de los sueños y los esfuerzos y el despojo de su fuente de dignidad, de respeto y de reconocimiento social.

Es justamente el ingreso a las ciudades con escasos o nulos recursos económicos, lo que coloca a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y lo que los lleva a experimentar sentimientos de pérdida de dignidad, en tanto se ven obligados a depender de la caridad y de la solidaridad de otros, no siempre libres de insultos y de señalamientos como “aprovechados” y “perezosos”. Carecer de bienes materiales es por tanto, carecer de un estatus que los acredite como personas “de bien” y que les garantice un trato respetuoso por parte de los demás. En consecuencia al padecimiento físico que implica la escasez de alimentos y la ca-

3 Martha Inés Villa. “Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía”. En: Controversia, CINEP, 2006, p. 14. <http://www.cinep.org.co/revistas/controversia/controversia187/art02>





rencia de vivienda digna, principalmente, se suma un padecimiento moral y psicológico que aumenta el inventario de daños y perdido de las familias desplazadas.

En este orden de ideas, los bienes materiales más asociados a la idea de seguridad, estabilidad, autonomía y prestigio son los que más cuentan en el inventario de pérdidas, de tal cuenta que la pérdida de la vivienda es tal vez la que se menciona con más insistencia y añoranza. Adquirir vivienda en la ciudad es prácticamente imposible para la mayoría de las familias, razón por la cual, deben acudir a la toma terrenos y a la improvisación de cambuches, situación que los coloca como “ilegales y transgresores” y los hace víctimas de las acciones jurídicas y de desalojo físico por parte de las autoridades y de la fuerza pública.

Más que referir el monto de las pérdidas económicas, es necesario dimensionar el significado que dichas pérdidas tienen para las personas, en términos de su identidad y de su papel en los proyectos vitales de las víctimas, en este sentido, no se pretende reivindicar un pasado en condiciones prodigas y de abundancia.

“... Los desplazados no se vuelven pobres en los sitios de recepción, es decir, sus condiciones de vida no cambian en forma drástica cuando se desplazan. Es evidente que hay una caída violenta en las condiciones de vida de las familias cuando son desplazadas, pero esto no implica, per se, que las condiciones económicas, sociales y políticas en el sitio expulsor fueran las mejores, o fueran superiores a las alcanzable en el lugar de recepción”⁴. En este sentido, hacemos referencia, no a un paso de la riqueza a la pobreza, sino de un proceso que despoja a los históricamente excluidos de sus fuentes de dignidad y de sus haberes significativos que les permitía asumir su presente y proyectar el futuro.

Las pérdidas asociadas al saber hacer

El ingreso a las ciudades confronta fuertemente a las personas con sus saberes tradicionales y que fueron la fuente de su independencia y sostenibilidad. Los saberes relacionados con el trabajo agrícola y el cuidado de los animales principalmente, resultan inservibles e inútiles en la ciudad y los obliga a buscar fuentes de sustento lejanas de las conocidas.

Las habilidades y saberes construidas y fomentados por generaciones. Aquellas

4 María del Pilar Castillo y Boris Salazar. Pobreza urbana y exclusión social de los desplazados. Documento de Trabajo No. 106, agosto de 2007. En: <http://socioeconomia.univalle.edu.co/nuevo/public/index.php?seccion=CIDSE&ver=PUBLICACIONES&publicacion=DOCUMENTOS>, Consultado en Octubre 2007, p. 22.



que eran a su vez fuente de identidades y roles, resultan “descalificadas” y con ello también destruidos los esfuerzos por “ser alguien, ser útil, ser capaz” y en particular para los hombres adultos, impedida la posibilidad de cumplir con el rol histórico de proveedor económico del hogar.

En este aspecto, ha sido reconocida la importancia de los saberes femeninos en el ámbito doméstico, como la preparación de alimentos, el cuidado de niños y la limpieza, habilidades que les permiten sobrevivir y que trastoca significativamente los roles familiares.

Pérdidas o cambios en los sujetos políticos

La interpretación según la cual, el desplazamiento es un proceso de vulneración de derechos que ocasiona la pérdida de la ciudadanía de las personas víctimas, ha sido rebatida, por quienes afirman que la mayoría de los desplazados son personas excluidas e invisibilizadas históricamente en el ámbito cultural, económico y político. El desplazamiento incluso, es analizado como un fenómeno que da cuenta de la precaria democracia y de los incipientes y en ocasiones nulos procesos de construcción de ciudadanía en numerosas regiones del país.

En el ámbito político las comunidades rurales, las más afectadas por este fenómeno, han sido utilizadas, cooptadas y presionados a través de diversos mecanismos, como el clientelismo político, la intimidación o el intercambio de favores, constituyéndose no como personas deliberantes

y participes de la vida política, sino como “bases de apoyo” que respaldan, en ocasiones, electoralmente a los poderes de turno, o aceptan y toleran su accionar. En este sentido el desplazamiento, más que ocasionar la pérdida de la ciudadanía y de manera más específica, impedir la participación política, acentúa y posterga una histórica tendencia del país.

Sin embargo, dentro de las personas y poblaciones desplazadas se cuentan un número significativo de líderes sociales y organizaciones con participación política, que fueron perseguidos, amenazados y expulsados por cuenta de su actividad, con la cual en muchas ocasiones se enfrentó o hizo resistencia a los poderes que intentaban controlar o expropiar en sus regiones. En este sentido el desplazamiento, para algunas personas significa también la pérdida de organizaciones y del ejercicio de liderazgos. Para quienes ésta resultaba como actividad significativa, el desarraigo es también el despojo de sus capacidades de liderazgo y la renuncia a proyectos que propendían por la cohesión social y el desarrollo sociocultural de sus comunidades.

Algunas personas han encontrado en las ciudades posibilidades de participación y de ejercicio de liderazgo, ahora vinculados a la reivindicación de sus derechos como desplazados, sin embargo esta labor enfrenta serias dificultades, de un lado, por la heterogeneidad y dispersión de situaciones e intereses de la población desplazada y de otro, por la persecución de que han sido y siguen siendo objeto los líderes de la población desplazada en los contextos urbanos.





Las organizaciones de desplazados, a pesar de las dificultades mencionadas, constituyen un espacio muy importante para esta población y en especial para los que van ingresando a la ciudad día a día. Allí en sus improvisadas oficinas o lugares de encuentro hallan un lugar en el cual pueden ser orientados y escuchados y constatan que su tragedia es compartida por otros miles. Las organizaciones se constituyen en ocasiones en un recurso por medio del cual los desplazados van conociendo las instituciones, los barrios, las rutas de acceso. Espacios desde donde construyen solidaridades y tejen redes que permiten ir “apropiando” la ciudad.

Las dificultades de los desplazados en los contextos urbanos: la profundización de las pérdidas, los cambios y los daños:

La probabilidad de supervivencia y de adaptación de los desplazados depende del tamaño, del alcance y de las condiciones laborales de las redes sociales a las pertenecen. Redes con alta incidencia de desempleo, bajos niveles educativos, alta informalidad, y escasa o nula información laboral deberán conducir al rebusque, al

desempleo y a una pobreza más profunda de la que vivían en el campo.

El proceso de llegada e inserción, así como los intentos de estabilización de las familias desplazadas en los contextos urbanos, tropiezan con una serie de obstáculos y dificultades que profundizan y agudizan los daños generados por los factores que obligaron el desplazamiento y por el desplazamiento mismo. En la investigación se destacan los siguientes aspectos:

La ausencia de vivienda propia y digna.

La mayoría de las personas desplazadas no logran acceder a una vivienda propia e incluso a una rentada. La carencia de un ingreso estable no les permite comprometerse con el pago de arriendo, razón por la cual es recurrente escuchar que en la primera etapa de tiempo en la ciudad, acuden a alojamientos transitorios suministrado por familiares y amigos y posteriormente al intento de acceso, por la vía de los mercados informales e ilegales, a un pedazo de tierra y a la construcción de improvisadas viviendas.

La carencia de vivienda acentúa problemas de diverso orden: los conflictos intrafamiliares provocados por el hacinamiento y la falta de intimidad y privacidad, la sensación de dependencia y de pérdida de autonomía, y el aumento de la incertidumbre frente a las posibilidades de permanencia y estabilidad en los nuevos lugares de arribo, entre otros. Sobre esta problemática Villa menciona: “En una encuesta realizada por la Red de Solida-





ridad Social en el 2003 con una muestra de 2.041 personas desplazadas sobre su situación de vivienda se encontró que el 24% eran ocupantes de hecho, el 17% eran propietarios, el 11% vivían en casa de un familiar, el 34% en arriendo, el 8% habitaban en casa de un amigo, el 5% en albergue temporal y el 1% en usufructo. En ciudades como Medellín la cifra de ocupantes de hecho sin embargo asciende al 66% de una muestra de 284 personas”⁵.

La falta de trabajos acordes, estables y dignamente remunerados.

El trabajo es tal vez el tema más reiterado por las personas desplazadas. En primer lugar porque no se sienten calificados para los oficios de la ciudad y no cuentan con los requisitos que se suelen solicitar (recomendaciones, experiencia acreditada, documentos, etc). En segundo lugar porque no hay ofertas de trabajo estables y ello obliga a las personas a recurrir a las ventas informales, a la realización de oficios como lavado y cuidado de carros, cargadores en plazas de mercado, entre otros; trabajos altamente inestables e incluso disputados y perseguidos; y en tercer lugar a las escasas remuneraciones e ingresos generados de un lado, por la ausencia de vinculaciones formales, que los hace presas del engaño y la explotación y de otro, por la alta competencia que hay en estos sectores y por la subvaloración que estos oficios tienen socialmente.

Las personas desplazadas no tienen experiencia en trabajos urbanos, ni las

redes y documentos necesarios para acceder a empleos formales en la vigilancia privada o los servicios, sectores que estarían más a su acceso. En las ciudades pequeñas e intermedias el servicio doméstico se contrata sólo con personas conocidas y establecidas de tiempo atrás o se paga muy mal debido a la sobreoferta; en general, hay sobreexplotación de las mujeres que se dedican al servicio doméstico.

La idea recurrente de los desplazados es tener una tienda que les brinde dinero efectivo cada día y que les posibilite una precaria supervivencia. Parecería que esa es la versión urbana de los cultivos de pancoger, es decir, los que siempre están disponibles para el consumo.

Muchos se dedican a la venta callejera de alimentos que preparan a medida que van apareciendo los clientes. Los hombres venden alimentos ya listos para consumir (frutas, alimentos empacados) en los paraderos de buses o las vías regionales. La población desplazada también se dedica a revender, en pequeña escala, mercancías baratas de las que obtiene una exigua ganancia; es una forma de poner a circular el dinero pero que no crea valor.

En un contexto nacional de desempleo creciente la población desplazada se convierte en competidora de los pobres históricos ya no por el acceso a empleos en la economía formal sino en la informal. Es común que quienes se dedican al comercio estacionario o ambulante vendan

⁵ Villa, op. cit.





en su mismo barrio, no salen de la zona conocida, excepto para ir a instituciones de carácter distrital o regional. Venden para sus vecinos y, a la vez, compiten con ellos. Esto se debe, primero, a que el dinero que obtienen de ese comercio al menudeo no les alcanza para pagar transporte y mantener un mínimo de surtido, segundo, a que se sienten inseguros en la ciudad y, tercero, a que no tienen el dinero y los contactos para conseguir lugares de venta y mercancías ventajosas que garanticen una ganancia mayor.

El desempleo es crítico para los hombres durante los tres meses posteriores a la llegada; sin embargo, el tiempo en la ciudad no significa estabilidad laboral. Los hombres mejor pertrechados para superar la crisis inicial son los que han tenido experiencias laborales diferentes al trabajo agrícola, los que antes de llegar han vivido en otros sitios diferentes al de nacimiento, los que tuvieron experiencias de afiliación laboral o militancia política porque tienen una adscripción que les genera solidaridades.

Según Meertens y Segura (1999) las mujeres se adaptan más rápido a la vida urbana y consiguen ingresos antes que los hombres porque convierten los conocimientos y habilidades de la división sexual del trabajo en fuentes de ingreso: servicio doméstico, arreglo de ropas, venta de alimentos preparados en la casa, cuidado de niños o enfermos⁶. Ellas tejen redes de apoyo con familiares, paisanos o vecinos mientras los hombres se concentran en obtener ayuda de las instituciones. Las mujeres jefes de hogar tienen más posi-



bilidades porque los maridos, adultos jóvenes, despiertan sospechas y reticencias lo cual representa un límite u obstáculo.

Los problemas de salud

La mayoría de las personas refieren dolencias y nuevos problemas de salud, asociados no solo al alto nivel de estrés provocado antes y durante el desplazamiento sino a los cambios en los patrones y dietas alimenticias, a las nuevas condiciones de vivienda y a los cambios climáticos. Así, se juntan una serie de condiciones emocionales, psíquicas y de contexto económico y cultural que someten a las personas a tal nivel de carencia, cambio y presión, dando como resultado la agudización o aparición de enfermedades, que los colocan aún en mayor vulnerabilidad y que limitan sus capacidades para reinser-tarse en la ciudad.

6 Donny Meertens y Nora Segura. Éxodo, violencia y proyectos de vida. La reconstrucción de la vida cotidiana de hombres, mujeres y jóvenes desplazados por la violencia. Tres estudios de caso. Informe final de investigación. Bogotá: Contrato COLCIENCIAS - Universidad Nacional de Colombia No. 372. Junio de 1999.





La inseguridad y la desconfianza

Si bien la ciudad puede resultar en principio, más segura, con respecto a los lugares abandonados. Rápidamente va poniendo de presente los enormes riesgos que en ella enfrentan adultos y niños. Riesgos asociados a la delincuencia común (robos, violaciones, asaltos) y también, como ya se mencionó, relacionados con las acciones desplegadas por los grupos armados en la búsqueda de control territorial. A la percepción de inseguridad se suma la desconfianza que genera el ingreso a un lugar desconocido, con presencia de personas anónimas y diversas. Este clima se asocia, con otro de los problemas referidos por las personas: la estigmatización y la discriminación.

El desplazamiento forzado y la confrontación de los imaginarios asociados a la ciudad

El transcurrir de las personas en las urbes, poco a poco confronta los imaginarios que sobre las ciudades se construyeron y que permitieron visualizar salidas a la amenaza, al riesgo y a las difíciles condiciones de vida en sus lugares de origen. Si bien muchos desplazados refieren sus salidas como momentos poco planificados, abruptos y por lo mismo señalan que estas no fueron escogidas como resultado de una elección informada y racional, muchos otros contaron con relaciones, informaciones y algún tiempo que les per-

mitió pensar acerca de su nuevo lugar de destino. En todo caso, a medida que el tiempo pasa, algunas ideas y expectativas parecen desvanecerse y en este sentido a aumentar los sentimientos que asocian la experiencia del desplazamiento con los desarraigos, las pérdidas y los cambios.

El imaginario del lugar seguro

A los tradicionales problemas de violencia y delincuencia común propio de las ciudades, en los últimos diez años se ha agregado una cruda violencia desatada por la disputa de los actores armados quienes encuentran en los espacios urbanos negocios rentables, jóvenes por reclutar y ubicaciones espaciales estratégicas de alta importancia en el ejercicio de controlar política y territorialmente el país. De tal cuenta que las ciudades y en particular los sectores populares se ven profundamente afectadas por las prácticas autoritarias y violentas desplegadas por los diversos actores armados.

El ideal de la ciudad como el lugar seguro empieza a desvanecerse lentamente y las personas que llegan huyendo de la violencia se encuentran en un contexto que no sólo amenaza con que sus hijos sean presos de la delincuencia callejera y de las diversas actividades ilegales, sino que vuelve a cundir el miedo de los reclutamientos forzados, las amenazas por supuestas o reales vinculaciones políticas o religiosas previas. En algunas ocasiones la ciudad vuelve a victimizar a estas familias, pues se mencionan casos de asesinatos de hijos y parientes cercanos,





así como la persecución por la incursión en actividades organizativas. De esta manera, la ciudad agrega nuevas pérdidas y daños y acentúa sentimientos de desprotección y vulneración.

El imaginario del lugar de las oportunidades

La idea de que las oportunidades se concentran y ofrecen en las ciudades, es confrontada ante el señalamiento de las familias desplazadas como los nuevos competidores en lugares de alta precariedad. Alimentarse, educarse o conseguir un lugar para vivir en la ciudad se convierten en luchas feroces y cotidianas que agudizan la nostalgia frente “al lugar perdido”, que si bien en la mayoría de los casos era humilde, no se caracterizaba propiamente por experimentar situaciones de hambre, frío y brutal hacinamiento. El agua, el alimento, la vivienda, son bienes elementales que escasean y que hacen particularmente difícil adaptarse a vivir en la ciudad. En este sentido la lucha de los desplazados se concentra en la sobrevivencia cotidiana y por lo mismo está muy lejana de constituirse en una lucha por la reparación de los derechos vulnerados por el desplazamiento.

De hecho la ciudad si ofrece posibilidades: venta de alimentos y productos callejeros, servicios domésticos y toda clase de actividades informales, pero son las oportunidades para sobrevivir y no para vivir dignamente. Son además actividades inestables y por lo mismo que mantienen a las familias en la incertidum-

bre y la angustia frente a un futuro muy poco promisorio.

Sin embargo, en estudios recientes se afirma, que la población desplazada encuentra en las ciudades relaciones, bienes y servicios con los que no contaba en sus lugares de expulsión y que por esta razón muchas no están dispuestas a retornar.

Nos interesa mostrar que la pobreza se traslada de un sitio a otro, de la mano de estas miles de familias y que la ayuda asistencial de las organizaciones no gubernamentales y del gobierno se convierte en un fuerte incentivo para permanecer en los sitios de llegada y rechazar un posible retorno a sus lugares de origen. La emergencia de la ayuda internacional y gubernamental en los lugares de llegada genera un proceso de “ilusión económica” o de disonancia cognitiva: un desplazado, al comparar su situación anterior—sin ningún tipo de ayuda ni estatal ni privada ni institucional—con la nueva puede inferir, en forma equivocada por el momento, que su nueva situación será mejor comparada con la anterior⁷.

El imaginario de la ciudad como escenario de atención y reparación.

La ciudad también se asocia como el lugar de presencia institucional que permite asumir que habrá atención y servicios. Y en efecto, son mayores las posibilidades de atención en las grandes ciudades que



7 Castillo y Salazar, op. cit., pág. 22.



Nos interesa mostrar que la pobreza se traslada de un sitio a otro, de la mano de estas miles de familias y que la ayuda asistencial de las organizaciones no gubernamentales y del gobierno se convierte en un fuerte incentivo para permanecer en los sitios de llegada y rechazar un posible retorno a sus lugares de origen.

en los pequeños municipios o escenarios rurales. Sin embargo esta atención es precaria y somete a las personas a largos y extenuantes procesos que no siempre culminan con el reconocimiento de su condición de desplazados o en el acceso a lo que imaginaron las familias. La atención institucional va quedando con el tiempo reducida a la expectativa por un mercado, recursos para unos meses de arriendo y un acceso limitado a salud y educación. No son pocas las escenas de grandes filas de desplazados a la intemperie esperando o reclamando un kit de aseo, un mercado o la numerosa interposición de tutelas con la esperanza de acceder a vivienda, proyectos productivos y educación.

En lugares como Medellín y Soacha, los sitios de atención a la población desplazada (UOA) carecen de las condiciones mínimas de un lugar de atención pública. Con el argumento de “los problemas de seguridad” el ingreso colectivo es prohibido y las personas deben esperar afuera, independientemente de los entornos y de las condiciones climáticas, para ser atendidos. A ello se suma la hostilidad con que son atendidos por funcionarios,

que se sienten rebotados por la cantidad de gente y de demandas y se agrega la impotencia que genera la incomprensión de las palabras y lenguajes que los funcionarios usan y que tienen como finalidad indicar los mecanismos y procesos para ser atendidos o para reintentar un reconocimiento luego de ser rechazados.

La figura del desplazado está cargada de ambigüedad, las representaciones sociales fluctúan entre el damnificado o la víctima y el culpable. Estas representaciones influyen en las instituciones y explican que “para muchas administraciones en las regiones y las ciudades, los desplazados son portadores de desorden; traen consigo dificultades de diferente naturaleza y peligros implícitos y explícitos: suciedad, hacinamiento, enfermedades contagiosas, incremento de la delincuencia, mendicidad y empleo informal; por ellos alcaldes y gobernadores se afanan por propiciar los retornos”⁸. La atención institucional está marcada por el temor de que si la atención es buena se estimulan las migraciones, la usurpación de la identidad de desplazado o la utilización pragmática de esa condición retrasando o impidiendo la recuperación socioeconómica.

Las relaciones entre instituciones y desplazados son cada vez más agresivas

⁸ María Teresa Uribe de Hincapié. (Directora de la Investigación). Desplazamiento forzado en Antioquia. Aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en Colombia. Bogotá: Secretariado Nacional de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Colombiana, 2000, p. 23.



y cargadas de representaciones hostiles. Los desplazados se cansaron de esperar los recursos o de su mala distribución, los funcionarios ven en el desplazado una persona que se acostumbró a las ayudas y que no hace nada por sí mismo. Las personas que más luchan o reivindican sus derechos son señaladas y se les obstaculiza el ingreso a las instituciones, se les ve como conflictivos y problemáticos. En la actuación de los funcionarios hay mucho arbitrio, no hay criterios técnicos y objetivos que garanticen un trato igualitario y equitativo.

En el deterioro de las relaciones entre la población desplazada y las instituciones estatales influyen varios factores. En primer lugar, lo complejo y engorroso del proceso de registro, entrega de ayuda de emergencia y acceso a servicios de salud y educación. La cantidad de pasos e instancias involucradas disminuyen la eficacia y rapidez de Acción Social. En segundo lugar, la escasez de recursos humanos y técnicos en cada entidad para atender el volumen de población. En tercer lugar, que los funcionarios no han recibido una capacitación que les permita comprender el problema y atenderlo adecuadamente.

Por otro lado, en el trabajo de atención hay un escaso o nulo componente psicosocial (ni para la población objeto ni para quienes la atienden) que ayude a favorecer la relación; al desplazado se le pide mucha información para llenar formatos pero no hay quién, cómo, dónde o cuándo escucharlo. La atención es demorada porque se basa en una relación de desconfianza: hay que asegurarse que



el desplazado lo es, que está registrado y que no ha recibido más de lo que le corresponde. Las respuestas dependen del nivel central o de otras instituciones, no hay coordinación ni una red de información compartida que agilice la atención.

La contradicción fundamental parece estar en los ritmos. Por un lado, la institución debe cumplir una serie de pasos que requieren información y procedimientos estandarizados, eso implica unos tiempos que, en apariencia, no pueden reducirse. La población desplazada está en un permanente estado de urgencia y necesidad, no tiene otras opciones, exige soluciones prácticas e inmediatas. La institución, además, actúa según normas y criterios establecidos y categorías definidas; el desplazado necesita excepciones, su circunstancia no se adapta a lo que prefigura la institución.

La inestabilidad económica y la incertidumbre ante una situación que se prolonga están generando nuevas conductas. Muchos desplazados ya no solicitan prórroga de la ayuda humanitaria sino recursos para retorno o reubicación, han asumido que sus condiciones en la ciudad no van a mejorar y quieren probar suerte en otros lugares. Se han conocido casos de personas que regresan para ingresar





al grupo armado que haya consolidado su control territorial o que negocian con él las condiciones del retorno. Estos mecanismos se aplican por fuera del Estado y las instituciones.

Pero lo más grave es que en la oferta y el modo de atención del Estado se pierde la visión del desplazamiento como un problema político que involucra la legitimidad del Estado, la legalidad vigente, la dignidad humana y la justicia. El proceso de atención a la población desplazada incide en que ésta “renuncia a los derechos de compensación, reparación moral y reconocimiento social a las cuales todo desplazado podría acceder y reclamar”⁹.

Los habitantes de la ciudad, a su vez, no ven en los desplazados a las víctimas de una guerra sino a un grupo amorfo que se ha convertido en problema social. “La imagen estigmatizada del desplazamiento forzado es el manto que oculta las responsabilidades públicas y los compromisos institucionales y sociales para con las víctimas; nadie parece sentirse aludido por la situación de los desarraigados, ningún actor institucional, contrainstitucional o parainstitucional, asume los costos políticos y éticos de semejante desastre humanitario y no aparece en el horizonte a quien reclamarle por las exclusiones, los despojos, las violaciones a los derechos, las heridas morales infringidas o las pérdidas materiales ocasionadas”¹⁰.

El desencantamiento con el imaginario de la atención y oferta de servicios se evidencia en las numerosas vías de hecho a las que recurren las personas desplazadas como las tomas, marchas y bloqueos

a las que acuden los desplazados frente a la vivencia de abandono e incluso de maltrato institucional.

La ciudad escenario de solidaridades

Paradójicamente la ciudad es referida por la mayoría de las personas como un lugar en dónde encuentran solidaridad y apoyos de diversos tipos: de afecto, económicos, de información, etc. Aun en las difíciles condiciones de pobreza en los lugares a los que arriban las familias desplazadas, reciben albergue, alimento y sobre todo apoyo para empezar a conocer los servicios y los espacios a los cuales pueden acceder. En especial las mujeres refieren la importancia de contar con el apoyo de paisanas e incluso de desconocidas que las recomendaron en casas de familias para ser contratadas como empleadas domésticas o que las vincularon a ventas de alimentos y ventas informales. De esta manera vivir en la ciudad genera situaciones y sentimientos ambiguos, si bien se experimenta la estigmatización y el rechazo, también se recibe el apoyo y la

9 María Teresa Uribe de Hincapié (2000 a) . “Notas para la conceptualización del desplazamiento forzado en Colombia”. En: Estudios políticos, No. 17. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, Julio-Diciembre de 2000.

10 María Teresa Uribe de Hincapié. (Directora de la Investigación). Desplazamiento forzado en Antioquia. Aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en Colombia. Bogotá: Secretariado Nacional de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Colombiana, 2000, p. 12.



solidaridad de personas que comparten su condición de desplazados, de migrantes o de pobreza y que con sus acciones hacen más llevadera su dramática situación o que incluso favorecen un proceso de inserción en la vida urbana, por precario que el resultado.

Los relatos de las personas entrevistadas permiten observar el valor de la solidaridad que se expresa en las redes sociales que se construyen en los barrios habitados por personas excluidas y desplazadas. Son las mismas personas “pobres” las que se encargan de atender y de hacer soportables las necesidades y precariedades de los desplazados, en especial de los recién llegados. Esta realidad se contradice, o tal vez se expresa al mismo tiempo con la idea generalizada del rechazo por la competencia frente a escasos recursos.

Lugar de afirmación de derechos

El ingreso a las ciudades representa para muchas personas un acercamiento a la noción de ciudadanía y también a un reconocimiento del estatus jurídico que se desprende de su situación de desplazados y con ello a conocer y a contemplar la exigibilidad de una serie de derechos.

Si bien este es un proceso lento y complejo, en ocasiones inicia por conocer la existencia de entidades del estado que

tienen por competencia la atención de los desplazados y continúa con el conocimiento de redes y espacios de organización por los que circulan información. En muchas entrevistas los desplazados afirmaban que el mismo término “desplazados” les era desconocido y que de igual manera en la ciudad se enterraron de la existencia de entidades y de servicios a los cuales tienen derecho. Esta situación es comprensible, si se tiene en cuenta que en las zonas rurales, ha prevalecido una ausencia histórica del Estado y por lo mismo la ley y el derecho son nociones prácticamente inexistentes.

A la construcción de esta noción contribuye notoriamente el trabajo realizado por ONG y agencias de cooperación internacional en términos de promover procesos organizativos, de formación e información, los cuales empiezan poco a poco a generar frutos.

Sin embargo la ciudad no posibilita solamente el acceso a la noción de derechos ciudadanos, o a los derechos de la población desplazada, también representa una posibilidad de acercamiento a los derechos de las mujeres, de la niñez, a los derechos de las comunidades étnicas, entre otros. En este sentido también se aprecian procesos de empoderamiento vinculados tanto a los derechos de los desplazados, como a los derechos de las mujeres, de los grupos étnicos, lo que genera otro tipo de relaciones y de inclusiones urbanas.



Memoria oficial y otras memorias: la disputa por los sentidos del pasado

Grupo de Investigación Cyberia¹



Página anterior.

1 Orlando Silva Briceño, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Jorge Enrique Aponte Otálvaro, Paula Viviana Cano Jaramillo, Diego Fernando Díaz Franco, Nathalia Martínez Mora, José Joaquín Pinto Bernal, Angie Johana Pineda Ardila, licenciados en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, de la Universidad Distrital.

A mediados del siglo XX la memoria se convirtió en una categoría significativa en el campo de las ciencias sociales, relacionándose indudablemente con lo que Elizabeth Jelin denominó “explosión de la memoria”², que se manifiesta en diversidad de prácticas sociales en la vida cotidiana de las sociedades contemporáneas y van constituyendo múltiples formas de culto al pasado, llegando al punto en el que como lo afirma Traverso, “Hoy, todo se transforma en memoria”³.

En el ámbito académico e investigativo el aumento de las reflexiones y debates a propósito de la memoria permitieron ampliar y complejizar los desarrollos conceptuales propuestos por autores considerados como clásicos en dicho campo teórico: en la sociología Maurice Halbwachs, en la fenomenología y la hermenéutica Paul Ricoeur y en la historia Pierre Nora y Jacques Le Goff.

En la actualidad, los mayores aportes se encuentran en contextos de países que vivieron represiones políticas en las dictaduras militares o guerras civiles, como lo es el caso de España en donde se localizan una importante cantidad de documentos e investigaciones sobre las memorias

del periodo de la guerra civil⁴, o algunos países del Cono Sur que en el marco del Panel Regional de América Latina (RAP) del Social Science Research Council adelantan una serie de investigaciones que tiene como objetivo fundamental fomentar la investigación y formación de jóvenes investigadores sobre la memoria de los periodos de dictadura y represión.

Colombia no es ajena a éste fenómeno, por el contrario, se observa cómo desde diversas instituciones académicas y organizaciones comunitarias se promueven eventos, proyectos y programas tendientes a realizar procesos de elaboración de memoria desde distintos enfoques teóricos y disciplinarios, o a partir de las experiencias vividas en el marco del conflicto social y armado y de las expectativas de futuro frente

2 Elizabeth Jelin. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo Veintiuno editores, 2002.

3 Enzo Traverso. “Historia y memoria: notas sobre un debate”. En: FRANCO, Marina. LEVIN, Florencia (Comp.) Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, 2007, p. 67.

4 Al respecto se hallan los desarrollos teóricos de Reyes Mate, o de Paloma Aguilar, quien tiene un trabajo extenso sobre las memorias de la política o las políticas de la memoria en el contexto español.



a la situación actual. No obstante, algunas de estas propuestas se hallan vinculadas a una cultura de la memoria relacionada con una forma de exaltación del pasado, que concibe a la memoria como un mecanismo cultural para consolidar el sentido de pertenencia a comunidades o grupos, anclados en el imaginario de la identidad nacional y que pretenden imponer un supuesto proceso de posconflicto, que desdibuja e inhibe otras posibles construcciones sociales del pasado por fuera de marcos sociales de memoria propuestos por los proyectos de Estado Nacional, y que desconocen la vigencia y presencia actual del conflicto en el país.

En este contexto, el presente documento pone en discusión las categorías de Memoria Oficial y lo que se designa como Otras Memorias, pretendiendo recoger las diferentes nominaciones que se le han dado a la memoria en oposición a la versión oficial. Igualmente, realizar una aproximación conceptual de dichas categorías desde los avances teóricos de diversos autores y presentar a manera de ejemplo, dos expresiones de otras memorias sobre la violencia en Colombia: la memoria gaitanista y la memoria de la violencia en la literatura colombiana.

Así mismo, en el texto se amplía la discusión de la relación entre memoria e historia adelantada por el grupo de investigación CYBERIA de la Universidad Distrital, en el marco de la investigación “La primera violencia en la enseñanza de las ciencias sociales, entre la memoria oficial y otras memorias: el caso de seis instituciones educativas en Bogotá” financiada

por el IPAZUD, que permita construir unos criterios teóricos, para posteriormente analizar la manera como la memoria aparece en el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales.

Memoria oficial

En el mundo moderno occidental, la Historia, en su configuración como disciplina, se entendió como conocimiento racional orientado a la constitución de un régimen de verdad sobre el pasado, configurándose como dispositivo de saber sobre aquello que podría ser admitido como verdadero o falso en los discursos del pasado y sus repercusiones sobre el presente. De esta forma, la memoria social quedó reglada bajo los esquemas de disciplinamiento y control, instituyendo un sistema de regulación discursivo.

Este sistema de control y de exclusión a su vez diseñó una narrativa común sobre el pasado de las naciones que vendría a establecerse como mito fundador de la nacionalidad. Por tal razón, se instauraron las historias nacionales, que como discursos, generaron unos dispositivos sociales e institucionales convirtiendo una versión de la memoria colectiva en *memoria oficial* y determinando sus condiciones de utilización y circulación.

En la producción teórica sobre la memoria, lo oficial es entendido como los discursos sobre el pasado que se producen desde los Estados Nacionales, buscando la conformación de vínculos de pertenencia a ellos. Elizabeth Jelin al referirse a la memoria oficial afirma que:



...en los procesos de formación del Estado –en América Latina a lo largo del siglo XIX, por ejemplo– una de las operaciones simbólicas centrales fue la elaboración del gran relato de la nación. Una versión de la historia que, junto con los símbolos patrios, monumentos y panteones de héroes nacionales, pudiera servir como nodo central de identificación y de anclaje de la identidad nacional⁵.

Además, señala el sentido de estos relatos al preguntar y responder por la pretensión de dichas memorias oficiales: “¿Para qué sirven estas memorias oficiales? Son intentos más o menos conscientes de definir y reforzar sentimientos de pertenencia, que apuntan a mantener la cohesión social y a defender fronteras simbólicas [...] Al mismo tiempo, proporcionan los puntos de referencia para ‘encontrar’ las memorias de grupos y sectores dentro de cada contexto nacional”⁶. Intención que implica subsumir o someter otras posibles narrativas del pasado contenidas en lógicas diferentes a la de la forma de Estado Nacional.

Como proceso activo de constitución de los sujetos nacionales, la implementación social de unas prácticas de memoria oficial requiere de agentes o actores que dinamicen dicho proceso, pero como en todo campo social, la memoria se convirtió en un campo de lucha y los actores en protagonistas de la disputa, con el propósito de hegemonizar el campo de la memoria, siendo prevaleciente el papel de los actores estatales quienes lograron consolidar y poner a circular una

forma de memoria hegemónica, la historia/memoria oficial:

Se trata de actores que luchan por el poder, que legitiman su posición en vínculos privilegiados con el pasado, afirmando su continuidad o su ruptura. En estos intentos, sin duda los agentes estatales tienen un papel y un peso central para establecer y elaborar la historia/memoria oficial. Se torna necesario centrar la mirada sobre conflictos y disputas en la interpretación y sentido del pasado, y en el proceso por el cual algunos relatos logran desplazar a otros y convertirse en hegemónicos⁷.

En un sentido parecido, Enzo Traverso plantea la discusión acerca de la configuración de una memoria oficial en términos de memorias fuertes y memorias débiles, al respecto expresa que: “Hay memorias oficiales alimentadas por instituciones, incluso Estados, y memorias subterráneas, escondidas o prohibidas. La visibilidad y el reconocimiento de una memoria dependen también, de la fuerza de quienes la portan. Dicho de otra manera hay memorias fuertes y memorias débiles”⁸. La fuerza de una memoria, por éste autor, es identificada por su reconocimiento público e institucional más que por el ejercicio

5 Jelin. *Óp. Cit.*, p. 40.

6 *Ídem.*

7 *Ídem.*

8 Enzo Traverso. *El pasado instrucciones de uso. Historia, memoria, política.* Barcelona: Marcial Pons, 2007, p. 48.



que de ella realice la fuerza estatal, contrario a lo planteado por Jelin. Sin embargo, los dos comparten la idea de que las memorias oficiales o fuertes tienen como función la de someter o eliminar las memorias contra-hegemónicas o memorias débiles.

Paul Ricoeur también parte por considerar a las memorias oficiales como las agenciadas por el Estado y sugiere que uno de los papeles de la historia crítica en oposición a la historia oficial, es el de señalar a la memoria oficial y a la producción de sentido que desde allí se hace, sus olvidos, omisiones y resultados de ella. Por tanto, considera que "...lo que está en juego en este punto es la identidad que trata de justificar la historia oficial (...) lo más difícil no es contar de otra manera o dejarse contar por otros, sino contar de otra manera los acontecimientos fundadores de nuestra propia identidad colectiva, principalmente nacional"⁹. Se desprende de éste enunciado la necesidad de construir diferentes narrativas sobre el pasado que permitan redefinir la construcción de nuevas formas de identidad colectiva de carácter diverso, de una identidad plural.

En el agenciamiento que realiza el Estado por medio de la memoria/historia oficial, éste determina las reglas, las condiciones de uso e inclusive las condiciones de existencia de ella, la institución de un origen, que legitima la derrota de "los otros", los vencidos. A este respecto manifiesta Ricoeur que:

Es un hecho que no existe comunidad histórica que no haya nacido de una relación que



se puede llamar originaria con la guerra. Lo que celebramos con el título de acontecimientos fundadores, son en lo esencial actos de violencia legitimados luego por un Estado de Derecho precario, legitimados en último término por su antigüedad misma, por su vetustez. Los mismos acontecimientos significan para unos la gloria, para otros la humillación (...) Así es que encuentran guardados, en los archivos de la memoria colectiva, heridas reales y simbólicas¹⁰

Las otras memorias, las memorias divergentes, están presentes en la ausencia, en el silenciamiento e invisibilidad de la memoria oficial. Las heridas abiertas de los pueblos o colectivos humanos vencidos o en resistencia, son la condición que hace posible una permanente emergencia de otras memorias, que con su fuerza reivindicativa, reeditan el combate por el sentido del pasado, la necesidad de combatir por la memoria.

9 Paul Ricoeur. *La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido*. España: Arce, 1998. p. 48.

10 Paul Ricoeur. citado por Carlos Demasi. "Entre la rutina y la urgencia". En: JELIN, Elizabeth. LORENZ, Federico Guillermo. (Comp.) *La escuela elabora el pasado*. Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2004, pp. 133-134.





Otras memorias

En la delimitación del concepto de memoria oficial realizado en el apartado anterior, se hizo evidente, como éste, a su vez está constituido por sus correlatos: memorias (Jelín), memorias débiles (Traverzo), historia crítica (Ricoeur), que se pueden complementar con otras denominaciones, contra-memoria (Nora¹¹, Foucault¹²), contra-memoria crítica (Cuesta¹³), memorias disidentes (Gnneco y Zambrano¹⁴), contra-historia desde abajo (Wachtel¹⁵), nominaciones que permiten evidenciar la presencia y potencia de otras memorias en la disputa por los sentidos del pasado, en antagonismo a la memoria oficial.

Contra - historias

El nodo central de tensión en el debate entre memoria oficial y otras memorias es el de la legitimidad de la historia, su uso para oficializar un régimen de verdad sobre el pasado y la subordinación de la memoria a dicho objetivo; por ello, las postulados que pretenden abrir la perspectiva del pasado en el marco de la memoria, y la apertura al reconocimiento social de una multiplicidad de sentidos del pasado, parten de tomar distancia crítica de la historia y la relación y uso que ésta hace de la memoria: “Como Memoria e Historia no están separadas por barreras insalvables, sino que interaccionan permanentemente, surge una relación privilegiada entre las “memorias fuertes y la escritura de la historia. Cuanto más fuerte es la memoria —en términos de reconocimiento público e

institucional-, más el pasado de la que es vector deviene susceptible de ser explorado y elaborado como Historia”¹⁶.

Desde hace varias décadas en el mismo seno de la historia surgieron y se consolidaron tendencias que desde una perspectiva crítica, generaron alternativas para contrarrestar el efecto homogenizador y la pretensión de un relato único, unívoco y excluyente sobre el pasado, en el que la memoria es usada, tan solo como un recipiente de información para el historiador; es el caso de las historias desde abajo y particularmente la historia oral que tiene como uno de sus objetivos, otorgarle a la memoria colectiva un lugar alternativo frente a la historia, en un sentido contra-hegemónico, que haga emerger múltiples versiones del pasado desde el lugar de los grupos y pueblos subalternizados:

El uso que le han dado los historiadores a la memoria parece ser, en primera instan-

11 Pierre Nora. *Les lieux de mémoire*. Paris: Gallimard, 1997.

12 Michel Foucault. *Microfísica del poder*. Madrid: La piqueta, 1991.

13 Raimundo Cuesta. *Los deberes de la memoria*. Barcelona: Octaedro, 2007.

14 Cristóbal Gnecco y Marta Zambrano. *Memorias hegemónicas, memorias disidentes el pasado como política de la historia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, 2000.

15 Nathan Wachtel. “Memoria e historia”. En: *Revista Colombiana de Antropología* (Bogotá). Vol. 35, (Ene. / Dic. 1999), pp. 70-90.

16 TRAVERSO, Enzo. *El pasado instrucciones de uso*. Óp. cit., p. 55.



cia, documental: busca obtener información de testigos vivos para complementar o incluso para reemplazar los datos proporcionados por las clásicas fuentes escritas. Pero, de hecho, este recurso a una nueva técnica va más allá del simple interés por la documentación. Implica el cuestionamiento de la historiografía oficial que tiende a darle un lugar privilegiado a los actores dominantes de la historia. De lo que se trata es de salvar el mundo de la gente común –los dominados– del olvido, con la ayuda de testimonios orales [...] De este modo, uno de los propósitos de la historia oral es elaborar una contra-historia desde abajo, y reconstruir la versión del “conquistado” –minorías étnicas o culturales, mujeres o trabajadores-¹⁷.

Las contra-historias, por tanto, se constituyen en formas de constitución identitaria de los colectivos sociales subalternizados, que encuentran en ellas un lugar de lucha, una opción para deslegitimar las historias oficiales, las versiones hegemónicas de los “vencedores”, haciéndose necesario replantear entonces las múltiples relaciones que se pueden establecer entre historia y memoria:

... no hay una manera única de plantear la relación entre historia y memoria. Son múltiples niveles y tipos de relación. Sin duda, la memoria no es idéntica a la historia, aun (y especialmente) en sus tergiversaciones, desplazamientos y negaciones, que plantean enigmas y preguntas abiertas a la investigación. En este sentido la memoria funciona como estímulo en la

elaboración de la agenda histórica. Por su parte, la historia permite cuestionar y probar críticamente los contenidos de las memorias, y esto ayuda en la tarea de narrar y transmitir memorias críticamente establecidas y probadas¹⁸.

Actualmente el desafío para la historia y la memoria, es el de constituir lazos críticos que les permitan un debate fluido sobre los sentidos que se construyen del pasado y la disputa que se establece por instituirlos como parte de la construcción de las identidades de los pueblos. Así mismo, el reto es el de abrir la memoria como un campo fecundo, en permanente reelaboración, que responda a las inquietudes que surgen cada presente.

Memorias disidentes

Así como en el seno de la historia se impulsa el debate de la legitimidad de las historias y memorias oficiales, en las perspectivas y tendencias de pensamiento poscolonial y decolonial se denuncia la sujeción epistémica del pensamiento en el continente americano a los sistemas de conocimiento occidental, teniendo como consecuencia que otras concepciones de mundo y de realidad hayan sido invisibilizados y calificados bajo denominaciones peyorativas, tales como, no civilizadas, bárbaras, salvajes e irracionales.

17 WACHTEL. Óp. cit., p. 72.

18 Elizabeth Jelin. Los trabajos de la memoria. Óp. cit., p. 75.





La carga negativa atribuida por el occidente moderno a otras formas de pensamiento no occidentales, es producto de la herencia colonial, en el que la Historia jugó y juega un papel determinante en el proceso de conquista y de imposición del mundo simbólico que sustenta la subalternización de los pueblos dominados:

La historia impuesta por los colonizadores no borra, simplemente, la historia de los colonizados. Lo que la historia colonial hace es mucho más perverso (y efectivo): distorsiona, confunde, agrupa. El colonialismo no destruye tanto como construye; esa construcción es insidiosa y, ciertamente, más efectiva que la simple destrucción. El universo simbólico de las historias conquistadas nunca es el mismo después de la intervención de la máquina colonial. Las disciplinas históricas profundizaron este proceso¹⁹.

Cristóbal Gnecco y Martha Zambrano abordan el debate de historia y memoria como un enfrentamiento directo entre los que trabajan por la construcción colectiva de una memoria común de los pueblos, a los cuales su pasado les ha sido distorsionado por una memoria oficial instituida o “hegemónica”, y quienes haciendo frente a ésta, tratan de preservar un pasado

común, local, particular y alternativo a los procesos históricos nacionales.

Esta tensión hace evidente una pugna entre dos tipos de protectores del pasado; por un lado, los que defienden unas memorias hegemónicas que tienden a estimular una dominación política encaminada a la aprensión y apropiación de versiones del pasado conjuntas y homogéneas, por medio de dispositivos legítimos como la historia en el que: “la dominación política, requiere de la historia y de la memoria,[...] expresada en la imposición de versiones particulares o parciales como universales y comunes en la oclusión, exclusión y silenciamiento del sentido vivido del pasado de los grupos subordinado, pero también en su colonización y expropiación [...] y domesticación”²⁰, y de otra parte, aquellos que se aferran a la construcción y conservación de un tipo de “memorias disidentes”, que permiten la preservación de la diversidad en la reconstrucción del pasado, en el que los actores de los grupos subalternizados, participan intensamente en la construcción de la memoria y la historia pues: “en la batalla por la definición de la historia también participan activamente dominados y subalternos con proyectos de

19 Cristóbal Gnecco y Carolina Hernández. La historia y sus descontentos: estatuas de piedra, historias nativas y arqueólogos. Artículo aceptado para la publicación en *Current Anthropology*. 2007, p. 2.

20 Cristóbal Gnecco y Marta Zambrano. Memorias hegemónicas, memorias disidentes el pasado como política de la historia. *Óp. cit.*, p. 12.



contestación, inclusión y descolonización. Esta confrontación sitúa las relaciones de poder como terreno privilegiado para la definición, circulación y transmutación de la memoria”²¹.

La perspectiva decolonial abre el espacio a la memoria, impulsa la apertura y expansión de distintas narrativas y sentidos del pasado, favorece la diversificación de los lugares de la memoria, en el que las huellas del pasado no solo están en los restos arqueológicos o en los documentos de los archivos, que son tradicionalmente utilizados para darle base empírica a la disciplina histórica, si no en otras superficies materiales y simbólicas, como voces de otras memorias:

...la voz del pasado tan limitada a los documentos de archivo y a las excavaciones empieza a hacerse oír desde rincones nuevos: la arquitectura, el cuerpo, la autobiografía, el paisaje y la ritualización. De esta manera la naturaleza del texto histórico se amplía dramáticamente. Esta concepción expandida no solo pone al desnudo la hegemonía de occidente con sus dispositivos de memoria y olvido si no también los contextos sociales en los que ocurre la construcción de sentido histórico²²

A partir de la perspectiva decolonial el desafío que se presenta a las ciencias sociales y de manera particular a la historia, en su vínculo fundamental con la memoria, reside en poner en suspenso los contextos y las formas en las cuales ha sido constituida una forma oficial de la memoria. Esto constituye un parámetro primordial para

la apertura de debates que tengan como centro los contenidos y las prácticas tradicionales de institucionalización, de un tipo de memoria y de percepción del pasado. Del mismo modo, se busca favorecer procesos de reconstrucción del pasado desde miradas propias, incluyentes y con una presencia constante de múltiples luchas, que fortalezcan y nutran constantemente estos trabajos de memoria.

La literatura como lugar de otras memorias

El papel de la historia anclada en sus referentes disciplinares, como se ha señalado anteriormente, es el principal lugar de tensión en la discusión con la memoria, sosteniendo una constante tensión con otras formas de hacer historia o de narrar el pasado. En contraste, las otras memorias, cuyos fines se orientan hacia la recuperación de elementos excluidos del relato predominante instaurado por las tendencias tradicionales de investigación histórica y de las formas de hacerla pública, ponen en cuestión nuevamente uno de los aspectos más discutidos y recurrentes en la producción historiográfica, tal y como, el de la naturaleza de la narrativa en dicha producción. Presentándose, de igual modo, dicha tensión al interior de la historiografía, así lo evidencia Peter Burke: “en la historiografía al igual que la historia parece repetirse – con variantes-

21 Ídem.

22 Ibid. p. 13.





Mucho antes de nuestra época, en el periodo de la Ilustración, la hipótesis de que la historia escrita habría de ser una narración de acontecimientos fue ya objeto de ataques. Entre sus atacantes se contaban Voltaire y el teórico social escocés Jhon Millar²³.

Las pugnas y debates acaecidos por la forma de narratividad o la ausencia de ésta en el modo de escribir la historia, ha conllevado a ampliar la gama de posibilidades desde las que el historiador confronta y expone los múltiples recursos y referentes que utiliza y ha generado por lo menos dos formas de abordar el quehacer histórico: el análisis estructural y la descripción de los acontecimientos.

Uno de los debates entre tales tendencias se sitúa en el lugar de la literatura, quizá por ello, cuando Burke se ubica en esta discusión, señala cómo los historiadores han considerado el papel de la narrativa en la dimensión literaria como una opción fútil o poco seria para la historia, pues la historia “No se interesa por la cuestión de si se ha de escribir o no en forma narrativa, sino por el problema de en qué forma narrativa se ha de escribir”²⁴. Además, el uso del juego temporal aportado por la narrativa literaria, representa en este escenario un reto para los historiadores, en tanto que, el tiempo es un factor de la intimidad de la historia y en cierta forma es el elemento que le da la estructura al relato y a la explicación histórica, mientras que en el terreno de la literatura, la descomposición de la continuidad temporal se constituye en una dimensión compleja pero innovadora, lo que permi-



tiría elucidar nuevas posibilidades para la narración histórica.

Como lo resalta Burke, algunos escritores modernos han descollado sus virtudes en el campo literario de acuerdo a sus experimentos, tales como la posibilidad de hacer más inteligibles las guerras civiles y otros conflictos²⁵; Así mismo, se da la necesidad para los narradores históricos de hacerse visibles en sus relatos “no por complacencia consigo mismos sino a modo de advertencia al lector de que no son omniscientes o imparciales y que también son posibles otras interpretaciones además de la suya”²⁶; llamando la atención a que “un nuevo tipo de narración podría abordar mejor que el antiguo las demandas de los historiadores estructurales, dando una sensación mejor del fluir del tiempo que la que suelen dar por lo general sus análisis”²⁷. No obstante, con cierto recelo los historiadores transitan hoy por el campo de la literatura.

23 Peter Burke. “Historia de los Acontecimientos y Renacimiento de la Narración”. En: BURKE, Peter y otros. *Formas de hacer historia*. Madrid: Alianza Editorial. 1993, p. 287.

24 *Ibid.* p. 293.

25 *Ibid.* p. 295.

26 *Ibid.* p. 296.

27 *Ibid.* p. 297.



Este desplazamiento invita a plantear una relación diferente entre literatura y la historia. Ya que no se trata de un estado de subordinación donde el papel de la literatura se limita a su uso instrumental, es decir, como herramienta para la historiografía. Reside en un vínculo equilibrado de complementariedad, buscando difuminar la línea que separa estos discursos narrativos que comparten un mismo referente, el ser en el tiempo.

El encuentro con este referente busca el acto de representar la percepción de realidad y dar sentido simbólico a la temporalidad. Hayden White retomando a Paul Ricoeur afirma que: “las narrativas históricas se parecen a las narrativas ficcionales, pero esto nos dice más sobre las ficciones que sobre las historias. Lejos de ser la antítesis de la narrativa histórica, la narrativa ficcional es su complemento y aliado en el esfuerzo humano universal por reflexionar sobre el misterio de la temporalidad”²⁸. Esta perspectiva ubica a la literatura como expresión y representación plausible de la realidad, desarrollando versiones sobre el acontecer humano; de esta forma encontramos en las manifestaciones literarias (y artísticas en general) la posibilidad de materializar las percepciones temporales, que se convierten en activadores del recuerdo y por ello son lugares materiales de la memoria, que al pasar al escenario de lo público se convierten en referentes de una memoria colectiva.

De esta forma se asume la literatura como lugar de memoria, pues ésta cuenta con la posibilidad de convertirse en un referente tangible y simbólico, representado

en unas condiciones de mixtura entre lo real y lo ficcional. La relación que la literatura guarda con la memoria es posible determinarla principalmente de acuerdo a un eje transversal: el tiempo, ya que del sentido del pasado que logre representar una obra literaria, se constituye en una posibilidad de evocar a través de ella.

Una particularidad del acto de recordar mediante la literatura es la co-presencia de los momentos, que dentro de la estructura temporal (pasado-presente-futuro) brindan la posibilidad de recrear mediante una opción estética. Es así como, el sentido del pasado logra presentizarse, tal como lo afirma Pablo Dema siguiendo los postulados de Ricoeur:

La imagen mental que es un recuerdo no se confunde con un producto de la imaginación (el cual es producto del fantasear) sino que es la presentización de algo que ocurrió realmente. La memoria nunca abandona su vocación de fidelidad y le desagrada que la verdad que busca se confunda con lo imaginario. Pero al mismo tiempo que es del pasado, el recuerdo se actualiza, es parte del ahora en el que comparece en la mente. Pero sigue siendo del pasado a la vez que está presente como imagen actual²⁹.

28 Hayden White. *El Contenido de la Forma. Narrativa, Discurso y Narrativa Histórica*. Buenos Aires: Ediciones Paidós. 1992, p. 190.

29 Pablo Dema. “El relato literario y la memoria colectiva”. En: *Revista Borradores*-Vol. VIII-IX año 2008. Universidad Nacional de Río Cuarto: <http://www.unrc.edu.ar/publicar/borradores/Vol8-9/pdf/Elrelatoliterario-y-lamemoriacolectiva.pdf>. p 2.





Otras memorias sobre la violencia en Colombia

Memoria gaitanista de la violencia

Para la reconstrucción de la memoria gaitanista sobre de La Violencia, se estableció como marco de referencia temporal el periodo comprendido entre 1945 a 1948, debido a que es durante este periodo cuando el movimiento gaitanista se consolida, con la primera candidatura presidencial de Gaitán y se debilita por la muerte de su líder en 1948. Además de ello, los documentos en los cuales los gaitanistas narran hechos de violencia, localizados en el diario Jornada y el archivo personal de Jorge Eliécer Gaitán, se centran en estos tres años.

El movimiento gaitanista ubica el inicio de la Violencia en Colombia en el año de 1945, cuando sus seguidores son víctimas de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas; por lo cual, durante el periodo 1945-1948 no hablan de una Violencia bipartidista, sino de Violencia oficial en contra de un movimiento popular. Ello se encuentra disperso en las denuncias que los seguidores de Gaitán envían a través de cartas y telegramas, algunas veces publicados en el órgano de difusión periodístico del movimiento, otras en sus reportajes. Denuncias que dan cuenta de hechos de "Violencia Oficial" en los once departamentos, las cuatro intendencias y en las seis comisarías en las que se encontraba dividido el país para la época.

Los relatos de los seguidores del movimiento gaitanista sobre choques o



ataques, entre colectividades políticas y fuerzas institucionales; se esfuerzan por presentar a los gaitanistas como víctimas, caracterizando el periodo de 1945-1948, no cómo momento de gestación de la tensión social para la ulterior explosión del conflicto armado, entre grupos irregulares de los dos partidos, (como tradicionalmente se caracteriza), sino cómo un proceso de persecución oficial al movimiento gaitanista. De esta forma el discurso y la memoria gaitanista, emergen como fuentes generadoras de debate para la historiografía de La Violencia en Colombia entre los años de 1945-1948.

Por lo tanto, la labor de analizar y describir el discurso gaitanista sobre hechos de violencia, se constituye en un esfuerzo por reconstruir otras memorias, en pro de la construcción del espacio público para la discusión entre los distintos actores en busca de la reconciliación. En nuestro país ello no ha sido posible debido a que:

Ni siquiera hay un esfuerzo de recuperación de la memoria de las víctimas identificando sus nombres, un sitio para enterrarlas, un monumento para recordarlas. Todo parecería como si el único muerto reconocible por su nombre fuera Gaitán, o como si todos los demás, los 200.000, se diluyeran en él. Gaitán, símbolo de la



unidad del pueblo en la plaza, en la acción política, es también el símbolo de la unidad en la muerte. En cierto modo, la memoria de Gaitán personifica, y al mismo tiempo anula, la memoria de los demás³⁰.

Los gaitanistas al ser parte un movimiento populista en pugna por el poder, entendieron el fenómeno de la Violencia 1945-1948 como un proceso de eliminación sistemática de sus cuadros organizativos, llevado a cabo por los dirigentes y simpatizantes de las fuerzas contendoras en la dinámica electoral: el liberalismo oficial, el partido conservador oficial y el disidente. En esta dinámica no solo serían responsables de la violencia los antes citados, sino que al estar el oficialismo conservador en el poder, serán también incriminados los miembros de las fuerzas militares y de la iglesia.

De esta forma, la publicación de la denuncias en diario Jornada era promovida como herramienta de legitimación de la oposición del gaitanismo al gobierno nacional y al oficialismo liberal, en la medida en que respalda las acciones directas no violentas llevadas a cabo por Gaitán para denunciar las mismas, tales como marchas, mítines y memoriales de agravios, ante el gobierno. En este proceso la mayor parte de las comunicaciones eran la antecala para la realización de marchas multitudinarias en contra de la Violencia o para la realización de comicios electorales, en donde el gaitanismo se presentaba como sector disidente del partido liberal. Por esta razón, las denuncias no solo pueden ser analizadas como hechos fácticos, sino

también como componentes esenciales del proyecto de salvación, promovido por el discurso populista del gaitanismo, demandas inmersas en una dinámica de estrategias políticas en aras del acceso del movimiento al poder del Estado.

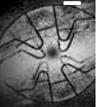
Desde el punto de vista de Laclau³¹ se puede afirmar que para consolidar su entrada a la esfera del Estado, el gaitanismo diseñó como movimiento populista, una estrategia de construcción de equivalencias entre demandas particulares sobre hechos de violencia, homogenizando las demandas a través de la publicación en una primera instancia de las particulares (telegramas), la consolidación de los puntos en común entre éstas (reportajes) y la constitución de referentes simbólicos generales (pueblo perseguido, barbarie oligárquica), a través de los memoriales expuestos por Jorge Eliécer Gaitán al gobierno nacional. Ello permitió la inserción de un componente dentro del discurso de salvación del movimiento gaitanista: la eliminación de la confrontación armada entre facciones políticas y fuerzas oficiales.

En este contexto la memoria gaitanista reporta una periodización de la Violencia distinta a la de la historiografía tradicional. Mientras que para la historia la Violencia en Colombia inicia en 1948 antecedida por un clima de gestación de tensión social de 1930 a 1948, para el movimiento gaitanista la Violencia en Colombia inicia en 1945

30 *Ibid.* p. 96.

31 Ernesto Laclau. *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2005.





como fenómeno de persecución de sectores institucionales a sus seguidores.

La dinámica de producción de los relatos sobre la Violencia por parte de los gaitanistas, se relaciona con la constitución de una línea divisoria entre la población, a la que sus demandas no son atendidas, y las fuerzas oficiales. En este proceso se pretende constituir el gaitanismo como movimiento que encarna la representación total de sectores descontentos con la administración conservadora, donde los seguidores de Gaitán serán la garantía de la reconstrucción del orden social perdido a causa del conservatismo.

Memoria de la violencia en la literatura

La literatura como forma narrativa se convierte en superficie de emergencia de otras memorias, de otras formas de percepción y expresión, que presenta de manera tangible en el escenario de lo público, otra posibilidad para la construcción de la memoria colectiva. Justamente “La indagación por la memoria nos conduce a sus usos sociales y a los modos en que, en la sociedad la memoria se torna en un campo de conflictos y resistencias, en escenario de dolor y pérdida, en conjunto social frente a la irrupción generalizada de la violencia”³². De esta manera, se concibe a la literatura como marco en el cual se configura una construcción de narrativas que operan desde diferentes niveles de realidad que: “... implica ver por un lado, el esquema dentro del cual encuadran su visión de la realidad, y por otro, el grado de complejidad de las técnicas y recursos

narrativos que utilizan para plasmar tal visión de la realidad”³³.

El periodo denominado por el relato histórico hegemónico como la Violencia en Colombia, generó gran conmoción e impacto en los habitantes tanto del escenario urbano como rural, ocasionando una gran producción de trabajos en el campo artístico que expresan diversas formas de percibir la Violencia; los géneros literarios, la pintura³⁴ y el cine son muestra de dichas percepciones de la realidad a nivel macrosocial.

En un momento inicial, la literatura se presenta como herramienta narrativa primaria. Los testigos directos de la Violencia acuden masivamente a ésta como medio que les permite manifestar sus vivencias y testimonios, aunque literariamente sus obras no sean resaltadas debido a la ausencia y desconocimiento del uso de técnicas literarias.

El tardío movimiento de la literatura en nuestro país revela la dificultad que presentan los autores que para la época, recurren al uso de géneros literarios como la novela, sin tener en cuenta la importancia e influencia de adquirir un fortalecimiento crítico frente a los acontecimientos y a su

32 Pilar Riaño Alcalá, Suzanne Lacy y Olga Cristina Agudelo. *Arte, memoria y violencia, reflexiones sobre la ciudad*. Medellín: Corporación Región, 2003. p 7.

33 Laura Restrepo. Niveles de realidad en la literatura de la “violencia” colombiana. p 127. En: *Once Ensayos sobre la violencia*. Fondo Editorial CEREC Publicado por Centro Gaitán, 1985.

34 Obras pictóricas como la de Débora Arango se constituyen en representativas frente a las imágenes plasmadas sobre la época denominada como “la violencia en Colombia”.



relación con la ruta artística; ello no resta valor a su aporte para la construcción de la memoria colectiva:



Con la “Violencia” parece suceder algo diferente: a partir de su misma irrupción desata un fenómeno literario colectivo; inmediatamente comienzan a escribirse panfletos y novelas que le siguen los pasos a su desarrollo denunciando, dando voces de alarma, rindiendo testimonio. Es innegable que, desde un punto de vista estrictamente literario es deficiente por lo general, esta literatura inicial de la “Violencia”; pero también es evidente que tiene el gran interés de ser una respuesta literaria masiva que surge a la luz de los propios acontecimientos plasmándolos en vivo; quizás por primera vez en Colombia la literatura, en forma generalizada, se integraba a la realidad, desenvolviéndose paralelamente con los hechos. Los primeros novelistas de la “Violencia” son actores directos en ésta, juegan en ella el papel de testigos presenciales y la juzgan a través de sus obras³⁵.

Recurrir a las formas narrativas de la literatura fue un foco que permitió a muchos autores manifestarse frente al fenómeno de la Violencia, caracterizándose éste como uno de los temas más retomados en la producción literaria. Algunas de las obras que podemos reseñar son las siguientes: “9 de abril” de Pedro Gómez Corena, “Los olvidados” de Alberto Lara Santos, “La calle 10” de Manuel Zapata Olivella, “el día del odio” de José Osorio Lizarazo, “El cristo de espaldas” de Eduardo Caballero Calderón y “Las gue-

rrillas del llano” de Eduardo Franco Isaza, entre otras y que evidencian una significativa producción en el contexto del proceso de la Violencia en Colombia

Al proponerse en el ámbito de lo público, el resultado de esta oleada de producciones literarias, revela masivamente multiplicidad de relatos sobre la Violencia, sus sentidos y significados que se expresan a partir de la experiencia vivida. El papel del arte encarnado en la obra literaria tiene una carga de carácter simbólico que interpretado a través de la acción creativa, y al ponerse en juego con los sucesos eminentemente violentos desde el rol de quien observa, generan pautas que activan y recrean el uso de la memoria colectiva.

De esta fase inicial o narrativa primaria se pasa progresivamente a una reelaboración artística donde la literatura existente presenta una visión crítica de los diversos acontecimientos violentos, amplía lo anecdótico y testimonial hacia un juego estético y reflexivo, proponiendo una manera recreada del fenómeno que actúa como fuente de inspiración.

Es de resaltar que esta clasificación no es excluyente sino que intenta destacar

35 Laura Restrepo. “Niveles de realidad en la literatura de la ‘violencia’ colombiana”. p. 125. En: *Once Ensayos sobre la violencia*, Bogotá: Fondo Editorial Cerec. Centro Gaitán, 1985.





las características y condiciones temporales en las cuales se crea una producción expresiva ya que en la literatura de la violencia³⁶ se escribe casi al mismo tiempo de ocurridos los hechos, mientras que en la literatura sobre la violencia³⁷ se prolonga la experiencia y la percepción, el escritor no vive en la misma época sino que es después de lo sucedido que se elabora, “lentamente, los escritores se despojan de los estereotipos, el anecdotismo, superan el maniqueísmo y tornan hacia una reflexión más crítica de los hechos, vislumbrando una nueva opción estética y en consecuencia, una nueva manera de aprehender la realidad”³⁸.

Así entonces, se presenta un momento de ruptura en que emerge la necesidad de nutrir esas subjetividades, que al tener en cuenta esas otras dimensiones y referentes históricos amplían el espectro para la construcción de una más compleja elaboración y reelaboración artística.

El arte actúa allí como dispositivo y campo dinámico para la construcción de las representaciones sociales y activador de la memoria, incluyendo elementos que con frecuencia son excluidos en los insumos que conforman la memoria instituida. Es necesario establecer, en este punto, la salvedad frente a la posibilidad de evidenciar en algunos discursos literarios, la tendencia hacia la reproducción de la memoria oficial. Ello se refleja en el control que se puede ejercer sobre los discursos que circulan y que son manipulados con el fin de instaurar una única versión de realidad con pretensión de verdad.

La narrativa configurada a través de la literatura acerca de la Violencia se constituye en una multiplicidad de versiones que permanecen en lucha constante con la memoria reproducida desde los relatos denominados como oficiales y que pese a su condición de materialidad, aún se mantienen en escenarios ocultos.

✕

36 “Literatura de la violencia, la llamamos así cuando hay un predominio del testimonio, de la anécdota sobre el hecho estético. En ésta novelística no importan los problemas del lenguaje, el manejo de los personajes o la estructura narrativa, sino los hechos, el contar sin importar el cómo. Lo único que motiva es la defensa de una tesis”. Augusto Escobar Mesa. *Literatura y violencia en la línea del fuego*, Bogotá: Ediciones Fundación Universidad Central, 1997. P. 116.

37 “Literatura sobre la violencia. A- En esta novelística, la experiencia vivida o contada por otros, el drama histórico queda sujeto a la reflexión que se realice sobre él mismo, a la mirada crítica sobre la violencia que actúa como reguladora y a la vez como factor dinámico”. *Ibid.* p. 126.

38 *Ibid.* p. 114.



Así van los DESC¹

**Notas sobre la construcción del III Informe Alternativo
de las organizaciones sociales al comité del PIDESC²**

Ángel Libardo Herreño Hernández³



Página anterior.

- 1 Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
- 2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966). Ratificado por el Estado colombiano mediante la ley 74 de 1968.
- 3 Investigador del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA.

Este documento presenta de forma sintética la valoración que las organizaciones sociales, no gubernamentales y académicas hicieron frente al nivel de cumplimiento de las obligaciones que impone el PIDESC al Estado colombiano, en el marco del II Coloquio de Política Social y Derechos Humanos realizado a finales de octubre de 2008. Para ello se describirá primero el proceso social de construcción participativa del III Informe alterno al CDESC (del cual el II Coloquio es un momento importante de socialización), luego se hará una aproximación al contexto en el que se desenvuelve la política social bajo el mandato del Presidente Uribe Vélez, en tercer lugar se presentarán algunas lecturas alternativas sobre la situación de los derechos sociales a la educación y a la salud⁴ y, finalmente, algunas perspectivas del trabajo con los DESC.

El proceso social de construcción participativa del III Informe alterno

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituyen dentro del derecho internacional de los derechos humanos el conjunto de garantías y principios que permiten a los seres humanos vivir en condiciones de dignidad⁵ y bienestar

4 Por cuestión de espacio sólo se hará referencia a la situación de los derechos a la salud y a la educación que diversas organizaciones sociales y no gubernamentales han venido documentando para el III Informe Alterno. La idea con estos dos ejemplos es mostrar que el ejercicio propuesto de encontrar contra-argumentos para responder a la información oficial (tendenciosa por lo optimista en temas de ampliación de las coberturas) se ha venido logrando. Quienes deseen profundizar en la realidad de los demás derechos sociales pueden consultar el libro: “Así van los DESC”, en: www.plataforma-colombiana.org

5 El concepto de dignidad asociado a los DESC supera el ideal kantiano de que la persona humana es un fin y no debe convertirse en un instrumento o medio al servicio de nada ni de nadie. La dignidad en estos tiempos donde las lógicas del mercado ha convertido en mercancía los derechos sociales esenciales, el agua, los genes, el conocimiento tradicional, etc. metiendo estos recursos en el círculo de la escasez, que obliga a disponer de medios económicos para su acceso, debe concebirse en términos mundanos, terrenales e impuros como bien lo expresa el profesor español Joaquín Herrera: además de estar referida siempre al propósito de alcanzar la condición de humanidad, la dignidad supone lograr el acceso a bienes y servicios básicos, sin los que la vida decente es imposible. La lucha social e individual, en entornos de escasez y de discriminación, para acceder a los bienes necesarios para la existencia, cualifica de manera especial la idea de la dignidad: “(...) los derechos humanos serían los resultados siempre provisionales de las luchas sociales por la dignidad. Entendiendo por dignidad, no el simple acceso a los bienes, sino que dicho acceso sea justo y se generalice por igual a todas y a todos los que conforman la idea abstracta de humanidad. Hablar de dignidad humana no implica hacerlo de un concepto ideal o abstracto. La dignidad es un fin material. Un objetivo que se concreta en dicho acceso igualitario y generalizado a los bienes que hacen que la vida sea “digna” de ser vivida”. Véase: Herrera Flores, Joaquín (2005). “La complejidad de los derechos humanos. Bases teóricas para una definición crítica”. En Jura Pentium. Revista de filosofía del derecho internacional y de la política global. <http://www.juragentrum.unifi.it/es/surveys/rights/herrera/>





material. De esta manera, se configuran como límite ético que posibilita distinguir entre lo debido y lo inaceptable en una sociedad, y como indicador político de legitimidad y consolidación democrática. Un Estado que no garantiza niveles mínimos de bienestar social a sus integrantes no puede calificarse como democrático.

Los DESC como derechos humanos están concebidos como obligaciones jurídicas internacionales. Los propios Estados han creado órganos encargados de su verificación y cumplimiento entre ellos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC o Comité, en adelante) de Naciones Unidas, instancia encargada de evaluar cada cinco años el respeto, realización y protección de las obligaciones estatales con los DESC.

Esta valoración del CDESC se realiza a partir de la revisión de informes periódicos que los Estados están obligados a presentar a esta instancia de la ONU para dar cuenta del progreso que los derechos sociales han tenido en el quinquenio con sus políticas. Colombia ha presentado cinco informes, el último de ellos en enero de 2008⁶, mediante el cual refleja los avances y dificultades que en materia tanto normativa, judicial como administrativa se han evidenciado en cumplimiento del Pacto.

Paralelamente, el Comité ha solicitado a las organizaciones de la sociedad civil de los Estados Partes sometidos a examen, presentar informes alternos. Desde la presentación del informe de un Estado Parte, hasta su examen por el Comité, las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar cualquier tipo de información a

la Secretaría del Comité (recortes de prensa, boletines de ONG, cintas de vídeo, informes, publicaciones académicas, estudios, declaraciones conjuntas, etc.) con el fin de contrastar la información estatal o hacer visibles situaciones de violaciones a los DESC. Con base en toda la información incluida en cada expediente nacional (la estatal, la alterna y la de otras fuentes como agencias de la ONU), la Secretaría prepara para el Comité una descripción del país, dicho documento de trabajo tiene por objeto ahondar en la situación del Estado que se ha de examinar, a fin de completar la información presentada por el Estado Parte en su informe.

Se dice que las organizaciones sociales "... pueden presentar información en relación con uno, algunos o todos los artículos del Pacto, en cuyo caso será útil que se atengan a las Directrices revisadas relativas a la forma y el contenido de los informes que han de presentar los Estados Parte de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

6 República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. V Informe de la República de Colombia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bogotá, diciembre de 2007.



Aplicando esas directrices, podrán preparar un informe paralelo cuya estructura se asemeje a la del informe oficial, facilitando así, el examen comparado por los miembros del Comité”⁷.

Sobre estos referentes, las organizaciones de la sociedad civil en América Latina han ido acumulando experiencia desde 1990 en la presentación de informes alternos, que inciden directamente en las recomendaciones que emite el Comité a los Estados.

De acuerdo al V Informe de la República de Colombia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante V Informe), el Estado colombiano habría avanzado en un “mejoramiento de los indicadores de pobreza y de las condiciones de vida de la población, particularmente en materia de educación y salud, aspectos en los cuales se ha logrado una mayor oferta y cobertura”.

Para constatar y debatir estos avances y cumplimientos estatales con los DESC, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo⁸, el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (IPAZUD), la Universidad de la Salle y la Pontificia Universidad Javeriana realizaron el II Coloquio de Política Social y Derechos Humanos los días 29, 30 y 31 de octubre en Bogotá, con los siguientes objetivos:

- Estimular el conocimiento sobre el CDESC, los escenarios de monitoreo y seguimiento a las obligaciones estatales

y las posibilidades de la sociedad civil de participación en los mismos.

- Facilitar la metodología y el proceso de construcción participativa del III Informe Alternativo de la Sociedad Civil Colombiana al CDESC que permita incorporar las expectativas políticas y la información relevante sobre la situación de los DESC en el período 2000 – 2008.

En este evento participaron cerca de 700 personas provenientes de diferentes

7 Vera Millar, Dante. Los informes alternativos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Una guía para la acción. CEDAL – PIDHDD. Lima, noviembre de 2002. Pág. 67.

8 La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo es una confluencia o red de cerca de cien organizaciones sociales, no gubernamentales y académicas de la sociedad colombiana que trabajan por la promoción, exigibilidad y el respeto de los Derechos Humanos, en especial de los DESC. Busca incidir y promover acuerdos estratégicos entre los diversos actores sociales e institucionales para la construcción de un estilo de desarrollo basado en la profundización de la democracia y la vigencia integral de los Derechos Humanos. Se fundó en 1993 como parte de una iniciativa tendiente a trabajar sobre los principios establecidos en la Conferencia de Viena de 1993. Esta Conferencia hizo importantes aclaraciones y precisiones en torno a la aceptación del derecho al desarrollo y el carácter de integralidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Sobre esta base y aprovechando el espacio abonado por anteriores experiencias de coordinación, se creó un cuerpo autónomo que se amplió con organizaciones y redes interesadas en la temática. Es el capítulo nacional del proyecto regional Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo que intenta acercar los trabajos en desarrollo y derechos humanos en países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe donde también se han conformado capítulos nacionales de organizaciones comprometidas con las causas de los DESC. www.plataforma-colombiana.org





regiones del país, en representación de más de cien organizaciones sociales y no gubernamentales. Durante el Coloquio se deliberó en torno a 6 mesas temáticas por derechos y en 8 mesas por poblaciones. En cada uno de estos espacios de reflexión se sometió a debate la política social del Gobierno durante el período 2002-2008, escuchando para ello las posiciones de diferentes actores como el Estado (en la mayoría de mesas estuvo ausente), los organismos de control (sólo hicieron presencia en 3 mesas), los movimientos sociales, las ONG y la academia.

La deliberación durante el Coloquio se organizó alrededor del libro “Así van los DESC” que fue preparado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y entregado a los asistentes. En este libro se recogieron los insumos o documentos preliminares al III Informe Alterno que diversas organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y académicas han escrito para responder a la información oficial sobre la situación de los DESC en Colombia y hacer un balance de las políticas sociales adoptadas en el periodo 2002 – 2008. De las discusiones del Coloquio se levanta-

ron relatorías con las propuestas de ajuste y complementación a que deben ser sometidos estos documentos que formarán parte del informe alterno.

Aprendizajes en la preparación y presentación de los informes alternos al CDESC

Entre 1990 y 1996 los informes alternativos al Comité se presentaron por iniciativa de redes internacionales como FIAN (Red Internacional de Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse) y la Coalición Internacional Hábitat que en alianza con organizaciones no gubernamentales de algunos países centroamericanos y del Caribe, sistematizaron información sobre la situación de derechos como la alimentación y la vivienda.

Gracias al estímulo de importantes eventos regionales de carácter académico y político en los que se promovió la difusión e intercambio de experiencias sobre la exigibilidad y la justiciabilidad de los DESC⁹, las redes regionales como la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PID-HDD), la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), el

9 Entre ellos: el Seminario “Los Derechos Humanos como Instrumentos para Combatir la Pobreza” realizado en Santiago de Chile, en el mes de septiembre de 1997 y organizado por ALOP y Terres des Hommes / Francia; y el encuentro latinoamericano sobre los DESC realizado en julio de 1998, que terminó con la Declaración de Quito acerca de la Exigibilidad de los Derechos Sociales y Culturales.



Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), entre otras, se encargaron de animar la tarea de preparar y presentar a través de sus capítulos o contrapartes nacionales los informes alternos ante el Comité.

Evalúa el especialista Vera que desde 1997 a la fecha han cobrado importancia y se han multiplicado los informes alternativos, contribuyendo a generalizar en la región, las estrategias de rendición de cuentas, de exigibilidad y vigilancia social de la ciudadanía. Incluso explica que se viene dando el caso que las redes nacionales de organizaciones sociales elaboran sus propios informes antes que el gobierno lo logre elaborar el suyo, como ha ocurrido con Brasil (2000) y Colombia (2001).

La experiencia del movimiento social colombiano

El Comité ha examinado el cumplimiento del Pacto por parte del Estado colombiano a partir de la información del gobierno y de información alterna aportada por diferentes organizaciones en el año 1995¹⁰ y otra coordinada desde la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en el año 2000¹¹.

Al igual que ha ocurrido en otros países latinoamericanos donde se han organizado informes alternos, en Colombia la preparación de algunos temas incluidos en los informes alternos presentados al Comité ha estado a cargo de algunas organizaciones no gubernamentales, insti-

tuciones o expertos/as especialistas en el trabajo con los DESC. Si bien los dos últimos informes alternos presentados se han coordinado por la Plataforma Colombiana que ha convocado de manera amplia a las organizaciones sociales y ONG a participar de su elaboración¹², al no existir ni en la ciudadanía ni en el movimiento social mayor conocimiento sobre la importancia

10 Se hace referencia al Tercer Informe Periódico de Colombia (E/1994/104/add.2), examinado en el Décimo Tercer Período de Sesiones del Comité, realizado durante los días 21 y 22 de noviembre de 1995. En 1995 aportaron información alterna al Comité las organizaciones de Madres Comunitarias, la Comisión Colombiana de Juristas y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

11 Se hace referencia al examen del Cuarto Informe del Estado colombiano realizado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cfr. Informe sobre los Períodos de Sesiones Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo (23 de abril a 11 de mayo de 2001, 13 a 31 de agosto de 2001 y 12 a 30 de noviembre de 2001). E/2002/22, E/C.12/2001/17

12 Por ejemplo para realizar el informe alterno presentado en octubre de 2000, la Plataforma Colombiana estableció un Comité Pedagógico, encargado del trabajo amplio de difusión y educación en torno a los derechos, y un Comité Académico, con la función de llevar a buen término el Informe Alterno. Para cumplir con las exigencias de rigor en la información, pluralidad en las fuentes y participación de las organizaciones sociales, la Plataforma Colombiana realizó una serie de talleres, seminarios, publicaciones y consultas, entre ellos el “Coloquio la política social y los derechos económicos, sociales y culturales en los noventa. Balance y perspectivas”, realizado en Bogotá los días 6, 7 y 8 de octubre de 1999. Se llevaron a cabo además múltiples talleres y seminarios donde se pudo discutir en torno a los avances y retrocesos en los derechos. Cfr. PCDHDD. Informe Alterno Al Cuarto Informe del Estado Colombiano ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Período: 1995-2000. Bogotá, octubre de 2001, pág. 4. www.plataforma-colombiana.org



política de esta herramienta¹³, la labor de recaudar información e interpretarla, de mostrar algunos casos emblemáticos de violaciones a los DESC, etc., quedó a criterio de algunas personas e instituciones con trayectoria en la investigación y el trabajo con estos derechos.

Lo anterior se refleja también en el tipo de recomendaciones que ha emitido el Comité para el Estado colombiano. Las recomendaciones son el resultado de la información presentada, lo que quiere decir que responden al análisis propuesto, a la fundamentación, a los énfasis puestos y a las fuentes consultadas. Se debe tener en cuenta que en los dos informes preparados bajo la coordinación de la Plataforma, la información incluida buscó dar cuenta de situaciones generales de violación de cada uno de los DESC consagrados en el Pacto e incorporar la diversidad de las actorías sociales, étnicas, generacionales y de género. Tal vez por esta estructura plural que se le ha dado a los informes alternos, las recomendaciones conseguidas reflejan la complejidad de las luchas y de las búsquedas del movimiento social en nuestro país.

Entre otros asuntos el Comité se ha pronunciado mediante sus recomendaciones al Estado colombiano sobre los siguientes temas y problemas: derechos de la población en situación de desplazamiento forzado; territorios indígenas; laboralización de las madres comunitarias; las discriminaciones contra las mujeres; tasa de desempleo; pérdida del poder adquisitivo de los salarios; violencia contra los sindicalistas; violaciones a las libertades sindicales;

violencia social; estado del derecho a la seguridad social y baja cobertura en los programas salud y atención al SIDA; situación de la niñez desprotegida, en la calle y vinculada al conflicto armado; mortalidad infantil y programas de vacunación; estado de los subsidios y planes de vivienda; derecho a la educación; cumplimiento de los DESC en el marco de los acuerdos y políticas de ajuste del Estado; conflicto armado, reforma agraria; situación del aborto; informes del Estado y difusión de las recomendaciones.

La no concurrencia de algunas organizaciones y sectores sociales a la elaboración de los informes alternos ha implicado que, por supuesto, la información que se ha logrado sistematizar y presentar al

13 Se debe decir que el Gobierno colombiano viene incumpliendo con dos elementales compromisos que le impone el PIDESC en cuanto a la información que debe reportar para ser examinado por el Comité: por un lado, ha incumplido la obligación de presentar a tiempo el informe oficial sobre el cumplimiento del PIDESC, por ejemplo, el Gobierno no presentó el Cuarto Informe dentro del período previsto, y sólo hasta el 4 de mayo del año 2000 radicó en la Secretaría General de las Naciones Unidas el informe respectivo. De otro lado, el Gobierno en aquella época tampoco dio cumplimiento al artículo 16 del Pacto, relativo a su obligación de consultar, divulgar y publicar el Informe antes de ser enviado al Comité. De hecho, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo debió presentar dos derechos de petición (el 9 de diciembre de 1999 y el 3 de marzo de 2000) ante la Cancillería de la República, la Consejería Presidencial para la Política Social, la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y adicionalmente una acción de cumplimiento el 31 de marzo de 2000 ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, para que le fuera suministrada la información sobre la presentación del Informe y copia del mismo.



Comité no siempre es la más idónea para hacer visible las preocupaciones y problemáticas que afectan al conjunto de las poblaciones y sectores sociales del país.

Sin embargo, esta debilidad debe ser debidamente ponderada. Ciertamente la preparación de los dos informes alternos ha sido un ejercicio de construcción colectiva, aprendizaje y participación que se han ido mejorando. En la medida en que los movimientos sociales e instituciones dolientes de algún derecho o de alguna problemática se responsabilicen de buscar la información pertinente y de analizarla, los informes que se presenten serán la expresión de procesos sociales de participación y, en esta perspectiva, de la diversidad de actores, de experiencias, de metodologías y de enfoques con que se entienden y se luchan los DESC.

La idea es precisamente que la elaboración de los informes alternos sea descentralizada, pluricultural y respetuosa de las diversidades. Sólo en la medida que se logre esto los informes se convertirán en una herramienta útil y movilizadora que proyecte las luchas sociales por los DESC.

De otra parte, el informe debe crearse con base en claros objetivos políticos de alcance nacional y en esta medida las eventuales recomendaciones que se consigan del Comité, se convertirán en motivos de movilización social. Visto el informe alterno como ejercicio de participación amplio, de intercambio político y desde las diversidades, se convierte en un mecanismo muy importante dentro de las estrategias de exigibilidad de los DESC.

El contexto de los DESC en Colombia¹⁴

El contexto político, económico y social que vive Colombia en el período 2002-2008, en el que ha gobernado Álvaro Uribe Vélez, es hostil a la vigencia de los derechos humanos integrales, pero muy particularmente la política de la Seguridad Democrática es regresiva en materia de los derechos sociales de la población.

Aunque las estimaciones disponibles para los países de América Latina indican que en 2007 un 34,1% (184 millones) de personas de la población se encontraba en situación de pobreza y la extrema pobreza o indigencia afectaba a un 12,6% de la población, es decir, 68 millones eran indigentes, la tendencia es a una reducción de estos indicadores desde 2002, con caídas que significaron 37 millones menos de pobres y 29 millones menos de indigentes en el año 2007, año en el que por el alza en los precios de los alimentos cerca de 4 millones de personas más no pudieron superar su situación de pobreza (CEPAL, 2008)¹⁵. Con ello América Latina se encontraba en camino de realizar la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

14 Este apartado se elabora con base en el análisis que el investigador y defensor de derechos humanos Alberto Yepes ha presentado en diferentes escenarios y en su documento: "Paz, derechos humanos y cooperación en el contexto del conflicto armado interno".

15 CEPAL. Panorama social de América Latina. Santiago de Chile, 2008.



Varios factores explican estos avances: el quinquenio pasado (2003-2007) se registró el mayor crecimiento del PIB por habitante desde los años setenta en América Latina, que superó el 3% anual. Sin embargo, la Región ahora espera un decrecimiento económico por efectos de la crisis financiera internacional que se verá reflejada en la menor demanda de los bienes que exporta América Latina, la disminución de las remesas de los migrantes y el limitado acceso al crédito.

Estos factores de reducción de la pobreza y dinamismo económico en Colombia tienen un escenario muy particular: el conflicto armado y la consolidación de un modelo económico mafioso, excluyente, depredador y especulativo. Los propósitos de la política de seguridad democrática del Presidente Uribe Vélez está basada en tres ejes: recuperación de la institucionalidad en todo el territorio nacional, la recuperación de la confianza inversionista y la cohesión social.

El primer eje implica ganar la guerra contra los grupos insurgentes y adherir a la población civil a la institucionalidad en todo el territorio nacional. Para ello se ha dedicado a fortalecer el poder bélico del Estado. Según un estudio reciente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano conducido por José Fernando Isaza y Diógenes Campos (2007)¹⁶ hoy en Colombia se gastan en la guerra 22,21 billones de pesos, o un 6,5% del Producto Interno Bruto, porcentaje mayor al de los Estados Unidos donde el gasto militar representa el 4,04% de su PIB al gasto militar y al de los países de la Unión Europea que hacen parte de



la OTAN, donde este gasto llega, en casos extremos, al 2% de su PIB. Este gasto en el componente militar de la seguridad democrática casi triplica el presupuesto invertido en salud y educación.

El segundo eje implica el crecimiento económico fundamentado en la protección y garantías exorbitantes a la inversión nacional y extranjera. Durante los últimos años el país ha experimentado un crecimiento económico importante que no se traduce en mejores condiciones de vida de la gente, es decir, es un modelo que tiende a la concentración de la riqueza y evita la redistribución. En 2007 la economía colombiana creció un 7,52% del PIB, la más alta en las 3 últimas décadas. El elevado crecimiento económico presentado por el país en los últimos 5 años ha sido presentado por el Gobierno como producto básicamente de la confianza generada entre los inversionistas por la

16 Isaza, José Fernando; Campos, Diógenes. Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia. Bogotá, 2007. Disponible en www.dhcolombia.info/spip.php?article461 - 23k



política de Seguridad Democrática, y las buenas medidas económicas del Gobierno. Sin embargo, este crecimiento es inferior al de otros países de la región Uruguay (7,6%), Panamá (9,5%), Perú (8,2%), o Venezuela (8,4%), países que se han alejado de las orientaciones neoliberales y han orientado sus economías al control soberano sobre sus recursos y la expansión del mercado interno y las necesidades básicas de la población.

Gran parte del crecimiento económico vivido en Colombia se explica por un contexto de expansión de la economía mundial hasta el año 2007, reflejado en altos precios de materias primas, en especial los combustibles, condiciones financieras favorables a nivel mundial jalonadas por el crecimiento desbordado del consumo en los Estados Unidos y la demanda creciente de materias primas por parte de China, la India y otras economías emergentes. El gobierno a través de múltiples garantías y desmedidos privilegios a la inversión extranjera ha logrado atraer nuevas inversiones¹⁷, especialmente para el sector energético, financiero y extractivo.

Juega un papel central en los “éxitos” económicos del gobierno los efectos de los negocios subterráneos de las mafias narco-paramilitares en el poder. Existe un ingreso masivo de dineros de las mafias narcoparamilitares a la economía legal producto de las condiciones en que se dio la negociación y el proceso de “desmovilización” con las estructuras criminales del paramilitarismo: las autoridades no han tocado su gran poder económico ni tampoco los mecanismos

de ingreso de estos capitales ilegales a la economía, a través de importaciones de bienes suntuarios, la construcción de inmuebles lujosos y el incremento de las remesas (cuando en los demás países vienen disminuyendo).

El tercer eje de la seguridad democrática, el de la cohesión social, se concreta en una política social basada en subsidios y en programas asistencialistas (familias en acción, familias guardabosques, banca de las oportunidades, subsidios a las personas de la tercera edad vulnerables, etc) focalizados en los sectores de población más pobres. Con lo cual se ha despojado la política pública de toda perspectiva de derechos para volverla una política minimalista generadora de clientelas adeptas al gobierno.

Modelo económico y conflicto interno

Mientras las economías basadas en la desregulación y la liberalización a ultranza han hecho crisis en casi toda América Latina, dando paso a gobiernos alternativos que defienden la intervención del Estado, la soberanía sobre los recursos naturales y la redistribución, en Colombia las políticas neoliberales que privilegian las inversiones extranjeras, las privatizaciones y la orientación externa de la economía se han

17 El gran incremento de la inversión extranjera directa (9.028 millones de dólares) por parte de las transnacionales se dio principalmente (61%) en el sector de minería y petróleo.



llevado más lejos que en cualquier otro país de la región.

Al lado de la imposición forzosa de un modelo productivo basado en la reprimarización de la economía, o sea, basada en la extracción de recursos naturales y en una agricultura de plantación (monocultivos para biocombustibles), actividades que han hecho crecer las inversiones privadas internas y de capitales multinacionales blindados por enormes privilegios, se sigue dando un preocupante proceso de exclusión social que alimenta el duro conflicto social y político que enfrenta el país. Más de la mitad de la población se encuentra privada de los bienes y servicios esenciales para existir, situación a la que se suma la degradación de la guerra que ha convertido a la población civil en víctima de masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en medio de una absoluta impunidad.

La impunidad se ha agravado en los últimos años con el ascenso de una mafia narcotraficante y paramilitar que con el pretexto de combatir el accionar de las guerrillas se consolidó como poder local y regional, ejerció el terror de manera sistemática sobre la población, practicó el despojo masivo de bienes y tierras a la población, cometieron unas 3,500 masacres entre 1982 y el 2005, desaparecieron a más de 15,000 colombianos, que sepultaron en unas 4,000 fosas comunes, y han asesinado a más de 1,700 indígenas, 2,571 sindicalistas y cerca de 5,000 dirigentes políticos de la izquierda. Cuatro millones de desplazados ha dejado el conflicto, y

se estima que los victimarios se han apropiado de unos 6 millones de hectáreas de tierra (Informe CCEE, 2008)¹⁸.

El paramilitarismo que desde fines de los años 80 había comenzado un intenso proceso de alianzas con las autoridades, militares, los empresarios regionales, los medios de comunicación y distintos sectores de los partidos políticos, pudo agruparse como movimiento unificado a finales de los años noventa y desde ahí brindar apoyo a la candidatura presidencial de Uribe Vélez en el 2002. Este apoyo del paramilitarismo al actual gobierno ha quedado probado política y judicialmente al establecerse que cerca del 35% de la representación en el Congreso fue elegida con apoyo de las fuerzas paramilitares y numerosos miembros de los nueve partidos de la coalición del gobierno se encuentran encarcelados o investigados por sus vínculos con el paramilitarismo¹⁹.

18 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario. Las ejecuciones extrajudiciales una realidad inocultable. Informe 2007-2008. Bogotá, 2008. Disponible en:

19 La legitimidad de la democracia se ve fuertemente cuestionada cuando más del 20% del Congreso está siendo investigado por pactos secretos con grupos ilegales, financiación de paramilitares, constreñimiento al elector y, en algunos casos, acusaciones de participar en masacres y secuestros. Los mismos votos con los que fueron elegidos los 51 congresistas que hoy están siendo investigados y los 28 que ya se encuentran en la cárcel representan el 11% de los votos válidos y el 18% de los votos con los cuales fueron elegidos los actuales miembros del Congreso. Estos mismos dirigentes aportaron su apoyo en votos para la reelección del Presidente de la República, con lo cual su mandato resulta igual de ilegítimo.



En función de los apoyos prestados por la mafia paramilitar, latifundista y narcotraficante al gobierno, la agenda política y económica del Estado se ha orientado a conseguir dos propósitos: la impunidad y la consolidación del poder económico de las elites paramilitares. El primer objetivo se ha ido alcanzando a través del “proceso de negociación” estructurado bajo la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) y otras normas, que dejan sin investigación y sin sanción penal alguna a la mayor parte de los miembros de grupos paramilitares, y a los jefes sólo los puede castigar con penas que en todo caso no pueden ser superiores a ocho años de prisión, descontando el tiempo de la negociación, penas irrisorias por los crímenes de lesa humanidad de los que son responsables. Tampoco se garantiza de manera cierta, en el marco de esta ley, los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas.

El segundo propósito, el de la legalización de la economía depredadora, excluyente y especulativa del proyecto paramilitar, se logra con una regresiva agenda legislativa para los derechos sociales y colectivos. Entre las leyes dictadas en este período se destacan:

- La ley de reforma a las transferencias (acto legislativo 01 de 2007): recorta el presupuesto para salud, educación y saneamiento básico a las administraciones locales entre 2009 y 2016. Se calcularon las sumas que perderán algunos entes territoriales así: Caldas: \$503.841 millones, Tolima: \$786.069 millones, Chocó: \$590.000 millones, Bogotá: \$4,6

billones, Barranquilla: \$863.000 millones, Antioquia: \$2,09 billones, Bolívar: \$924.000 millones, Nariño: 789.000 millones, Boyacá: \$1,01 billones, y Risaralda: \$260.000 millones.

- La ley de reforma laboral (ley 789 de 2002): profundizó las medidas de flexibilización laboral con el pretexto de aumentar el empleo, sin que ese resultado se haya alcanzado hasta hoy. Entre las medidas regresivas para los trabajadores se recortó el pago de la jornada nocturna y de los dominicales, eximió a los empresarios del pago de parafiscales por vinculación de nuevos trabajadores (en situación de vulnerabilidad, reinsertados, disminuidos físicos, mayores adultos o jóvenes), etc.

- El estatuto de desarrollo rural (ley 1152 de 2007): eliminó la institucionalidad que quedaba para la reforma agraria en el país, creó un marco jurídico favorable para la legalización de los títulos de propiedad de las tierras despojadas a los campesinos y etnias desplazados; recorta los derechos de autonomía territorial a los indígenas y afros, y generó las condiciones para un modelo empresarial del campo colombiano en el que no tiene cabida la economía campesina tradicional y, por lo mismo, tampoco reconoce los criterios de seguridad y soberanía alimentaria para el país.

- La ley aprobatoria del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia (ley 1143 de 2007): entrega el país



en subasta al poder de las transnacionales estadounidenses, volviendo mercancías los más elementales derechos sociales y colectivos de la ciudadanía.

El modelo económico quedó institucionalizado en el Proyecto Visión Colombia 2019 que describe las líneas estratégicas de largo plazo para una amplia reconfiguración económica, social y política del país, basada en una economía primario-exportadora de bienes agrícolas, energéticos y mineros, despreciando cualquier proceso industrial hacia adentro y algún desarrollo científico-técnico autónomo de la nación.

Paralelo al crecimiento de la economía depredadora (minera y petrolera) y de la economía mafiosa y especulativa, se ha venido presionando, vía liberalización, el sometimiento a la competencia con las economías externas y subsidiadas, el desmonte y debilitamiento de los más importantes sectores de la economía real y productiva, aquella que genera las mayores oportunidades de empleo y medios de subsistencia para la población de menores ingresos: la agricultura solo creció un 2,58%, los sectores textiles y de confecciones y la pequeña y mediana industria se encuentran en crisis producto de la elevada revaluación propiciada por el debilitamiento mundial del dólar pero agravada en Colombia por la entrada masiva de dineros ilegales y los incentivos a ingreso de capitales producto de los privilegios a la inversión y los altos rendimientos que obtienen los capitales en Colombia.

Políticas asistencialistas y retroceso de los DESC

El carácter excluyente del crecimiento se evidencia al comparar los elevados beneficios del sector financiero (4,01 billones de pesos durante el 2007) con las mencionadas pérdidas ocasionadas por la implementación de la reforma laboral o el recorte a las transferencias regionales para salud, educación y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados). Se evidencia la naturaleza excluyente del crecimiento económico al notar que mientras en el 2007 la economía se incrementó en un 7,52% el desempleo sólo disminuyó un 0,7%. La disminución de 5 billones por año en el monto de las transferencias significa una grave pérdida en la prestación de beneficios sociales por parte de los entes territoriales y su incapacidad para atender con criterios de universalidad y calidad las necesidades más elementales de más de la mitad de la población.

La política social se convirtió en política “pro-pobres”, los más pobres de los pobres y la concepción de los derechos universales para los ciudadanos fue sustituida por una concepción de subsidios condicionados y discrecionales para la población con mayores niveles de dependencia económica.

Como consecuencia, los pobres no solo reciben menos educación que el resto de la sociedad sino que la escasa educación que se les proporciona es de la peor calidad. Un estudio reciente de la Corporación Andina de Fomento muestra que en Colombia más del 80% del quintil



de mayores ingresos supera la educación secundaria mientras que solo el 26% del 20% de menores ingresos puede alcanzar el nivel de la educación secundaria completa. Si se tiene en cuenta que según la CEPAL, se necesitan como mínimo 12 años de educación para superar la pobreza, resulta claro que el sistema educativo en Colombia, en el que la calidad y cantidad de la educación a que puede accederse depende de la condición económica de las familias, actúa como un eficiente mecanismo de diferenciación social que profundiza las desigualdades.

Pero lo más preocupante de la política social del actual gobierno es su vinculación con la llamada estrategia militar de la recuperación social del territorio, contemplada en la Fase II del Plan Colombia, que profundiza la crisis de derechos humanos que vive el país al defenderse por parte del gobierno que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista que debe ser enfrentada con el poder militar y con la acción cívica-militar para evitar la influencia de los terroristas en la población civil.

El Plan Colombia Fase II, un documento que no ha sido discutido públicamente y cuya promulgación ha estado al margen de los procedimientos constitucionales y legales, termina convirtiéndose en el eje de la estrategia mediante la cual se implementa la presencia del Estado en amplias zonas del territorio nacional y en la esencia de la política estatal frente a los temas de la paz y del control de los conflictos.

A diferencia del Plan Colombia Fase I, la Fase II tiene un elevado componen-

Pero lo más preocupante de la política social del actual gobierno es su vinculación con la llamada estrategia militar de la recuperación social del territorio, contemplada en la Fase II del Plan Colombia, que profundiza la crisis de derechos humanos...

te social. El Plan estatuye la denominada Doctrina de Acción Integral²⁰, que ya había sido ensayada en Guatemala y otros conflictos armados en el mundo. Dicha doctrina se basa en la integración de la política social y la política militar y en la subordinación de las autoridades civiles locales a las autoridades militares encargadas del diseño, conducción e implementación de la "Política de Recuperación Social del Territorio".

La estrategia se basa de un lado en el impulso de la Acción Cívico-Militar, que en nuestro caso integra la responsabilidad de los mandos militares (Coroneles que ejercen mando en cada uno de los Comandos de Coordinación de Acción Integral - CCAI) con delegados del mundo empresarial y de los gremios ("Padrinos" que acompañan a los estamentos militares en el diseño de la estrategia cívico mi-

20 Véase. Departamento Nacional de Planeación; Dirección de Justicia y Seguridad. Estrategia de fortalecimiento de la democracia y desarrollo social (2007-2013). Bogotá, febrero 2007, p. 51.



litar y asumen responsabilidad en la orientación y gestión de los recursos públicos en la atención de las necesidades del desarrollo económico y social). De otro lado, la estrategia se basa en la subordinación y control de 28 Entidades Estatales del orden nacional y de las mismas alcaldías y gobiernos locales a la autoridad del CCAI con mando en cada región. Es decir, el componente social del Plan Colombia Fase II, se encuentra completamente militarizado, incluso en sus dimensiones de la ayuda humanitaria, que termina siendo militarizada e instrumentalizada en función de las necesidades de la guerra.

En la Doctrina de Acción Integral la política social es un instrumento de la guerra. Ella misma termina convertida en una política de guerra que busca “ganar el corazón de la población civil”, alinearla en uno de los bandos del conflicto, y rentabilizar los planes de asistencia social a los más necesitados en función de sus contribuciones a la estrategia de guerra y la política de seguridad. Una política activa de recompensas por delaciones, una interacción intensa de los militares con la población civil a través de la prestación directa por los militares de servicios sociales de naturaleza civil o que antes se prestaban exclusivamente por medio de civiles (jornadas de peluquería, recreación, saneamiento, atención médica y odontológica, suministro de medicamentos, de ayuda humanitaria, de materiales para la vivienda, kits educativos y servicios de microcrédito entre muchos otros) ejercidos por personal uniformado, constituyen la nueva modalidad de gestión de



las necesidades sociales en las Jornadas Interinstitucionales del CCAI.

Al lado de esto, la subordinación de la población necesitada en formas jerárquicas corporativas de control social que buscan someter a la población a diferentes tipos de redes (redes de vigilantes, redes de cooperantes, redes de informantes, soldados campesinos, familias guardabosques, redes de vigilantes de carreteras) y formas de tutelaje bajo el control de diferentes tipos de padrinazgo van configurando una estructura autoritaria que proscribe cualquier tipo de debate y cualquier tipo de disidencia, creando un unanimismo alrededor del poder del Estado y un Estado al servicio exclusivo de un entramado de padrinos, poderosos empresarios e inversionistas, que validos de su alianza con el estamento militar y del control de los recursos de la política social, usufructúan los recursos públicos, los bienes colectivos y el territorio para el fortalecimiento de sus exclusivos intereses inversionistas.

Pues bien, visto el contexto desde el cual debe asumirse cualquier análisis de los DESC y la valoración sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el PIDESC, pasaremos a revisar qué respuestas han avanzado las organizaciones sociales a la información reportada en el V Informe oficial al CDESC.



Lecturas alternativas sobre la situación de los DESC

Por cuestión de espacio sólo tomaremos a manera de ejemplo un sucinto resumen de los contra-argumentos elaborados por las organizaciones sociales, no gubernamentales y académicas que vienen participando en la elaboración del III Informe Alterno alrededor de los derechos de la educación y de la alimentación. Un reto fuerte en este proceso social de construcción del Informe Alterno es la confrontar la interpretación oficial puesta en el V Informe a partir de un enfoque de derechos, es decir, a partir de juicios que muestren el incumplimiento de las obligaciones jurídicas y políticas que le impone el PIDESC y otros instrumentos de derechos humanos al Estado colombiano.

El V Informe carece de un enfoque de derechos. Presenta una visión tendenciosa y optimista sobre la progresividad de los DESC a partir de una interpretación parcial de las obligaciones y contenidos que implican estos derechos. Se fundamenta la información oficial presentada al CDESC, básicamente, en aspectos relacionados con la ampliación de las coberturas y medidas de disponibilidad sobre programas y servicios sociales, sin dar cuenta de otras dimensiones que se requieren para satisfacer a los derechos, como son el acceso, la calidad y la aceptabilidad socio-cultural de las medidas adoptadas.

Todos los capítulos del Informe Alterno que se construye participativamente harán seguimiento a las recomendacio-

nes previamente emitidas por el Comité, bien sea referidas a derechos particulares o a poblaciones determinadas, emitirán juicios sobre su cumplimiento y harán un análisis complejo de la situación de cada derecho a partir de sus elementos constitutivos: accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adecuación cultural²¹.

Derecho a la educación²²

El informe del Estado se centra en dos asuntos de los tres que configuran la política educativa del gobierno del Presidente Uribe Vélez, denominada “la revolución educativa”, a saber, aumento de la cobertura y mejoramiento de la calidad. No hace mayores referencias a la estrategia

21 El CDESC ha construido el contenido de los derechos sociales a partir del modelo de las cuatro “A”:

- Disponibilidad (asequibilidad): existencia de los bienes, servicios, establecimientos e infraestructura, necesarios para la efectiva garantía de cada derecho.
- Acceso: implica accesibilidad física, geográfica, económica, no discriminatoria a los bienes, servicios y programas a los que esté relacionado el disfrute del derecho, así como a la información sobre las condiciones de su prestación
- Adecuación cultural: los bienes, servicios y programas dispuestos para la realización de los derechos sociales deben respetar los valores culturales, las diferencias entre los géneros y en general, ser aceptables para las comunidades en los que se ofrecen.
- Aceptabilidad: hace referencia a la calidad de los bienes, servicios, personal y establecimientos para la garantía de los derechos sociales, tanto desde el punto de vista científico, técnico y tecnológico como humano.

22 Con base en el capítulo sobre derecho a la educación del III Informe Alterno preparado por CINEP e ILSA.



de racionalización (o eficiencia) del sector educativo y a los impactos regresivos que sus medidas han tenido en temas de calidad, disponibilidad y adecuación socio-cultural del “servicio educativo”.

El plan nacional de desarrollo Hacia un Estado Comunitario (2002-2006), contempló como meta en educación la cobertura bruta integral de la educación preescolar, básica y media. Se fijó como meta crear, en los niveles de preescolar a media, 1.500.000 cupos para elevar la escolarización bruta de 82% a 92%.

No obstante que la política de la revolución educativa concibe la educación como un factor del desarrollo humano, social y económico y como un instrumento para construir la equidad social, un balance de los resultados del crecimiento en cobertura (V Informe estatal²³) muestra que esta ampliación es relativa e insuficiente, pues no tiene en cuenta otros aspectos que satisfacen el derecho a la educación como la calidad, la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y sus avances efectivos dentro del mismo (tasa efectiva de escolarización).

En este sentido, el V Informe no da cuenta de la persistencia de grandes desigualdades en el acceso y asequibilidad de la educación, ni de la elevada tasa de repitencia y deserción escolar especialmente en el primer grado de primaria. Tampoco expone la insuficiente cobertura en educación superior y la inequidad para su acceso, ni analiza las razones de la baja calidad de la educación básica y media, el aumento de la brecha entre educación pública y privada, la falta de coor-

Por ejemplo, se oculta que no existe gratuidad de la educación en el país y que con algunas excepciones hechas por algunas alcaldías, que han eliminado o disminuido los costos educativos para las familias, en la mayor parte del territorio nacional, la educación sigue siendo un servicio por el que se paga.

dinación entre entidades, y la inflexibilidad en el diseño institucional y curricular de la educación que le ha restado autonomía y participación a los centros escolares, a cambio de reducir costos en infraestructura y personal administrativo, docente y directivo.

Por otra parte, el V Informe estatal no muestra cuáles son los avances específicos del gobierno para cumplir las recomendaciones hechas por la Relatora del Derecho a la Educación en 2004 y por el

23 Al respecto dice el V Informe de la República de Colombia al Comité de derechos económicos, sociales y culturales en sus párrafos 851 y 852 que entre el 2002 y 2006 se alcanzaron resultados considerables en ampliación, tales como la generación de 1.419.427 nuevos cupos en educación básica y media, y 301.580 adicionales en educación superior. Resultados que permitieron que la tasa de cobertura en educación básica y media se incrementara de 82% en 2002 a 90.1% en 2006 y la de educación superior pasara de 21% en 2002 a 26% en 2006. Además del interés por incrementar el número de estudiantes matriculados año tras año, señala el V Informe, el Gobierno buscó la permanencia de estos niños y jóvenes en el sistema. Es así como se logró disminuir en 2 puntos la tasa de deserción escolar pública (educación básica y media), medición que cayó de 8% en 2002 a 6% al término de 2005.



CDESC en el 2001 y 2005. Por ejemplo, se oculta que no existe gratuidad de la educación en el país y que con algunas excepciones hechas por algunas alcaldías, que han eliminado o disminuido los costos educativos para las familias, en la mayor parte del territorio nacional, la educación sigue siendo un servicio por el que se paga.

Los modelos educativos que se han impuesto son principalmente de gestión económica y no pedagógica. La racionalización educativa a partir de factores gerenciales – fusiones de las instituciones educativas, los modelos flexibles de aceleración y promoción escolar, la contratación temporal de educadores, la congelación de la planta de profesores oficiales y el aumento de la tasa técnica (relación del número de estudiantes por educador, formalmente se sitúa en 32 para zonas urbanas y en 22 para zonas rurales, pero en la realidad supera los 45 estudiantes por educador), han profundizado los problemas de falta de calidad de la educación pública.

Si bien el Estado muestra en el período 2002-2008 ciertos avances en algunos aspectos del derecho a la educación como en el tema de ampliación de coberturas, persiste, en otros contenidos del derecho una grave “deuda nacional educativa” como bien lo ha señalado la Procuraduría General de la Nación en un informe del año 2006, y que se refleja, entre otras, en las siguientes constataciones²⁴:

Las cifras muestran que sólo el 34,1% de la población de 5 a 17 años de edad disfruta del derecho pleno a una educación de calidad.

La asistencia a educación preescolar (grado cero), básica y media pasó de 59,8% en 1992 a 78,3% en 2000; en 2001 bajó a 75,7% y sólo en 2004 logró superar ligeramente la tasa obtenida el año 2000.

La tasa efectiva de escolarización, o proporción de estudiantes que aprueba el grado cursado, en relación con la población entre 5 y 17 años de edad, pasó de 60,6% en 1994 a 72,4% en 1998, cifra esta última que no se ha vuelto a alcanzar: la más reciente, de acuerdo con la información disponible, corresponde a 2003 año que presenta una tasa efectiva de escolarización de 68,3%, cuatro puntos porcentuales por debajo de la obtenida en 1998.

La población de 18 años y más con educación media completa, incluidos en esta quienes tienen educación superior incompleta y educación superior completa, pasó de 29,4% en 1997 a 36,3% en 2003, avance que podría considerarse importante por el corto período en que aparentemente se consiguió; este resultado, sin embargo, constituye el producto agregado de cohortes atendidas durante un período de 19 años, dato que deja en evidencia la condición de vulnerabilidad en que se encuentra actualmente el 63,7% de la población, como se mencionó anteriormente.

La diferencia en el promedio de educación entre los deciles de ingreso 1 a 10, es de 7,64 grados en 2003. En tanto que

24 Procuraduría General de la Nación. El derecho a la educación. La educación en la perspectiva de los derechos humanos. Bogotá, Marzo de 2006, pp: 20 y ss.



la población del decil 1 ha cursado 4,21 grados, la del decil 10 ha cursado 11.85 grados escolares.

La formación en competencias ciudadanas conformadas por los componentes de conocimientos en ciudadanía (derechos humanos, convivencia pacífica, participación y responsabilidad democrática, pluralidad y valoración democrática), actitudes hacia la ciudadanía, acciones ciudadanas, ambientes democráticos, procesos cognitivos, manejo de emociones y empatía, evaluada en los años 2002 y 2003, muestra que por lo menos la mitad de los estudiantes de noveno grado que presenta las pruebas tiene un nivel de desempeño bajo o medio-bajo en la mayoría de ellas.

La formación en las diferentes áreas del conocimiento, evaluadas censalmente por los Exámenes de Estado en 2004, muestra que más de la mitad de los estudiantes de grado 11 se ubican en los niveles medio-bajo y bajo en la adquisición y dominio de las competencias en historia, filosofía, física, química y matemáticas programadas académicamente para el transcurso de su formación; biología se encuentra cerca de este promedio y geografía, que tuvo un repunte en 2004, vuelve a ubicarse en un promedio inferior en 2005.

Los grupos indígenas, las comunidades afrocolombianas y la población desplazada por la violencia se incluyen en los valores totales y en los promedios mostrados arriba; sin embargo, su situación reviste mayor gravedad vista desde los indicadores cuantitativos que se están mencionando.



Mientras el analfabetismo de la población de 15 años y más en Colombia es de 7,89%, el de los grupos indígenas es de 17,7% y el de los afrocolombianos de 13,0 por ciento.

La tasa de inasistencia de la población de 5 a 17 años es de 25,5% para los indígenas y de 16,7% para los afrocolombianos. La población indígena con educación media completa representa el 23% de los mayores de 17 años y la afrocolombiana el 33%, inferior en ambos casos a la nacional que es de 36 por ciento.

Las estadísticas sobre población desplazada por la violencia son muy inciertas e insuficientes para dar cuenta de su volumen, sus características y la cobertura y calidad de los servicios recibidos. Las escasas cifras que se tienen indican que, al momento del desplazamiento, 76,9% de los desplazados había cursado o estaba cursando algún grado de educación preescolar, básica o media.

De la población total desplazada registrada en el sistema de información, 18% son menores de cinco años y 36%



se encuentran entre los 5 y los 17 años de edad. Dependiendo del número real de desplazados, que puede ser de 1.600.000 de acuerdo con los registros oficiales o de cerca de 4.000.000 de acuerdo con otras fuentes, la población que demanda atención escolar oscila entre 800.000 y 1.600.000 niños y jóvenes. En estas condiciones y de acuerdo con los datos de atención suministrados por el Ministerio de Educación Nacional para 2004, la inasistencia escolar puede afectar al 82,3%, o al 74,5% o al 66,7% de los desplazados, sin tener en cuenta ni la calidad ni la pertinencia de la atención prestada²⁵.

Derecho a la alimentación²⁶

No existe ninguna recomendación explícita del CDESC sobre el cumplimiento del derecho a la alimentación por parte del Estado colombiano. En sus sesiones 85^a y 86^a celebradas en noviembre de 2001, evaluativas del IV informe periódico oficial de Colombia sobre la aplicación del PIDESC, el Comité aprobó la observación final No. 37: "El Comité insta al Estado parte a que asegure y que garantice el salario mínimo a los trabajadores y sus familias para tener un nivel adecuado de vida"²⁷, lo que incluye el derecho a una alimentación adecuada.

Igualmente emitió la recomendación No. 44: "El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas necesarias para llevar a cabo una autentica reforma agraria". Que indudablemente se encuentra relacionada con lo dispuesto en el artículo 11-2 del Pacto acerca de la obligación estatal de to-

mar medidas para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios.

Ninguna de estas recomendaciones del Comité se ha cumplido por parte del Estado colombiano y los avances que reporta en el último informe periódico son cuestionables como se analizará a lo largo de este capítulo.

En el V Informe, el Estado omite analizar la real situación del derecho a la alimentación en el país, evidenciando que en su elaboración no se incorporó una perspectiva de derechos, que responda a las obligaciones internacionales, en particular, frente al artículo 11 del PIDESC.

El V Informe estatal, es prolijo al destacar el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1996-2005 (PNAN) como un "plan de Estado" que alcanzó las metas planteadas al inicio²⁸. Sin embargo, no

25 Lerma Carreño, Carlos Alberto. El derecho a la educación en Colombia. FLAPE. Buenos Aires, 2007. Pp. 47-49. Descripción realizada con base en el Informe de la Procuraduría General de la Nación. El derecho a la educación en perspectiva de derechos humanos. Bogotá, 2006.

26 Con base en el capítulo sobre derecho a la alimentación del III Informe Alterno preparado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Alimentación, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia y la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI).

27 CDESC: E/C.12/1/Add.74,6 del 6 de diciembre de 2001.

28 Ministerio de Relaciones Exteriores. V Informe de la República de Colombia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Versión en castellano. p: 120.



solo existen cuestionamientos a su eficacia²⁹, sino que tras su finalización en 2005 no se ha implementado ninguna política o plan que lo sustituya o profundice. Sólo hasta marzo de 2007 algunas instancias gubernamentales presentaron ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) un documento en el que se ponía a consideración la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional³⁰. En igual dirección, casi ocho meses después, fue radicado ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 203 de 2007, para “establecer el marco legal de la Seguridad Alimentaria y Nutricional”³¹; infortunadamente, a instancias del Gobierno, éste no tuvo curso favorable en el Senado. Lo anterior denota una regresividad frente al derecho a la alimentación, pues no se ha implementado una política pública con perspectiva de derechos humanos, que de continuidad al antiguo PNaN 1998-2005.

Las cifras son indicativas de las violaciones actuales al derecho a la alimentación. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el 40.8 % de los hogares colombianos padece inseguridad alimentaria³².

Esta tragedia silenciosa se refleja en una serie de indicadores que, contrario a lo señalado por el Gobierno nacional en su V Informe, desnudan una innegable tragedia humanitaria; las muertes asociadas al hambre alcanzaron la vergonzosa cifra de 40.000 casos sólo entre 1998 y 2002³³; más del 20 % de niños y niñas menores de cinco años se encuentran desnutridos³⁴; el 63.7 % de la población



29 Sus alcances y efectos han sido puestos en duda en ámbitos académicos locales e internacionales. Cfr. Ortiz Moncada, Rocío; Ruiz Cantero, María T. y Carlos Álvarez Dardet. Análisis de la Política de Nutrición en Colombia. Rev. Salud Pública. Bogotá. V.8 No.1 Abril 2006. pp: 1-13.

30 Ministerio de la Protección Social y otros. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN). Documento Conpes Social 113. Bogotá. 31/III/2007. Disponible en: <http://fenalce.net/archivos/conpes113.pdf>

31 Senado de la República de Colombia. Proyecto de Ley Número 203 de 2007 Senado. En: Gaceta del Congreso. Bogotá. Año XVI. No. 599. 27/XI/2007.

32 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia ENSIN 2005. ICBF. Bogotá. 2007, p.323.

33 Universidad Externado de Colombia “Tres menores de cinco años mueren al día en Colombia por desnutrición”. Bogotá. 2006. En: <http://www.uexternado.edu.co/noticias/desnutricion.html> [Consulta: 23/VIII/2006].

34 12 % desnutrición crónica (talla/edad), 1.3 % aguda (peso/talla) y 7 % global (peso/edad); ver: ICBF. Op. cit. No. 2. pp: 74 – 76. Estos datos y los siguientes corresponden al año 2005, último de valoración del estado nutricional del país en la ENSIN, realizada por el estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el apoyo, entre otras instituciones, de la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional de Salud.



general tiene deficiencias energéticas y el 36 % proteínicas³⁵; y el hambre oculta (deficiencia de micronutrientes) campea a lo largo y ancho del país, con el 33.2 % de los menores de cinco años con anemia, deficiencia de Vitamina C en el 22.6 % de la población general, de Vitamina A en el 32 %, de Zinc en el 62.3 %, y de Calcio en el 85.8 %³⁶.

Dilatando y obstaculizando la puesta en marcha de una política pública favorable al derecho a la alimentación, el Estado colombiano también vulnera otra obligación principal establecida en el artículo 2 del PIDESC: la de “adoptar medidas (...) para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos”³⁷. Los “avances normativos” reportados por el Gobierno en el V Informe están muy lejos de ser estructurales y determinantes, pues casi todos se relacionan con la adopción de medidas favorables a algunas actividades del sector agropecuario que no responden a una estrategia de promoción, defensa y garantía del derecho a la alimentación.

Proyecciones del trabajo con los DESC

El proceso de análisis de los informes de los Estados (y de los informes alternos) que han comparecido ante el Comité culmina cuando éste aprueba unas “observaciones finales” o recomendaciones. Estas constituyen la decisión a que ha llegado el Comité acerca de la situación de aplica-

ción del Pacto en el Estado evaluado.

Cuando el Comité ha llegado a la conclusión de que se han producido violaciones al Pacto³⁸, insta al Estado Parte a que desista de toda nueva violación de los derechos de que se trate y le señala algunas recomendaciones con las cuales se puede superar las situaciones internas que quebrantan los compromisos adquiridos³⁹.

Las recomendaciones reflejan el carácter de la información que se presenta

35 Ibid. pp: 243, 245.

36 Ibid. pp: 149, 283, 287, 291 y 295.

37 Énfasis nuestro.

38 En los Principios de Limburgo relativos a la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se señalan las siguientes circunstancias que constituyen violaciones del Pacto por un Estado Parte (principio 72): a) el Estado Parte no logra adoptar una medida exigida por el Pacto; b) no logra remover, a la mayor brevedad posible y cuando deba hacerlo, todos los obstáculos que impidan la realización inmediata de un derecho; c) no logra aplicar con rapidez un derecho que el Pacto exige que aplique sin dilación; d) no logra, intencionalmente, satisfacer una norma internacional mínima de realización, generalmente aceptada y para cuya satisfacción está capacitado; e) aplica una limitación a un derecho reconocido en el Pacto por vías contrarias al mismo; f) retrasa, deliberadamente, o detiene la realización progresiva de un derecho, a menos que actúe dentro de los límites permitidos en el Pacto o que dicha conducta se deba a una falta de recursos; g) no logra presentar los informes exigidos por el Pacto.

39 La Corte Constitucional ha reconocido que las observaciones generales emitidas por el Comité del PIDESC tienen fuerza vinculante (T-739/04, T-1318/05) al ser desarrollos lógicos del PIDESC hechos por el órgano autorizado para hacerlo, o sea, por el CDESC. Ha aceptado también que otros desarrollos doctrinarios como las resoluciones y las recomendaciones internacionales respecto a los derechos humanos, emitidas por los órganos competentes, cumplen una función auxiliar de interpretación en el orden interno (T-1291/05).



y de su fundamentación depende que el Comité se pronuncie sobre las situaciones de violación a los DESC que afectan a los diferentes sectores sociales. Lo importante en este escenario es tener claridad sobre los objetivos políticos que se persiguen con el informe alterno y con las recomendaciones que se desean conseguir por el Comité. Pero todo lo anterior implica una responsabilidad política de las actorías sociales no sólo en la elaboración de los informes a los diferentes órganos de control de los tratados de derechos humanos sino además en el plano de la apropiación, seguimiento y movilización para que estos mandatos internacionales no se queden escritos, tengan impacto y cumplan su función de presión al Estado.

La verdad sea dicha en Colombia las recomendaciones del Comité del PIDESC han tenido poca trascendencia política y jurídica. Las recomendaciones en la medida en que surgen de situaciones concretas de violación a determinado derecho económico, social o cultural o se emiten para amparar los DESC de ciertos grupos sociales vulnerados en sus derechos, deberían servir, entre otras cosas, para:

- Hacer pedagogía sobre los DESC y sobre los mecanismos para protegerlos. Las recomendaciones pueden ser el pretexto a través del cual la ciudadanía a través de procesos de educación política conozca sus derechos y las formas para su protección.

- Llevar a cabo procesos de sensibilización y movilización social frente a

las problemáticas que niegan niveles de bienestar social acordes con la dignidad humana. Las recomendaciones del Comité son una oportunidad valiosa para difundir en la opinión pública el mensaje de los DESC como derechos humanos exigibles, que el estado tiene la responsabilidad de garantizarlos y de que existen grandes niveles de violación e impunidad frente a ellos.

- Impulsar a los movimientos sociales a desarrollar planes de exigibilidad de los DESC y de cumplimiento de las recomendaciones. Si estos mandatos internacionales no encuentran dolientes entre los movimientos sociales (que hagan trabajo político con ellas y las conviertan en una herramienta de presión al Estado), en la academia para profundizar en investigaciones sobre las situaciones socialmente problemáticas y en las mismas instituciones públicas, no pasarán de ser letra muerta y agrandarán el espectro de la impunidad.

- Hacer control político al Estado respecto de las obligaciones que tiene con los derechos humanos y con DESC, en particular. Las recomendaciones necesitan de seguimiento y de acciones de denuncia frente a las omisiones del Estado. Existen valiosas experiencias de movimientos sociales que desde 1995 hacen seguimiento a las recomendaciones del PIDESC, las han utilizado en los procesos de interlocución y negociación con las autoridades y con diversos organismos de control de los tratados de derechos



humanos, tanto en el plano interno como internacional; valga la pena mencionar como ejemplo el movimiento social de las madres comunitarias, que ha incorporado a las luchas por sus derechos laborales las recomendaciones del Comité del PIDESC, logrando a la fecha avances en algunas garantías en materia de ingresos y seguridad social.

Nos queda la expectativa que los diferentes capítulos escritos por derechos y por poblaciones del III Informe Alternativo a presentarse próximamente a la ONU, consigan que el CDESC reconozca las violaciones a los DESC en Colombia en el marco de la política de Seguridad Democrática, y expida recomendaciones que sean favorables para las luchas sociales.

✖



